

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**

**Departamento de Sociología IV**



**TESIS DOCTORAL**

**Delincuencia juvenil y control social en el Chile neoliberal**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Alejandro Tsukame Sáez**

Director

Fernando Álvarez-Uría Rico

**Madrid, 2016**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**DPTO. DE SOCIOLOGÍA IV FACULTAD DE CS.  
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  
PROGRAMA DE DOCTORADO EN TEORÍA DE LA  
COMUNICACIÓN**



---

**DELINCUENCIA JUVENIL Y CONTROL SOCIAL EN EL  
CHILE NEOLIBERAL**

**TESIS DOCTORAL**

**Presentada por:**

**Alejandro Tsukame Sáez**

**Dirigida por:**

**Prof. Dr. Fernando Álvarez- Uría Rico**

**Madrid, agosto de 2015**



*Agradecimientos:*

*A Jesús Ibáñez, por hacerme comprender el poder del sentido.  
A Fernando Álvarez - Uría, por hacerme comprender el sentido del poder.*

*A ambos, por su generosidad.*

A Marcela, Jesús, Amalia y Alejandro, en estricto orden de llegada

A mi madre y a mi padre

A Loreto y Mauricio, compañeros de rumbo

*“No sería impensable una conciencia de poder de la sociedad en la que a esta le fuese lícito permitirse el lujo más noble que para ella existe -dejar impunes a quienes la han dañado-.*

*La justicia, que comenzó con ‘todo es pagable, todo tiene que ser pagado’, acaba por hacer la vista gorda y dejar escapar al insolvente. Acaba, como toda cosa buena en la tierra, suprimiéndose a sí misma. Esta autosupresión de la justicia: sabido es con que hermoso nombre se la denomina -gracia; esta continúa siendo, como ya se entiende de suyo, el privilegio del más poderoso, mejor aún, su más allá del derecho”.*

*Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral.*

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCION.....</b>	<b>7</b>
 <b>CAPITULO 1:</b>	
<b>EL SISTEMA DE LA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE: EVALUACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>17</b>
La ley 20.084 y el sistema de justicia penal adolescente.....	18
Funcionamiento y resultados del sistema luego de cinco años de implementación.....	21
Evaluaciones del sistema de justicia penal adolescente realizadas por el Parlamento, especialistas y actores jurídicos.....	30
Precariedad y vulnerabilidad social de los adolescentes infractores.....	44
 <b>CAPITULO 2:</b>	
<b>EL CAMPO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL. ALGUNOS MODELOS DE ANÁLISIS DE LA SOCIOLOGÍA NORTEAMERICANA ELABORADOS A LO LARGO DEL SIGLO XX.....</b>	<b>59</b>
Chicago: la invención de la delincuencia.....	62
Robert K. Merton: anomia y conducta desviada o los desajustes entre medios y fines.....	67
La socialización escolar, la formación de bandas y la subcultura delincuente.....	71
De las instituciones totales a las carreras delincuentes y a la estigmatización del yo.....	74
La teoría de “la acción racional” en el marco de las sociedades neoliberales.....	83
 <b>CAPITULO 3:</b>	
<b>LA CONSTITUCIÓN DEL CAMPO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.....</b>	<b>97</b>
Cuestión social, infancia en peligro e infancia peligrosa en Chile.....	106
Origen y debate de la ley de menores de 1928.....	122

Los menores en situación irregular.....	131
Gestación y discusión de la ley de responsabilidad penal adolescente.....	141
 <b>CAPITULO 4:</b>	
<b>DISCURSOS Y GOBIERNO DE LA DELINCUENCIA DE MENORES EN</b>	
<b>CHILE: LA VITRINA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....</b>	<b>151</b>
La delincuencia de menores y la seguridad ciudadana en los años noventa y dos mil.....	151
Tolerancia cero <i>made in</i> Chile.....	161
Una mirada a los discursos y tecnologías de control desde la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente...	171
Los programas.....	186
Ideología y tecnología en el control del delito de niños y adolescentes.....	192
 <b>CAPITULO 5: IDENTIDAD, CARRERA, INTEGRACION SOCIAL:</b>	
<b>LOS DICHOS DE JÓVENES Y EDUCADORES.....</b>	<b>203</b>
El despliegue de la identidad delictiva. Argumentos y contraargumentos.....	205
Lógica de la identidad.....	210
Contextos y procesos que informan trayectorias.....	224
Proyección o no proyección. Las ínfulas del desistimiento.....	234
Desandar lo andado: ¿Un camino de retorno? ¿Retorno a qué? ¿Un camino de ingreso... a qué?.....	241
 <b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>251</b>
 <b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>265</b>
 APENDICE 1. Material de prensa.....	275
APENDICE 2. Cuadros, tablas y gráficos.....	279
APENDICE 3. Definiciones legales y de programas.....	297
APENDICE 4. Diccionario de entrevistas y grupos de discusión.....	305

## INTRODUCCION

---

El análisis del crimen en su relación con las costumbres y la moralidad, ha sido una de las vías de acceso privilegiadas al conocimiento de los hechos sociales. Durkheim no se cansó de subrayar que el hecho social es un hecho ante todo moral, grupal, de solidaridad; de modo que el crimen es un atentado que cuestiona la solidez de los vínculos sociales y altera la continuidad vital de la comunidad ética constituida por los ciudadanos respetuosos de la ley. La comunidad, ofendida en sus sentimientos y certezas, exige sancionar al culpable y restablecer de ese modo la vigencia de la norma vulnerada. En el transcurso del desarrollo histórico, esta función del castigo se burocratiza y centraliza en manos del Estado, con la creación de un aparato de justicia y de control policial y penal. El ejercicio del poder soberano y del control social a cargo del Estado, se va apoyando cada vez más en el trabajo de especialistas en el gobierno de la población.

En la era del gobierno científico de la población, el control de la delincuencia de los menores de edad o -como es más frecuente decir- la “delincuencia juvenil”, se ha convertido en una auténtica punta de lanza de ciertas ideologías y tecnologías de gobierno, que incluyen no sólo las conocidas modalidades del castigo penal, sino que suman novedosos dispositivos de control de riesgos a cargo de oscuros tecnócratas, que realizan su trabajo al amparo de los programas de seguridad ciudadana y se apoyan también en la construcción de una verdadera mitología y en un espectáculo que inunda la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, convocando todos los miedos asociados a la precariedad social y a la fragilidad de los vínculos que caracterizan la vida en las metrópolis actuales. Cuando se trata del delito de los menores de edad, las familias tiemblan, las esperanzas de los padres se ven amagadas y cunde el miedo a la caída o a la victimización de los propios hijos. Estos miedos son conjurados poniendo a la población del lado del gobierno y



en contra de un enemigo común, haciendo a todo el mundo partícipe del “combate contra la delincuencia”, de la guerra implacable contra los “antisociales” que pueblan nuestras calles y amenazan nuestras vidas.

En las esferas gubernamentales que hacen valer la “política de los expertos” en la dirección de la vida de los grupos marginales, entre los cada vez más miméticos partidarios de la ideología de la tolerancia cero, impera un inquietante optimismo punitivo que confía ciegamente en las bondades de las tecnologías de gestión de riesgos. Puesto que el delito sería una decisión racional, una opción calculada y libremente escogida, o bien férreamente determinada por las necesidades antisociales de los individuos, entonces solo hay que medir bien los riesgos y no dudar en aplicar los correspondientes castigos, incluso antes de que los delitos se cometan realmente, por una suerte de compulsión punitiva. ¿Acaso se trata simplemente de la antigua necesidad de castigar? ¿Está la sociedad realmente amenazada en sus bases por una delincuencia juvenil omnipresente y desbocada?, ¿Lo está la unidad de la familia y el futuro de las nuevas generaciones?

Por el contrario, creemos que el análisis sociológico de las coordenadas de la delincuencia juvenil, de los procesos que han dado origen al actual campo de control del delito de los menores de edad, revela más bien que lo que amenaza de verdad el futuro de nuestras formaciones sociales es la baja calidad de nuestro desarrollo democrático, el drama de las inequidades sociales y de la desigualdad, que se revelan de manera flagrante cuando sale a la luz la mentira que se esconde tras el castigo implacable de los menores marginales. Más aun, creemos que lo que de verdad se oculta bajo los discursos y el gobierno de la delincuencia de los menores, es un desastre social de proporciones y una hipoteca democrática que se arrastra por un tiempo que comienza a ser demasiado largo.

La delincuencia de los menores no es tan solo una magnitud determinada en las estadísticas de población, o una simple área de interacción de un grupo de edad con el aparato de justicia. No es de ningún modo un asunto puramente individual, del que serían responsables el descuido paterno, la pobreza endémica, el mal ejemplo o la fatalidad de tendencias hereditarias imposibles de modificar. Es, si, un asunto que está a la base de la reproducción social -lo que explica la importancia que le damos- y una cuestión estratégica que compromete el gobierno de la

población. Es, como podremos ver en este trabajo, un campo discursivo e institucional conformado por especialistas, ideologías, tecnologías y programas para el control del comportamiento “antisocial” de los menores de edad, que supone saberes específicos sobre las causas y remedios para el comportamiento juvenil discrepante, tecnologías para la intervención con los menores “infractores de ley” o recetas institucionales para la integración de los menores “descarriados”.

El delito de los menores de edad no es, por tanto, un hecho natural, sino que obedece a una compleja construcción social. Tampoco es una realidad de toda la vida. Fernando Álvarez - Uría, describe con precisión -en el caso español-, la relativa novedad histórica de un campo de gobierno de la infancia inadaptada y delincuente a cargo de nuevos especialistas del disciplinamiento infantil, en la segunda mitad del siglo XIX<sup>1</sup>. El trabajo sociológico por realizar en nuestro país ha de dilucidar, por su parte, el surgimiento de este campo de acuerdo con sus especificidades propias. Dos momentos son importantes. El primero, es el momento de la creación de la justicia de menores en 1928. El segundo, la ley de responsabilidad penal adolescente, plasmada en el año 2007. Como pareciera a primera vista, se trataría de hacer la historia de los retos reformistas y evaluar su desenlace. Entre ambas reformas, media un tiempo que la visión jurídica usual aprecia como un tiempo de juridización y progreso crecientes. Pero no podemos circunscribirnos a la descripción de un desarrollo que parece autoimpulsado por la fuerza del Derecho, sino que el deber del análisis sociológico es develar cuales fueron las fuerzas que pugnaron por esas reformas y los intereses y necesidades que estuvieron y están en juego en cada uno de esos momentos.

Los dos momentos reformistas se revelan más bien como hitos que representan tendencias contrarias y es tarea del análisis sociológico mostrar por qué ocurre así. La creación de la legislación de menores en Chile se produjo en el contexto de la aprobación de un conjunto de leyes sociales que inauguraron una nueva era republicana. Entre 1900 y 1920, el país se debatía entre el inmovilismo de las elites que controlaban de manera absoluta el Congreso y la Presidencia de la República y una sociedad en la que despuntaba la urgencia de la “cuestión social” o de la “cuestión obrera”, frente a la cual los poderes dominantes hacían oídos sordos. En aquella época el país era abrumadoramente agrícola y minero, y basaba su

---

<sup>1</sup> F. ÁLVAREZ- URÍA, *Miserables y Locos. Medicina mental y Orden social en la España del siglo XIX*, Tusquets editores, Barcelona, marzo de 1983.

bienestar en la extracción y exportación del salitre, en manos de capitales británicos. Por la vía de la recaudación de los impuestos aduaneros, el Estado se había desarrollado de manera notoria, pero estos beneficios se diluían en prebendas y en transferencias a los miembros de los grupos oligárquicos, sin que existiera una política social digna de ese nombre. El auge del salitre terminó con la crisis de 1929, pero en el intertanto, capitales estadounidenses se hicieron crecientemente con la riqueza del cobre, inaugurando una nueva era de desarrollo dependiente. La elección de Arturo Alessandri en 1920, que se apoyó en un caudillismo de masas que habría de continuar con el gobierno del general Ibáñez en 1927, la conformación de partidos obreros, el vuelco del proletariado naciente a una acción más decididamente sindical a partir de inéditas experiencias mancomunales, más el inmovilismo de los sectores políticos oligárquicos, precipitó la crisis de la denominada “república parlamentaria” y motivó un alzamiento de los militares que obligaron a aprobar las denominadas “leyes del trabajo” (cooperativas, contratos de trabajo, sindicatos profesionales, tribunales de conciliación y arbitraje, indemnización por accidentes del trabajo, caja de empleados particulares, caja de seguro obligatorio, derecho a huelga) que llevaban años obstruidas en el Parlamento, así como a satisfacer sus propias demandas salariales, lo que desembocó en la redacción de una nueva Constitución Política, que abrió paso a una genuina democracia parlamentaria. De este modo, puede entenderse mejor cual fue el contexto de la creación de la justicia de menores y por qué representó un avance reformista, en sintonía con la evolución social del país.

Por su parte, la ley de responsabilidad penal adolescente, aprobada en el año 2005 y en vigencia desde el año 2007, pero que llevaba gestándose desde la década de los años 90, se inscribe más bien en un contexto de involución democrática y no se entiende separadamente de la violenta y oprobiosa dictadura de Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1989, cuando fue derrotada no por el movimiento de masas, sino en un plebiscito organizado por el propio dictador. Hasta el golpe militar de 1973 en contra del gobierno de Salvador Allende, que había pretendido sentar las bases para la evolución del país hacia un socialismo democrático, Chile se caracterizó por un movimiento popular que había alcanzado un importante desarrollo –eso sí, con vaivenes-, por una democracia relativamente participativa, aunque también con importantes limitaciones y por el desarrollo de un sector de industria fundamentalmente liviana, que había sido impulsada y protegida por el Estado a partir de fines de los años 30, cuando comenzaron a implementarse las

recetas keynesianas en una modalidad de desarrollo “hacia dentro” -o modelo de sustitución de importaciones-, en la que se había embarcado, en mayor o menor grado, todo el continente. Sin embargo, en las décadas de los años 50 y 60, este modelo institucional mostró signos de agotamiento y el ordenamiento democrático vigente reveló sus limitaciones, al ser incapaz de integrar a los emergentes sectores poblacional y campesino, lo que representó una crisis de legitimidad democrática y de integración social. La oleada reformista de los años 60, unida al fracaso del gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) -hijo de Arturo-, determinó que la derecha apoyara en 1964 -como un mal menor- al candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, que había prometido una “revolución en libertad”, ante la amenaza del candidato Allende, quien había estado a punto de triunfar en 1958, cuando encabezó la primera experiencia de unidad popular -el FRAP- desde el gobierno del Frente Popular en 1938, que había inaugurado a su vez un periodo de 14 años en que el Partido Radical fue la fuerza dominante. El gobierno de Frei impulsó la reforma agraria, la participación popular y la sindicalización campesina, entre otros avances democráticos (el voto de las mujeres había sido aprobado en 1952), pero no tuvo éxito en su política económica, lo que abrió las puertas a un triunfo estrecho de la Unidad Popular. La UP era una alianza constituida por el Partido Socialista, el Partido Comunista, un ya muy debilitado Partido Radical y dos partidos pequeños desgajados de la Democracia Cristiana, la Izquierda Cristiana y el MAPU. El MIR, que había optado por la línea de la insurrección armada de masas, se mantuvo fuera de la UP. El primer año del gobierno popular fue de un avance arrollador, logrando impulsar la nacionalización del cobre, la nacionalización de la industria del acero, la nacionalización de la banca y la profundización de la reforma agraria. En este primer año, la Unidad Popular conquistó para su proyecto a la mitad de los votantes, triunfando en las elecciones municipales de 1971, pero en adelante la derecha logró poner de su lado a la mayoría de los sectores medios y parte de los sectores populares y se alió con la Democracia Cristiana, para bloquear la “revolución desde arriba”, como la llamó Peter Winn, a través del conocido expediente del bloqueo parlamentario, como había hecho en numerosos oportunidades a lo largo del siglo. Bloqueada “la revolución desde arriba” que impulsaba el gobierno popular y que le habría permitido avanzar en su programa por la vía legislativa, el gobierno se vio desbordado a su vez por la “revolución desde abajo”, impulsada por el movimiento de masas y que dio forma a inéditas

experiencias de “poder popular”<sup>2</sup>. Fracasado el intento de la oposición de destituir al Presidente a través de una acusación constitucional, debido a que la UP logró obtener un poco más del 43% del respaldo popular en las elecciones de marzo de 1973, se plegó decididamente a la búsqueda de una solución violenta, la que se produjo finalmente a través del golpe del 11 de septiembre de 1973, previa declaración por la Cámara de Diputados de la ilegitimidad en que habría caído el gobierno constitucional. La dictadura impuso a la población un modelo económico neoliberal a sangre y fuego y una transformación de los servicios sociales que implicó la privatización de la seguridad social, de la educación y de la salud, aparte de modificar la legislación laboral, haciendo inoperante el derecho a huelga. Irónicamente, se benefició de la nacionalización del cobre, que le reportó importantes recursos estatales y de la reforma agraria que, aunque revirtió, implicó la desaparición para siempre de la institución del inquilinaje, que aún estaba vigente en los años 70 y favoreció con ello el desarrollo del capitalismo agrario. El atisbo de dignidad que significó el gobierno popular para los sectores que lo habían apoyado de modo entusiasta, no pudo ser borrado y en adelante sólo se pudo refrenar o desvirtuar las demandas ciudadanas por la vía de la represión o el miedo.... o por la seguridad ciudadana y la tolerancia cero, que habrían de surgir con la democracia. Recuperada la democracia en 1990, los gobiernos de la Concertación (alianza de los antiguos partidos de la UP, con excepción del Partido Comunista, más la Democracia Cristiana) mantuvieron el modelo económico y las reformas de los servicios sociales intocadas hasta el día de hoy. Como veremos con mayor detalle en el capítulo cuarto, este déficit de legitimidad del nuevo orden y el afán por limitar la participación popular y las reivindicaciones ciudadanas, coinciden con la instalación de la temática de la seguridad ciudadana y la implementación de las políticas de tolerancia cero. Fue en este contexto de

---

<sup>2</sup> Sobre la dialéctica que se produjo durante la UP entre la “revolución desde arriba” y la “revolución desde abajo”, puede consultarse el breve aunque poderoso estudio de Peter Winn, *La Revolución Chilena*, LOM ediciones, Santiago, 2013. Sobre la expectativa de Allende, de lograr una mayoría parlamentaria que viabilizara el programa de la UP, puede consultarse la entrevista que le realizara a inicios de su gobierno el ex revolucionario Regis Debray, plasmada en el video *Compañero Presidente*, filmado en 1971. Sobre la estrategia de la derecha, de utilizar su importante presencia parlamentaria para bloquear cualquier intento reformista, el libro de Sofía Correa, *Con las Riendas del Poder. La derecha chilena en el siglo XX*, Random House Mondadori de Bolsillo, Santiago, marzo de 2011.

restricciones en que se aprobó la ley de responsabilidad penal adolescente, lo que explica su carácter regresivo.

Pido disculpas al lector por mi tosca, parcial e incompleta descripción de los sucesos históricos; dispensa que no incluye el deber de indagar en los procesos que dieron origen al campo del control del delito de los menores y sus transformaciones, su razón de ser, sus lógicas, sus especialistas y su significación para el presente. Norbert Elias nos recuerda la importancia de estudiar los procesos sociales a largo plazo y no conformarse con *la investigación de datos sociales a los que se imagina como en una situación normal de reposo y de equilibrio continuo*<sup>3</sup>. En *El Proceso de la Civilización*, identifica una tendencia histórica de aumento del autocontrol del comportamiento, un proceso sociogenético de lo que se conoce como “civilización”, en las costumbres y en las maneras y, al mismo tiempo, da cuenta de procesos sicogenéticos, que se expresan en una experiencia determinada de la subjetividad. En los procesos históricos se unen lo individual y lo social, en configuraciones que desmienten la mirada sistémica de un presente congelado. Como enseñara asimismo Foucault, la gestión del poder genera una clase de saber determinado y entre ambos constituyen un tipo social, con una subjetividad característica.

Esta investigación presentada como tesis doctoral intenta describir la configuración social de un sujeto marginal; procura dar cuenta de manera sistemática del ingente trabajo de ideologías y tecnologías de control singular, que construyen sujetos precarizados y vulnerables. Queremos mostrar que el campo de la delincuencia de los menores de edad está estructurado sobre la base de la marginación social, la criminalización institucional y la estigmatización ideológica de un conjunto particular de niños y adolescentes que pertenecen a los sectores sociales más desfavorecidos. La delincuencia de los menores de edad es un hecho social que cuestiona de raíz la calidad de nuestra democracia y sus promesas de integración social.

La hipótesis central que defendemos es que la delincuencia de menores depende de la formación de un campo institucional de poderes disciplinarios y saberes

---

<sup>3</sup> N. ELIAS, *El Proceso de la Civilización*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993. Introducción, Pág. 19.

jurídicos, médicos y pedagógicos; campo que produce un sujeto social no integrado por la educación ni por el trabajo; criminalizado por la actuación de los organismos de control; *desacreditado* en su identidad y expuesto como un “otro” antisocial y violento, en repetidos rituales mediáticos. El objetivo subyacente, es elaborar a propósito de la delincuencia de los menores y su control, una concepción compleja del problema de la desafiliación. En este caso, podemos ver que ésta se juega, en un primer nivel, como no integración en el mercado y en las instituciones. En un segundo nivel, en un campo institucional disciplinario y penal, como estigmatización y criminalización. En un tercer nivel, en lo ideológico y mediático, en la conformación de un “otro” marginal. En un cuarto nivel, en lo subjetivo/biográfico, en la identidad estigmatizada de un sujeto inmerso en una trayectoria y en medio de dilemas y encrucijadas en que se decide su integración social. Pretendemos además desmentir la visión descontextualizada y reductora que se ha impuesto –también– en el campo de la delincuencia de los menores de edad, en la que los aspectos sociales, estructurales e históricos, que explican sus particularidades y su razón de ser, han sido barridos de la escena.

Partimos por una descripción del sistema de la justicia penal de adolescentes, su funcionamiento, resultados y las evaluaciones realizadas por distintos actores. A continuación, exponemos los principales modelos sociológicos que sirven de guía y sustentan el itinerario seguido en el desarrollo de este trabajo. En el capítulo tercero, indagamos cómo surgió la preocupación por la “infancia peligrosa” en el contexto de la discusión sobre la “cuestión social” en Chile y el origen del actual modelo de la responsabilidad. En el cuarto capítulo presentamos las lógicas que caracterizan el funcionamiento actual del campo de control del delito de los menores de edad, a través del análisis de diversos materiales producidos por los medios de comunicación. La tesis termina con un acercamiento a la identidad de los jóvenes condenados, a lo que dicen sobre sí mismos y sobre sus vidas, y lo que opinan los educadores y otros adultos que trabajan con ellos sobre sus procesos de reinserción social.

En las conclusiones hacemos un balance de la complejidad del fenómeno estudiado, desde el nivel más abstracto y alejado de los hechos y sucesos históricos comprometidos, hasta el nivel más concreto y cercano de los discursos de menores y educadores. Procuramos plantear alternativas de intervenciones sociales encaminadas a mejorar la suerte de los jóvenes que delinquen.

El desarrollo del trabajo va de los hechos y la historia a los discursos, que son el nivel más comunicable de la construcción social descrita.

En la última parte de la tesis hemos incluidos apéndices que contienen materiales de prensa (apéndice 1), tablas y cuadros estadísticos que sustentan el análisis cuantitativo realizado en el primer capítulo (apéndice 2), definiciones legales y de programas (apéndice 3) y, finalmente, un glosario de términos que ayudan a clarificar los discursos de los participantes de entrevistas y grupos de discusión analizados en el capítulo cinco (apéndice 4). En volumen aparte, se incluye las transcripciones de las entrevistas y reuniones de grupo.

La metodología utilizada en la investigación, consiste en el estudio de nuestro objeto desde varias perspectivas, en el sentido que dio Jesús Ibáñez a este concepto<sup>4</sup>. Acorde con este enfoque de pluralidad de perspectivas metodológicas, entre las que hay que situar el enfoque genealógico, utilizamos una diversidad de técnicas de investigación, tales como el análisis de datos estadísticos, el análisis de documentos, la observación participante, el análisis del discurso noticioso de la prensa y otros medios de comunicación, la entrevista en profundidad, el grupo de discusión y el grupo focal y el análisis de los discursos ideológicos producidos en las entrevistas y grupos.

El material con que contaba para realizar este proyecto eran varias investigaciones realizadas en un periodo largo de tiempo, algunas sin terminar. Como había mucho por hacer, tuve que emprender investigaciones nuevas y completar algunas de las existentes. La gran complejidad del hecho social estudiado y la imposibilidad de abarcarlo con entera propiedad, me obligaron a seguir la estrategia metodológica flexible señalada, articulando las técnicas de acuerdo con las necesidades de desarrollo de los distintos temas.

Las ideas que animaron la realización de la investigación, nacieron en fríos pasillos de oficinas ministeriales y se templaron al calor de la implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente y la discusión con amigos y colegas, compañeros de rumbo. Comparto algunas de las motivaciones de los reformadores y buena

---

<sup>4</sup> Cf. J. IBÁÑEZ, *Del algoritmo al sujeto*, siglo 21, Madrid, 1985 y "Perspectivas de la investigación social", en: F. ALVIRA, M. GARCÍA FERRANDO y J. IBÁÑEZ, *El análisis de la Realidad Social*, Alianza, Madrid, 1994.



parte de sus frustraciones y críticas, aun cuando no pueda declararme miembro de ese grupo. Mucha de la información producida por las investigaciones que realicé tenía que ver con metas de cumplimiento institucionales y limitaban su alcance al logro de esas metas, pero otra gran cantidad iba más allá de ese marco y fue de gran utilidad para la realización de este trabajo.

Espero que esta escritura incompleta de los materiales que he encontrado y del enfoque que he intentado plasmar, sea recibida como un aporte sociológico a una temática urgente de la que se escribe y habla mucho, pero se conoce tan poco y en la que el testimonio de la sociología es demandado por los ciudadanos conscientes, que desean la transformación de esta realidad que golpea con crudeza. En este último aspecto, la delincuencia de menores es también una cuestión de vida o muerte, que se dirime entre las acciones de los menores que se juegan la vida, literalmente, y de los educadores que trabajan con ellos para ayudarlos. En este sentido, el hecho moral de la delincuencia juvenil, se ve recreado a diario y nos llama a la reflexión y a la acción.

## **CAPÍTULO 1**

### **EL SISTEMA DE LA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE: EVALUACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO**

---

En este primer capítulo abordamos la institucionalidad creada por la ley de responsabilidad penal de adolescentes del año 2007. Describimos las principales características de la ley, revisamos datos que muestran su funcionamiento en la práctica, algunas evaluaciones realizadas por políticos, expertos y operadores del sistema de justicia penal de adolescentes y, finalmente, invitamos a echar una mirada a los datos que dan cuenta de un funcionamiento “oculto” del sistema, que se pone de manifiesto en las serias consecuencias de precarización y vulnerabilidad social que tiene para las vidas de los adolescentes infractores.

Es el momento de hacer algunas aclaraciones terminológicas. En este trabajo utilizamos las expresiones “menores”, “adolescentes”, “jóvenes”, “adolescentes infractores” e, incluso “muchachos/as”. El término “adolescentes infractores”, introducido por la ley de responsabilidad penal de adolescentes (en adelante, LRPA), calza bien con la costumbre de utilizar eufemismos en el sistema tutelar con el fin de no “estigmatizar” a los niños (se utilizó hasta antes de la reforma la expresión “menores en conflicto con la justicia”). En cuanto al uso de los términos “adolescentes” y “jóvenes”, pretende reflejar dos tramos de edad: los jóvenes son los mayores de 18 años y menores de 29 y los adolescentes serían los mayores de 14 y menores de 18. En cuanto al término menores (que la doctrina de la Protección Integral de la Convención de Derechos del Niño propone dejar de usar), lo mantenemos por un claro uso social en designar a los menores de 18 años, niños o adolescentes. Por último, la denominación de muchachos /as, sirve para introducir distinciones de género, alternar con el uso de “menores” y “adolescentes” y abrirse a un uso social más distanciado que las palabras utilizadas

por los actores para referirse a ellos, como “chiquillos (as), “cabras (os), “lolos” y otros.

## **LA LEY 20.084 Y EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE.**

En muchos países que han reformado su legislación tutelar de menores, en lo que concierne a la delincuencia de los menores de edad, los cambios han apuntado a conformar sistemas de “justicia juvenil”. En Chile, el 8 de junio del año 2007 comenzó a aplicarse la nueva ley penal de adolescentes (Nº 20.084), para menores que tienen entre 14 y 17 años al momento de cometer un delito, ley que está inspirada por un propósito de responsabilizar a los adolescentes por sus delitos, en un marco de garantías procesales y sustantivas<sup>5</sup>.

El principal cambio respecto a la antigua legislación de menores es que la responsabilidad penal se rebajó a los 14 años. En el antiguo sistema tutelar se era irresponsable por debajo de los 16 años y entre los 16 y los 18 años, mediaba una declaración sobre el discernimiento. Si el menor era declarado con discernimiento se le aplicaba la ley penal de adultos, aunque en caso de ser condenado a una pena privativa de libertad, tenía derecho a cumplirla en secciones juveniles especiales, al interior de los recintos penales. En caso de ser declarados sin discernimiento, quedaban bajo la jurisdicción de los tribunales de menores. En la práctica, entonces, la entrada en vigencia de la ley 20.084 implicó que se incorporaran a su regulación, todos los adolescentes de entre 14 y 15 años a quienes se imputa una infracción a la ley penal. Según datos del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, los adolescentes que tenían 14 y 15 años representaron el 26% del total de imputados durante el primer año de vigencia de la ley<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Para el resumen de la ley 20.084, se ha consultado el artículo de J. CORTES, “Principales características del sistema penal de adolescentes creado por la ley 20.084”, en: *Infractores de ley adolescentes*, Ediciones Servicio Médico Legal, impreso en gráfica LOM, Santiago, octubre de 2009.

<sup>6</sup> G. BERRIOS y L. VIAL, *Informe estadístico 3 años de vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. 8 de junio de 2007 a 7 de junio de 2010*, Defensoría penal pública - UNICEF, Santiago, abril de 2011. Pág. 7

La ley 20.084 regula las infracciones a las leyes penales en general; es decir los crímenes, y simples delitos, despenalizando parcialmente las faltas<sup>7</sup>. Establece dos sanciones privativas de libertad y seis no privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad son: internación en régimen cerrado e internación en régimen semicerrado. En ambos casos, la ley agrega que la internación es “con programa de reinserción social”. El régimen cerrado es equivalente al encierro carcelario, en recintos especiales para adolescentes custodiados por una guardia armada de Gendarmería de Chile. El régimen semicerrado comprende ocho horas de actividades en el centro, ocho horas de alojamiento en el recinto y ocho horas en el medio libre, cumpliendo con diversas actividades socioeducativas. Las sanciones de internación tienen topes máximos diferentes según las edades. Así, para los adolescentes de 14 y 15 años el tope máximo es de 5 años de internación y para los de 16 y 17 dicho tope aumenta a 10 años. Las sanciones no privativas de libertad son: libertad asistida especial, libertad asistida, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa y amonestación. También se puede imponer una sanción mixta, que combina un periodo de privación de libertad con otro periodo en el medio libre. Si se imponen sanciones no privativas de libertad y el adolescente no las cumple, se aplican reglas de “quebrantamiento de condena”, que permiten reemplazarlas por internación.

La forma como se determinan las sanciones en esta ley fue introducida a último momento en el Senado y resultó una fórmula engorrosa y rígida. Engorrosa, porque primero el tribunal debe determinar la duración de la sanción a aplicar y luego elegir la pena en particular. Rígida, porque hay pocas opciones de pena. En cuatro de los cinco tramos de duración que establece la ley se pueden aplicar penas privativas de libertad y en el tramo de pena superior a cinco años, no hay más opción que la privación de libertad en régimen cerrado (para mayor información sobre el régimen de determinación de las sanciones y otros aspectos del funcionamiento de la ley, consultar apéndice 3).

---

<sup>7</sup> La ley penaliza las siguientes faltas, cuando son cometidas por mayores de 16 años: desórdenes en espectáculos públicos, hurto falta, figuras residuales del delito de incendio, arrojar piedras u otros objetos en parajes públicos, amenaza con arma blanca o de fuego o sacarlas en una riña, lesiones leves y ocultar la identidad frente a la autoridad. El resto de las faltas y las mismas anteriores, cuando son cometidas por menores de 16, quedan entregadas a los tribunales de familia.

La ley asigna un objetivo a las sanciones penales adolescentes. El artículo 20 señala: *“las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social”*. Que cualquier ley declare un objetivo es una novedad, pero en este caso es un solitario triunfo de los reformadores. Tanto es así, que se contradice con otras disposiciones, como por ejemplo, los máximos de internación fijados, de 5 y 10 años según la edad, o el tiempo mínimo de duración de la internación en régimen cerrado.

Las medidas y sanciones privativas de libertad son administradas directamente por el SENAME. Las medidas y sanciones en el medio libre son administradas por organismos privados, denominados colaboradores, OCAS, que reciben una subvención del Estado (ley N° 20.032). El SENAME elabora instructivos y orientaciones técnicas que regulan el funcionamiento del sistema. Los programas y su dependencia (SENAME – OCAS), se describen en el siguiente esquema:

Esquema 1. Sanciones y medidas de la ley 20.084 y su administración

CRC: Centro de Régimen Cerrado (SENAME)
CIP: Centro de Internación Provisoria (SENAME)
CSC: Centro de Régimen Semicerrado (SENAME)
PLA: Programa de Libertad Asistida (OCAS)
PLE: Programa de Libertad Asistida Especial (OCAS)
SBC: Servicios en Beneficio de la Comunidad (OCAS)
MCA: Medida Cautelar Ambulatoria (OCAS)
PSA: Programa de salidas Alternativas (OCAS)

Fuente: Elaboración propia

## **FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DEL SISTEMA LUEGO DE CINCO AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN.**

### **Imputados**

Entre 2010 y 2012 fueron imputados de la comisión de delitos un total de 201.537 adolescentes, alrededor de 65.000 al año. En relación con el total de imputados de todas las edades representan solo un 4,6% en promedio. Es decir, más del 95% de los imputados son adultos<sup>8</sup>. Por su volumen, se puede afirmar que se trata de un sistema penal en pequeño (Tabla 1, en apéndice 2).

### **Condenados**

Según datos del SENAME, al 30 de septiembre de 2014 cumplían condena 9.668 adolescentes y jóvenes, de los cuales un 11,2% (1.085) lo hacía privado de libertad. Las sanciones con mayor número de adolescentes y jóvenes son la libertad asistida especial y los servicios en beneficio de la comunidad (Tabla 2, en apéndice 2).

Del total de condenados (as), un 10.5% son mujeres. Estas reciben con más frecuencia sanciones en el medio libre, lo que se aprecia en que su participación va en aumento a medida que disminuye la severidad de la sanción: 3% en CRC; 4,7% en CSC; 7,8% en PLE, 11,4% en PLA y 16,7% en SBC (Tabla 2, en apéndice 2).

En cuanto a la edad de los menores condenados, un 57,8% tiene 18 años y más, seguido de un 35,6% que tiene 16 y 17 años y sólo un 6.6% que tiene entre 14 y 15 años (Gráfico 1, en apéndice 2). La edad también se relaciona con el tipo de sanción recibida, pues los mayores de 18 años representan el 72,4% de los que están privados de libertad, contra el 2,6% de los menores de 14 y 15 años (Gráfico 2 en apéndice 2).

Al considerar los diez delitos más frecuentes cometidos por los adolescentes y jóvenes condenados, el 60% del total corresponde a robos. Si se agregan otros

---

<sup>8</sup> E. MAFFIOLETTI y A. VERA, "Estudio Caracterización del Delito Adolescente", Revista Jurídica del Ministerio Público N° 57, diciembre de 2013.

“delitos contra la propiedad” y los hurtos, se aprecia que tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes son condenados por delitos contra la propiedad (Gráfico 3 en apéndice 2).

### **Ocupación de plazas**

La oferta que SENAME financia es de 12.508 plazas, distribuidas en centros y proyectos.

Del total anterior, el 17.5% de las plazas (2.187) corresponden a centros privativos de libertad. Los centros privativos de libertad, cerrados y semicerrados, son 35 en todo el país (Tabla 3, en apéndice 2).

### **Centros cerrados**

Los centros de régimen cerrado son 19 a nivel nacional y sólo uno es de mujeres, ubicado en la región metropolitana. Todas las regiones tienen un centro, con excepción de la región metropolitana, que tiene cuatro. Tampoco los centros tienen una sección separada para las mujeres, lo que obliga a improvisar espacios cuando una muchacha es condenada o se le impone una medida cautelar de internación provisoria.

De los 19 establecimientos existentes a nivel nacional, 17 aglutinan dos modalidades en una: un centro para cumplir con la medida cautelar de internación (CIP) y un centro para cumplir condena en régimen cerrado (CRC). Se les identifica como CIP-CRC. Los dos centros restantes, uno CIP y el otro CRC, están en la región metropolitana (Tabla 3 en apéndice 2).

La distribución regional de los centros –con rojo- se muestra en el mapa siguiente:

Mapa regional de centros en régimen cerrado (CIP - CRC)





A nivel nacional, un 56,8% de las plazas están ocupadas, pero en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo hay sobreocupación (Tabla 4, en apéndice 2).

### **Centros semicerrados**

Los centros de régimen semicerrado son 16 en todo el país y hay un promedio de ocupación de 119,6% de las plazas. Aunque la sobreocupación de plazas es grande en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, esta situación no representa necesariamente una situación real, debido a particularidades conocidas del trabajo en los centros semicerrados<sup>9</sup>.

### **Proyectos en el medio libre**

En el medio libre existen 216 proyectos, con un total de 10.291 “plazas” o cupos. De este total, 133 proyectos ejecutan sanciones, con 6.926 cupos; 48 proyectos ejecutan medidas cautelares de sujeción (MCA), con 1.362 cupos y 35 proyectos supervisan salidas alternativas al proceso judicial (PSA), con 2.003 cupos (Tabla 3, apéndice 2).

En el medio libre, hay sobreutilización de los cupos en todas las sanciones. En libertad asistida especial, la sobreutilización llega al 103,1%. En libertad asistida es cercana al 200% y en servicios en beneficio de la comunidad, llega al 135% (Tabla 5, en apéndice 2).

Por tratarse de plazas en el medio libre, la sobreutilización no impacta en la infraestructura de los proyectos, aunque si en la carga de trabajo del personal que interviene con los jóvenes.

---

<sup>9</sup> Los adolescentes y jóvenes registrados como vigentes, no siempre están presentes, es decir no duermen en el centro, incumplimiento de la sanción que los equipos técnicos pocas veces denuncian a los tribunales para evitar una declaración de quebrantamiento. Los equipos consideran que, para que el modelo educativo funcione, hay que dar tiempo para convencer o “recuperar” a los jóvenes, para que cumplan con la sanción. Cf. Transcripción de grupo focal con operadores de CSC en anexo 1.

## **Ingresos**

La cantidad de menores que ingresa a cumplir sanciones cada año, desde el inicio de la ley, ha ido disminuyendo gradualmente, después de haber registrado un máximo el año 2010. Los ingresos se han ido estabilizando en poco más de ocho mil al año. El año 2013 ingresaron 8.049 adolescentes y jóvenes a todas las sanciones, mientras que en 2011 los ingresos llegaron a 11.381 (Gráfico nº 4, en apéndice 2).

Los ingresos a sanciones privativas de libertad tienen un comportamiento similar. En los años 2008 y 2010 superaron los mil ingresos, disminuyendo a un poco más de ochocientos desde 2011, hasta llegar a 786 en 2013 (Gráfico nº 5, en apéndice 2).

Es difícil dimensionar el peso real de la cantidad de menores que están ingresando a cumplir sanciones en general. Se puede comparar las cantidades absolutas con la población de adolescentes de ese tramo de edad, es decir, de 14 a 17 años. Según esta comparación, en el año 2010 los adolescentes condenados representaron el 1% de la población, porcentaje que disminuyó a 0,7% el año 2013. Por su parte, los que fueron condenados a una sanción privativa de libertad, representaron el 0,1% de la población el 2010 y el 0,07% en 2013<sup>10</sup>. Que el 1% de los adolescentes estén siendo sancionados penalmente cada año es, sin duda, una cifra preocupante. Que estas sanciones sean privativas de libertad lo es aún más. Aunque represente proporcionalmente una cifra menor, se trata actualmente de alrededor de ochocientos adolescentes al año.

## **Recursos invertidos y estándares**

Otro aspecto interesante de conocer es cuánto se ha invertido en la implementación y operación de la ley, y el costo aproximado por adolescente que implica.

---

<sup>10</sup> La comparación se realizó tomando la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los años respectivos. Fuente: “Población por sexo, según edad simple”, INE, 2014. La comparación no se puede hacer con los vigentes ya que, como se vio (gráficos 1 o 2), la mayor proporción de condenados vigentes tiene más de 18 años.

De acuerdo con datos de inversión en infraestructura, entre 2006 y 2012, el SENAME ha invertido poco más de 11.600 millones de pesos en obras en centros cerrados y un total aproximado de 942 millones de pesos en obras en centros semicerrados (Cuadros 1 y 2, en apéndice 2). La inversión en centros cerrados se destinó a habilitarlos para albergar la oferta programática exigida por la ley: escolarización, formación laboral, salud, tratamiento del consumo de drogas y programas socioeducativos en general. Los centros debían contar con espacios para separar a los jóvenes por sexo, edad (mayores y menores de 18 años) y condición procesal (procesados y condenados), lo que se ha cumplido solo respecto de la condición procesal.

La mayor inversión en los centros cerrados se produjo con su construcción que, en la mayoría de las regiones, se realizó con mucha antelación a la entrada en vigencia de la ley. En realidad, su construcción se inició para cumplir con una ley anterior, la de erradicación de menores de las cárceles, de 1995. Con este fin se invirtieron más de 41 mil millones de pesos entre 1990 y 2005 (Cuadro 3, en apéndice 2).

La inversión en recintos semicerrados implicó la construcción de centros adosados a los CIP–CRC, en tres regiones: Atacama, Aysén y Magallanes. En las restantes regiones, se habilitaron algunos establecimientos pertenecientes a instituciones colaboradoras, como un antiguo centro en Calera de Tango en la región metropolitana y, en la mayoría de los casos, casas particulares por las que se paga mensualmente, y hasta la fecha, altos arriendos. La necesidad de contar con espacios pequeños ha perpetuado esta solución, a lo que habría que agregar el rechazo que algunas comunidades vecinales manifiestan a los jóvenes que cumplen condena en estos centros.

Según datos de ejecución presupuestaria del SENAME, el costo mensual estimado por adolescente privado de libertad en el año 2010 era de 683.461 pesos, dato que incluye CIP y de 81.692 pesos por adolescente en el medio libre, dato que incluye MCA y PSA (Cuadro 4 en apéndice 2). Es decir, se gasta ocho veces más en un menor encarcelado que en el medio libre.

En el estándar de dotación de personal y trabajo educativo, la relación educador-adolescente en estos centros era de 0,24 profesionales por adolescente en 2012, es

decir, cuatro adolescentes por educador. Este estándar es insuficiente, a pesar de haber mejorado desde una relación de 0,15 educadores por adolescente en 2008, es decir, un educador por cada siete adolescentes (Cuadro 5, en apéndice 2).

Los datos anteriores ilustran con claridad que el modelo de gestión de los centros privativos de libertad es cautivo de una concepción que privilegia la masividad, realidad que pudo ser la del comienzo de la ley, pero que no es la actual, en que se aprecia un descenso sostenido en la ocupación de las plazas, incluso si se considera como referencia el máximo alcanzado en cada año (Tabla 6, en apéndice 2).

## **Egresos**

El SENAME califica las salidas, a las que denomina *egresos*, en favorables y desfavorables. Las salidas favorables corresponden a alguna de los siguientes causales: cumplimiento de la condena, remisión del saldo de condena, sustitución por una condena menos gravosa, cumplimiento parcial de una sanción mixta y sustitución condicional de una sanción privativa de libertad. Si se toma como referencia el año 2008, el primero de la ley, las salidas favorables han aumentado. Ese año representaron un 40% del total y en 2013 la proporción llegó a un 54,7% del total. Aunque este último porcentaje invita al optimismo, lo cierto es que la cifra se mantiene más o menos estable desde el año 2009 e incluso disminuyó respecto del año 2012. Tampoco se puede pasar por alto que las salidas desfavorables representaban todavía el 45,3% del total en 2013 (Tabla 7, en apéndice 2).

## **Reincidencia delictiva.**

El SENAME realizó un primer estudio sobre reincidencia el año 2011 y ha continuado realizando mediciones todos los años, acorde con la percepción de que el sistema de responsabilidad adolescente es un sistema penal y también influido por las tendencias implicadas en la instalación de nuevos programas de prevención (que analizamos más adelante, en el capítulo cuarto), que se promueven como exitosos en la disminución de la reincidencia y cuyos resultados estarían

respaldados por la “evidencia” científica<sup>11</sup>. En consecuencia, a la hora de reportar resultados, el SENAME ha comenzado a privilegiar los datos de no reincidencia antes que las salidas exitosas. El estudio de 2011 fue encargado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, y consistió en la construcción de un modelo informático para medir la reincidencia de cohortes de adolescentes egresados. El modelo fue mejorado en el año 2012.

A la fecha, se ha medido la reincidencia de las cohortes anuales de 2008, 2009, 2010 y 2011, con 12 y 24 meses de seguimiento. Si se descarta el año 2008, se observa una relativa estabilidad de la tasa de reincidencia general a 12 meses (alrededor del 40%), de acuerdo con dos modelos de medición, denominados modelo A y modelo B. En el caso del modelo B, la tasa desciende a partir del año 2009, hasta un 35,5% en el año 2011 (Tabla 8, en apéndice 2). En las tasas de reincidencia a 24 meses, hay mayores diferencias entre los modelos. En el modelo A, la tasa en 2009 era de 57% y de 57,8% en 2011. En el modelo B, la tasa es de 54,9% en 2009 y de 49,9% en 2013 (Tabla 9, en apéndice 2).

La tasa de reincidencia varía según el tipo de sanción. Como es esperable, las mayores tasas se registran en los ingresados o egresados de los centros privativos de libertad en régimen semicerrado (CSC) y cerrado (CRC). Sorprende el alto valor que alcanzan las tasas en sanciones en medio libre (Tabla 10, en apéndice 2). Hay una mayor diferencia entre las tasas de sanciones privativas y no privativas de libertad, cuando la medición se efectúa con dos años de seguimiento (Tabla 11, en apéndice 2).

---

<sup>11</sup> Son descritos como una nueva generación de programas que intentan demostrar que no es cierto lo afirmado por Martinson en los años 70, de que “nada funciona”; es decir, que ninguna de las acciones clásicas del Estado social, destinadas a la reinserción social de los condenados, obtiene resultados apreciables o que justifiquen su elevado coste. Algunos de estos nuevos programas tendrían cierto éxito en disminuir la reincidencia, pero advierten sobre su adopción indiscriminada, ya que estos programas son muchos veces promovidos por los propios investigadores o no suelen pasar de una etapa piloto, por lo que son raramente replicables debido a su alto coste. Cf. F. CULLEN y P. GENDREAU, “Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas”, en: JUSTICIA PENAL SIGLO XXI, R. Barberet y J. Barquín (eds.), Granada, 2006. Independiente de esta discusión, lo cierto es que han contribuido a operar un desplazamiento que ha pasado desapercibido: ya no se apunta a lograr la reinserción social de los condenados, sino que el objetivo se reduce a evitar su reincidencia en el delito.

Las tasas de reincidencia observadas coinciden con los resultados de mediciones realizadas en otros países, en que las tasas de reincidencia promedian alrededor del 40% en un tiempo de 12 meses<sup>12</sup>. En la misma época, la Fundación Paz Ciudadana realizó un estudio del sistema de responsabilidad penal adolescente, que arrojó un 70,1% de reincidencia por cualquier nueva causa penal y 55,2% por una nueva condena. Los resultados de este estudio tuvieron una amplia difusión e instalaron la idea de un fracaso del nuevo sistema penal de adolescentes. Generaron una polémica en la que, debido al peso de la Fundación, el SENAME tuvo que relativizar sus propios resultados. Lo cierto es que las cifras arrojadas por el estudio de Paz Ciudadana son ostensiblemente mayores debido a que utilizó como criterio de reincidencia la generación de “cualquier nueva causa”, criterio que se aleja de las definiciones legales de reincidencia. Sin embargo, el estudio de Paz Ciudadana, por la propia desmesura de sus resultados, permite denunciar como hecho *obvio* la falta de cumplimiento de los objetivos del sistema de responsabilidad penal adolescente; mientras que la “moderación” de las tasas del estudio del SENAME, induce a una lectura complaciente y alejada de la preocupación por la reinserción social, objetivo mandatado por la propia ley en su artículo 20. Más aun, el informe de SENAME, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile, contiene un capítulo extraño y redactado a toda prisa, en el que se descarta la reinserción social como un objetivo viable de política. Un comentarista del estudio de Paz Ciudadana atribuye estas tasas a los problemas propios del encierro: *“la separación de la comunidad, la interrupción de la educación, la reducción de las perspectivas de empleabilidad futura y la confirmación de identidades delictivas”* y critica las limitaciones del concepto de reincidencia: *“El propio concepto de reincidencia, así como las consecuencias que se derivan de su ocurrencia, deben ser profundamente revisados (...) Si el desistimiento del delito no es un evento, sino un proceso de la persona que se extiende por un determinado período de tiempo, es necesario contextualizar las nuevas infracciones en este proceso. En futuras investigaciones debiera considerarse el cumplimiento del objetivo de integración social (junto al de) evitación de la reincidencia”*<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> “Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal”, Fundación Paz Ciudadana, 2010, Pág. 102.

<sup>13</sup> G. BERRIOS, “La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”. *Política Criminal*, Vol. 6, Nº 11, Junio 2011, Pág. 186. Disponible en: <http://www.politicacriminal.cl>.

Efectivamente, si consideramos el importante número de adolescentes condenados a sanciones privativas de libertad e incluso a los que han pasado a ser mayores de edad, que son el 70% del total, las cifras de reincidencia pierden su significado, pues hay que entrar a considerar más bien el efecto desocializador impuesto por las largas penas a las que son condenados los adolescentes, e incluso a su desventaja relativa con respecto a los adultos, ya que de haber continuado en el antiguo sistema, dichos menores estarían reclusos en las secciones juveniles de los penales adultos, con la posibilidad cierta de acceso a penas sustitutivas e incluso a una oferta de reinserción social más consolidada. Lo que intentamos decir es que si la reclusión de larga duración en los centros cerrados de la ley 20.084 tiene algún sentido resocializador, este va a depender exclusivamente de la oferta programática y el acompañamiento educativo que el SENAME pueda desplegar.

#### **EVALUACIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE REALIZADAS POR EL PARLAMENTO, ESPECIALISTAS Y ACTORES JURÍDICOS.**

El proceso de aprobación del proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente, dejó algunos heridos en el camino. Por de pronto, los reformadores. Aun cuando guardaron un relativo silencio, criticaron que la ley hubiese traicionado su espíritu. Este sentimiento, más que su contenido, se vieron expresados en las sesiones de la primera y segunda comisión de expertos, nombradas para evaluar el proceso de implementación de la nueva regulación legal de la delincuencia de los menores.

La redacción final de la ley, en la que se manifestó el espíritu de la tolerancia cero, dejó con sabor a derrota a los reformadores, no así al arco político que no dudó en hacer la vista gorda ante la manifiesta inconsistencia entre el objetivo declarado -la reinserción social-, la institucionalidad que se estaba formando y los medios y recursos para cumplir con el objetivo. Las autoridades, a la defensiva, garantizaban una implementación al mínimo de lo requerido (“nos comprometemos a lo básico”) y esto fue aceptado por el Parlamento, con la condición de otorgar un periodo de vacancia de un año después de la promulgación de la ley en el 2005, con el fin de que el SENAME tuviese más tiempo, aunque no mayores recursos, para preparar la implementación. Antes de que se cumpliera el plazo de vacancia, a mediados del

año 2006, se postergó su entrada en vigencia por seis meses más, debido a que aún no estaba lista la infraestructura de los centros, faltaba la oferta programática y había algunos vacíos legales. Estos vacíos se llenaron finalmente, con regulaciones restrictivas (ley 20.191). Finalmente, entró en vigencia el viernes 8 de junio de 2007, en medio de protestas de funcionarios del SENAME por mejoras salariales y el reclamo de un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional, debido a una modificación realizada a última hora por el Parlamento.

Dos son los aspectos principales en que se concentró la evaluación de la implementación por parte de especialistas y organizaciones. El primero, la *especialidad* de la ley en relación con la ley penal de adultos. Se plantea que la responsabilidad penal de adolescentes es diferente a la de los adultos, porque afecta a una persona en desarrollo que, si bien tiene responsabilidad por sus actos delictivos, esta responsabilidad es atenuada, adquiere un sentido educativo y busca favorecer la integración social del adolescente. El segundo aspecto evaluado, que se complementa con el primero, es la *especialización* que deberían tener los operadores del sistema de justicia penal adolescente y encargados del cumplimiento de sus medidas y sanciones.

Revisaremos las evaluaciones mencionadas, según provengan de las comisiones de expertos o de los operadores del sistema de justicia, como jueces, fiscales y defensores.

### **Primer y segundo informe de la comisión de expertos**

Durante el plazo de vacancia de la ley de responsabilidad penal adolescente, se dictó la ley N° 20.110, que amplió el período establecido originalmente, de seis meses a dieciocho meses y obligó al Ministerio de Justicia a convocar a convocar a una Comisión de Expertos que informara a ambas cámaras del Congreso, estableciera recomendaciones y monitoreara su implementación<sup>14</sup>. El mandato implícito de la comisión era allanar el camino para subsanar el hecho de que el sistema no estaba listo para operar, pues las carencias observadas ponían en serio

---

<sup>14</sup> La comisión estaba integrada por diez juristas y cinco expertos en el ámbito de las políticas públicas y trabajo con infractores de ley.



riesgo la consecución de los objetivos de la ley. En octubre de 2006, la comisión redactó un primer informe, estableciendo los principales núcleos problemáticos que deberían encararse en forma urgente. Pero, más allá de los aspectos concretos, la comisión hizo notar que la principal dificultad residía en la opinión de los operadores de que este nuevo sistema era sólo una atenuación del sistema de persecución establecido en el Código Penal y Procesal Penal de adultos. La comisión entendió que la especialidad de la ley no era un hecho, por lo que la tarea más urgente era convencer a todos aquellos actores que creían que la nueva ley era sólo una extensión del trabajo que se realizaba en el marco de la ley tutelar de menores.

El primer informe de la comisión se concentraba necesariamente en diversas dificultades de la ley, algunas esperables desde su misma estructura y otras, de las condiciones para su implementación exitosa. En lo legal, la dependencia de la ley de responsabilidad adolescente del sistema procesal y penal adulto y la falta de claridad del régimen de determinación y revisión de las penas, generaban grados importantes de incertidumbre. En lo programático, la comisión denunciaba la falta de claridad en relación con los programas que la constituyen, sobre todo en lo referido a su base normativa, reglamentaria y técnica.

Por otra parte, la situación de la infraestructura de los centros cerrados y semicerrados, el hacinamiento y la falta de espacios adecuados, en opinión de la comisión ponían en riesgo la factibilidad de los programas y del modelo de intervención que se ofrecería a los adolescentes. En particular, la oferta educativa al interior de los centros privativos de libertad no se creía sustentable, ya que el sistema de financiamiento vía subvención hacía poco rentable para un sostenedor externo desarrollar una acción educativa formal. Aún más lejana se veía la instalación de talleres laborales, mencionada en forma destacada por la ley y su reglamento. Respecto de las sanciones no privativas de libertad, las dificultades de recursos y de articulación de una red social y comunitaria en la que debían desenvolverse, era señalada como la principal dificultad. En cuanto a la especialización, que la comisión entendió como referencia a un sistema distinto al de los adultos tanto como a la capacitación de los operadores del mismo, plantea que los cursos ofrecidos debían referirse a los contenidos fijados por la ley:

desarrollo adolescente, culturas juveniles, particularidades de la actividad delictiva juvenil, etc.<sup>15</sup>

El segundo informe de la comisión de expertos, del 29 de abril de 2007, a meses del debut de la nueva ley, propone una nueva postergación de su entrada en vigencia. Con un dejo de irritación, plantea que como el Ministerio de Justicia no había hecho las modificaciones legales sugeridas se mantenía la incertidumbre, la que se extendía a los resultados de las nuevas orientaciones técnicas y de los procesos de capacitación. En cuanto a la infraestructura, toma nota de los avances reportados por el SENAME, pero considera que la sanción de internamiento en régimen semicerrado (cuya ausencia justificó en buena medida la primera postergación de la ley) no debía entrar en vigencia, puesto que solo había un centro por región y se requería de una oferta más numerosa y mejor localizada, para que los menores no perdieran el contacto con sus familias. Reitera lo señalado en el primer informe: *“A la fecha no se dan las condiciones mínimas necesarias desde el punto de vista del texto legal (la realidad superó todos los temores) y no es posible garantizar que la infraestructura, el estado de los programas y la administración general del sistema permitan una adecuada puesta en funcionamiento integral de la justicia penal adolescente en junio próximo”*<sup>16</sup>.

Sin embargo, la apreciación negativa de la Comisión no fue unánime. Dividida, se propuso que la ley partiera en forma gradual, por tramo de edad, iniciando con los adolescentes de 16 y 17 años y dejando para una fecha a determinar por el Ministerio de Justicia, la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años. Despuntaba de esta forma una suerte de revisionismo tardío que, en este caso, manifestaba la desconfianza con la rebaja de la responsabilidad penal a los 14 años. Pero, ya no se podía volver atrás y el campo de acción de la Comisión se agotaba en el cumplimiento de su mandato. Al final, se limitó a recordar a autoridades y legisladores, que la ley tiene por objetivo la reinserción social y el futuro comportamiento conforme a la ley de los adolescentes condenados, *“cuya responsabilidad penal se está regulando – que es la base de la legitimidad*

---

<sup>15</sup> Primer informe de la comisión de expertos de la ley de responsabilidad penal adolescente, Santiago, octubre de 2006.

<sup>16</sup> Segundo informe de la comisión de expertos de la ley de responsabilidad penal adolescente, Santiago, abril de 2007. Pág. 21.

*democrática del sistema de justicia criminal de adolescentes- por sobre otros cálculos, disputas o consideraciones”<sup>17</sup>*. Añade que espera que el informe ayude a la generación de un consenso. La posición inicialmente de minoría fue la que primó en definitiva, representada sobre todo por los operadores no jurídicos de la comisión, que rechazaban la postergación de la ley y argumentaban que la incertidumbre solo se despejaría con el perfeccionamiento gradual de la ley en el tiempo a través de su implementación. La vieja costumbre nacional, de dejar que *“la carga se arregle en el camino”* y el peso de la realidad, se impusieron.

El segundo informe de la Comisión, fue un reflejo del espíritu que rondaba en sus reuniones de trabajo. En ellas, parecía manifestarse un íntimo malestar, originado en la frustración definitiva del impulso reformista, que se mantuvo presente con fuerza en la primera etapa de la tramitación de la ley en el Congreso, pero que al final de la segunda etapa, devino en relativa desazón. Varios de los principales argumentos, para postergar o limitar su implementación, como la incertidumbre frente a su impacto, reflejaban por sí mismos la impotencia e irritación que embargaba a la mayoría de los comisionados.

### **El informe del Senado**

El 8 de diciembre del año 2010, un incendio en la cárcel de San Miguel en Santiago, causó la muerte de 81 personas y 16 heridos graves, y reveló las precarias condiciones del sistema penitenciario chileno. El Ejecutivo anunció la implementación de 11 medidas para la población penal adulta, de aplicación inmediata. Estas medidas no incluían a la población penal adolescente, pese a que las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros, CISC, creadas por el reglamento de la ley 20.084, habían estado denunciando desde el mismo año 2007 las fuertes carencias de los centros privativos de libertad, sus malas condiciones de habitabilidad, seguridad, atención en salud, acceso a educación y falta de preparación de quienes intervenían directamente con los adolescentes privados de libertad. El panorama se agravaba por la muerte de diez jóvenes el año 2007 en un incendio ocurrido en el centro cerrado de la ciudad de Puerto Montt, el suicidio de dos jóvenes en el centro cerrado de Limache, uno el año 2008 y el otro el 2011, el

---

<sup>17</sup> Segundo informe de la comisión de expertos de la ley de responsabilidad penal adolescente, Santiago, abril de 2007. Pág. 25.

suicidio de un joven en el centro cerrado La Serena el año 2008 y la muerte de un joven apuñalado por otro en una riña en el centro cerrado de Talca el año 2010.

Motivado por los informes de las CISC y la posición adoptada por la UNICEF, el Gobierno propuso en marzo de 2012 la implementación de once medidas para la reinserción denominadas “Plan Jóvenes” a ejecutar por el SENAME, con una inversión de más de siete mil millones de pesos. Las medidas apuntaban a mejorar la alimentación, atención de salud, servicios higiénicos, sistemas de seguridad, colchones ignífugos, educación, capacitación laboral, actividades extra programáticas, intervención especializada en las secciones juveniles de Gendarmería, especialización y capacitación del personal, fomento a la participación y mejoramiento de la convivencia. El cumplimiento de estas medidas debería ser supervisado a través de las CISC. Al cumplirse los cinco primeros años de vigencia de la ley, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado redactó un informe, acompañado del anuncio de las medidas del “Plan Jóvenes”. Para la confección del informe, se efectuaron audiencias los días 4, 9 y 19 de julio de 2012 y en ellas realizaron presentaciones el Ministerio de Justicia, SENAME, Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial, las policías, UNICEF, operadores del sistema de ejecución y académicos<sup>18</sup>.

Las medidas del Plan Jóvenes revelaban por si solas las graves falencias en las condiciones de habitabilidad de los centros y la falta de oferta programática para la reinserción. El informe del Senado incluía otros aspectos interesantes como las recomendaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y UNICEF, sobre la necesidad de terminar con el concurso y la acumulación de sanciones que la ley permite e incluir reglas para unificar y reducir las penas, de modo que los jóvenes no se vean cumpliendo penas de adolescentes cuando ya han dejado de ser menores de edad, como sucede en la actualidad. El Ministerio Público criticó la ausencia de actividades diurnas en la sanción en régimen semicerrado, que funcionaría de este modo como una mera reclusión nocturna. El Ministerio de Justicia se refirió a la necesidad de reforzar los programas de nivelación

---

<sup>18</sup> El documento se titula “Informe Boletín S 1555-14 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre los cinco años de aplicación de la Ley 20.084 que crea un sistema de Responsabilidad Adolescente por Infracciones a la Ley Penal”, Congreso nacional, Marzo 2013.

educacional y de capacitación en oficios. UNICEF recomendó tanto al Ministerio Público como a la Defensoría Penal Pública, la creación de unidades de responsabilidad penal adolescente, que constituyan instituciones de estudio para la orientación y aplicación del sistema penal adolescente. Observó también la escasa aplicación de beneficios en la ejecución de las sanciones y la falta de calidad de los planes de intervención.

Entre los especialistas, el profesor Jaime Couso denunció como problema cardinal del sistema la insuficiente especialización que había llevado a los tribunales a aplicar la ley como un sistema penal atenuado, sin atender a la especialidad del sujeto adolescente y de su situación, ni a los principios normativos que exigen un tratamiento diferenciado. Destacó algunos lineamientos de política criminal que ayudaran a conseguir los objetivos del sistema. Dado el fuerte cuestionamiento que la Comisión hizo de la sanción en régimen semicerrado, defendió su existencia como una alternativa de severidad intermedia entre la libertad asistida y la sanción de encierro propiamente tal<sup>19</sup>. En la misma línea, el profesor Miguel Cillero señaló como carencia clave la inexistencia de un genuino sistema penal de adolescentes. Esta característica estructural habría impedido el proceso incremental de implementación que fue prometido en su momento durante la discusión parlamentaria previa a su entrada en vigencia y durante la discusión de las reformas introducidas con la ley 20.191, mencionada más arriba.

La Comisión del Senado realizó una síntesis de los planteamientos efectuados que, en este caso, no refleja el fondo de las observaciones emitidas por la mayoría de los actores. Para no alargar demasiado esta exposición, solo mencionamos que la Comisión recomendó una mayor aplicación de la sanción accesoria de tratamiento de drogas del artículo 7 de la ley (*“pues lo esencial –señala- es comprender que el problema basal de la conducta delictual es el consumo”*), establecer un tiempo mínimo de penalidad en el caso de la libertad asistida, eliminar las sanciones de amonestación, multa, reparación del daño causado y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, por ser supuestamente ineficaces, y reformular por inoperante la pena de internación en régimen semicerrado; así como otras

---

<sup>19</sup> Un tratamiento más detallado en: J COUSO; *“Notas para un estudio sobre la especialidad en el Derecho Penal y Procesal Penal de Adolescentes: el caso de la ley chilena”*, en: "JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO" Número 10, UNICEF, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Septiembre de 2008.

recomendaciones de marcado acento punitivo, incorporando muy a la pasada los planteamientos más garantistas sobre la especialización de la ley y las medidas para la reinserción social. En el caso de las sanciones, proponía eliminar justamente aquellas que son novedosas respecto del sistema de adultos, debilitando aún más la falta de especialidad del sistema.

### **La falta de especialidad del sistema en cifras**

Una rápida mirada comparativa entre el funcionamiento del sistema penal adolescente y el sistema penal de adultos, permite conocer de manera empírica qué tan diferenciadamente funciona el sistema de la ley 20.084. Un autor analizó la aplicación especializada de la ley desde sus objetivos traducidos operacionalmente, como la diferenciación de la justicia de adolescentes frente a la de adultos, el privilegio de la desjudicialización (no entrada al sistema) y el carácter excepcional de la privación de libertad. Para realizar esta evaluación, comparó los términos judiciales de los imputados conocidos, tanto en el sistema de adolescentes como en el de adultos en el año 2010<sup>20</sup>.

Lejos de lo que era esperable en un sistema realmente especializado, Berríos se percató de que las condenas en el sistema de responsabilidad adolescente son más frecuentes que en el sistema penal de adultos. Otro tanto ocurre con las alternativas al juicio. Sí es posible observar una diferencia en el uso del principio de oportunidad en favor de los adolescentes, aunque el artículo 35 de la ley permite emplear este mecanismo en más casos que los adultos (Tabla 12, en apéndice 2).

---

<sup>20</sup> G. BERRÍOS, “La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”. *Política Criminal*, Vol. 6, Nº 11, Junio 2011. Págs. 163-191. Disponible en: [http://www.politicacriminal.cl/Vol\\_06/n\\_11/Vol6N11A6.pdf](http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_11/Vol6N11A6.pdf). El autor formula esta recomendación, en referencia a un trabajo de Duce: “El Derecho a un Juzgamiento Especializado de los Jóvenes Infractores en el Nuevo Proceso Penal Juvenil Chileno”, *Política Criminal*, Vol. 5, Nº 10, Diciembre 2010; quien realiza esta comparación sin hacer la distinción entre imputados conocidos y no conocidos. Como los adolescentes requieren ser “conocidos” para ser considerados como tales, esta es la base de cálculo más adecuada para hacer comparaciones con los mayores de edad.

El autor también constata un uso ascendente de las sanciones privativas de libertad, en desmedro de las no privativas. El primer año las sanciones privativas de libertad fueron un 8,6% del total, el segundo año un 9,7% y el tercer año un 10,1%. En otro plano, observó que los adolescentes ingresan mayoritariamente al sistema judicial en calidad de detenidos y en un porcentaje más alto que los adultos. En el año 2009 un 72,5% de los jóvenes ingresó a través de una audiencia de control de la detención mientras que los adultos sólo lo hicieron en un 57,5%<sup>21</sup>.

Si realizamos el mismo ejercicio de Berríos, esta vez con datos del año 2011, obtenemos resultados similares. Sigue existiendo un funcionamiento bastante homogéneo de la justicia penal de adultos y de la justicia penal de adolescentes, sin que se aprecie mayores diferencias en el trato otorgado a ambos grupos. En lo que respecta a los términos judiciales, no se observa un privilegio en el uso de salidas alternativas al proceso. En el caso de las sentencias condenatorias, son porcentualmente similares en ambos grupos. Respecto de los términos no judiciales, hay una mayor aplicación del principio de oportunidad en favor de los adolescentes (Tabla 13, en apéndice 2).

### **La visión de los operadores jurídicos del sistema.**

Finalmente, expongo la evaluación del sistema que hacen operadores jurídicos como fiscales, jueces de garantía y defensores penales, utilizando entrevistas realizadas para la investigación: *La reforma de la justicia juvenil desde la perspectiva de sus actores institucionales*. La investigación concluyó que los operadores se muestran muy disconformes con el funcionamiento y los resultados del sistema<sup>22</sup>. En esta ocasión, hago un análisis de esas entrevistas orientado por el objetivo de esta sección.

---

<sup>21</sup> G. BERRÍOS, Óp. Cit., Pág. 180.

<sup>22</sup> Las entrevistas fueron realizadas por integrantes del grupo de control social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y por Loreto Hoecker, coordinadora del estudio. Un artículo sobre sus resultados "Generando nuestros "extraños". Legitimación y reproducción del sistema de justicia infanto-juvenil reformado", fue publicado por Loreto Hoecker en *Revista de la Academia* N° 15, ediciones LOM, primavera 2010. Págs. 11-40.

En términos generales, en la conversación con los operadores jurídicos se recrea el tránsito desde un relato esperanzado, fundante de la reforma, de la que varios operadores participaron “en espíritu”, al desencanto o franca desilusión con sus resultados. El problema para todos, en mayor o menor medida, es que el sistema funciona y cumple con los objetivos del sistema penal...de adultos. En otras palabras, todos coinciden en que la justicia penal no resuelve los problemas de los menores delincuentes, que es una respuesta inadecuada, a menos que sea *especial* o *especializada*, es decir que tenga en cuenta los derechos de los adolescentes como personas en desarrollo y sus necesidades de integración social; a menos que sea una respuesta educativa, que implique también la responsabilización del joven. Todo esto es pura doctrina de la protección integral, a la que varios actores adhieren con convicción. Alegan que para ser un sistema diferenciado, que implique un juzgamiento especializado de los adolescentes, necesita contar con oferta programática para la reinserción social y con la especialización de los profesionales que intervienen con los adolescentes.

Citamos la opinión de un fiscal, sobre la diferencia con la justicia penal de adultos. Las letras al final de la cita son una referencia a la entrevista realizada, cuya transcripción puede encontrarse en el anexo 1. Procederemos de igual forma de aquí en adelante, al citar el contenido tanto de entrevistas como de grupos de discusión:

“... Son lo mismo, no debieran ser lo mismo, pero son lo mismo. Respecto de los menores se da la internación provisoria, y es lo mismo que la prisión preventiva, se regula igual. Yo pienso que falta un criterio más pro-adolescente de parte de los fiscales, más uniforme, porque algunos fiscales lo hacemos y otros no. Si yo no conozco el tema, no soy especializado y no me interesa, mi visión del imputado adolescente va a ser la misma que la de un adulto. Y la condena me retribuye bien, me da buena imagen, ¿me entiende?” (EJ1)

El sistema penal de adolescentes sería tan selectivo como el de adultos, en términos de privilegiar entre su “clientela” a los adolescentes de los sectores populares. Las mismas objeciones que se hacen al funcionamiento del nuevo sistema procesal penal de adultos, en términos de operar como una suerte de



“fábrica de presos”, se hacen aquí al funcionamiento del nuevo sistema penal adolescente:

“Somos un instrumento destinado a castigar la vulnerabilidad social” (EJ2).

“Ochenta por ciento de los delitos que llegan acá son robos, o contra la propiedad. El sesenta por ciento robo, treinta por ciento hurtos, y diez el resto, diría yo. Porte de arma, porte de arma blanca. Los cabros de poblaciones muchos llegan con cuchillos, porque dicen que lo usan para defenderse, porte de arma blanca (...) Este edificio en general (el edificio del Ministerio Público) es una máquina para moler pobres, es una máquina para moler carne pobre. El noventa y cinco por ciento es gente pobre, noventa por ciento. Es casi como una especie de máquina; vamos moliendo carne no más, y vamos sacando imputados (EJ1).

Los fiscales dicen que el control penal logra disuadir a la mayoría de los adolescentes que, de acuerdo a su apreciación, no seguirán una carrera delictiva; pero falla totalmente en una minoría que comete los delitos más graves y reincide con frecuencia. Se requeriría una respuesta orientada a la reinserción social, que las organizaciones encargadas del cumplimiento de las sanciones y la misma ley, no están proporcionando:

“Me parece que hay una gran disociación entre lo que la ley quería que ocurriera y lo que era realista esperar del sistema de justicia. Yo creo que la ley trabaja sobre una base bastante ingenua, de que a través del sistema de persecución tú vas a lograr sociabilizaciones de los actores, porque en general no hay un sustrato familiar o social, que pueda servir de apoyo a la labor de los organismos de justicia (...) con instituciones que no se definen bien como castigadores y contenedores o sociabilizadores, no puedes pretender intervenir las carreras delictivas cuando la calle, la casa, su circuito, donde se desenvuelven el 90% del tiempo, es totalmente contrario a una reinserción” (EJ2)

Incluso se sospecha que la no intervención del sistema podría ser lo más adecuado en un gran número de casos:

“A lo mejor podría tenerlo sin la ley también. Yo no le atribuyo un gran mérito a la ley, porque los estudios nos dicen y la experiencia indica, que muchas de las conductas que los cabros cometen, remiten solas, sin necesidad de ofrecer ningún sistema en particular. Entonces, para esos cabros la ley cumple con el objetivo, pero también desde otra mirada uno podría decir, en muchos de esos casos, la ley sobra” (EJ3).

La mayoría de los actores se percata de que la operatoria práctica del sistema, no solo consagra la ineficacia de los esfuerzos por responsabilizar a los adolescentes refractarios, sino que además los consolida en su carrera, como futura “clientela” del sistema penal adulto. A pesar de esta perspectiva crítica, los discursos difieren en que para algunos la antisocialidad es una característica de los propios jóvenes, mientras que otros consideran que estos rasgos son producto de la respuesta penal del sistema. Un tipo de discurso sostiene la necesidad de defensa social frente a la violencia y dañosidad que caracterizaría a una población adolescente altamente conflictiva y peligrosa. Otro discurso reconoce el origen de la selectividad del sistema en el tipo de conducta que se criminaliza preferentemente -configurando constantemente nuevos delitos que abarcan una diversidad de conductas que serían propias del mundo juvenil popular y de los conflictos recurrentes en los ámbitos de pobreza de nuestras ciudades-. La responsabilidad del carácter selectivo del sistema de justicia radicaría, en este último caso, en los actores de la persecución penal:

“En sectores reconocidos como peligrosos o donde se trafica mucho, detenerlos haciendo algo o pretendiendo hacer algo, no es tan difícil para la policía (...) también porque la detención de los menores es una detención fácil. Salvo correr, no ponen mayor resistencia. Normalmente no están amparados por los conocimientos suficientes para saber no auto incriminarse. Normalmente llegan a las audiencias auto incriminados ellos mismos. Son detenciones que le permiten al Ministerio Público y a la policía lograr sus índices estadísticos sin mucho esfuerzo (...)

Al joven infractor marginal, un chico que vive en un determinado sector, que anda en pandilla y que ande o no ande haciendo algo malo lo van a detener por cómo se viste, por como se ve, por como habla, por lo tanto lo que estamos teniendo es la detención por sospecha y obviamente con la proliferación de tipos penales que hemos tenido en los últimos siete años o

seis años, yo creo que en los últimos dos gobiernos, uno estornuda y sale un nuevo delito, significa que es muy poco probable que alguno de estos chicos no esté detenido o en condición de caer en alguna categoría que permita su detención” (EJ4)

La selectividad del sistema se justifica, en otros casos, por el “perfil” de los jóvenes de estratos sociales medios o altos. Hay fiscales que opinan que la justicia penal adolescente sale sobrando en estos casos. Consideran que los adolescentes con una mejor posición social, aunque tengan un actuar violento, cuentan con estructuras de contención familiar. Serían jóvenes para quienes la actuación de la justicia y la amenaza del estigma de una sanción penal afectan su situación social, y por lo tanto, responden frente a una salida alternativa y no reiteran. Aunque no estén dispuestos a responsabilizarse, logran sustraerse a la acción del sistema, debido a que “tienen mucho que perder”. Con ellos basta la amenaza del castigo:

... “El infractor ABC1, es como el evento extraño en un continuo vital bastante contenido y hay estructuras que lo contienen, familia, colegio, pero el infractor de ahí para abajo, ahí uno ve que no hay ninguna herramienta a la cual recurrir, para evitar que esto se vuelva a producir (...) O me veo como el “cabro” de clase media que quiere llegar a la Universidad o me veo como el “choro” del barrio, ojala “narco” o lanza internacional” (EJ2).

Los actores de la justicia aprecian que las carencias educacionales y, en particular, la deserción escolar -al igual que la disfuncionalidad familiar (familias monoparentales, con padres de baja escolaridad, donde hay violencia intrafamiliar, etc.) asociada a la pobreza extrema -, constituyen una especie de sentido común en relación a los factores que estarían asociados al delito juvenil. En tal sentido, como dice una experta en educación, *“existe en los jueces una concepción de la escuela que no corresponde a la realidad, como una institución sanadora, milagrosa”* (EE1). El correccionalismo de estos discursos es ostensible, al igual que la orientación tutelar, que parece haberse instalado entre los criterios de los jueces de garantía, por ejemplo, cuando se ven impulsados a actuar en subsidio de la familia:

“Los fiscales tienen como una suerte de procedimiento y de cálculo, primera detención suspensión condicional; segunda detención si es cercana y

estadísticamente no alcanza a aparecer, ya suspensión condicional, porque tal vez el sistema informático oculta esta segunda causa, tercera causa, amonestación y así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez amonestaciones, a la siguiente trabajo comunitario, hay cabros que llegan a tener 300 horas de trabajo comunitario, porque le aplican el mínimo que son 30 horas y diez veces seguidas. Entonces, llega un punto en que se equivoca el cabro en su evaluación, o se equivoca de delito, ya no es un robo de un vehículo, sino que escala al paso siguiente, porque estos cabros te están pidiendo ayuda, claramente, si está siendo intervenido todos los días, si está cayendo detenido todas las semanas, algo está pasando (...) cuento corto, el tribunal o no tiene la herramientas para poder vincularlos, la citación, etc., o bien el cabro se muestra resiliente, o no completamente refractario a poder ser intervenido en esta etapa tardía” (EJ4)

Otra queja sentida es que el trabajo de los interventores se ve entrabado por la lógica subsidiaria y mercantilizada del sistema, que transforma en ilusoria cualquier intervención de calidad. Las prestaciones de los programas, en cuanto dependen de la subvención diaria, privilegian el “hacer” más que el logro, lo que impide la acumulación de saber y de experiencia profesional. Un sistema pobremente financiado y escasamente especializado, sólo podría exhibir un trabajo llevado a cabo por profesionales con escasa experiencia y sensibilidad y con lazos laborales precarios con los proyectos de atención:

“No digo que esa gente no tenga motivación, pero cuando yo veo en la audiencia que la delegada del programa de medida cautelar es una chiquilla que tiene veinticuatro años (...) y que su experiencia de vida consiste en venir al tribunal (...) y la veo sentada al lado de este cabro que tiene diecisiete años, que viene con la pareja, con la guagua.....Qué referencia, qué contención puede significar para este adolescente infractor (...) profesionales tal vez muy preparados, tal vez tiene magíster, qué se yo, pero cuántas veces ha tenido que intervenir cabros en conflicto. En esos programas, el gestor del programa está preocupado de las lucas. Entonces, cuando se da cuenta que este es un chico que volvió a caer detenido, trata de obtener la liberación del cupo para recibir a otro. O, peor aún, cuando el programa está bajo en ingresos (...) a veces nos propone que el chico no sea egresado de la medida cautelar. Según ellos, porque están haciendo un trabajo muy bonito, que vence en cinco

meses más... Eso, porque mientras no los egresemos nosotros, ellos pueden seguir cobrando el subsidio. No nos vamos a leer la suerte entre gitanos (...)  
O sea la cantidad de chicos que han sido, entre comillas “intervenidos” en libertad asistida simple o especial y que vuelven a caer detenidos, demuestra lo ineficaz que están siendo esos niveles de intervención. Porque está llegando muy tardía; porque no están apuntando donde deberían. Toda la dinámica, desde el momento que se licitó esto, es un negocio” (EJ4).

## **PRECARIEDAD Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES.**

Como hemos visto, hay evaluaciones muy críticas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal adolescente e incluso los actores jurídicos se quejan de su carácter selectivo y criminalizador. En esta sección, pretendemos llevar más lejos este último razonamiento. Hay datos que revelan la estrecha relación existente entre las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en que se debaten los menores que cometen delitos y el funcionamiento de la justicia penal de adolescentes y, en general del sistema de control de los delitos de los menores de edad. Es decir que, en buena medida, el sujeto que este sistema define como la razón de su existencia, es creado y desarrollado por la acción del sistema mismo.

Hemos podido apreciar que los adolescentes condenados tienen un perfil homogéneo en un conjunto de datos sociodemográficos y se diferencian de modo consistente del conjunto poblacional al que pertenecen -la juventud poblacional o popular urbana-, que tiene, a su vez, un perfil diferente a la población de niños y adolescentes de las correspondientes edades. Su nivel de integración escolar y laboral es sistemáticamente más bajo y su relación con el sistema de protección o de responsabilidad penal adolescente, sistemáticamente más alta que entre la juventud popular urbana en general.

Esta conclusión implica que las peculiares modalidades de vulnerabilidad, precarización y criminalización que padecen en conjunto, pueden ser el contexto explicativo del historial de los menores y de las características de su identidad -que revisamos en el último capítulo-. Los jóvenes delincuentes han de entenderse como un segmento destacado del conjunto de los jóvenes populares, que tiene un contacto privilegiado con el sistema de justicia y de control en general y que se

mueve en las peligrosas aguas de la precarización social: entre la integración y la exclusión, entre la afiliación y la desafiliación.

A continuación presentamos algunos datos y argumentos disponibles sobre la situación social, escolar y laboral de los adolescentes y jóvenes que están en el sistema, que nos autorizan a definir su situación del modo descrito.

## **Situación social**

Un dato de difícil obtención, ya que no figura en las estadísticas oficiales, es el relativo a la situación social de los adolescentes infractores. Los datos de protección social son de competencia del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que si se quiere conocer estos antecedentes en la población de SENAME y de las secciones juveniles de Gendarmería de Chile, hay que solicitar cruces específicos. Afortunadamente, tuvimos acceso a información cruzada de esta manera el año 2010, la que mostraba que el 80% de los adolescentes y jóvenes condenados ese año, tenían ficha de protección social, indicio de que se encontraban en situación de pobreza (Gráfico 6, en apéndice 2). A modo de comparación aproximada, la pobreza en la población mayor de 18 años en el país alcanza al 11,5% y la pobreza en menores de 18 años llega al 22,8%<sup>23</sup>.

En cuanto a la situación de vivienda, la mayoría de los adolescentes y jóvenes vive en casa propia, pero un significativo 30% cuenta con una vivienda social, cedida por el Estado (Gráfico 7, en apéndice 2).

La escolaridad de los adolescentes y jóvenes sancionados, que tienen ficha de protección social, varía según el tipo de pena impuesta y el lugar de cumplimiento. En la sanción en régimen cerrado el 68,9% cursa la enseñanza básica; en régimen semicerrado y en las secciones juveniles el 61,5% cursa la enseñanza básica y en las sanciones en el medio libre, lo hace el 60,7%. Respecto de la enseñanza media (nivel que corresponde a la edad de los adolescentes que ingresan al sistema de la LRPA), en la sanción en régimen cerrado se encuentra el menor porcentaje relativo

---

<sup>23</sup> Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2011, Ministerio de Desarrollo Social.

con un 28,7% en ese nivel; lejano del 38,5% de las secciones juveniles y del 37% del régimen semicerrado y medio libre. El porcentaje que se encuentra cursando educación especial, aunque bajo, es llamativo en régimen cerrado, con un 1,4% y en el medio libre, con un 1,6%. El porcentaje que se encuentra en educación superior (universidades e institutos profesionales) no supera el 0,2%, en el caso más favorable (Gráfico 8, en apéndice 2).

## **Situación educacional**

El “Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, contiene una medición realizada en marzo de 2011, que muestra que el rezago escolar promedio (relación entre escolaridad y edad cronológica) de los adolescentes condenados es de tres a cuatro años, lo que se traduce en que, por ejemplo, un adolescente de 15 años que debería estar en 1° medio, tiene como último curso aprobado el 6° básico. El 52% de los vigentes en centros cerrados no asistía a la escuela al momento del ingreso, porcentaje que llegaba al 48,4% en libertad asistida especial y libertad asistida<sup>24</sup>.

La ley mandata que todas las sanciones deben desarrollar un programa de reinserción social, mencionando en forma explícita la escolarización de los adolescentes y su formación laboral. En un diagnóstico educacional inicial de los adolescentes atendidos realizado por el SENAME en los años 2009 y 2010, el 40,5% de los ingresados a CIP- CRC, CSC, PLA y PLE, presentó un diagnóstico escolar inicial de “no incorporado a educación”, cifra que disminuyó a 37,1% en el primer trimestre del 2010 (Tabla 14, en apéndice 2).

Las acciones realizadas por los programas son insuficientes. Entre los años 2007 y 2011, los programas de SENAME y sus colaboradores incorporaron al sistema educativo a un 37% de los adolescentes ingresados a las distintas medidas y sanciones. En los centros cerrados (CIP – CRC), se incorporó al 71% de los ingresados, mientras que en el subsistema de medio libre solo se incorporó al

---

<sup>24</sup> “Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, SENAME, junio de 2011.

24,4% de los ingresados<sup>25</sup>. Si se tiene en cuenta que alrededor de la mitad de los adolescentes no está escolarizado al ingreso, entonces, la cifra anterior habla de severas dificultades para lograr la inclusión educacional de los adolescentes ingresados a medidas y sanciones en el medio libre (Tabla 15, en anexo 2).

La desescolarización constituye un grave problema. Datos de población general de niños y adolescentes, permiten hacerse una idea de cuan grave es el rezago educacional de los adolescentes condenados en el sistema. La tasa neta de cobertura de la educación básica, medida desde el año 1990, no ha estado nunca por debajo del 90% y ha ido en aumento (sin mayor diferencia entre localidades urbanas o rurales). Incluso, si se considera el tramo etario de 7 a 13 años, supera el 98% (Tablas 16 y 17, en apéndice 2). Si comparamos esta tasa con el dato anterior de que más del 60% de los adolescentes y jóvenes que cumplen condena, aún se encuentran cursando la educación básica, podemos hacernos una idea de la brecha existente.

La cobertura de la educación media también arroja grandes diferencias. La tasa neta de cobertura de la educación media, en 1990 era de 60,1% y alcanzó el año 2011 al 72,2%. Se puede diferenciar entre quintiles de ingreso, lo que permite ver que en el primer quintil (el 20% más pobre) la cobertura en 2011 alcanza el 68,1%, mientras que en el quintil cinco (el 20% más rico) llega al 84,1%. Nuevamente, la comparación con los adolescentes que cumplen condena es desfavorable. El 30% que alcanza la cobertura entre estos, está lejana, incluso de la cobertura que alcanzaba el quintil uno en 1990 (Tablas 18 y 19, en anexo 2).

## **Escolarización y exclusión educativa**

La relación entre escolarización y exclusión educativa es de antigua data. Los sistemas de escolarización europeos hasta finales del siglo XIX habían consagrado no una, sino dos escuelas. Una escuela para las clases populares, obligatoria,

---

<sup>25</sup> La oferta educativa en los CIP - CRC consiste en un centro de educación integral de adultos, CEIA y un programa de apoyo para la reinserción educativa, ASR. En los centros semicerrados y proyectos en el medio libre, los menores deben acceder a la educación regular o especial que brinda el sistema escolar municipal o el particular subvencionado.



gratuita, de muy baja calidad, de tono moralizante y con escasa conexión con los estudios secundarios y superiores; y otra escuela de elite, al servicio de la burguesía liberal en ascenso, que de ese modo se dotaba de un mecanismo para la transformación natural de su descendencia en futuros cuadros dirigentes. El dispositivo se completaba, con el establecimiento de un circuito escuela – familia, de carácter protector que, en el caso de las familias populares no existe, sino que es ocupado por el Estado y la escuela misma, en función del control y la moralización de la familia pobre<sup>26</sup>.

En una discusión sobre los diferentes discursos y aproximaciones entre la educación, los procesos de escolarización y la exclusión social, Dubet hablará de una *escuela de castas* para referirse al proceso descrito por Donzelot, en que básicamente se procura establecer una correspondencia entre la estructura social y la estructura del sistema escolar, asignándole a ésta la tarea de reproducir las diferencias de clase y de lograr una *integración desigual*, proceso que se apoya, sin embargo, en la difusión de los valores del progreso y la democracia, que favorecen la integración nacional<sup>27</sup>. En la práctica, la escuela obligatoria significó la instalación de un sistema ideado para reclutar a grandes masas de escolares y excluirlas al mismo tiempo del intercambio social más amplio. Hacia finales de la segunda guerra mundial un nuevo paradigma de reclutamiento escolar se pone en marcha con el ideal meritocrático, que reemplazó al ideal de adscripción. Tras la consigna de la apertura de la enseñanza secundaria al mérito y al talento, se procuraba hacer realidad un ideal de democratización, de abrir y permear el sistema escolar bajo ciertas condiciones, para elegir a los mejores de entre la masa popular y que se unieran a la élite, o bien orientarlos a la formación profesional. A esta estrategia, Dubet la ha denominado *elitismo democrático*. Se trata de una operación que individualiza y psicologiza el fracaso escolar, apoyándose en la relación entre inteligencia y aprendizaje escolar, recursos intelectuales de los que algunas personas carecen y que son necesarios para tener éxito en la «carrera académica». Finalmente, la escuela *comprensiva* o *integrada*, que empezó a instaurarse a mediados de los años sesenta del siglo pasado, apostó a eliminar la selección al

---

<sup>26</sup> Cf. J. DONZELOT, *Policía de las Familias*, Pre-textos, Valencia, 1979.

<sup>27</sup> F. DUBET, “Exclusión social, exclusión escolar”, en: J. LUENGO (Comp.), *Paradigmas de gobernación y de exclusión social en la educación. Fundamentos para el análisis de la discriminación escolar contemporánea*, Pomares-Corredor, Barcelona, 2005.

ingreso en la enseñanza secundaria, buscando establecer el principio de “igualdad de tratamiento en el proceso”, implantando principios pedagógicos como la promoción continua, la eliminación de exámenes, los itinerarios académicos paralelos, adaptaciones curriculares, etc. El fracaso escolar se explicará ahora por la falta de motivación del alumno, que no ha querido o no ha sabido aprovechar los recursos que el sistema le ofrece. La nueva estrategia de exclusión tratará de convencer al sujeto de su propio fracaso; persuadiéndole de que no posee las habilidades o competencias requeridas y eximiendo de toda responsabilidad al sistema educativo.

Se trata, como se puede ver, de dispositivos que operan en base a una carga ideológica, en el sentido de la naturalización de un sistema de creencias, en tanto estructuras de sentido común. En el último de los mecanismos expuestos, se ponen en práctica lo que Bourdieu denominó, procesos de “autoexclusión”. La escuela no reproduce directamente las desigualdades sociales, sino a través de mecanismos de mediación simbólica: *“La escuela reproduce las desigualdades existentes en la sociedad al reforzar el habitus que corresponde a las familias de la clase media (...) El habitus es un sistema de disposiciones durables y transferibles, que funciona como la base generadora de prácticas estructuradas y de esquemas perceptivos objetivamente unificados (...) se adquiere en el seno de la familia desde los primeros años de vida, y su interiorización exige la inmersión en un determinado estilo de vida. Se manifiesta a través del gusto, del lenguaje, de las buenas maneras (...) e implica determinadas formas de pensar, valorar, sentir y actuar (...). De este modo, la escuela no es el lugar en el que se producen las desigualdades sociales sino donde se legitiman esas desigualdades”*<sup>28</sup>.

La naturalización del conocimiento y las competencias “legítimas”, producto de los mecanismos de imposición escolares que ejercen una violencia simbólica, se puede corroborar con datos respecto de las razones para no estudiar que entrega la Encuesta CASEN de 2011. Entre los adolescentes de 14 y 15 años, el 26,5% de los hombres no estudia por “problemas de rendimiento” y otro 22%, porque “tiene una discapacidad”; mientras que el 38,5% de las mujeres no lo hace por “embarazo

---

<sup>28</sup> Citado por F. ALVAREZ-URIA y J. VARELA, “La escuela y sus funciones sociales”, en: *Sociología de las Instituciones. Bases sociales y culturales de la conducta*. Ediciones Morata, Madrid, 2009, Pág. 62.

o maternidad” y el 10,4% por “problema de rendimiento”. Entre los adolescentes de 16 y 17 años, el 26,4% de los hombres no lo hace por “otra razón” y el 18,7% porque “no le interesa” y entre las mujeres, el 29,5% porque “terminó de estudiar” y el 24,2% por “embarazo o maternidad”. Complementariamente, en la Encuesta Nacional de Juventud de 2009, el 19,4% de los adolescentes de 15 a 17 años, señala que no está estudiando “por falta de interés”, siendo mayor el porcentaje entre los hombres (25,5%) que entre las mujeres (15,1).

Según una destacada especialista del Ministerio de Educación, el fracaso del rol de aprendiz del niño o adolescente, sería un aspecto conducente al abandono de la escuela:

“Uno va al espacio por participar de algo central. En el caso de la escuela, para aprender; y en tanto los cabros empiezan a dejar de aprender, a sentir que el resto del curso avanza (...) y el empieza a dar pasos hacia atrás, finalmente termina yéndose. Yo sigo yendo, en tanto sigo aprendiendo, sino, para qué diablos sigo yendo, a qué seguir participando si yo no soy un legítimo aprendiz dentro de un espacio. Me legitima el hecho de ser aprendiz; y eso se trabaja muy poco. No lo trabajamos ni como Ministerio de Educación, ni con otras instituciones preocupadas de enseñar” (EE1)

El abandono escolar también se vincula con dificultades relacionales en la biografía escolar del niño con compañeros o profesores.

“La razón principal por la cual los chicos dicen que se van es por las relaciones con sus compañeros de curso y con sus profesores... Sobre todo esta cuestión de no sentirse reconocido por la escuela, finalmente termina en una discusión o en alguna agresión hacia los profesores (...) la principal causa de abandono es la relación con los otros” (EE1).

La falta de “reconocimiento” de los adolescentes, que está a la base de los procesos de desafección escolar, es también un producto de mecanismos de estigmatización. La estigmatización es un resultado del funcionamiento de la escuela como baremo de diferentes formas de inadaptación de los menores. El conflicto cultural implícito en la relación de los niños y adolescentes con la escuela,

ha llevado a plantear también la existencia de subculturas juveniles como forma de reacción<sup>29</sup>.

Una investigación cualitativa reciente, con adolescentes condenados a sanciones en el medio libre confirmó en medida diversa, las dos hipótesis siguientes: *1) La experiencia escolar de los adolescentes previa a la comisión de delitos, da cuenta de prácticas de estigmatización que han incidido en su comportamiento de infracción a la ley, y 2) la condición de infractores de ley de los adolescentes, en su proceso de inserción o reinserción escolar, da origen a nuevas prácticas de estigmatización por parte de la comunidad escolar que dificultan su integración a la escuela.*

La experiencia escolar previa a la comisión de delitos, está marcada por la frustración de las aspiraciones y la estigmatización como alumnos problemáticos:

“El inspector (le dijo a mi mamá) que nosotros íbamos a salir delincuentes, que somos maldadosos...”

“(Dejé de estudiar) porque ya no me gustaba el colegio, porque como me echaron de un colegio, después estudié otro año y me echaron de otro, como que me aburrí y no quise estudiar más”.

“Dos profesores y un inspector me tenían mala, andaban siempre detrás de mí. Una vez le pitié una manzana en el comedor a uno en la cabeza. Estábamos todos haciendo una guerra de porotos y yo pesqué la manzana y se la tiré. Porque siempre me retaba y me andaba persiguiendo por todos lados. Entonces, tenía que desquitarme de alguna manera. Después me suspendieron por dos semanas”<sup>30</sup>.

La experiencia escolar posterior a la condena ve recrudecer la vigilancia y la desconfianza sistemáticas:

“Si, (los inspectores y profesores) eran los que más mala me tenían... si me querían puro echarme, porque decían que yo era una mala influencia para

---

<sup>29</sup> Sobre estos aspectos teóricos, remitimos al próximo capítulo.

<sup>30</sup> S. ALVAREZ, P. SANCHEZ y S. ZUÑIGA, “La Escuela, ¿un camino de integración social?, experiencia escolar de adolescentes infractores de ley, de las comunas de Lo Espejo, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda”, *Tesis para optar al título de asistente social*, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2008.

algunos compañeros que eran ordenados, los que tenían los mejores promedios. Decían que cómo iba a estar un alumno delincuente entremedio de todos ellos. Es que decían que yo no servía porque yo aparte era desordenado en el colegio. Y ahí dije: “ya, no voy más”. ¿A qué voy a ir?”. “La gente debe pensar que uno piensa y hace puras cuestiones malas”<sup>31</sup>

El fracaso explica también el derrumbe de la aspiración meritocrática de algunos adolescentes, originando su frustración y el consiguiente desbarajuste de la promoción social por caminos legítimos<sup>32</sup>.

### **Situación laboral**

Como sucede con la escolaridad, el desempeño laboral y la infracción de ley son considerados aspectos mutuamente excluyentes. Debido a esto, los datos de inserción laboral de los adolescentes no se consideran de interés ni son registrados en los centros y proyectos. Los equipos se concentran en implementar y registrar acciones remediales parciales, como el acceso de los adolescentes a cursos de formación laboral.

Un estudio realizado por la Universidad de Chile en 2005, mostró que los adolescentes que cumplen condena por delitos graves se identifican con el mundo del trabajo, aunque solo un 28% estaba trabajando al momento de ser detenido, mientras que el resto se encontraba cesante o buscando trabajo por primera vez. La identificación con el mundo del trabajo se explicaba más que nada porque el 73% de los adolescentes había realizado antes de ser condenado un trabajo remunerado, aunque de manera informal o temporal. Esta identificación, sin embargo, se ve limitada por un bajo nivel de expectativas: Las aspiraciones de ingreso a través del trabajo no superaban el salario mínimo<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ibíd.*

<sup>32</sup> Testimonios empíricos sobre estos aspectos se pueden encontrar en el capítulo 5.

<sup>33</sup> M. CANALES y OTROS, “Factores que inciden en la comisión de delitos graves en adolescentes infractores de ley”, Universidad de Chile, Santiago, noviembre de 2005.

Entre 2007 y 2011, SENAME entregó formación laboral al 26,6% de los adolescentes que cumplían con los requisitos para ser capacitados. La incorporación a cursos de capacitación es mayor en los centros cerrados (Tabla 20, en apéndice 2). La formación laboral entregada no incluye inserción laboral ni seguimiento post inserción. Tampoco se realizan estudios sobre la oferta de trabajo existente en el mercado. El circuito no cuenta con fondos públicos para financiar programas formativos a los que puedan acceder los adolescentes en cualquier momento del año. En cambio, opera un sistema de licitaciones y una política de “cupos”, que dificulta la estabilidad y la regularidad de la oferta. Por otra parte, la instalación de talleres laborales en los centros cerrados, mandatada por la ley, sigue siendo solo una aspiración.

Según datos de la actividad desempeñada por los jóvenes en la encuesta CASEN del año 2011, los adolescentes entre 15 y 17 años que trabajan son el 1,2% del total, los que estudian y trabajan son el 2,8% y los que no estudian ni trabajan son el 6,9%. Entre los que no estudian ni trabajan hay diferencia según el nivel de pobreza. El 10,7% de quienes viven en situación de pobreza extrema no estudia ni trabaja, mientras que entre los no pobres lo hace el 6,3%. La gran mayoría de los adolescentes solo estudia, con escasa diferencia según el nivel de pobreza (Tabla 21, en apéndice 2). El tipo de trabajo desempeñado también varía según la situación de pobreza. Los adolescentes que trabajan en forma permanente son el 34% del total, pero entre los pobres lo hace solo el 12%. Los que hacen trabajo de temporada son un 39% del total, sin diferencias entre pobres y no pobres. Los que trabajan de forma ocasional son un 19% del total, pero entre los pobres lo hace el 44% contra el 14% de los no pobres. Los que trabajan a plazo fijo son un 7%. Vale decir, quienes trabajan de forma parcial, ocasional y a plazo fijo son un 65% del total de los adolescentes que trabaja, pero entre los pobres las tres categorías suman un 87%. Por otra parte, entre quienes trabajan de forma asalariada, un 62% del total lo hace sin un contrato de trabajo<sup>34</sup>.

Según datos de la segunda encuesta de trabajo infantil y adolescente en Chile, realizada el año 2012, 219.000 niños de 5 a 17 años trabajan en Chile, 94 mil tienen entre 5 y 14 años, es decir, están por debajo de la edad mínima legal para trabajar

---

<sup>34</sup> P. FERNANDEZ, *Niñez y adolescencia en Chile: las cifras. Datos estadísticos y principales estudios*. Centro de Estudios de la Niñez, Corporación OPCION, 2014.

y 125 mil tienen entre 15 y 17 años, pero realizan trabajos peligrosos (según los criterios de la OIT). Sólo 10 mil adolescentes de entre 15 y 17 años realizan un trabajo no peligroso<sup>35</sup>.

## La precariedad como condición socio-estructural

Robert Castel ha llamado la atención sobre las actuales tendencias a la precarización del trabajo como una “nueva cuestión social”, producto de un declive de la condición salarial. La nueva cuestión social es una vulnerabilidad emergente de los individuos, definida y vivida sobre un fondo de protecciones otorgado por una condición salarial, que se resquebraja. El paro masivo y la precarización del trabajo producen, en las nuevas condiciones, nuevas categorías de personas *“que van a contrapelo del sistema de la protección social: no dependen del seguro puesto que no trabajan; pero no dependen tampoco de la asistencia clásica puesto que deberían trabajar ya que son física y psíquicamente capaces de hacerlo”*. Para estas nuevas poblaciones vulnerables sólo se pueden plantear políticas de inserción, porque, *“no se puede integrar ya mediante el trabajo (integración activa), pero tampoco se acepta convertir a estas personas en meros asistidos (integración pasiva)”*<sup>36</sup>. Entonces, *“la asociación ‘trabajo estable/inserción relacional sólida’ caracteriza una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión, o más bien, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad”*<sup>37</sup>. Desde el ángulo del trabajo, hay tres puntos de cristalización. El primero consiste en la *desestabilización* de los estables. El segundo consiste en *la instalación en la precariedad*. El tercero, en *un déficit de lugares* ocupables en la estructura social, entendiendo por lugar una posición con utilidad social y reconocimiento público<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> P. FERNANDEZ, Óp. Cit. Págs. 84 y 85.

<sup>36</sup> R. CASTEL, “La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales”. En: F. ALVAREZ – URIA (ed.), *Marginación e inserción*, ediciones Endymion, Madrid, 1992. Págs. 25 y 34.

<sup>37</sup> R. CASTEL, *La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997. Pág. 18.

<sup>38</sup> R. CASTEL, *La metamorfosis de la cuestión social...* Págs. 413 - 417.

En los países latinoamericanos la precariedad de los trabajadores es más antigua y aguda que en los países europeos. Sin duda que en el Chile actual ha habido una feroz erosión de la condición salarial como resultado de la aplicación a ultranza del modelo neoliberal, pero es la condición salarial misma la que ha tenido dificultades histórica para constituirse, por la debilidad inherente de un sistema económico extractivo y de un Estado que está en deuda con el desarrollo económico y la integración social. Con alguna relativa excepción, comparte esta situación con la mayoría de los países latinoamericanos, que han estado lejos de tener un Estado Social en el sentido europeo del término.

Los datos expuestos sobre precariedad laboral y segregación escolar involucran al sistema penal adolescente y al campo más amplio del control del delito de los menores de edad, contribuyendo a la precarización o desafiliación (como propone Castel) de los niños y adolescentes en su aspecto socio estructural, por así decir. Pero, la acción del sistema de control se ejerce más visiblemente a través de procesos de estigmatización y criminalización, como nos han hecho ver los actores jurídicos en sus testimonios sobre el funcionamiento de la justicia penal adolescente. Resulta extraño oír decir que el sistema es ineficaz porque no impide que los adolescentes vuelvan, como si esa no fuese en realidad la función oculta del sistema penal. O que la justicia sale sobrando en la mayoría de los casos, porque hay que privilegiar los soportes familiares y comunitarios. La explicación es que existe un discurso ideológico entre todos los operadores del sistema, sobre la misión que tendría la justicia penal adolescente, en orden a conseguir la reinserción social y la responsabilización de los muchachos y las muchachas. ¿Cuál es el origen de este discurso? ¿Por qué los jueces de garantía ensalzan las virtudes del tratamiento correccional y las bondades de la familia, la escuela y el encierro, para enmendar o contener el comportamiento discrepante de los menores? Intentamos responder a estas preguntas en los capítulos que vienen.

Dejamos planteada entonces la tesis de que los menores delincuentes, se ven afectados por una condición social precaria, de desafiliación o vulnerabilidad, que se refleja en una débil inserción escolar y laboral y en procesos de criminalización como resultado de la acción de la justicia y de las instituciones de control. A lo anterior, habría que agregar el tratamiento como personas marginales o “extrañas”, en las noticias, imágenes y reportajes de los medios de comunicación,



en lo que constituye a su vez, una modalidad que preferimos llamar “ideológica” de la vulnerabilidad, aspecto que abordamos de lleno en el capítulo cuatro. En ese capítulo, la criminalización de los jóvenes como marginales, se expresa a través del tratamiento mediático de las cuestiones de la inseguridad y la violencia social supuestamente generada por los adolescentes. De momento, la conversación desarrollada con los actores jurídicos precisa lo que luego veremos en detalle: los medios de comunicación constituyen una institucionalidad relevante en el proceso que incide en el carácter centralmente punitivo del sistema de justicia en general y de la justicia adolescente en particular, ejerciendo presión para una mayor eficiencia persecutoria y dificultando las decisiones orientadas a partir de los principios minimalistas, que en teoría debiesen orientar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, se acusa que la presión de los medios es tan intensa, que incluso llega a constituir una justicia paralela – una “justicia mediática” -.

Una jueza de garantía nos contaba que es más probable que sus decisiones sean revocadas por la Corte de Apelaciones, cuando se alejan de las exigencias de los medios de comunicación. Si las causas son mediáticas, entonces los actores igualmente tienden a mediatizarse:

“Nosotros como jueces de garantía, estamos muy complicados con la opinión pública, con adultos y menores (...) No le voy a decir quien, pero aquí las *tallas* (bromas), cuando una causa va a tener prensa, son: “*ponte bonita, vístete bien, anda a la peluquería*”. Yo me debo a mi público. El problema es que yo siento que, a veces, es la opinión publica la que está dirigiendo, los periodistas” (EJ4).

Los entrevistados admiten que los medios no solo afectan la actuación de la justicia, sino que construyen sistemáticamente la figura del menor delincuente como un ser temible y amenazante. A mediados de los años dos mil, cuando la mirada punitiva estaba totalmente centrada en la delincuencia de menores, el arranque de la ley 20.084 marco un breve punto de inflexión, a raíz de del incendio ocurrido en 2007 en el Centro de Puerto Montt de SENAME, en la que murieron

ocho adolescentes. Por breve tiempo, los medios desplegaron una mirada más comprensiva del fenómeno<sup>39</sup>.

Sin embargo, falta todavía considerar la dimensión más propiamente social de la precarización y vulnerabilidad de que venimos hablando, que se entiende mejor cuando se aborda el tema de la “nueva cuestión social” desde la perspectiva del prejuicio y la discriminación, aquella discriminación social instalada en las bases mismas de la convivencia en la sociedad insolidaria y desigual en que se ha convertido Chile en el nuevo milenio. En la segunda década del nuevo siglo, la contraposición entre integrados y precarizados abarca todo el cuerpo social, tal como se manifiesta en la existencia de tres figuras que simbolizan la discriminación hecha deseo colectivo en el Chile de hoy: “cuicos”, “aspiracionales” y “flaites”<sup>40</sup>. En un artículo alusivo, sobre la falta de respeto en el trato cotidiano de los chilenos, su autora saca a relucir la contraposición dominante al día de hoy entre las distintas categorías sociales que se mueven en un espacio social estriado: los “cuicos” o los de condición social acomodada, los “aspiracionales”, que por la vía del consumo y la ostentación quieren aparentar una promoción social exitosa y, finalmente, los “flaites”, herederos del sujeto pobre marginal de otras décadas, también ostentosos, pero en una modulación desafiante y amenazadora:

“El gesto *flaite* no es ya el del precarizado o necesitado, sino del provocador y atemorizador (...) Es *parado*. Esto es, se yergue sobre, en contra de la humildad, que es el gesto socialmente obligado en estos estratos (...) Emerge como un indicio, como *anuncio* de desertión y delincuencia”<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> En la ocasión, el Defensor Regional Público de la región de Los Lagos, Francisco Geisse, manifestó su descontento con el tratamiento de los medios: “Hasta ayer, para la opinión pública, todos eran delincuentes, hoy día –con la muerte- son niños. Esta tragedia debe hacer que la sociedad deje atrás esa mentalidad en que sólo el encierro y el aislamiento es la única medida para garantizarnos seguridad”, en: <http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/10/22/279402/defensor-regional-y-tragedia-en-puerto-montt-el-encierro-no-es-la-solucion.html>.

<sup>40</sup> E. CLEARY, “Falta de respeto en Chile: “Cuicos”, “aspiracionales” y “flaites”, en: El Mostrador, 16 de febrero de 2015., <http://www.elmostrador.cl/opinion/2015/02/16/falta-de-respeto-en-chile-cuicos-aspiracionales-y-flaites/>

<sup>41</sup> M. CANALES, “Estudio sobre la elección de colegios particulares subvencionados”, documento inédito, enero de 2015. Comunicación personal del autor.

Como veremos de otra manera en el último capítulo, en términos de las fuerzas que acompañan los procesos de integración social, el “cuico” es el término marcado, el que no se ofende porque lo llamen cuico, sino que se ofende porque no lo consideren tal. El “aspiracional”, es el depositario de todos los miedos, el sujeto al que se dirigen las campañas de seguridad ciudadana, y el delincuente es el que no puede ser nombrado, el que no puede ser oído ni puede ser visto.

## **CAPITULO 2**

### **EL CAMPO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL. ALGUNOS MODELOS DE ANÁLISIS DE LA SOCIOLOGÍA NORTEAMERICANA ELABORADOS A LO LARGO DEL SIGLO XX**

---

Adentrarse en el campo de la llamada justicia de menores, abordar la cuestión de la “delincuencia juvenil” como problema social, requiere como paso previo un somero estado del arte o estado de la cuestión. ¿Cómo y por qué surgió dicho campo, como se conformó y cómo se transformó? ¿Cómo fue estudiado por los sociólogos del delito? ¿Qué conceptos nuevos elaboraron los sociólogos interesados por las conductas llamadas desviadas para objetivar el problema de los menores que atentan contra las leyes? Para responder a estas cuestiones nos acercaremos a los principales trabajos de la sociología norteamericana, una sociología que cuenta con una rica tradición, para presentar las grandes líneas de una serie de modelos de análisis que son a nuestro juicio los más representativos. Nos centraremos en los modelos elaborados por sociólogos norteamericanos durante el siglo XX, pues mientras que en Europa, y en buena medida en América Latina, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos se han ocupado preferentemente, junto con juristas y educadores, de los menores responsables de las conductas delictivas, en los Estados Unidos la tradición criminológica se vio muy pronto enriquecida por la perspectiva sociológica abierta por los sociólogos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Fue en los USA, y más concretamente en la ciudad de Chicago en plena expansión por la llegada de sucesivas oleadas de emigrantes, en donde surgieron los primeros tribunales de menores, y en donde sociólogos universitarios desarrollaron en el siglo XX importantes investigaciones que constituyen hoy un patrimonio colectivo de la sociología científica.

Los modelos que simplemente vamos a describir aquí de forma necesariamente rápida, sintética, no pretenden dar cuenta de toda la rica tradición norteamericana, sino que nos servirán para presentar una amplia perspectiva de materiales elaborados por los sociólogos de los que nos serviremos a lo largo de esta investigación, como si se tratase de una caja de herramientas. Se podría decir que estos modelos se encuentran implícitos en nuestra investigación, constituyen algo así como su inconsciente intelectual. Y es que el trabajo sociológico no es nunca fruto exclusivamente de un trabajo intelectual individual y personal, sino que se inscribe en una tradición de pensamiento académico, científico, en el que conviven distintas perspectivas y sensibilidades que pugnan entre sí por alcanzar la competencia legítima. El campo científico, y especialmente el campo de la sociología universitaria, en donde las investigaciones tienen con frecuencia claras implicaciones sociales y políticas, no es nunca un mar en calma, no es ese espacio apacible de sabios desinteresados, un poco distraídos, que comparten entre si el té de las cinco, sino más bien un espacio de debate, de enfrentamientos que han dado sus frutos. Las conquistas categoriales surgen de los intentos por comprender el mundo social, pero también surgen de la confrontación entre escuelas y científicos sociales. Proponemos por tanto hacer un viaje imaginario por los espacios simbólicos de las teorías, aproximarnos a una serie de investigaciones que nos parecen especialmente valiosas y representativas de los modos de estudiar el campo de la delincuencia de menores.

A lo largo de esta presentación de las grandes líneas de algunos modelos de análisis comenzaremos por el conocido estudio, de carácter histórico, de Anthony Platt sobre *los salvadores del niño* en el que nos explica cómo, por qué, y en qué condiciones, surgió en USA la justicia de menores en íntima relación con la *infancia en peligro* y la *infancia peligrosa*. Tras la creación de los tribunales de menores en Chicago, tanto sociólogos como trabajadores sociales se sirvieron de los datos con los que contaban estos tribunales para estudiar la delincuencia en el marco de la *desorganización social* urbana.

La delincuencia juvenil, y esto es algo que con frecuencia se olvida, requiere para existir que previamente existan discursos sociales de la infancia y la juventud como grupos de edad separados de los adultos. No hay infancia en peligro ni infancia peligrosa, si previamente no hay simplemente *infancia*, pero tampoco hay juventud

delincuente sin una definición social previa de la *juventud* misma. Situados entre los niños y los adultos, los jóvenes constituyen en el interior de nuestras culturas una edad de paso, un grupo de edad en transición. Por una parte ya no son niños, por lo que no mantienen el estatuto de dependencia instituido en nuestras sociedades para la infancia, pero tampoco son adultos autosuficientes. Esta posición incierta, inestable, hace que nuestros jóvenes adolescentes vivan su adolescencia de forma problemática, una etapa en la que está en juego el propio proceso de formar una identidad en interacción con los demás, y en el interior de toda una trama de instituciones.

Historiadores de los grupos de edad han puesto de manifiesto que la infancia es una invención moderna, una situación de dependencia que lejos de surgir de repente, surgió y se desarrolló de un modo diferenciado en función de los distintos estamentos sociales en las sociedades de Antiguo Régimen, y también en función de la estratificación social en las sociedades industriales, las sociedades de clases. En este sentido, el libro ya clásico del historiador francés Philippe Aries resulta fundamental, pues sigue en parte los análisis pioneros de Norbert Elias<sup>42</sup>. Sin embargo asistimos en el siglo XX a una diferenciación dentro de la infancia entre la primera infancia, que ha sido objeto de definición y a la vez de estudio por parte de los psicoanalistas, y simplemente la infancia, y también entre la infancia y la juventud a través de la adolescencia, una etapa de la vida que ha sido estudiada, por ejemplo en Samoa, por la antropóloga norteamericana Margaret Mead<sup>43</sup>. También historiadores y sociólogos han realizado historias de la adolescencia y de la juventud, en las que se incluye la adolescencia no conforme. En este sentido el trabajo dirigido por Michelle Perrot sobre los *apaches* en *la Belle Époque* resulta también revelador<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> P. ARIES, *L'enfant et la vie familiale sous l'ancien regime*, Seuil, Paris, 1973 (Traducción: Ed. Taurus)

<sup>43</sup> Sobre la formación de la juventud como clase de edad véase G. MAUGER, *Jeneusse: l'âge des classements. Essai de définition sociologique d'un âge de la vie*, *Recherches et Prévisions*, 40, 1995, pp. 19-36.

<sup>44</sup> M. PERROT, "Dans la France de la Belle Epoque, les "Apaches", premières bandes des jeunes" en VVAA., *Les Marginaux et les Exclús dans l'histoire*, UGE, Paris, 1979

La relación conflictiva de niños y jóvenes con la sociedad en la que les ha correspondido vivir ha sido objeto de obras literarias, como *El Lazarillo*, *El buscón* y otros escritos vinculados con la llamada novela picaresca. En el siglo XIX el gran novelista inglés Charles Dickens, que fue un reformador social partidario de la humanización de las penas en las cárceles, dio a luz una obra emblemática: *Oliver Twist*. Desde entonces la literatura, la prensa, el cine y otros medios de expresión y de comunicación, como la televisión, se han ocupado de la juventud delincuente. Estos medios juegan un papel fundamental en la conformación de los discursos sociales sobre la delincuencia juvenil, y a ellos nos referiremos en varias ocasiones a lo largo de esta tesis.

## **CHICAGO: LA INVENCION DE LA DELINCUENCIA.**

El 1 de julio de 1899 se creó en Chicago el primer tribunal juvenil, pues fue en esa fecha cuando se aprobó el *Act to regulate the treatment and control of dependent, neglected, and delinquent children*. Para la aprobación de esta ley por el Parlamento del Estado de Illinois, fue importante la movilización de las asociaciones progresistas de mujeres, encabezadas por las fundadoras de *Hull House*, las reformadoras Jane Addams y Julia Lathrop, escandalizadas por la existencia de más de 2.000 niños en las cárceles mezclados con adultos delincuentes.

Julia Lathrop, hija de padre abogado, defendió que en las medidas a favor de los niños delincuentes, se comprometiese el Colegio de Abogados de Chicago que efectivamente, en octubre de 1898, aprobó la siguiente resolución: *Considerando que el Estado de Illinois y la ciudad de Chicago son lamentablemente deficientes en la debida atención a los niños delincuentes, acusados o convictos de violar la ley; que carecen de muchas de esas instituciones reformativas que existen en otros estados progresistas de la Unión; que los niños acusados de algún delito son tenidos en las cárceles y delegaciones de policía comunes, y los niños convictos de delitos de menor cuantía son sentenciados a una casa de corrección, donde están en contacto directo con borrachos, vagabundos y ladrones; que los jueces encargados de juzgar a los niños están en nuestras cortes tan sobrecargados de otros trabajos que les resulta difícil prestar la debida atención a las causas*

*infantiles, en particular las de las clases dependientes y descuidadas; que el Estado de Illinois no tiene nada dispuesto para atender a la mayoría de los niños dependientes de la ayuda oficial, más que las casas de caridad, a diferencia de muchos estados vecinos que hace tiempo aprobaron leyes que prohíben tener a los niños en casa públicas de caridad; RESOLVEMOS que el Presidente de este Colegio nombre una comisión de cinco miembros de su seno para investigar las condiciones existentes en lo tocante a los niños delincuentes y dependientes, y para cooperar con las comisiones de otras organizaciones en la formulación y procuración de las leyes que sean necesarias para curar los males existentes, y elevar al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago al nivel de los principales estados y ciudades de la Unión.*

La resolución del Colegio de Abogados fue un impulso importante. Como señala Platt con la aprobación de la ley de tribunales para menores de 1899 *culminaban casi ochenta años de esfuerzos reformistas*<sup>45</sup>. Anthony M. Platt ha puesto de manifiesto en la investigación que realizó a mediados de los años sesenta, cómo surgió y se desarrolló el movimiento de *los salvadores del niño*. Como él mismo señala en el prólogo a la segunda edición de su libro, coincidió con una radicalización en Norteamérica de los movimientos estudiantiles y de los movimientos por los derechos civiles, así como con el empuje de una sociología crítica que arremetía abiertamente contra el reformismo, hasta el punto de que el propio Platt se mueve en una especie de indecisión a la hora de valorar las reformas: son reformas protectoras, progresistas, pues protegen a los menores de entrar en las cárceles, verdaderas escuelas de delincuentes, pero a la vez favorecen un mayor intervencionismo de las autoridades sobre los jóvenes de las clases populares, se inculcan unos hábitos familiares de las clases medias, y se instrumentaliza a los jóvenes con problemas para que sean útiles al sistema capitalista.

Visto con una cierta perspectiva el trabajo de Platt presenta un gran interés, pues aborda la cuestión capital de cómo se produjo históricamente la constitución del campo de la delincuencia juvenil en USA, en íntima relación con la

---

<sup>45</sup> A. PLATT, *Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia*, Siglo XXI, México, 1982, pp.146 y ss.



institucionalización de los tribunales de menores, pero la historia que nos presenta es demasiado lineal, pues desconocemos quienes son los principales agentes de la reforma, desconocemos las relaciones complejas entre el grupo heterogéneo de los salvadores del niño, su posición social, institucional y sus *habitus* de clase, así como su posición política, y tampoco sabemos cómo reaccionaron los conservadores contra las nuevas medidas reformistas. No es posible entresacar de su trabajo un mapa de posiciones que favorezca la interpretación de las leyes en el interior de un contexto social más amplio.

Sabemos que sociólogos de Chicago como Charles Henderson, así como las mujeres de Hull House, comenzando por Jane Addams, apoyaron la reforma, y cuestionaron el abandono de los niños en la calle, en el marco de una crítica a la desorganización social urbana de Chicago, propia de un capitalismo aventurero. ¿Todas las medidas innovadoras están permeadas por una voluntad de extender el control social? ¿No resulta un poco maquiavélico afirmar que la decisiva participación del movimiento de mujeres en favor de medidas protectoras respondía predominantemente a un interés encubierto por ampliar su espacio de intervención en la escena social? Estos juicios de intenciones deberían ser demostrados más que supuestos.

No es una casualidad que haya sido una socióloga, Mabel Carter Rhoades, quien en el verano de 1905 comenzó a realizar en el Departamento de Sociología de Chicago una tesis titulada *A Case Study of Delinquent Boys in the Juvenile Court of Chicago*, en la que retoma las estadísticas oficiales acumuladas hasta entonces en el Tribunal, para centrarse en el estudio de 100 casos. La tesis de Mabel Carter (disponible en la red), prueba que los niños delincuentes no actúan por *depravación natural*, ni por odio contra las leyes, sino que son víctimas de una *tendencia desocializadora* íntimamente relacionada con la desestructuración familiar en la que crecieron y se desarrollaron. Mabel Carter Rhoades se movía por tanto en el estilo de abordar los problemas sociales que caracterizaba a las mujeres de Hull House. Jane Addams estaba vinculada desde los inicios de su proyecto reformador al Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. En este sentido la investigación realizada en 1912 por Sophonisba Breckenridge y Edith Abbot titulada *The Delinquent and the Home. A Study of the Delinquent Wards of the Juvenile Court of Chicago* seguía los mismos pasos iniciados por Mabel Carter, y también se realizó en el marco del Departamento de Sociología. Sophonisba y Edith

Abbot, abandonaron el Departamento en 1920 para fundar una Escuela de Trabajo Social. Fue en ese momento cuando los sociólogos varones comenzaron a interesarse especialmente por la cuestión de los *juvenile offenders* que estudiaron desde la perspectiva de la desorganización social abierta por Thomas, una perspectiva que por tanto no era nueva, y era compartida por Jane Addams y su equipo. El cambio de rumbo a la sociología y a la intervención social se produjo con la publicación del libro del médico Whilliam Healy, *The Individual Delinquent* en 1915. Healy formaba parte de un colectivo de psiquiatras progresistas, y desde 1909 dirigió el Instituto Psicopático Juvenil de Chicago. Tuvo una estrecha relación con G. Stanley Hall y también con Freud y el psicoanálisis. A su juicio, para explicar las conductas desviadas es preciso remontarse a los conflictos mentales que son sobre todo de naturaleza sexual. De hecho, tras publicar el libro sobre el individuo delincuente publicó otro libro titulado *Mental Conflicts and Misconduct*, en 1917. Healy consideraba que la mitad de los reclusos tenían serios problemas mentales, o al menos deficiencias, pero a la vez reclamó estudios multifactoriales de la delincuencia que sirvieran para poner en solfa las teorías lombrosianas sobre el criminal nato y la tesis de criminólogos europeos que conferían gran importancia en la etiología del delito a atavismos de origen genético. Healy fue uno de los promotores en USA de la psiquiatría infantil, y en lo que se refiere a la delincuencia juvenil era partidario de que los niños hicieran el relato de su propia historia, pues, en buena medida, asumía la tradición psicoanalítica de curación por la palabra.

En 1922 uno de los grandes sociólogos del Departamento de Sociología de Chicago, Ernest W. Burgess, publicó un artículo en el *American Journal of Sociology* titulado “El estudio del delincuente en tanto que persona”, un artículo que tuvo una gran importancia en la génesis de la sociología de la delincuencia juvenil pues retomaba la tradición psicológico-psiquiátrica impulsada por Healy, para poner a partir de ella de manifiesto la especificidad de la perspectiva sociológica. Para Burgess, la gran aportación de la psiquiatría y la psicología de la delincuencia, tal y como la puso en práctica Healy, fue abordar el problema del crimen a partir del estudio de casos, centrándose en los comportamientos individuales. Se rompía así con buena parte de las teorías criminológicas europeas que fueron objetivadas por Bernaldo de Quirós a quien Burgess cita en su artículo. En este sentido la sociología, tal y como él la concibe, no parte del individuo sino de la persona, es decir, de individuos con un determinado status social, status que puede variar en cada uno de los grupos en

los que se mueve en el interior de la sociedad. De este modo el delincuente lejos de nacer delincuente empieza siendo una persona como las demás. Hay que estudiar al delincuente juvenil como se estudia al campesino polaco. Como señala Burgess *el criminal es ante todo una persona, y únicamente después un criminal. Por consiguiente es bueno estudiarlo en primer lugar en tanto que persona, y después en tanto que transgresor de las leyes de una sociedad organizada*. Ruptura por tanto con la patologización de la delincuencia.

Burgess había presentado su tesis de sociología en Chicago sobre *La función de la socialización en la evolución social* en 1913, de modo que la familia y la escuela en tanto que instituciones privilegiadas de socialización van a desempeñar un importante papel en la conformación de determinadas conductas de las personas, pero también el barrio, la ciudad y más concretamente una ciudad como Chicago, atravesada toda ella por la desorganización social.

Burgess dirigió en los años veinte las tesis de jóvenes sociólogos como Clifford Shaw y Henry McKay, que se orientaron en dos direcciones: por una parte se interesaron por las autobiografías de jóvenes delincuentes. Así fue como Clifford Shaw publicó en 1931 la famosa historia de vida titulada *The Jackroller*. Pero Shaw y McKay también publicaron al año siguiente *Social Factors in Juvenile Delinquency*, un trabajo en el que establecían un mapa de la delincuencia juvenil en función de los diferentes barrios de la ciudad. El estudio fue importante, pues había una tendencia a identificar la delincuencia juvenil con determinados grupos étnicos procedentes de la emigración, supuesto que fue claramente rebatido por el estudio. Shaw y McKay mostraron que, mientras que los índices de delincuencia tienden a permanecer constantes en determinados barrios, esos mismos barrios conocieron importantes cambios y movimientos de población. Las relaciones de vecindad prevalecen por tanto sobre las relaciones étnicas y culturales. Las actividades delincuentes se inscriben en la especificidad de los barrios. Así surgieron los *Chicago Area Projects* (CAP) promovidos por Clifford Shaw en 1934, y destinados a la mejora de los equipamientos, y en general de las condiciones de vida de las clases y grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad. Shaw defendía una implicación de los propios actores sociales en los barrios, defendía un desarrollo comunitario, de modo que los CAP movilizaron a las distintas comunidades urbanas en el apoyo a los jóvenes a través de toda una serie de

asociaciones de barrios y de experiencias de democracia urbana. La sociología de la delincuencia juvenil surgía por tanto en el interior del marco más amplio de una sociología urbana y cualitativa, como respuesta a una demanda social de democratización heredera del reformismo social propio de la denominada era progresista. Por otra parte *la historia de vida de Stanley*, como señaló Howard Becker cuando escribió el prólogo para la reedición de esta obra en 1966, *nos permite comenzar a cuestionar la delincuencia desde el punto de vista del delincuente*. Por vez primera los delincuentes ejercían su derecho al uso de la palabra, a expresar sus vivencias y la propia interpretación de sus vidas. Esta nueva línea de reflexión condujo a los sociólogos a plantear la siguiente cuestión: ¿Desde qué punto de vista se contemplan las normas? ¿Quién define las normas? ¿En función de qué intereses?

### **ROBERT K. MERTON: ANOMIA Y CONDUCTA DESVIADA O LOS DESAJUSTES ENTRE MEDIOS Y FINES**

Robert King Merton fue uno de los grandes sociólogos norteamericanos del siglo XX. Su verdadero nombre de familia era Meyer Robert Schkolnick y nació en Filadelfia en 1910 en el seno de una familia de judíos rusos que emigraron a los Estados Unidos en 1904. Como él mismo expresó en una conferencia sobre su vida, *nació casi al final de la estructura social en un barrio pobre del sur de Filadelfia*. Su madre se sentía próxima al socialismo, y no era judía practicante, y su padre tuvo una tienda de alimentación y más tarde trabajó como ayudante de carpintería para el ejército en una situación un poco mejor desde el punto de vista económico. En todo caso, la infancia de Merton transcurrió con su familia en un barrio pobre en el que llevaban una vida de gran austeridad. El joven Meyer Robert fue un buen estudiante. Su madre lo introdujo en la biblioteca pública en la que disfrutaba con la lectura de biografías de personajes importantes. En su juventud se sintió fascinado por la magia en la que lo introdujo el compañero de su hermana. Se sirvió como pseudónimo en un primer momento del nombre de Merlín, pero lo cambió por el de Robert, en honor al mago francés Robert Houdin, y también por el de Merton. Adoptó permanentemente este nombre tras su paso brillante por la Temple University de Filadelfia, en donde comenzó su carrera sociológica orientada por George E. Simpson como tutor. Tras conocer a Pitirim Sorokin en un congreso

de la ASA se convirtió en su ayudante en Harvard, en donde permaneció entre 1931 y 1936. También fue discípulo de Talcott Parsons. En 1938 publicó su tesis sobre *Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII*, pero también en este mismo año publicó un artículo titulado “Estructura social y anomia” que tuvo un impacto enorme en las sociologías de la desviación, y que el propio Merton sometió en diferentes momentos a correcciones, y ampliaciones<sup>46</sup>.

Merton define la cultura como un conjunto organizado de valores normativos que orientan la conducta y que son comunes a los miembros de una sociedad o de un grupo social. Por otra parte, la estructura social tiende a organizar las relaciones sociales de los miembros de una sociedad y a proporcionar determinadas oportunidades. La anomia, la ausencia de normas, que Merton vincula con las conductas desviadas, se produce cuando se hace patente una disociación entre los fines culturales, entre los valores promovidos por una sociedad, y las capacidades que tienen los miembros de los diferentes grupos sociales para alcanzarlos. En muchas ocasiones los sujetos o grupos se desvían de las normas cuando no pueden alcanzar los objetivos deseables que les propone la sociedad, pues la propia sociedad no les proporciona los medios ni las oportunidades para obtenerlos. Merton distinguió cinco modos de acomodación de los sujetos a la sociedad. La *conformidad*, que se produce cuando medios y fines concuerdan con las normas y los valores establecidos por la sociedad. La *innovación*, un tipo de conducta que se produce cuando se aceptan los fines establecidos por la sociedad, pero esos fines sólo se pueden alcanzar por medios no conformes, lo que no quiere decir que esos medios sean siempre irregulares o ilegales. El *ritualismo* que se produce cuando se aceptan los medios, pero los sujetos o grupos se olvidan de los fines. Un ejemplo de ritualismo sería el comportamiento de los burócratas que se desinteresan del espíritu de la ley para quedar aprisionados en las rutinas establecidas. El *retraimiento*, caracterizado como intimista, narcisista, introvertido, que se produce cuando los sujetos o los grupos sienten y actúan al margen de los medios y de los fines que les propone la sociedad. Y otra versión alternativa al retraimiento, que es la *rebelión*, es decir la reacción expansiva contra las normas y los medios que proporciona la sociedad.

---

<sup>46</sup> R. MERTON, “Social structure and Anomie”, *American Sociological Review*, October, 1938, pp. 672-682.

Paradójicamente, la propuesta de Merton aproxima la delincuencia económica, el ámbito de los delitos de cuello blanco, a la delincuencia juvenil y a otras conductas consideradas irregulares. Las raíces del delito no se encuentran por tanto en la pobreza sino en la incapacidad de una sociedad para proporcionar a los pobres medios para salir de la pobreza. Siguiendo los pasos de Durkheim, la propuesta mertoniana considera normal la existencia de delitos y de conductas irregulares, pues a través de la sanción de las violaciones de las normas, éstas se hacen efectivas y se consolida el orden establecido.

Es evidente que Merton en sus años jóvenes compartió la vida en los barrios pobres, y él mismo, a través de su esposa, estuvo muy vinculado al trabajo social. Era consciente de que su trayectoria personal se asemejaba a la de los becarios, que a través de sus estudios consiguen un ascenso social. Era consciente también de que las oportunidades vitales no eran las mismas para todos. Su sociología se movía por tanto más allá de los sujetos individuales, se movía en un entorno progresista que asociaba la democracia con la igualdad de oportunidades y con facilitar a los sujetos y a los grupos sociales más desfavorecidos vías para la movilidad social ascendente, y para una mayor integración social.

Merton introdujo en su famoso artículo conceptos y categorías nuevas de pensamiento que permitían cuestionar la criminalización de los jóvenes delincuentes. Entre esas categorías se encontraba la de la *estructura diferencial de oportunidades*. En sociedades meritocráticas como la norteamericana, en donde impera el *self made man*, y a la vez en donde existe una enorme presión social para alcanzar *el sueño americano*, es decir, para instalarse en el éxito (identificado por la publicidad y los medios de comunicación con el dinero y los signos de riqueza y lujo), muchos sujetos integrados en grupos sociales desfavorecidos únicamente pueden responder a las demandas de éxito social por vías no conformes, pues la estructura social en la que viven insertos no les proporciona los medios para salir de situaciones muy duras de privaciones y dependencia. El análisis de Merton en parte venía a reforzar los CAP promovidos por Clifford Shaw, es decir, las distintas administraciones deberían promover un mayor equilibrio entre las aspiraciones promovidas por la sociedad y los medios que favorezcan la posibilidad de alcanzarlas. Conviene no olvidar que por la misma época E. Sutherland estableció su teoría sobre los delitos de cuello blanco, los delitos económicos de los

poderosos, que hasta entonces se habían mantenido prácticamente al margen del derecho penal, y que imperaba entonces entre los sociólogos reformadores el espíritu del *New Deal* que, durante la gran depresión, proporcionó un fuerte impulso al trabajo social y a la lucha contra las discriminaciones y la pobreza. Merton intentó objetivar las fuentes socio-culturales de la desviación. Muy pronto otros sociólogos profundizaron en la senda abierta por él, para adentrarse en el mundo de las llamadas subculturas juveniles.

Merton retomó de su maestro Talcott Parsons, y de la escuela culturalista norteamericana de antropología, muy influenciada por la obra de Malinowski, el interés por el funcionalismo. En cierto modo el delito es funcional al sistema pues a través de la reacción penal la sociedad mantiene vigentes las normas. Del mismo modo que la condena de los heresiarcas permite a las iglesias fijar la doctrina oficial y transmitirla a los fieles, el castigo de los transgresores de las leyes afianza las leyes. En todo caso las conductas llamadas desviadas, identificadas con el desorden, amenazan el orden social, se aproximan a los actos de rebelión.

Merton, en su concepción funcionalista de la sociedad, introdujo la distinción entre funciones explícitas y funciones latentes. Mientras que una función explícita o manifiesta es una función buscada y reconocida por todo el mundo, las funciones latentes son funciones que los interesados ignoran o no han elaborado. Por ejemplo asignar un número a un detenido tiene como función explícita controlarlo, pero a la vez la función latente es identificarlo tan sólo como el miembro del colectivo de presos, es decir, privarlo de su individualidad<sup>47</sup>. Para los funcionalistas el sistema social está formado por sub-sistemas como la familia, la escuela, o la delincuencia juvenil, ámbitos todos ellos que gozan de una autonomía relativa en el interior de la sociedad, lo que permite la creación de especialidades en el interior de la sociología. Pierre Bourdieu, por su parte, frente a la sensación de estabilidad que connota el concepto de sistema, proponía la *sociología de los campos*, en la medida en que estos ámbitos no están dados, tienen una génesis, un proceso de constitución del campo, pero a la vez son ámbitos jerarquizados de luchas, de

---

<sup>47</sup> Para una caracterización del funcionalismo, P. LAZARSFELD, *¿Qu'est-ce que la sociologie?* Gallimard, Paris, 1970, pp. 106 y ss. Paul Lazarsfeld señala que en esta distinción de Merton se produce un cierto paralelismo con los deseos conscientes y los deseos inconscientes de los que hablan los psicoanalistas.

enfrentamientos, terrenos en los que se codifica lo social y se definen las reglas de juego.

## **LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR, LA FORMACIÓN DE BANDAS Y LA SUBCULTURA DELINCUENTE**

En 1943 un joven economista, William Foote White publicó un libro destinado a convertirse en un estudio clásico de la sociología norteamericana: se titulaba *Street Corner Society*. Entre marzo de 1937 y el verano de 1940 White realizó un trabajo de observación participante formando parte de la pandilla de la calle Norton (en realidad la calle North Benett) del barrio italiano de Boston, el *Nord End*, que en su libro se denomina *Cornerville*. El libro fue por primera vez traducido al español en México con el título de *La sociedad de las esquinas*. Frente a las frías estadísticas e incluso frente a las historias de vida o los estudios de casos en los que las vidas se ven individualizadas, los jóvenes de la calle Norton aparecían ahora inmersos en el grupo de iguales convertido en una instancia importante de socialización en el barrio. A su lado había otros grupos, de chicos y chicas, y los vemos interactuar en los bailes, en los deportes, en la vida cotidiana de la pequeña ciudad. La observación participante, la inmersión con los agentes sociales en el mundo social que se desea estudiar (en el caso de White duró algo más de tres años), permite el acceso a una información contrastada, una información que, por utilizar términos goffmanianos, abandona *la fachada* para adentrarse en *la trastienda*, lo que nos permite acceder a la lógica social del campo de estudio.

En un postfacio que White escribió para la reedición de su libro en 1955, explica cómo construyó su objeto de investigación, la metodología empleada y las dificultades que tuvo que superar para llevar a buen término su trabajo. En él introduce una distinción importante que el propio Merton vivió muy de cerca: la distinción entre los *corner boys* y los *college boys*, los muchachos de la calle y los muchachos del colegio. Entre ambos existía una tensión plena de rivalidad. Unos malvivían ejerciendo trabajos menores como lavar coches o vender décimos para las loterías clandestinas, los otros se preparaban para entrar en la universidad y tener acceso a una carrera profesional. Desde el punto de vista político los primeros se identificaban más con el Partido Demócrata, mientras que los



segundos, más conservadores, se decantaban por el Partido Republicano. En las contiendas electorales los muchachos de la calle ganaban un dinero pegando carteles para los distintos candidatos.

En la segunda parte de su libro *White* nos muestra los lazos invisibles existentes entre los muchachos de la esquina y organizaciones mafiosas adultas. Aparece así, sin ser nombrada, la trayectoria profesional de algunos jóvenes de la esquina, una trayectoria en la que la educación formal, las instituciones educativas, en este caso por defecto, juegan un papel de primer orden.

La propuesta de White fue retomada en 1955 por Albert Cohen que la desarrolló y reelaboró en un libro titulado *Delinquent boys. The culture of the gang*, un libro que ha sido leído como un ataque directo contra Robert K. Merton y su teoría de la desviación. Para Cohen la delincuencia ha dejado de ser una disfunción para convertirse en un conflicto social, un enfrentamiento que pone de manifiesto relaciones de antagonismo en el seno de la sociedad.

En un estudio sobre las bandas publicado en 1927 por el sociólogo de Chicago F. M. Thrasher se ponía ya de manifiesto que los jóvenes, cuando salen de la infancia, buscan la creación de una sociedad paralela que se diferencie de la sociedad de los adultos. Los jóvenes de las bandas saben que no pueden ser absolutamente independientes de los adultos, pero quieren decidir sobre la sociedad en la que viven y gozar de autonomía. Para Cohen los valores que Merton presenta como característicos de la cultura norteamericana son sobre todo los valores de clase media, distantes de la cultura de las clases trabajadoras. Los chicos varones de estas clases solo tienen dos opciones: tratar de iniciar un duro camino de ascenso social a través de la educación, una opción muy minoritaria, o asociarse con sus colegas, y formar parte de la pandilla de la esquina. Lejos de admirar los valores de la clase media, estos jóvenes, socializados en la cultura de las clases bajas trabajadoras, se sienten constantemente frustrados en instituciones como la escuela en la que prevalecen los estándares de las clases medias, de modo que optan por repudiar los estándares dominantes y construir su propia subcultura de oposición. Así surge lo que Albert Cohen denomina *la subcultura delincuente*, una subcultura juvenil frente a los adultos en la que se elaboran criterios propios de status. Cuando los jóvenes de las bandas roban no lo hacen para obtener dinero, el

bien máspreciado de la cultura utilitarista norteamericana, sino para mantener una posición en el grupo, por diversión, y también para perpetuar la autonomía frente a los adultos. La existencia de subculturas delincuentes de clase media también es posible pero es mucho menos frecuente. La investigación de Cohen abre la vía a nuevos trabajos sobre la socialización de los jóvenes en la subcultura delincente, así como a comparaciones entre grupos de las diferentes clases sociales<sup>48</sup>.

Cohen confirió una gran importancia al fracaso escolar que golpea predominantemente a los hijos de las clases trabajadoras. Son los jóvenes provenientes de estas clases los que con frecuencia se sienten despreciados e ignorados, de modo que restringen sus aspiraciones, viven como sus padres, el día a día, no les interesan las reglas abstractas, sino una cultura material, frecuentemente asociada con los coches, las motos, la mecánica. Les interesan los deportes en los que la fuerza física es fundamental, así como los juegos de calle frente a los juegos pedagógicos o de casa de las clases medias, como el *monopoly*. El déficit de estatus que experimentan respecto de la cultura oficial, refuerza su desplazamiento hacia las subculturas delincuentes. Esta opción reafirma su propia identidad, ya que de otro modo tendrían que dejar de ser lo que se sienten ser, renunciar a su cultura de origen, para convertirse en jóvenes con aspiraciones y valores propios de las clases medias. Esa cultura, a la vez de autoafirmación y de oposición, se pone de manifiesto en los encuentros con los distintos representantes de la autoridad y más concretamente en los encuentros con la policía.

En el marco de la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham, el sociólogo Paul Willis mostró en un libro titulado *Aprendiendo a Trabajar*, cómo la cultura de oposición que los chicos provenientes de la clase obrera, conocidos como *los colegas*, construyen frente a los buenos estudiantes, *los pringados*. Willis nos habla en su libro de esa cultura de resistencia que entre otras cosas se caracteriza por el machismo, los gestos y comportamientos que alteran el ritmo de las clases, bromas pesadas, recurso a los tacos, al argot, a las actitudes desafiantes, en suma a la

---

<sup>48</sup> A. COHEN, *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1955. Véase también la reseña de W. BAILEY, *American Anthropologist*, 58, 1956, pp. 215-216.

indisciplina. A su juicio, a pesar de que los colegas son percibidos en los centros educativos como subversivos y a pesar de que con frecuencia son objeto de sanciones, expulsiones o confinados en clases de repetidores, en las que se acumulan los malos estudiantes, *el pelotón de los torpes*, sin embargo su cultura de resistencia era funcional al sistema pues permitía la reproducción social de la clase obrera. Los fracasados del sistema escolar recibían así un refuerzo social para convertirse en los futuros trabajadores de fábrica. La anticultura de la escuela se convertía en el antecedente de la cultura del taller. La resistencia a la escuela pasaba paradójicamente a formar parte del aprendizaje del trabajo manual. En este caso las funciones explícitas de la escuela una vez más servían para ocultar las funciones latentes<sup>49</sup>.

## DE LAS INSTITUCIONES TOTALES A LAS CARRERAS DELINCUENTES Y A LA ESTIGMATIZACIÓN DEL YO

En 1956 el joven sociólogo de origen canadiense, Erving Goffman, afincado en los USA, pues había realizado sus estudios en el Departamento de Sociología de Chicago, discutía en Princeton con un nutrido grupo de científicos sociales relevantes, con el patrocinio de la Fundación Josiah Macy, de Nueva York, los resultados de una investigación sobre las instituciones de resocialización, y más concretamente sobre los manicomios. Entre los asistentes al encuentro destacaban Margaret Mead y Gregory Bateson. En su intervención Goffman escandalizó a algunos de los científicos presentes. Sostenía que las instituciones totales son instituciones cerradas, jerarquizadas, autoritarias, antidemocráticas, separadas del mundo, en las que existe una *cultura de imposición* y en la que abundan las *ceremonias de degradación del yo* de los internos. De hecho en ellas se trata a los internos como residuos sociales. Goffman se refirió al *ciclo metabólico* de las instituciones totales, es decir, su capacidad para ingresar, tratar y secretar lo que Goffman llama *desechos*. De hecho Margaret Mead le reprochó el uso de esta expresión, así como la analogía del proceso metabólico con el tratamiento de seres humanos. Bateson por su parte propuso sustituir la expresión *generar desechos* por la expresión más neutra de *processing of the people*. Goffman, en todo caso, no se

---

<sup>49</sup> P. WILLIS, *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera*, Akal, Madrid, 1988.

arredró: *ciertas instituciones totales tienen la misión de almacenar gran cantidad de individuos y cambiarlos radicalmente*<sup>50</sup>.

¿Cómo se puede hablar de sociedades democráticas cuando el orden social está todo él plagado de instituciones piramidales que son verdaderos reductos del absolutismo? En el análisis de Goffman se podían aún escuchar los ecos de las propuestas a favor de reformas radicales por parte de la llamada nueva izquierda. De hecho un año antes, otro sociólogo norteamericano que se interesó por la delincuencia juvenil, Gresham Sykes había publicado un libro de sociología crítica sobre las prisiones de máxima seguridad en la que se refiere al modo de regulación de la prisión como un espacio de continua vigilancia, en la que el poder se concentra en las manos de unos pocos, en la que existe una sima de separación entre los internos y sus guardianes, en fin, en donde se dan todos los elementos para asegurar que se trata de lo que coloquialmente denominamos *un régimen totalitario*. Para Sykes el análisis específico del ejercicio del poder en las prisiones de máxima seguridad puede proyectar luz sobre cómo se ejerce el poder en la sociedad norteamericana<sup>51</sup>. Goffman, a partir de un trabajo de campo en una institución manicomial, también pretendía sacar a la luz la lógica de poder vigente en las instituciones totales. Aún más, Goffman completaba los análisis de Wright Mills sobre *la elite del poder*, formada en los USA por un puñado de políticos, capitalistas industriales y financieros, así como por una cúpula militar. Este selecto grupo de hombres poderosos, que se encuentran en clubs, restaurantes, actos oficiales, envían a sus hijos a los mismos colegios, y establecen entre si alianzas matrimoniales y círculos de calidad, se arrojan para si las grandes decisiones. En realidad tanto Goffman como Sykes iban más allá que Mills al encarnar el poder en la vida cotidiana, en toda una red intensa y extensa de instituciones totales que hacen posible lo que Michel Foucault denominó *la gubernamentalización del Estado*. Formando parte de estos archipiélagos cerrados de poder que son las instituciones totales, se encuentran los reformatorios, los centros de resocialización de menores delincuentes.

---

<sup>50</sup> Las intervenciones en el semanario han sido retomadas por Y. WINKIN, *Ervin Goffman. Los momentos y sus hombres. Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin*, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 107-128.

<sup>51</sup> G. SYKES, *The Society of captives. A study of a maximum security prison*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974 p. XIV.

*Internados*, el libro publicado por Goffman en 1961, precisamente el mismo año en el que se publicó la *Historia de la locura* de Michel Foucault, fue traducido al italiano por Franco y Franca Bassaglia y al francés por Robert Castel en 1968, prácticamente coincidiendo con el mayo francés. Bassaglia, que escribió *La institución negada* para poner de manifiesto su crítica de la lógica manicomial, coordinó también un libro en el que, entre otros participaron Foucault, Castel, y el propio Goffman, titulado *Los crímenes de la paz*. En términos generales se puede decir que lo que la sociología crítica estaba promoviendo era una percepción de la institución desde el punto de vista de los intereses de los internos. Goffman señaló en el encuentro organizado por la Fundación Macy lo siguiente: *yo he estudiado el hospital desde el punto de vista del enfermo, que constituye una parte bastante importante de la institución*. Por tanto, hay que estudiar su punto de vista. Una de las importantes características de estas instituciones es que los internos, que son ampliamente mayoritarios, están no sólo condenados al ostracismo y al silencio, sino que sufren constantemente en su cuerpo y en su mente lo que Goffman denominó *las ceremonias de degradación del yo*.

La finalidad explícita de los manicomios es curar a los enfermos y devolverlos a la sociedad, del mismo modo que los centros para menores delincuentes pretenden resocializar a los jóvenes para hacer de ellos buenos ciudadanos. Sin embargo, en ambos casos la institución total opera una separación rotunda con el mundo exterior y con la vida cotidiana de los que viven *extramuros*. ¿Cómo se puede preparar para reinsertar en la vida civil a sujetos que sufren lógicas institucionales que operan en plena oposición a la vida de los personas en régimen de libertad?

Con frecuencia se olvida que *Internados* es un libro que debe de ser leído como la otra cara desarrollada por Goffman en un libro anterior titulado *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. En este último libro, se analiza el orden de la interacción entre individuos en determinadas situaciones sociales. Goffman es sensible a las formas de hablar, a la presentación y representación de las jerarquías sociales en los encuentros, a algunas formas de transgresión, a los modos de presentación y representación del yo. A partir de la observación participante, y también a partir de páginas extraídas de novelas, nos muestra como somos mercaderes de nuestra identidad en nuestras sociedades, y como pasamos de la

tensión de una región anterior a la relajación de una región posterior, cuando nos movemos de situaciones formales muy codificadas y ritualizadas, a la zona de seguridad en la que se desarrolla nuestra vida privada. Sin embargo en las instituciones totales el yo personal debe ser sacrificado, en aras de un yo institucional que nos proporciona la institución cerrada desde el momento mismo en el que se produce el ingreso como interno.

Goffman introdujo en *Internados* un concepto de enorme interés para todos los análisis sociológicos que tienen que ver con las instituciones de resocialización, el concepto de *la carrera moral del enfermo mental*. Generalmente se entiende por *carrera* la trayectoria profesional de una persona. En esa trayectoria intervienen por tanto la posición social de partida y decisiones personales, inteligencia, motivación, capacidades adquiridas en los procesos de socialización, relaciones y también títulos, diplomas, certificados que conforman un *curriculum vitae* profesional. Una carrera profesional de éxito está jalonada de momentos felices en los que distintas instituciones certifican y avalan el éxito. Así ocurre por ejemplo con las carreras académicas más reconocidas que exigen títulos académicos, un buen expediente, certificados y avales para superar diversas pruebas, evaluaciones positivas que conducen a la promoción y a la excelencia. En el caso de la carrera moral del enfermo mental, de la llamada *carrera delincuente*, y de la propia carrera de los menores delincuentes, podríamos decir que se producen certificados al revés, notas negativas, informes, denuncias, castigos, evaluaciones, reconvencciones que, agrupados en los expedientes personales, proporcionan a los sujetos la imagen de marca del enfermo mental, del delincuente o del delincuente juvenil.

Los cambios en la carrera son cambios también en la identidad del yo, de modo que cuando esas carreras desviadas son oficializadas por las agencias oficiales el sujeto ve pegado a su piel el *estigma* de enfermo mental, peligroso para sí mismo y para los demás, del criminal o del menor que viola las leyes y, por tanto un delincuente juvenil. Carrera hacia la desviación y estigma de desviado constituyen las dos caras de una misma moneda que dan como resultado una *identidad social deteriorada*. Los *símbolos de prestigio*, escribe Goffman en otro de sus libros, *pueden contraponerse a los símbolos de estigma*. Sin duda tanto las carreras como los estigmas recaen sobre individuos, sujetos de carne y hueso. Sin embargo, los

análisis sociológicos muestran que los individuos, una vez lanzados a recorrer una trayectoria, pasan por circunstancias muy similares, con resultados también similares, de modo que los estigmas pasan a reflejar una condición social. *Las personas que tienen un estigma particular, escribe, tienden a pasar por las mismas experiencias de aprendizaje relativas a su condición y por las mismas modificaciones en la concepción del yo –una “carrera moral” similar que es, a la vez, causa y efecto del compromiso con una secuencia semejante de ajustes personales-*<sup>52</sup>.

### **La organización social de la justicia de menores**

En 1956, precisamente el mismo año en el que Erving Goffman presentaba en el seminario de la Fundación Macy las grandes líneas de su investigación basada en el trabajo de observación participante que realizó en el gran manicomio de Santa Isabel de Washington, el sociólogo norteamericano Harold Garfinkel publicaba un artículo en el *American Journal of Sociology* sobre las ceremonias de degradación de la identidad, que, en cierta medida, puede ser leído como un complemento a las propuestas que hizo Goffman en *Internados*<sup>53</sup>.

Todos los actores sociales tienen una identidad que está íntimamente ligada a su posición social, a las capacidades que desarrollaron en la vida privada y pública, pero también a su proceso de socialización, a los círculos en los que interactúan, a la valoración de su identidad que se juega constantemente en las interacciones y en la calidad de los círculos que frecuentan. Las instituciones sociales, con sus veredictos, adscripciones, decisiones, inciden para bien o para mal en la formación de las *identidades sociales* de los actores. Por ejemplo, señala Garfinkel, hay *ceremonias de investidura o de consagración* que pueden elevar de status, pero también *ceremonias de degradación* de la identidad social que provocan la pérdida de status. Garfinkel se ocupa en su artículo de estas últimas ceremonias y señala que *las ceremonias de degradación implican la alteración de las identidades*

---

<sup>52</sup> E. GOFFMAN, *Estigma. La identidad deteriorada*, Amorrortu, Buenos Aires, 1989, pp.58 y 45.

<sup>53</sup> H. GARFINKEL, “Conditions of Successful Degradation Ceremonies” *The American Journal of Sociology*, 51, marzo, 1956, pp. 420-424.

*sociales*. Aún más, la transformación de la identidad consiste en destruir un objeto social y construir otro completamente distinto. Así pues un actor, tras sufrir las ceremonias de degradación, se convierte en *otra persona*, adquiere una nueva identidad social, de modo que *la vieja identidad recibe, en el mejor de los casos, el estatuto de mera apariencia*.

En su artículo Garfinkel, que realizó estudios con Goffman, y que quizás sea el representante más reconocido de la etnometodología, puso de manifiesto cuales son las condiciones óptimas para que las ceremonias de degradación sean operativas y tengan éxito. Por ejemplo, en estas ceremonias se requiere el papel del *denunciante* o *denunciantes*, que son los encargados de poner de manifiesto que la persona que dice ser quien es, es en realidad otra muy diferente. El denunciante o denunciantes apelan a la *indignación moral* para poner en marcha la destrucción ritual de la persona en cuestión, de modo que se opera una remodelación absoluta de la percepción del otro, hasta el punto de que deja de ser quien era para convertirse en alguien diferente.

El manicomio, la cárcel, los tribunales de menores y otras instituciones, ponen constantemente en marcha ceremonias de degradación de la identidad de los acusados para convertirlos en enfermos mentales, criminales, delincuentes juveniles... Las nuevas identidades son tan reales como las que las precedían; abren para los sujetos nuevos escenarios de percepción y de acción porque se han elaborado nuevas representaciones de su identidad y de lo real en las que han intervenido familiares, profesionales, presuntas víctimas, vecinos y testigos, acusadores, en suma, ciudadanos en muchas ocasiones ejemplares, cargados todos ellos de indignación moral contra quienes transgreden las normas vigentes en el orden público porque su indignación opera al servicio de la perpetuación del orden instituido. La persona que es objeto de la ceremonia de degradación de su identidad se ve rodeada de actores sociales que participan de la indignación moral contra su forma de ser o sus conductas, sujetos que comparten sentimientos característicos y valores estructurados que los hacen coexistir socialmente en el interior de un universo social y cultural compartido. Todos ellos vienen a decir con sus palabras, con sus acciones, y también con sus silencios, lo siguiente: *Damos fe que este hombre, o esta mujer, este joven, o este viejo, este adulto o este niño o*



*niña, no son lo que parecen ser, sino que son en realidad y en esencia sujetos de la más baja especie, por lo que deben ser considerados personas reprobables.*

Los sujetos que sufren las ceremonias de degradación se aferran a su vieja identidad, pero en un marco social en el que esta les es sistemáticamente negada. La contradicción opera sistemáticamente en su contra. Se sienten así traicionados, ninguneados, sustituidos por un yo que no reconocen en sí, reduplicados por una identidad nueva que ellos mismos no han elegido y que rechazan. Dejan por tanto de ser lo que eran para convertirse en seres extraños a sí mismos, sujetos enajenados, alienados, extraños, definidos a través de una nueva imagen de marca que rechazan y que no sólo los convierte en extranjeros al orden de la interacción, sino también en seres que han perdido sus amarras con el pasado. Privados de calidad y de memoria, viven perdidos en un mundo hostil, en el que no encuentran asideros. La nueva identidad es más fuerte que ellos, porque la fuerza ilocucionaria de las agencias destinadas a proporcionársela, cuenta con suficientes mecanismos de poder y de prestigio como para imponerse sobre la voluntad de los sujetos afectados. Garfinkel no lo dice, pero las ceremonias de degradación de las identidades se producen y reproducen por mediación de la violencia institucional, y esta genera a su vez dolor y sufrimiento.

El análisis de Garfinkel conecta con las teorías de la *reacción social*, elaboradas entre otros por E. M. Lemert, en su libro *Social Pathology*, pero también con los análisis sobre la *atribución de status* elaborados, entre otros por John I. Kitsuse. En un artículo publicado en 1962, Kitsuse escribía: *Yo propongo desplazar el centro de la teoría y de la investigación de las manifestaciones de la conducta desviante a los procesos mediante los cuales una persona llega a ser definida como desviante respecto a los otros. Un desplazamiento de este tipo requiere que el sociólogo considere lo que generalmente presupone como dato, es decir, que ciertas formas de conducta son “de por sí” desviantes, y así son definidas por los miembros “conformes de un grupo”. Esta presuposición con frecuencia es discutida en el campo práctico cuando la reacción social ante conductas definidas desviantes por el sociólogo no existe, es vaga, o a lo sumo ligeramente desaprobadora (...) Al formular el problema de esta manera, el punto de vista de aquellos que interpretan y definen la conducta como desviante debe ser explícitamente incorporado en una definición sociológica de desviación social. Por lo tanto la desviación social puede*

*ser concebida como un proceso por el cual los miembros de un grupo, comunidad, o sociedad, 1) interpretan la conducta como desviante; 2) definen a las personas que se comportan así como un cierto tipo de desviantes; 3) les asignan el tratamiento que se considera apropiado para tales desviaciones*<sup>54</sup>.

La propuesta de Kitsuse fue retomada, en el caso de la delincuencia juvenil, por Aaron Cicourel, un sociólogo vinculado a la etnometodología, que trabajó a su vez en estrecha relación tanto con Kitsuse como con Garfinkel. Era preciso explicar cómo y por qué se producen los procesos para la atribución de status, a través de qué mecanismos se produce la asignación de identidades desviadas. El trabajo de Cicourel muestra cómo la policía, los educadores, los jueces de menores y también las propias teorías sociológicas concurren a la oficialización de las carreras delincuentes. *El delincuente, escribe, es un producto emergente, transformado en el tiempo por una serie de encuentros, de informes escritos y orales, de lecturas prospectivas y retrospectivas de “lo que pasó”, y de las circunstancias prácticas en las que sobreviene el caso durante el transcurso cotidiano de los casos judiciales*<sup>55</sup>.

Los sociólogos de la delincuencia juvenil han tendido a identificar a los delincuentes juveniles con aquellos jóvenes que han transgredido las leyes y se encuentran en libertad condicional bajo la vigilancia de un tutor, los que han pasado por los tribunales de menores, y los que se encuentran en un reformatorio o institución para niños y jóvenes delincuentes. Se considera que estos niños y jóvenes son una muestra representativa del conjunto de los jóvenes delincuentes de las diferentes clases sociales y de los distintos sexos. Sin embargo, a diferencia de los estudios sobre los profesores de enseñanza media o los estudiantes universitarios, o de un colectivo de electores, que son una población bien definida, a partir de la cual se puede extraer una muestra representativa, la presunta muestra de delincuentes juveniles no es significativa porque no sabemos bien quien conforma y en qué consiste ese conjunto de población heterogénea que acordamos integrar bajo la expresión de *delincuencia juvenil*. Por esto Aaron Cicourel propone abandonar esta ficción para considerar única y exclusivamente la delincuencia juvenil no tanto en

---

<sup>54</sup> J. KITSUSE, “Societal Reactions to Behavior. Problems of Theory and Method”, *Social Problems*, vol IX, nº 3, 1962, pp. 247-265.

<sup>55</sup> Citado por A. COULON, *La etnometodología*, Cátedra, Madrid, 1988, Pág. 113.

función de la infracción a la ley, cuanto en función de la definición institucional, es decir, por el hecho de estar en relación con diferentes instituciones y profesionales que las definen como tales. Los delincuentes juveniles no nacen. Se hacen, se deshacen, se rehacen, y se transforman en función de cómo son tratados por la policía, la justicia de menores o por el hecho de haber pasado por los reformatorios. La definición lógico-semántica sólo tiene sentido en tanto que definición ontológica, es decir, sociológica. Los delincuentes juveniles son definidos por tanto en función de las interacciones sociales que mantienen con las agencias oficiales. Sus actos no existen en abstracto, sino que se produce más bien una elaboración colectiva del sentido del acto, en la que intervienen las detenciones, los informes, la historia personal, las declaraciones recogidas y las valoraciones realizadas por distintos profesionales y agentes del orden, entre los que se encuentran los propios sociólogos, que con su definición de la delincuencia juvenil, proporcionan visos de realidad a un ente de razón. *Los informes, bien sean escritos u orales, escribe Cicourel, los interrogatorios, continuamente simplifican o redondean, y reinterpretan, el acontecimiento original, es decir, el acto, de modo que este se conforma al tipo de lógica utilizada por el personal judicial, formado en los códigos del derecho, un personal que está habituado a las narraciones rutinarias para explicar las relaciones entre las reglas legales y las conductas. Y añade: El pensamiento legal y la visión legal de la realidad social imponen una distancia a los rasgos contingentes de la vida cotidiana mediante transformaciones sucesivas que se extienden a lo largo de un determinado lapso de tiempo, que va desde que se produjo el acontecimiento original o el acto, hasta la decisión final del tribunal. El resultado preciso es la imagen clara y evidente del encadenamiento causal de “lo que verdaderamente aconteció”.*<sup>56</sup>

Aaron Cicourel indaga en las investigaciones e informes de jueces de menores, educadores, policías, para tratar de develar los mecanismos a través de los cuales estos agentes de la autoridad, que han recibido del Estado el mandato de designar y oficializar la delincuencia, reproducen con sus observaciones, acciones y designaciones el campo de la delincuencia juvenil, a la vez que hacen que el orden social instituido aparezca como legítimo, de modo que también se legitiman a sí mismos para seguir operando como agentes competentes en la materia. Esta

---

<sup>56</sup> Cf. A. CICOUREL, *The Social Organization of Juvenile Justice*, Transaction Publishers, New Jersey, 1967.

investigación de segundo orden le permite cuestionar las estadísticas oficiales, objetivar los conocimientos tácitos, las ideas recibidas, los estereotipos, las estrategias de indagación de los indagadores, rastrear los efectos prácticos de las decisiones de autoridad. Tras los datos objetivos, tras los informes escritos que acompañan a los sujetos a lo largo de sus vidas, están las estrategias de objetivación, con frecuencia estereotipadas, ritualizadas, rutinizadas.

A lo largo de su libro, Cicourel nos proporciona numerosos ejemplos de cómo operan las agencias oficializadas encargadas de atribuir a un sujeto la etiqueta de delincuente. Ahí está por ejemplo el caso de *Audry*, la joven negra de quince años de clase media, que robaba a sus compañeros de clase, y fue mantenida en observación en un clínica psiquiátrica durante casi tres meses, o el caso de *Linda*, una chica considerada incorregible en la escuela que se fue de casa con amigos del colegio, consumía whisky robado, y mantenía relaciones sexuales con los chicos del colegio. En este caso, los informes policiales no coinciden con los escolares. Como escribe Coulon, comentando el estudio de Cicourel, estos casos revelan, entre otras cosas, cómo el proceso de instrucción judicial está regido y elaborado por actividades socialmente organizadas para tratar casos de delincuencia. Los policías y los jueces, al igual que los demás miembros de la sociedad, hacen su trabajo con “prejuicios del subconsciente y normas de la estructura social” que les permiten decidir lo que es normal y lo que no lo es, distinguir un “buen chico” de un golfo, definir “el desafío a la autoridad” o lo que es una “buena familia”<sup>57</sup>.

## **LA TEORÍA DE “LA ACCIÓN RACIONAL” EN EL MARCO DE LAS SOCIEDADES NEOLIBERALES**

Los estudios norteamericanos de sociología crítica de la delincuencia juvenil y de sociología de la desviación social conectaron muy pronto con otras investigaciones, como las desarrolladas por los representantes de la sociología crítica europea, y también muy pronto estos análisis sociológicos sirvieron de puente para reforzar toda una serie de movimientos sociales de crítica de las instituciones en las que seres humanos se ven maniatados, silenciados, instrumentalizados. Democratizar la

---

<sup>57</sup> A. COULON, *La etnometodología*, Cátedra, Madrid, 1988, p. 113.

sociedad implicaba renunciar a las instituciones totales, suprimir los desequilibrios de poder, apostar en suma por sociedades diferentes, sociedades participativas en las que las fuertes desigualdades sociales quedasen al fin abolidas.

Los análisis críticos de los sociólogos pasaron en los años sesenta y setenta del siglo XX a formar parte de la contracultura. Se produjo entonces un cuestionamiento radical de las pautas culturales, y de los medios para realizarlas, y en su lugar surgía una utopía societaria, autogestionaria, arraigada en valores libertarios, antiautoritarios, en la que el pensamiento sociológico debería estar al servicio de la crítica institucional y de los mecanismos que nos impiden alcanzar altas cotas de libertad.

En este marco de cambio social radical, las enfermedades mentales, la criminalidad, los delitos de menores pasaban a aparecer como expresiones de una lógica perversa, la lógica propia del sistema capitalista. La llamada nueva izquierda, en alianza con la sociología crítica, prometía por tanto avanzar hacia una sociedad justa en la que al fin los seres humanos se reconciasen consigo mismos. Las diferentes formas de alienación estaban por tanto condenadas a la extinción.

Los etnometodólogos que trabajaron sobre cómo los consejeros escolares ejercen una importante influencia en las carreras escolares hacia el éxito o el fracaso escolar, pusieron de manifiesto que *a algunos estudiantes la sociedad y la escuela se les presentan como una estructura abierta en la que pueden elegir lo que quieren y actuar efectivamente para conseguir su objetivo. A otros se les presentan como una estructura cerrada en la que los individuos no eligen por sí mismos y donde hay muchos obstáculos que flanquear. Según la actitud que decidan adoptar los consejeros, los estudiantes viven sus consejos como ánimos o como restricciones*<sup>58</sup>. Al presentar sus conclusiones, los etnometodólogos no pretendían estigmatizar a los educadores, sino más bien romper lógicas desconocidas y diferenciadas de asesoramiento que, a partir de orígenes sociales diferentes de los estudiantes, y más concretamente a partir de orígenes raciales diferentes, marcaban destinos académicos diferentes, y contribuían así a reproducir las desigualdades escolares de partida.

---

<sup>58</sup> Cf. el estudio realizado por F. Erikson citado por COULON, Alain, *La etnometodología*, op. c. pp. 106 y ss.

En 1968, Harold Garfinkel publicó en forma de libro toda una serie de trabajos agrupados bajo el título de *Studies in Ethnomethodology*. El mismo año, Aaron Cicourel daba a la luz su libro sobre la delincuencia juvenil. Al año siguiente un conocido sociólogo especialmente interesado en el estudio de la juventud y de la educación, James S. Coleman, publicaba una corrosiva reseña del libro de Garfinkel en la que entre otras cosas escribía: *Una vez más Garfinkel elabora hasta la saciedad aspectos que son hasta tal extremo lugares comunes que parecerían banales si estuviesen formulados en un inglés claro. Pero, tal y como está escrito el libro, hace falta emplear en su lectura tal cantidad de tiempo para que la información se transmita, que a un lector poco avisado no le parece una banalidad. Y también: (Garfinkel) combina las rigideces de la mayoría de los técnicos de orientación matemática con las confusiones y errores de los técnicos blandos, y carece de los principios o de la competencia técnica de una sociología creativa y madura*<sup>59</sup>. Coleman era un ingeniero químico que se había formado en sociología en Columbia con Robert Merton y Paul Lazarsfeld. De hecho era un sociólogo con prestigio, pues había publicado en 1966 un importante informe titulado *Igualdad y oportunidades educativas*. Era también un abanderado de los estudios cuantitativos, del recurso a las matemáticas para refundar las ciencias sociales, pero fue sobre todo reconocido por ser uno de los principales promotores en sociología de la *teoría de la elección racional*.

La teoría de la elección racional se basa en el prototipo del *homo oeconomicus* que se rige por el interés y el cálculo. Los seres humanos somos por tanto actores racionales que tratamos de maximizar, a través de nuestras acciones, la satisfacción de necesidades y deseos. A diferencia de los diagnósticos avanzados por buena parte de los sociólogos críticos, sobre esos sujetos que van dando tumbos por la vida y desarrollan carreras delincuentes por las que todo les está permitido, de modo que nadie les pide seriamente que rindan cuentas.

Frente a sujetos en flotación, sujetos con derivas marginales de las que no se sienten responsables, pues siempre se culpa a familias rotas, educadores clasistas, policías o jueces convertidos en agentes de la ley y el orden; la teoría de la acción

---

<sup>59</sup> J. COLEMAN, "Review of Harold Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology*", *American Sociological Review*, 33, 1968, pp. 126-130. Seguimos el comentario realizado por RITZER, George, *Teoría sociológica moderna*, McGraw Hill, Madrid, 2001, pp. 92-93.

racional asume el *individualismo metodológico* y responsabiliza a los actores individuales de sus acciones, acertadas o equivocadas, respetuosas con las normas o transgresoras. En el interior de un abanico de posibilidades, los actores eligen de forma calculada sus acciones en función de sus intereses, y son por tanto responsables ante sí mismos y ante los demás de sus actos, y por tanto también de las consecuencias que se derivan de sus actos.

El ataque de Coleman contra la etnometodología sirvió como pistoletazo de salida para toda una serie de debates más bien agrios, que se produjeron durante los años setenta en el marco de la llamada sociología de la desviación. Las voces más autorizadas en este debate fueron Alvin Gouldner, que publicó en 1970 un libro de impacto, *La crisis de la sociología occidental*, y en 1975 Lewis Coser, entonces presidente de la Asociación Americana de Sociología quien, en la *Presidential Address* arremetió contra las sociologías rutinarias, burocráticas, centradas en el sube y baja de las estadísticas, pero también contra las alambicadas disquisiciones de los etnometodólogos convertidos en una especie de secta esotérica. Gouldner reprochaba a Goffman, y en general a los interaccionistas, contemplar el mundo desde las interacciones, los encuentros sociales, las relaciones cara a cara, al margen de la historia y de las clases sociales. Por su parte, Lewis Coser reprochaba a los cuantitativistas, a los fundamentalistas de la estadística, que olvidasen que *la medida no es más que un medio de análisis y de explicación*, mientras que en relación con los etnometodólogos, cuestionaba que ignorasen los factores institucionales y la centralización del poder en la interacción social, y se limitasen a la descripción de las formas por medio de las cuales actores individuales dan cuenta de sus acciones. A su juicio, rodea a la etnometodología *una orgía de subjetivismo*. Centrados en la descripción de los contenidos manifiestos de las experiencias de la gente, se olvidan de las estructuras latentes<sup>60</sup>.

Uno de los sociólogos interaccionistas encargados de responder tanto a los sociólogos de izquierdas como de derechas, fue Howard Becker. Frente a los conservadores, que tienden a responsabilizar única y exclusivamente a los sujetos desviados de sus actos, aceptan las estadísticas oficiales y las versiones oficiales de los hechos, el autor de *Outsiders* sostiene que las llamadas conductas desviadas,

---

<sup>60</sup> Cf. A. GOULDNER, *La crisis de la sociología occidental*, Amorrortu, Buenos Aires, 1973, pp. 347 y ss. Véase también Lewis COSER, "Presidential Address. Two Methods in Search of a Substance", *American Sociological Review*, 40, 6, diciembre 1975, pp. 691-700.

*para que ocurran de la manera que ocurren, requieren la cooperación tácita o explícita de muchas personas o grupos.* Al analizar los sociólogos interaccionistas las denominadas conductas desviadas en el interior de las situaciones sociales, el presunto sujeto transgresor era contemplado en una densa malla de relaciones sociales, lo que entre otras cosas servía *para poner en duda las teorías que buscan el origen de la actividad desviada en la psicología individual.* También respondía a los críticos de izquierdas. Alvin Gouldner por ejemplo, defendía que los interaccionistas pusieron en el punto de mira de la crítica a los funcionarios de menor rango para así proteger mejor a *los altos funcionarios responsables de la opresión.* Sin embargo para Becker los interaccionistas, al insistir en que *debemos observar a todos los involucrados en cualquier episodio de presunta desviación,* lo que hacen en realidad es plantear las siguientes preguntas: ¿quién define las reglas, por qué, y en beneficio de quién? *Cuando estudiamos el modo en que los cruzados morales hacen las reglas, y como las aplican en cada caso en particular los encargados de hacerlas cumplir,* escribe Becker, *estamos estudiando el modo en que los poderosos conservan su lugar. Para decirlo de otra manera, estudiamos algunas formas de la opresión, y los medios por los cuales la opresión alcanza el estatus de algo “normal”, “cotidiano”, y legítimo.* Las consecuencias políticas, por tanto, que se derivan de los análisis interaccionistas, tal y como los practican Howard Becker y sus colegas, son enormes, como el propio sociólogo señaló más adelante: *Al transformar a los cruzados de la moral (así como a aquellos que buscan el control) en objetos de su estudio, el análisis interaccionista socava la jerarquía de credibilidad de la sociedad convencional*<sup>61</sup>. A diferencia de sociólogos que se reclamaban del marxismo o del radicalismo, que consideraban banales los estudios sobre la desviación social, o sobre otras instituciones sociales, pues se distanciaban de la cuestión central que para ellos radica en la existencia del capitalismo, el imperialismo y la dominación de clase, la propuesta de sociología crítica de Howard Becker equivaldría en realidad a una sociología de los campos. En este sentido, su propuesta se asemeja a la que durante años mantuvo Pierre Bourdieu en el Centro de Sociología Europea. De este modo, del mismo modo que se estudian las llamadas conductas delincuentes, se podrían examinar y conseguir avances en la objetivación de *otros campos de estudio de la sociología, como las*

---

<sup>61</sup> Cf. H. BECKER, “Revisión de la teoría del etiquetado”, en: *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009, pp. 222 y 224. Este texto fue presentado en abril de 1971 en la Asociación Británica de Sociología, y recogido en la versión ampliada de *Outsiders*.



*instituciones educativas, los servicios de salud, el ejército, la industria y los negocios. En todos estos espacios de poder, la sociología crítica serviría para clarificar el accionar de las personas y las instituciones, influyendo así en la evaluación moral que hacemos de ellas*<sup>62</sup>.

Los debates sobre la desviación en los años setenta, se vieron desbordados a partir de los años noventa por la marejada neoliberal. Se produjo entonces una especie de santa alianza entre los sociólogos del *rational choice* y los economistas neoliberales, a la que concurrieron los neoconservadores, llamados también *comunitaristas*. En la base de sus propuestas, se encontraba el *homo oeconomicus* de la escuela marginalista austríaca, y sobre todo Friedrich Hayek. Todos ellos eran defensores de una concepción empresarial de la sociedad civil, vinculada al mercado, frente a las rigideces y las burocracias estatales. Unánimemente condenaban las políticas del Welfare State.

De nuevo Chicago tomaba el relevo, pero ahora no desde el Departamento de Sociología, sino desde el Departamento de Economía en el que participaban junto con Hayek, economistas como Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976 y Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992. Friedman visitó Chile un año antes de obtener el tanpreciado Premio Nobel, acompañado de Arnold C. Harberger, precisamente en los inicios de la dictadura del General Pinochet. Allí defendió sus conocidas ideas de que en una sociedad libre se podía y debía privatizar la previsión social. Su presencia validó a los “Chicago Boys”, comandados por Sergio De Castro y Jorge Cauas, a la sazón ministros de Economía y Hacienda respectivamente, quienes habían convencido a Pinochet para imponer una política de *shock*, cuyos enormes costes incrementaron el terrible y despiadado trabajo de la DINA y otros organismos represivos. La imposición del ajuste monetarista derrotó a la inflación y transformó a los Chicago Boys en amos absolutos de la conducción económica, en tanto que la visita de Friedman y Harberger, sirvió a la junta militar para proclamar lo correcto de su rumbo y comprometer a una nueva generación de discípulos para seguir a los maestros hasta Chicago<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Cf. H. BECKER, “Revisión de la teoría del etiquetado”, en: *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*, óp. cit. Pág. 225.

<sup>63</sup> Una comisión de economistas chilenos egresados de la Universidad de Chicago elaboró, por encargo de la asociación de industriales, SOFOFA, en 1973, un plan económico alternativo conocido posteriormente como “El ladrillo”, en los últimos meses de vida del gobierno popular. El

El proyecto neoliberal desbancaba con mucho un proyecto meramente económico centrado en la libre competencia. Era, a la vez un proyecto de sociedad alentado por las viejas ideas de Popper y Hayek, en las que la sociología no tiene cabida, más que como un apéndice del individuo que se hace a sí mismo. Esta alianza entre el capitalismo neoliberal y la acción racional, queda bien reflejada en torno a dos nombres emblemáticos: el sociólogo James S. Coleman y el economista y gran defensor de las estrategias familiares, Gary Becker. La familia tradicional, al estilo de la defendida por los *Guardianes de la promesa*, en la que los padres han vuelto a asumir el papel de autoridad en el seno de la familia que les atribuye la Biblia y las madres regresan a los hogares para dedicarse por entero a la crianza de los hijos, pasaba a convertirse en la institución matriz del mantenimiento del orden comunitario. En este sentido, James S. Coleman desarrolló entre el individuo y la comunidad el concepto operativo y mediador de *capital social*. Para aderezar su propuesta, retomaron por tanto viejos esquemas morales destinados a salvaguardar la ley y el orden. La sociedad civil y el mercado desbancaban al viejo estado social. En el ámbito de la sociología del delito declararon obsoletas las viejas teorías sintetizadas en la expresión, *el welfarismo penal*, y redujeron toda la amplia gama de sujetos delincuentes a dos tipos ideales: psicópatas y calculadores transgresores. Los primeros deben de ser encerrados en manicomios especiales, de modo que la sociedad quede protegida de los *serial killers* y otros individuos peligrosos con trastornos graves de personalidad. Los segundos, calculadores

---

grupo estaba integrado por allegados al Partido Nacional, la Universidad Católica y el gremialismo y la presidía Sergio de Castro, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. De Castro había sido becado a la Universidad de Chicago en 1955. Pese a todo lo que se ha dicho después, no se inspiraba tanto en Milton Friedman, quien creía poder llevar a cabo sus propuestas en una “sociedad libre”, sino en su maestro y amigo Larry Sjastaad, cuya inflexibilidad era reconocida en Chicago. Cf. A. CAVALLO, M. SALAZAR y O. SEPULVEDA, *La Historia Oculta del Régimen Militar. Chile 1973-1988*, Editorial Grijalbo Mondadori, 1997. La historiadora Sofía Correa, ha demostrado que el programa económico de Jorge Alessandri, abanderado de la derecha y presidente de Chile entre 1958 y 1964, estaba influenciado por las recetas monetaristas, conocidas en ese entonces en virtud de un convenio que la Facultad de Economía de la Universidad Católica había suscrito con la Universidad de Chicago, que posibilitó la visita al país de Arnold C. Harberger, de quien De Castro llegaría a ser amigo. El gobierno de Alessandri no tuvo éxito en el plano económico debido a que, según los discípulos de la Escuela de Chicago, no se habían aplicado sus recetas con voluntad decidida y de manera integral. Cf. S. CORREA, *Con las riendas del Poder. La derecha chilena en el siglo XX*, Random House Mondadori, Edición de Bolsillo, marzo de 2011.

inmorales, conscientes, responsables de sus delitos, deben ser reprimidos con fuerza de modo que su sanción resulte ejemplar<sup>64</sup>.

Sabemos lo que dio de sí el auge neoliberal que se vio truncado por el crash del 2008. Pero, quizás no seamos suficientemente conscientes de que en el ámbito de la desviación social presentaban un nuevo modelo: el modelo denominado de la *tolerancia cero*, que abarrotó las cárceles norteamericanas de presos comunes de origen popular. En el ámbito teórico, primó la *teoría de la acción racional*, que marcó de nuevo en profundidad las políticas destinadas a los delincuentes juveniles.

El punto de partida de la ofensiva neoliberal no surgió en los años ochenta y noventa, sino en los años 60 y más concretamente en 1968, cuando Gary Becker publicó en el *Journal of Political Economy* un artículo que, durante las décadas neoliberales, fue enormemente influyente y que suponía directamente un ataque contra la sociología crítica. El actor de la acción racional es el individuo calculador que vela por sus intereses, sopesa los pros y los contras, y actúa en consecuencia. El artículo se titula “Crimen y castigo: una aproximación económica”. Se podría decir que este texto adquirió a partir de los años ochenta un carácter ejemplar. En todo caso, el recurso a la racionalidad económica para abordar los procesos de desviación supuso un fuerte golpe y a la vez un desplazamiento de los programas puestos en marcha para el tratamiento de los menores delincuentes. Como señaló el sociólogo francés Gérard Mauger, *las teorías accionistas aparecen como un arma de combate, más política que científica, contra las teorías clásicas, en la medida en que implican consecuencias políticas diametralmente opuestas*<sup>65</sup>. La lucha contra la pobreza, la remodelación y equipamiento de los barrios marginales, la promoción de centros educativos que valoren e impulsen la pasión por el conocimiento de los jóvenes de las clases desfavorecidas, quedan al margen de las nuevas políticas penales que se sintetizan en agravar las sanciones para disuadir a los presuntos

---

<sup>64</sup> Sobre la retórica neoliberal y las apuestas de algunos sociólogos, véase F. ALVAREZ-URIA, “Retórica neoliberal. La gran ofensiva de los científicos sociales contra las políticas sociales en USA”, *Claves de la razón práctica*, nº 80, 1998, pp. 20-28. Sobre la impugnación a la totalidad de la sociología y la criminología críticas cf. C. SUMNER, *The Sociology of Deviance: an Obituary*, Open University Press, Buckingham, 1994.

<sup>65</sup> G. MAUGER, *La sociologie de la délinquance juvénile*, la Découverte, Paris, 2009, Pág. 35.

delinquentes y en afinar y profundizar los controles para reducir las oportunidades de delinquir.

Las teorías del control social, que habían ocupado un lugar secundario en los años 60, pasaron a un lugar visible en el desierto teórico característico de los años 90. Travis Hirschi había planteado una teoría del control basada en la elección racional en 1969. En *Causas de la delincuencia*, defendió la idea de que la debilidad de los lazos sociales podría generar un individuo disponible para sopesar los beneficios de la delincuencia. Según esta teoría, todos estamos sometidos a presiones para que nos conduzcamos de manera conforme con las normas sociales. Si desarrollamos vínculos fuertes con la sociedad, no delinquiremos. Se supone que mejorando el *arraigo social* de los jóvenes: apego a los padres, compromiso con valores pro-sociales, participación en actividades pro-sociales y fortalecimiento de las creencias morales, se logrará una reducción de su comportamiento delictivo. En 1990, Hirschi publicó junto con Michael Gottfredson, *Teoría General del Delito*, donde se propone ahora que es el autocontrol, en lugar del control social, el responsable de la diferencia entre la conducta conforme y la delincuencia. En la motivación de los delinquentes se darían simultáneamente una orientación a la gratificación inmediata y un autocontrol bajo, unido a la existencia de oportunidades para delinquir. La idea de que el refuerzo continuado de los vínculos sociales aleja a las personas de la delincuencia es descartada en favor de la idea de que es el autocontrol, interiorizado a edades tempranas, el que determina si pueden resistir al crimen y a aquellas otras conductas que ofrecen gratificaciones inmediatas<sup>66</sup>. Las teorías del control invierten el enfoque tradicional de investigación sobre las causas, afirmando que no es importante saber por qué las personas delinquen, sino que es preferible averiguar por qué no lo hacen. Así, apostando a un enfoque individual, esta teoría se evita el incómodo deber de prestar atención a asuntos como las crecientes desigualdades e inequidades sociales o las tendencias a la precarización social y al desarraigo, que ocupan un lugar central en la dinámica del aún prestigiado modelo neoliberal, al menos en el caso chileno.

Como es sabido, las ciencias sociales después del golpe fueron duramente perseguidas en Chile. Entre otros esfuerzos, la Iglesia Católica, liderada por el Cardenal Silva Henríquez fundó la Academia de Humanismo Cristiano en 1975,

---

<sup>66</sup> Cf. C. VASQUEZ “Teorías criminológicas sobre delincuencia juvenil”, *Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas*, Colex, Madrid, 2003. Págs. 30 – 33.

centro que emergía como espacio crítico y lugar de refugio de profesores e intelectuales, en un marco de libertad y pluralismo. A partir de la Academia surgieron otros centros de estudios, a los que se sumaron iniciativas impulsadas por ONG's y organizaciones políticas, que junto a centros que sobrevivieron a la represión, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, creada en Santiago de Chile en 1957 por iniciativa de la UNESCO y otros gobiernos regionales; contribuyeron en alguna medida a paliar el oscurantismo que se había adueñado de las reabiertas Facultades de Ciencias Sociales en las universidades intervenidas por los rectores delegados. Pero, los esfuerzos investigativos en los años 70 estuvieron lejanos a las temáticas juveniles, privilegiándose otros ámbitos considerados más urgentes.

En compensación, los jóvenes constituyeron un tema de investigación primordial para la sociología chilena en las décadas de los 80 y 90. Esta preocupación tuvo como objeto una "otra juventud", la juventud popular, ausente como tal en los años 60 y 70. Esta atención en los estudios sobre jóvenes sirvió como vehículo de formación inicial de nuevas generaciones de investigadores sociales<sup>67</sup>. La juventud de los sectores populares había surgido en los años 80 como un actor social nuevo, portando una demanda de integración social desde coordenadas sociales y territoriales situadas en los márgenes. Los jóvenes populares combinaron su irrupción social por la vía de la masificación de la educación media, con su debut simbólico como "guerreros de las barricadas" en las denominadas "jornadas de protesta nacional" contra la dictadura militar, encarnando un deseo de retorno a la democracia y de reocupación de la ciudad, pero también inspirando miedos y resquemores<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Cf. G. SALAZAR, "Investigadores jóvenes de los 60 e investigadores jóvenes de los 90: ¿a dónde va la diferencia?", *Revista Propositiones* N° 27, ediciones SUR, octubre de 1996.

<sup>68</sup> La participación masiva y protagónica de la juventud popular generó dos lecturas sociológicas enfrentadas. Una visión interpretó la "rebelión de los jóvenes", como una peligrosa manifestación de identidad de jóvenes que no estaban integrados por la educación ni el trabajo y que manifestaban una orientación a la acción regida por fines individualistas, ligados a una disolución de normas y valores fundamentales. Las "adaptaciones anómicas" de los adolescentes eran básicamente dos: un tipo de resistencia pasiva o retraimiento, ejemplificado por el consumo de drogas, y una revuelta contra la sociedad organizada y sus expresiones territoriales. El autor de "La Rebelión de los Jóvenes", Eduardo Valenzuela señalaba: "el reclamo fundamental que subyace a la movilización juvenil es finalmente la necesidad de integración cultural, que antecede y a veces se

El temor se instaló como el sentimiento dominante a fines de los 80 y en el marco de las restricciones del proceso de transición, los jóvenes fueron caracterizados como sujetos carentes y vulnerables y, por lo mismo, riesgosos o peligrosos, construcción discursiva que lastró las políticas públicas sectoriales implementadas por los gobiernos de la Concertación desde los años 90 en adelante. La idea de que las “conductas problema” de los jóvenes (drogadicción, delincuencia, embarazo adolescente) tenían un correlato en experiencias de *daño* psicosocial, inscritas a fuego en sus biografías, encarnó claramente esa visión<sup>69</sup>. La “generación dañada” era considerada acreedora de una deuda social contraída durante los años de dictadura, costo que se traducía en una serie de accidentes en la biografía de los sujetos, que les impedía desarrollar un proyecto de vida convencional. Esta concepción ha tenido influencia hasta el día de hoy y contribuyó a fundar el abordaje *psicosocial*, aun dominante en la formulación de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes que, por su parte, se ha integrado muy bien con las perspectivas del *riesgo*, también dominantes, y con los postulados de la *tolerancia cero*, cuya razón de ser son las necesidades de control instaladas por la implantación del modelo económico neoliberal, aun hegemónico. La idea de daño reforzó la caracterización de los jóvenes como “otros”, como un grupo social ajeno, extranjero respecto de las reglas de convivencia de la sociedad en regla. El discurso adoptado, de la tolerancia cero sobre el delincuente juvenil, como un individuo que persigue fines racionales, terminó con todo residuo “social” implícito en la idea de “daño psicosocial”. Al mismo tiempo, la asociación con la violencia, hacia otros o en contra de sí mismos, apoyaba el futuro enfoque de toda la población juvenil como grupo *en riesgo*, característico de los años 2000. Durante el resto de la década de

---

*contrapone, con la lógica del pacto o contrato democrático*”. CF. E. VALENZUELA, *La Rebelión de los Jóvenes*, Ediciones Sur, Santiago, 1984. Otra visión, minoritaria, puso el acento en la identidad juvenil, en “ser joven popular”, si bien como sujeto parcial. En contraste con la particular interpretación en torno a la anomia de Valenzuela, esta visión enfatizó los procesos de búsqueda de identidad por parte de los jóvenes, a través de la lucha por lograr espacios de autonomía. Producto de ello, se habría generado una cierta “cultura juvenil”, entendida en cuanto prácticas juveniles y modos de dar significado a dichas prácticas. CF. I. AGURTO y G. de LA MAZA, “Ser joven en Chile hoy”, en: *Juventud Chilena, Razones y Subversiones*, ECO-FOLICO y SEPADE, Santiago, 1985, Pág. 57-71.

<sup>69</sup> J. WEINSTEIN, R. AGUIRRE y A. TELLEZ, “Los jóvenes dañados: una revisión de las conductas problema en la juventud popular”, en: *Los Jóvenes en Chile Hoy*, CIDE-CIEPLAN-INCH-PSI-SUR, Santiago, 1990

los 90, sólo existieron esfuerzos aislados por considerar las “conductas problema” desde otras perspectivas sociológicas, situación que se repitió en los años 2000, con apenas un solitario e ignorado estudio sobre la delincuencia de menores<sup>70</sup>.

La retórica neoliberal ha creado un nuevo concepto que sirve para designar a toda una serie de sujetos sin atributos que comparten una cierta anomia social: *los underclass*. Para los neoliberales, estos sujetos carecen de valores y de moralidad, carecen de capital humano y capital social, y constituyen una amenaza para las relaciones comunitarias. En cierto modo, *los underclass* comparten los estigmas que en el siglo XIX la burguesía atribuía a las clases peligrosas. En función de la economía del delito, puede resultar económico mantener ghettos urbanos, en donde se acumula el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, a la vez que se refuerzan las medidas de vigilancia y seguridad privadas en determinadas urbanizaciones y ciudades-jardín. Las nuevas tecnologías, desde las cámaras y pulseras hasta las escuchas y otros sistemas sofisticados de control remoto, sirven a su vez para establecer cordones de seguridad. La lógica neoliberal, que ha disparado en nuestras sociedades las desigualdades sociales, no pretende combatir la desorganización social, no intenta luchar por una sociedad integrada, más justa y democrática, su objetivo es neutralizar la peligrosidad, para lo que puede resultar útil acondicionar espacios para los que se encuentran al margen de los intercambios propios del mercado capitalista. Se crea así una sociedad que funciona a varias velocidades, una especie de sociedad estamental que recuerda más a las sociedades del Antiguo Régimen que a las sociedades que aspiran a hacer efectivos los valores democráticos. La fragmentación, las diferencias de estatus y de estilos de vida, prevalecen sobre la voluntad democrática de ciudadanía para todos.

Los modos de abordar la cuestión de la delincuencia juvenil por los sociólogos norteamericanos ha pasado por tanto de un esfuerzo por democratizar la ciudad,

---

<sup>70</sup> La fuerza del estudio radica en que rescata el discurso de los menores y hace uso de un marco de interpretación netamente sociológico en torno a teorías clásicas. Sus limitaciones son el recurso más a teorías explicativas de la delincuencia adulta que de menores y una no resuelta tensión entre un enfoque relativista y uno miserabilista: pretendiendo considerar la delincuencia juvenil como una contracultura redistributiva, la explica como un tipo de cultura de la pobreza. Cf. D. COOPER, *Delincuencia y Desviación Juvenil*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005.

esfuerzo común a sociólogos y trabajadores sociales pioneros de la reforma social en la ciudad de Chicago, a la fragmentación y secuenciación de sujetos y colectivos operada por el mercado en el capitalismo financiero.

El futuro parece incierto. Para hacer frente a los retos del futuro, los sociólogos interesados por el mundo de los delitos de los menores no podemos olvidar abordar los problemas en el marco de la historia. Tampoco podemos prescindir del marco en el que nos movemos, un sistema de capitalismo avanzado. La sociología, una vez más, debe responder a las demandas de clarificación que nos plantean los ciudadanos demócratas en nuestras sociedades. Es preciso, como nos proponía Norbert Elias, combinar el acercamiento con la distancia para la construcción de nuestro objeto de conocimiento. En fin, es preciso no renunciar a la rica tradición de la sociología crítica que nos proporciona conceptos, categorías y una sensibilidad sociológica, condiciones todas ellas indispensables para que la imaginación sociológica pueda surgir y proyectar luz en la oscuridad, es decir, hacer visible lo invisible.





## CAPITULO 3

### LA CONSTITUCIÓN DEL CAMPO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL

---

La justicia penal de adolescentes surgió del impulso reformista de un pequeño grupo de juristas que trabajaban en contacto con otros profesionales del tratamiento de los “menores en situación irregular”, coincidente con la difusión a escala planetaria de los modelos de justicia juvenil, originarios de países anglosajones, a inicios de los años noventa<sup>71</sup>. La reforma, que planteaba el reconocimiento de derechos de los adolescentes a cambio de una responsabilidad penal atenuada, maduró con lentitud en un terreno en el que primaba la ideología correccional y fue conquistando poco a poco su plaza fuerte, en buena medida auxiliada por la instalación de los temas de la inseguridad ciudadana y la tolerancia cero, en la década de los noventa y luego en la de dos mil.

La reforma terminó montada a caballo sobre el sistema procesal penal y el código penal de adultos, sin haber hecho realidad más que de un modo insuficiente, los derechos de los adolescentes y aumentando en cambio, el grado de penalización que recae sobre ellos. La especialidad de la nueva justicia penal de adolescentes, proclamada por los reformadores, quedó muy desmejorada. O tal vez, no tanto, puesto que la misma pretensión de rebajar la edad de imputabilidad penal como objetivo de reforma, a cambio de derechos, es en un aspecto importante contrario a la primera reforma, la que originó los tribunales de menores y que se dio a la tarea de sustraer a los menores delincuentes de la justicia penal de adultos. Por eso, la justicia penal de adolescentes no se comprende, institucional o prácticamente, sin hacer referencia a esa reforma fundacional. Lo que estuvo en juego cuando se desechó la idea de la responsabilidad y se optó por el mudo rigor

---

<sup>71</sup> Su inspirador doctrinario fue el penalista Juan Bustos Ramírez. Ver: J. BUSTOS (Comp.), *Un Derecho Penal del Menor*, Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago, 1995.

de las prácticas correccionales, no puede ser comprendido sin remontarse al surgimiento del campo de la justicia de menores, de la pedagogía correccional y de los nuevos especialistas de la infancia anormal y delincuente. Los datos que hemos puesto al desnudo sobre la precarización y vulnerabilidad padecidas por los adolescentes condenados por la justicia, pulen también sus contornos y se ven amplificados con el recurso a la historia.

Los sistemas doctrinarios se abren a la interpretación, cuando se articulan según su propia historicidad. La historicidad articula lenguaje, poder y conocimiento. Los discursos y las prácticas de la responsabilidad adolescente, los materiales discursivos y no discursivos que la distinguen y articulan, se hunden en lo profundo de una dinámica solo identificable en una perspectiva socio - histórica. El descubrimiento de la “lógica” de funcionamiento del sistema es “genealogía”, puesta en acto de una reflexividad histórica que busca esclarecer las instituciones y los lenguajes del presente. La generación del saber, la producción del conocimiento, se inscriben en un complejo campo de relaciones de poder. El método que conviene al conocimiento, es genealógico:

“El modelo genealógico entiende el conocimiento como el significado social de símbolos contruidos por los hombres, tales como palabras o figuras dotadas de capacidad para proporcionar a los humanos medios de orientación. El conocimiento no es, por tanto, ajeno al poder, es decir, a la capacidad de gobernar la conducta de otros, porque el poder requiere por lo general un equilibrio desigual en el uso y consumo de los medios de comunicación y orientación, es decir, un reparto desigual del conocimiento”<sup>72</sup>

Las estrategias y tecnologías de poder permiten establecer la verdad de los saberes, tanto como la verdad de los sujetos. El ejercicio de un poder sobre ellos, sobre sus cuerpos, los constituye como objetos de conocimiento. En varias de sus obras, en especial en *Vigilar y Castigar*, Foucault muestra como la observación, lejos de ser una operación ejercida por un doble del sujeto, por un sujeto de conocimiento trascendental depende, por el contrario, de condiciones bien concretas que posibiliten el poder observar. Un poder autorizado, unido al

---

<sup>72</sup> F. ALVAREZ – URIA Y J. VARELA, *Genealogía y Sociología. Materiales para repensar la modernidad*, Ediciones El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1997. Pág. 48.

despliegue del sujeto en su cotidianeidad: lugares asignados y rutinas impuestas, despliegue de estrategias y tecnologías, conocimiento privativo de un sujeto objetivado en redes de poder:

“El método genealógico es un método procesual en un doble sentido. Por una parte estudia procesos de cambio social en tanto que tales. De ahí que esta metodología se centre en los procesos de larga duración con el fin de dar cuenta de las reglas de constitución de un campo, las regularidades y las transformaciones. Pero, además se trata de desentrañar la lógica interna de funcionamiento de dicho campo, los conceptos y operaciones que lo atraviesan, así como las relaciones que existen entre los discursos y el contexto material no discursivo (...) La genealogía permite reconstruir en la historia el juego de los procesos materiales y simbólicos que atraviesan la formación de los saberes, su institucionalización y desarrollo, así como sacar a la luz sus funciones sociales”<sup>73</sup>

### **Poder psiquiátrico y control social**

El proyecto psiquiátrico surge como un proyecto totalitario. Nace alejado de los códigos de la biología de su época, surge como un saber anticuado, clasificatorio, al servicio de una puesta en tutela de los individuos. Alienistas e higienistas, se encuentran y trabajan, codo a codo, en una cruzada de gobierno:

“El proyecto psiquiátrico está ligado a los problemas planteados por la sociedad postrevolucionaria, industrial y urbana; se ha integrado en toda una estrategia de regularidad, normalización, asistencia, vigilancia y tutela de niños, delincuentes, vagabundos, pobres y, sobre todo, de obreros. El alienista está menos estrechamente emparentado con los nuevos médicos de la época, que con esos higienistas de comienzos del siglo XIX, que hacían una especie de profecía que nos atañe a nosotros: *‘la medicina no tiene solamente por objeto estudiar o curar las enfermedades, tiene relaciones íntimas con la organización social’*. La psiquiatría, con su plaza fuerte en el manicomio, pretende una función permanente y universal y sobre todo, una función externa, a través de la higiene pública. Desde el siglo XIX, nos hemos convertido todos en psiquiatrizables; la más racionalizante de las sociedades, se ha colocado bajo el

---

<sup>73</sup> F. ALVAREZ – URÍA Y J. VARELA, *Genealogía y Sociología*. Págs. 63 y 64.

signo, valorizado y temido, de una locura posible (...) la locura puede sorprendernos a todos y en todas partes, en las relaciones familiares, pedagógicas, profesionales (...) los mecanismos más numerosos, más eficaces y más incisivos funcionan en los intersticios de la leyes, según modalidades externas al derecho, y en función de objetivos que no son el respeto a la legalidad, sino la regularidad y el orden. Se ha establecido todo un régimen de 'no-derecho' con efectos de desresponsabilización, de puesta en tutela, y de mantenimiento en minoría; régimen que se hace aceptar justificándose, por un lado, mediante funciones de protección y de seguridad y, por otro, mediante un estatuto científico o técnico”<sup>74</sup>.

El punto de partida del proyecto alienista es la sintomatología, los indicadores, *“que sirve para fundamentar una concepción reactiva y psicógena de la enfermedad mental que justifique el tratamiento moral”*. La sintomatología está secundada por una postura reactiva frente al desorden social, por la preponderancia de las causas morales y el tratamiento moral: *“el orden y la regularidad en todos los actos de la vida común y privada, la inmediata e incesante represión de todas las faltas y del desorden en todas sus manifestaciones, el sometimiento al silencio y al reposo durante tiempos determinados, la imposición del trabajo a todos los individuos capacitados, la comunidad de las comidas, las recreaciones a hora fija y de duración determinada, la prohibición de los juegos que excitan las pasiones y sustentan la pereza, y por encima de todo la acción del médico imponiendo la sumisión, el afecto y el respeto por su incesante intervención en todo lo referente a la vida moral de los alienados”*. Finalmente, el manicomio: *“en el manicomio puede desplegarse con todo su rigor una pedagogía del orden. En él puede hacerse más enérgico el ejercicio de la autoridad, más constante la vigilancia, más estrecha la red de coacciones”*<sup>75</sup>. En adelante, cualquier política de asistencia, sea o no por el trabajo, tendrá por norte el sometimiento a las disciplinas como ley moral.

---

<sup>74</sup> M. FOUCAULT, “Presentación”, en: R. CASTEL. *El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1980. Pág. 9 y 11.

<sup>75</sup> R. CASTEL. *El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1980. Págs. 122, 125, 127 y 130.

## El tratamiento de la infancia delincuente y anormal.

Prolongando el análisis realizado por Castel, Fernando Álvarez - Uría constata cómo el modelo de gobierno de la medicina mental se extiende en nuevas redes psicológicas para el tratamiento de la infancia delincuente y anormal. En línea con enfoques de moda como la teoría de la degeneración (Morel) y la ley de Haeckel, los nuevos criminólogos de la infancia inadaptada y delincuente, asimilaron el niño al loco y al criminal: un ser involucionado, enfermo y en estado salvaje. Los cuidados del niño deberán ser, en adelante, los intentos por corregir, tratar y psicologizar a *“pequeños salvajes que no han tenido educación”*. Y la escuela primaria obligatoria y gratuita se inscribirá en este espacio moralizador:

“En torno a la obligatoriedad escolar van a definirse dos diferentes tipos de infancia que progresivamente se irán acercando hasta prácticamente superponerse: 1)- los niños que no cumplen con la obligatoriedad escolar, los nómadas urbanos que tienen por territorio la calle, serán caracterizados con la categoría de "infancia delincuente"; 2)- los que asisten a esas pequeñas repúblicas escolares sin ‘acomodarse’ a las normas y reglamentos que en ellas reinan, y sin ‘asimilar’ los aprendizajes que en ellas se imponen serán englobados ahora bajo el concepto de "infancia anormal". En suma, infancia peligrosa e infancia inadaptada o anormal constituirán las dos redes que van a permitir una nueva expansión de las prácticas psiquiátricas y psicológicas”<sup>76</sup>.

Los niños inadaptados o “anormales” más que los delincuentes, quizá porque permanecen en las escuelas en lugar de abandonarlas, generaron un detallado saber clasificatorio, psicopedagógico. Fueron agrupados en dos grandes categorías: los *inestables* y los *retrasados*. Los inestables son los niños *"que no están en su sitio"* que *"no pueden coordinar sus movimientos"*, ni *"controlar sus instintos"*, sujetos a *"cóleras inexplicables"*, brutales, extremadamente violentas. Los retrasados, cuya ignorancia depende de un retraso mental, no es que carezcan de ciertas funciones mentales, sino que algunas están atrofiadas, son *"groseras"*. Todos los trabajos intelectuales en que la abstracción es la llave, son para ellos un dominio inaccesible. Así pues, estos niños son buenos en gimnasia, en costura, en

---

<sup>76</sup> F. ALVAREZ – URÍA, *Miserables y Locos. Medicina y orden social en la España del siglo XIX*, Tusquets editores, Barcelona, marzo 1983. Pág. 336.

caligrafía, en dibujo y en trabajos manuales. Su moral o su urbanidad son *"de superficie"*, tal como su forma de trabajar en la escuela: *"repiten como loros" o "aprenden de memoria"*<sup>77</sup>. Son perfectamente distinguibles de los que padecen desórdenes nerviosos graves y ostensibles: *"El gran ejército de los psicoanormales no presenta, como en estos casos, estigmas evidentes, sino que sus alteraciones se revelan mediante detalles en ocasiones imperceptibles para los que no son especialistas en la materia. Sólo un ojo clínico perspicaz es capaz de distinguir los signos soterrados de la desviación psíquica. A partir de ahora, gestos, palabras y hasta actos fallidos, van a ser objeto de un registro de interpretación psicológico – psiquiátrica"*<sup>78</sup>.

El campo de la infancia anormal no deja de ampliarse, las técnicas inventadas para lidiar con ella son luego aplicadas a todos los niños. En definitiva y teniendo como cabeza de puente el control de la infancia anormal y delincuente, *"la tutela científica de los anormales abre la vía al gobierno de los expertos en todas las áreas de la vida social"*<sup>79</sup>. El tratamiento moral va a ser exportado al terreno de la infancia desadaptada. Si la moralización de los niños en las escuelas, bajo una autoridad competente y con el auxilio de la pedagogía moderna, busca favorecer una adaptación armoniosa a la sociedad civilizada, la moralización de aquellos niños que no se adaptan a la escuela o permanecen al margen de ella, será más intensa e inflexible todavía. Habrá nacido la *pedagogía correccional*.

El contexto de la cuestión social es insustituible para comprender la dinámica de este movimiento. La preocupación por la mortalidad infantil precede a la preocupación por el niño delincuente o anormal, la emergencia de la "infancia en peligro" es previa a la alarma por la amenaza constituida por la "infancia peligrosa". La protección de la infancia abandonada fue objeto de numerosas leyes en las que colaboraron activamente médicos, higienistas y filántropos reformistas. A través de las nociones de "infancia en peligro" e "infancia peligrosa", se va a responsabilizar a los padres, en último término, del comportamiento de sus hijos, de su integridad física y moral. Los consejos a las madres de médicos e higienistas, la puericultura, la

---

<sup>77</sup> F. MUEL, "La escuela obligatoria y la invención de la infancia anormal", en: V.V.A.A. *Espacios de Poder*, Ediciones Endimiión, Madrid, 1991. Págs. 123 - 142.

<sup>78</sup> F. ALVAREZ – URÍA, *Miserables y Locos*. Pág. 351.

<sup>79</sup> F. ALVAREZ – URÍA, *Miserables y Locos*. Pág. 358.

gimnasia y los deportes, las colonias escolares, buscaron tanto preservar la salud del niño obrero y convertirlo en un ser productivo, como fomentar la vida sana y las buenas costumbres. El fomento de la familia nuclear y de la conyugalidad, el reajuste de la relación hombre - mujer y el nacimiento de un derecho del niño, van de la mano del estrechamiento del cerco de un poder tutelar alrededor de la familia pobre. Una novedosa especialidad, la psiquiatría infantil, se afirmará tanto en la consideración de la escuela como institución modelo y como *“laboratorio de observación de las tendencias antisociales”*, cuanto en la asignación de todos los trastornos a la familia popular<sup>80</sup>. La escuela primaria convertida en anti calle, tenderá cada vez más a ser admitida como el espacio de socialización natural de los niños: *“La incultura, la falta de educación, la ausencia de reflexión que anidan en la pobreza son el caldo de cultivo de una infancia poco respetuosa de las leyes”*<sup>81</sup>. La doma de la infancia, elaborada bajo la forma de gobierno de la locura, pasa más bien por su protección amorosa y desinteresada. El encierro carcelario o manicomial, se aprecia como inadecuado en virtud del surgimiento del nuevo ideal correccional.

### **Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia.**

Como tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior, el movimiento progresista de los *“salvadores del niño”* en Estados Unidos, inauguró un nuevo mercado de la infancia inadaptada, con nuevos profesionistas médicos, que se introdujeron en los reformatorios y clínicas de orientación del niño. Como señala Platt, *“los programas contemporáneos de lucha contra la delincuencia pueden hacerse remontar a las esforzadas reformas de los salvadores del niño, que a finales del siglo pasado contribuyeron a crear instituciones especiales, judiciales y correccionales, para el encasillamiento, el tratamiento y la vigilancia de los jóvenes inquietantes”*<sup>82</sup>.

En una modulación de los enfoques dominantes sobre el criminal por naturaleza, administradores de reformatorios y asistentes sociales, promovieron un modelo

---

<sup>80</sup> Cf. J. DONZELOT, *Policía de las Familias*, Pre-textos, Valencia, 1979. Págs. 106 y ss.

<sup>81</sup> F. ALVAREZ – URÍA, Óp. Cit. Pág. 341.

<sup>82</sup> A. PLATT, *Los Salvadores del Niño, o la invención de la delincuencia*, Siglo XXI, México 1982. Pág.



médico del comportamiento discrepante, que prometía hacer realidad el ideal de la “rehabilitación”. Defendieron la esencial modificabilidad de la conducta y de las tendencias “naturales”, tanto más probable cuanto más tempranamente se actuara en la vida de los sujetos. Eso sí, al no tratarse de seres humanos completos, aun en desarrollo, debían ser tutelados y vigilados. Debían adoptarse medidas profilácticas desde los primeros años, para evitar que los niños “delincuentes” se transformaran en criminales hechos y derechos: *“Así nacieron, así los criaron. Pero hay que salvarlos”*<sup>83</sup>. Salvarlos, es en este contexto, rehabilitarlos, recuperarlos, sanarlos de su patología hereditaria y de sus irracionales condiciones de vida, mediante la temprana intervención del médico. Los ecos de estos planteos resuenan con fuerza hoy, como veremos, en los programas para los niños inimputables, donde los psicólogos representan la avanzadilla de las nuevas redes de control y tratamiento de signo “psi”.

Los reformadores penales de fines del siglo 19, proclamaban con el plan de los reformatorios, distintas finalidades de la pena. Los primeros en beneficiarse de esta innovación fueron los adolescentes y los adultos jóvenes que más merecían y eran más susceptibles de reformarse. El plan de reformatorio comprendía los siguientes principios:

- “1)- Los delincuentes jóvenes tenían que ser separados de las influencias corruptoras de los criminales adultos;
- 2)- Los “delincuentes” tenían que ser apartados de su medio y encerrados por su propio bien y protección. Los reformatorios deberían ser santuarios custodiados, donde se combinarían amor y orientación con firmeza y restricciones;
- 3)- Los “delincuentes” deberían ser enviados al reformatorio sin proceso y con requisitos legales mínimos. No era necesario un proceso en regla, puesto que los reformatorios debían reformar y no castigar;
- 4)- Las sentencias serían indeterminadas, para que los reclusos fueran alentados a cooperar y los “delincuentes” recalcitrantes no pudieran reanudar su infame carrera;

---

<sup>83</sup> Enoch Wines, un salvador del niño. En: A. PLATT, *Los Salvadores del Niño, o la invención de la delincuencia*, Siglo XXI, México 1982. Pág. 69.

- 5)-No debería confundirse reforma con sentimentalismo. Sólo se requería el castigo mientras fuera conveniente para la persona castigada y después de haberse agotados todos los demás métodos;
- 6)- Los reclusos tenían que estar protegidos de la pereza, la indulgencia y el lujo, mediante el ejercicio militar y físico y una vigilancia constante;
- 7)- Los reformatorios deberían estar contruidos en el campo y designados de acuerdo con el “plan de cabañas”;
- 8)- El trabajo, la enseñanza y la religión constituyen la esencia del programa de reforma. Los reclusos debían recibir una educación más que elemental. Deberían predominar en ella los conocimientos industriales y agrícolas;
- 9)- Debería enseñárseles el valor de la sobriedad, la templanza, la inventiva, la prudencia, la ambición "realista" y la adaptación”<sup>84</sup>.

Las sentencias indeterminadas permitían que los reformatorios aplicaran un sistema de “puntuación” basado en premios y castigos y otros procedimientos de “*persuasión organizada*”. Aunque estuviese respaldado en última instancia por la fuerza, se inventó una estrategia, un sistema graduado de castigos y privilegios, que se despliega como disciplina y que permite el retroceso de los castigos corporales. En función de eso, la educación se consolida como forma de adiestramiento industrial y moral en los reformatorios.

El mayor éxito de los reformatorios fue implementar una nueva estrategia de gobierno, que ponía su foco en una serie de actividades juveniles que antes se pasaban por alto o eran tratadas informalmente. Puede decirse que los tribunales de menores definieron o, como dice Platt, “inventaron”, nuevas categorías de comportamientos punibles de los adolescentes, en particular el modo de comportamiento en que el actor era visto como su propia víctima. Los “*delincuentes juveniles*” eran enviados a los reformatorios para apartarlos de padres “inmorales” y de un medio ambiente “vicioso”. Los jueces, enfocaban su labor en términos “*médico – terapéuticos*”. La reforma introducida por el sistema de Tribunales de Menores significó en realidad que la justicia se acercara a la escuela y la familia, so pretexto de prevenir la delincuencia de los adolescentes pobres.

---

<sup>84</sup> A. PLATT, *Los Salvadores del Niño*, Págs. 77-78

## CUESTIÓN SOCIAL, INFANCIA EN PELIGRO E INFANCIA PELIGROSA EN CHILE.

La cuestión social estuvo en el trasfondo del movimiento de los reformadores, tanto en Estados Unidos como en Europa, y contribuyó a definir su significado. La cuestión social refiere al problema de la reorganización de la sociedad sobre una base democrática, acosada por las desigualdades sociales y el problema del pauperismo. Surge en el momento en que se afirman la *república burguesa* y el liberalismo económico y las clases laboriosas no encuentran un lugar en el sistema<sup>85</sup>. En parte, será también una toma de conciencia y un esfuerzo de las elites ilustradas, por constituir una clase obrera calificada y disciplinada. Pero, si en Europa la cuestión social se puede caracterizar como un proceso de regulación creciente del capitalismo decimonónico; en Chile correspondió más bien a una salida a la crisis sistémica de comienzos del siglo siguiente, a la crisis del Estado oligárquico.

La definición más precisa de la “cuestión social” en el caso chileno, fue elaborada por el historiador estadounidense James Morris: *“posee una significación muy amplia y se refiere a todas las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva fuerza de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva “clase trabajadora”; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores”*<sup>86</sup>. Una definición que se revela precisa y a la vez acentuada, ideológica. También identifica como cuestión social, la advertencia sobre un desajuste social importante y la pérdida de consenso en la sociedad, realizada por miembros de los sectores hegemónicos. La población chilena había crecido desde 2.500.000 habitantes en 1875 a 4.300.000 en 1930. Durante su historia y hasta casi

---

<sup>85</sup> F. ALVAREZ – URÍA Y J. VARELA, *Sociología, Capitalismo y Democracia*, Ediciones Morata, Madrid, 2004. Págs. 46 y 47.

<sup>86</sup> J. MORRIS; *Las Elites, los Intelectuales y el Consenso. Estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales en Chile*. Departamento de relaciones industriales INSORA, Universidad de Chile, Editorial del Pacífico, Santiago, 1967, Capítulo 4, Pág. 79.

mediados del siglo 20, Chile fue un país con predominio agrícola y minero. El porcentaje de población rural en 1875 era de un 73%, y en 1930 todavía era el 51% de la población total. En Chile no comenzó a tomar forma un sector industrial de importancia sino después de la crisis de los años 30, cuando el Estado comenzó a planificar el desarrollo económico, mediante la creación y financiamiento de la Corporación de Fomento, CORFO, en 1939.

Entre 1880 y 1925, en círculos intelectuales, políticos y de organizaciones empresariales, se escribió a menudo sobre la cuestión social o, concentrándose un poco más, sobre *“la cuestión obrera”* o *“el problema obrero”*. La cuestión social fue un *tema* de referencia y discusión en las tablas de las sesiones parlamentarias, en los editoriales de los diarios y en artículos de revistas y estuvo presente en el discurso de los reformadores sociales por largo tiempo. Desde mediados de la década de 1880 y hasta 1910, aproximadamente, el movimiento popular manifestó su presencia con fuerza, siendo crudamente reprimido por policías y militares. Si bien, las primeras huelgas obreras datan de la década de 1880, no fue sino hasta principios del nuevo siglo que ocurrieron los estallidos de violencia popular: huelga portuaria de Valparaíso en 1903; *“huelga de la carne”* en Santiago, en 1905; huelga en Antofagasta en 1906; matanza en Iquique, en 1907. La cuestión social adquirió entonces urgencia, y el sentimiento compasivo de los reformadores y de la elite, cedió su lugar al miedo. En lo que nos atañe más directamente: la preocupación por la infancia en peligro dio paso a la preocupación por la infancia peligrosa.

Después del periodo señalado, la cuestión social perdió centralidad, sobre todo luego de que en septiembre de 1924, una junta militar obligara al Congreso a aprobar siete leyes del trabajo ingresadas en 1921 y cuya discusión se desplazaba indefinidamente. El nuevo sistema de relaciones de trabajo y las reformas introducidas se plasmaron en la nueva Constitución de 1925 y fueron seguidas de otras leyes sociales, entre ellas la ley 4.447, de tribunales tutelares de menores, aprobada en 1928.

La elite social y política no reconoció de buenas a primeras la existencia y la urgencia de la *“cuestión social”*. La legislación del trabajo tuvo una significativa oposición, antes y después de su aprobación, y su aplicación integral y más o menos unitaria no comenzó sino hasta el periodo del Frente Popular, a fines de la

década de 1930. Las ideas que sustentaban la oposición, eran expresadas de manera más clara por los mismos reformistas que por los opositores a la reforma. El diputado Díaz Sagredo fue uno de los primeros en negar la existencia de la cuestión social en Chile:

“Aquí está pasando un fenómeno singular: nos estamos asustando con la cuestión obrera, con una cuestión que en realidad no existe en Chile, porque en verdad, no puede decirse que se haya producido en Chile el problema o la cuestión obrera que es causa de preocupaciones en Europa... accidentes como en Valparaíso (huelga portuaria) no pueden ser razonablemente considerados como una manifestación de la existencia de la cuestión social obrera de las sociedades de Europa”<sup>87</sup>

Con más contenido, Enrique Mac Iver, expresó en su discurso en el Senado contra el proyecto del partido conservador en 1921, un punto de vista clásico frente a la cuestión social:

“Yo me fijo en lo que somos en Chile, no en lo que ocurre en Alemania, Francia o Inglaterra, sino en lo que somos nosotros los chilenos, los descendientes de españoles y de la raza indígena. Nuestra propensión, es ¿al trabajo o a la ociosidad? Yo he oído decir que nuestro obrero, que nuestro pueblo, que nosotros somos trabajadores. Yo veo, señor Presidente –no sé si sea un error de vista- que nosotros no somos trabajadores; únicamente una necesidad muy imprescindible nos hace dedicarnos al trabajo. (...) ¿Para qué entonces esta fijación de las horas de trabajo? ¿Porque lo dicen los libros de sociología socialista o no socialista? ¿Por qué se han dictado leyes en Europa y en América con este objeto? (...) El trabajo a nadie daña; la intensidad del trabajo me parece a mí que no es motivo para la degeneración de una raza. El trabajo es útil; es, sobre todo, ennoblecedor. Yo quisiera ver a mi país más ennoblecido por las diez o doce horas de trabajo diario que verlo, dentro de la teoría moderna y biológica, con estas ocho horas de que habla el proyecto”<sup>88</sup>.

El poder se lo disputaban en las dos primeras décadas del siglo 20, dos agrupaciones políticas, ambas integradas mayoritariamente por partidos que representaban a la elite oligárquica: la Coalición, prácticamente el Partido Conservador y la Alianza Liberal, integrada por el Partido Liberal, el Partido Radical

---

<sup>87</sup> J. MORRIS, *Las Elites, los Intelectuales y el Consenso*. Pág. 153

<sup>88</sup> J. MORRIS, *Las Elites, los Intelectuales y el Consenso*. Pág. 159

y el Partido Demócrata. El Partido Liberal, a pesar de disputar el poder a los conservadores, era igualmente un partido oligárquico. El Partido Radical y el Partido Demócrata representaban a las nacientes clases medias, el último también a un sector del artesanado, y pueden ser considerados moderadamente reformistas, aunque estaban integrados a las reglas del juego de una modalidad de funcionamiento parlamentario del sistema político, luego de la guerra civil de 1891, que enfrentó a dos fracciones de la oligarquía. Los partidos obreros no tenían representación en el parlamento. En 1912 el tipógrafo Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista, que en 1922 se transformó en el Partido Comunista de Chile. En 1933 se fundó el Partido Socialista.

El líder del ala reformista de la Alianza Liberal, Juan Enrique Concha del Partido Demócrata, el mismo que abogaría tiempo después por la abolición del trabajo infantil, en una clara alusión a la necesidad de los reformistas por gobernar el proceso de cambio, evoca en uno de sus textos más representativos, el pasado de una nación latifundista, cuya estructura de conducta paternal hace falta en la industria:

“Tiendan la mirada hacia atrás los que conocieron al gañán, al obrero y al artesano de otros tiempos; miren más de cerca lo que era el pueblo chileno hace veinte años, y notarán, sin duda alguna, un cambio en su modo de mirar, en su lenguaje, en su manera de saludar, en su modo de vestir, en sus necesidades (...) se nota en él un sentido de orgullo muy marcado, que por desgracia no viene aparejado de una sensible modificación en sus hábitos económicos y morales (...) el obrero no es ya el ser sumiso, manso y obediente a sus patrones; es el individuo que discute de frente, casi siempre con altanería y que a la menor observación responde con el consagrado “me voy”, con la amenaza de la huelga (...) Las ideas de igualdad y los derechos del proletariado están cayendo en un terreno tosco y sin preparación (...) el alma popular nacional está inculta, y es indispensable que la clase dirigente se preocupe seriamente en cultivarla, pues las ideas modernas del proletariado pueden transformar fácilmente a un pueblo que no tiene suficiente discernimiento para distinguir lo lícito de lo ilícito, en las llamadas reivindicaciones sociales de los proletarios”<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> J. CONCHA, “Características sociales de Chile”, en: H. GODOY, *Estructura Social de Chile*, Editorial Universitaria, 1971. Págs. 307- 313.

### **De la infancia en peligro a la infancia peligrosa: breve recorrido histórico.**

La ley de Protección de Menores de 1928 formó parte de un conjunto de iniciativas “protectoras” de la infancia: prohibición del trabajo infantil, establecimiento de la instrucción primaria obligatoria, represión de la vagancia y mendicidad en los niños, todas ellas recortándose sobre el trasfondo de la cuestión social. Estas iniciativas reflejaban un sutil tránsito, como hemos planteado, de la preocupación por la *“infancia en peligro”* a la urgencia por la *“infancia peligrosa”*. Antes de la cuestión social, el Estado estuvo relativamente distante y la política social se reducía a la caridad para las poblaciones empobrecidas. Esta realidad comenzó a cambiar con la preocupación por la “infancia en peligro”, tanto como por la “cuestión obrera”: el abandono de niños, la mortalidad infantil y la insalubridad, el trabajo infantil, la protección de la mujer obrera.

El abandono de niños fue relacionado con la ilegitimidad, conformando un cuadro de *“descomposición familiar”*, un distanciamiento de la familia obrera de los estándares de decencia. Se observó que en la mayoría de los hijos ilegítimos, el abandono se produce al momento del nacimiento o en los primeros meses de vida, mientras que en el pequeño porcentaje de los hijos legítimos abandonados, este se impone a edades más tardías. La proporción de niños ilegítimos nacidos en Chile entre 1848 y 1916 aumentó desde un quinto del total a más de un tercio. En Santiago, la tasa oscilaba entre 460 y 541 por mil, en el período 1903-1910, superior al promedio nacional. Entre 1900 y 1910, la mortalidad infantil alcanzó un promedio de 398 niños muertos por cada mil nacidos vivos. En la Casa de Huérfanos, la tasa superó el 700 por mil (Tablas 22 y 23, en apéndice 2).

En 1912, se promulgó la Ley 2.675, de Protección a la Infancia Desvalida, que estableció por primera vez la intervención del Estado en la declaración del abandono de niños. Según esta ley, el juez podía decidir provisoriamente sobre la suerte de los niños desvalidos, huérfanos o delincuentes, internándolos en algún establecimiento de reforma o de beneficencia, o entregándolos al cuidado de personas de confianza. La ley define que los menores *“en situación de abandono, son aquellos cuyo padre no velara por su crianza, cuidado personal y educación;*

*cuando se entregaran a la vagancia, mendicidad y prostitución; y cuando trabajaran en actividades riesgosas para su desarrollo físico".* Se sancionaba también la explotación de menores de ocho años. La ley creaba en cada departamento la función de Inspector de la Infancia desvalida, la que debía ser ejercida por el gobernador respectivo. Esta ley no fue efectiva en la práctica. Nunca se creó la función de inspección, no se estableció un sistema asistencial para la aplicación de medidas de protección, ni tampoco había reformatorios para enviar a los niños, con lo que no se evitaba que los menores fuesen recluidos en las cárceles si se les imputaba alguna infracción a la ley penal.

En 1913, el Congreso Nacional envió una comisión de diputados a imponerse de las condiciones de vida y de trabajo de los mineros de la zona salitrera. Denunciaron que *"más del 50% de la población infantil no alcanza a recibir educación en los pueblos y faenas de la pampa salitrera por falta de escuelas"*. Entre otras medidas, solicitaban una ley de protección del trabajo de los niños y mujeres. Tres años después, una nueva comisión, encabezada por el diputado del Partido Radical Alberto Cabero, comprueba que en la industria del nitrato había más de tres mil niños menores de dieciséis años en faenas extractivas peligrosas. En 1917, el Ministerio de Industrias dictó un decreto por el que prohibía el trabajo de niños menores de doce años en la maestranza de Ferrocarriles del Estado. El ministro en la época, Luis Malaquías Concha, señaló: *"Mientras se emite una ley de protección a los niños obreros, el Estado está obligado a dar el ejemplo"*. Por su parte, el citado Juan Enrique Concha, en una conferencia sobre economía social expresaba: *"jamás he sufrido una impresión más fuerte que al visitar una fábrica de botellas después de medianoche. Pude ver allí una cantidad de pequeñuelos, algunos de ocho años, que, al lado de los hornos de fundición, semidesnudos, sudaban copiosamente, con sus caras tiznadas, sus semblantes demacrados, sus ojitos soñolientos y que debían seguir en su tarea, tan dura para su tierna edad, hasta el aclarar del nuevo día"*. En 1917 se dictó una ley que establecía el descanso dominical para los niños, pero con un reglamento en el que figuraba una extensa lista de industrias exentas. No fue sino hasta el año 1931 que se dictó el D.F.L. Nº 178 que reglamentaba el trabajo de los menores de dieciocho años. En cuanto al trabajo de las mujeres, se lo reguló en lo relativo al cuidado infantil. El 20 de diciembre de 1916, se aprobó la ley de Salas



Cunas, que obligaba a los talleres que empleasen 50 o más mujeres mayores de dieciocho años, a disponer de estas salas<sup>90</sup>.

Transcurrida la primera década del pasado siglo, con un saldo trágico de represión y muerte, después de la primera guerra mundial y paralelo a un nuevo aumento de los conflictos sociales, el foco de la discusión se desplazó del tema de la *"infancia en peligro"* al tema de la *"infancia peligrosa"*. El pauperismo, fue enjuiciado ahora en aquellos aspectos morales de la vida en la miseria que parecían conducir más directamente a un estatuto de peligrosidad. La pobreza extrema, más que a futuro, era importante ahora en su presente, en sus efectos disociadores inmediatos. La escuela, a la que ya había sido asignada en el pasado siglo una función uniformadora y moralizante, era reclamada ahora con una mayor urgencia y más directamente ligada a la función de control<sup>91</sup>. Para ello, debía asegurarse su obligatoriedad. Asimismo, había que afianzar la adecuada aplicación de la pedagogía correccional, tratamiento indicado para los niños anormales y delincuentes, empezando por reglamentar los establecimientos existentes y crear otros nuevos. Con la promulgación de la ley de protección de menores, en 1928, se creará un establecimiento modelo, conectado directamente con el tribunal de menores, que debía ser el punto de partida para la creación de establecimientos similares en todo el territorio.

En *"Sinceridad: Chile Intimo en 1910"*, el escritor Alejandro Venegas (Dr. Valdés Cange) marcaba el punto de inflexión:

"Obtenido el alivio económico del país, habrá que pensar en reparar el estrago moral que los últimos 30 años han causado en todas las clases sociales de la nación (...) no es posible que la generación actual, que nació y se crió en la podredumbre, se depure en absoluto; debemos contentarnos con que se refrene y no siga escandalizando. La regeneración hay que esperarla de los que vengan después, de la juventud que aún no está inficionada, de los niños de

---

<sup>90</sup> C. URRUTIA, *Niños de Chile*. Colección Nosotros los Chilenos, Editorial Quimantú, junio de 1972.

<sup>91</sup> Sobre los conceptos y la misión que la elite asignaba a la educación en el siglo 19, puede consultarse de R. MAYORGA, "Los conceptos de la escuela: aproximaciones desde la historia conceptual al sistema educativo chileno. 1840-1890", *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, Volumen 15, Nº 1, 2011. Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Págs. 11-44

hoy y hombres del mañana. Es preciso apoderarse de esos corazones tiernos, limpiarles las suciedades heredadas y depositar en ellos la simiente que, fructificando, los convierta en vaso de virtudes: la salvación está en la escuela".

En 1911, el médico Francisco Landa caracterizó el alcoholismo como *"una amenaza nacional de alta consideración"*. La taberna – manifestó- *"ha pasado a ser un verdadero poder público"*. Para combatir esta amenaza, solicitó *"la enseñanza obligatoria de la Fisiología, Higiene y Temperancia para todos los colegios y todos los alumnos"*. En 1923, el médico, Javier Rodríguez Barros ligó una supuesta "despoblación" de Chile a la crisis de la familia popular y atribuyó la elevada mortalidad infantil que se daba en el Norte de Chile, *"no a los bajos salarios"* sino que al *"enorme alcoholismo existente"*.

Después de 1910, o sea desde que las "masacres" de "rotos" concluyeran por impresionar la conciencia moral de la élite, se multiplicaron los canales de "educación popular", incluso en los propios círculos de obreros y universidades populares. Hacia 1920, eran muchas las voces que llamaban a recluir obligatoriamente a la clase popular, en "establecimientos públicos y privados de beneficencia y de educación pública". En ese contexto de alarma, se aprobó la ley de Instrucción Primaria Obligatoria, el 26 de agosto de 1920<sup>92</sup>. Esta ley eliminó la separación entre las "preparatorias" de los liceos (que reproducían las elites dirigentes) y las "escuelas primarias" (que luchaban contra la barbarie popular), para crear una escuela única. En la Comisión Constituyente de 1925, se discutió la idea del Estado Docente. El senador Eliodoro Yáñez, miembro de dicha Comisión, precisó la idea de Estado Docente que fue aprobada en definitiva:

"El Estado tiene la obligación de dar instrucción... y fiscalizar... toda la educación pública, siendo que ésta es la tendencia moderna para influir en el bienestar social y en la formación de ciudadanos útiles a la patria"<sup>93</sup>.

El periodo entre 1908 y 1924 ha sido caracterizado por los historiadores como el tiempo del colapso del sistema mercantil en Chile. La elite manifestó una aguda

---

<sup>92</sup> G. SALAZAR, "Los dilemas históricos de la auto-educación popular en Chile", *Revista Propositiones N° 15*, Ediciones SUR, diciembre de 1987. Pág. 101

<sup>93</sup> G. SALAZAR, "Los dilemas históricos...", Pág. 102

conciencia de la crisis y llamó al despliegue de una ofensiva nacional integracionista. Los capitalistas extranjeros habían conquistado una posición dominante, desde 1900, en el sector industrial y el comercio interior, acelerando la crisis de hegemonía de la elite mercantil financiera chilena. Pero, desde 1914, el salitre comenzó a perder los mercados internacionales, lo que marcó el comienzo de la declinación del conglomerado económico extranjero y brindó una oportunidad a la elite para imponer al sistema un funcionamiento parlamentarista y oligárquico y emprender una activa campaña de concientización, en respuesta a la crisis de la *“moralidad pública”*, que denunciara Mac Iver. Ahora se trataba menos de una campaña para moralizar al *“peonaje bárbaro”* que de impulsar una moralización republicana, que debió asumir una formalidad y un ropaje democráticos. Este fue el fundamento de la redefinición de la *“educación nacional y popular”*<sup>94</sup>. El teórico educacional, Darío Salas, recomendó abolir la educación clasistamente diferenciada del pasado e implementar una integracionista *“educación elemental”* única, que desarrollase la eficiencia social de todos los chilenos:

“...Se olvida que las faenas industriales exigen hoy no solo brazos, sino brazos con cerebro, obreros capaces....La participación de cada uno en el gobierno, la preservación de la libertad bajo la ley y las instituciones requieren la ilustración de todo el pueblo”<sup>95</sup>.

La nueva orientación debía mediar entre las posiciones que sostenían que la instrucción del pueblo solo llevaba al aumento de la delincuencia y del bandolerismo y, los que criticaban a las escuelas del sistema nacional por entregar una educación puramente humanista, que no preparaba al peonaje para la producción industrial. Con todo, la nueva orientación no se propuso un objetivo diferente a la anterior; es decir *“no se proponía desarrollar la fuerza productiva de la plebe, sino su capacidad para habitar con decencia un orden social implantado por los mercaderes – banqueros”*<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> G. SALAZAR, “Los dilemas históricos ... Pág. 98

<sup>95</sup> G. SALAZAR, “Los dilemas históricos ... Pág. 99

<sup>96</sup> G. SALAZAR, “Los dilemas históricos ... Pág. 94

## Emergencia del correccionalismo

El modelo correccional consiste en una pedagogía correccional, por lo que el origen del correccionalismo hay que buscarlo en su vinculación con las escuelas del sistema nacional de enseñanza, que había tenido un cierto desarrollo en la segunda mitad del siglo 19. En 1854, un reglamento escolar expresaba una lógica todavía cuasi penal: se puede apreciar que lo que se regula son “delitos” y “penas” y entre las sanciones, los apremios físicos cubren una amplia gama:

“Art. 21. Los delitos se dividen en dos clases: leves i graves. Son leves: 1º. Faltar a la escuela sin permiso una vez en diez días; 2º. Faltar al orden, conversar en horas de silencio, tomar un asiento ajeno, un libro u otro utensilio ajeno sin ánimo de retenerlo i dar voces impropias en horas de recreo; 3º. Una mala lección de cada diez dadas, 4º Ensuciar bancos, libros o papeles ya sean propios o ajenos (...);

Art. 22. Son faltas graves; 1º las injurias verbales o de obra; 2º tirar pedradas en la calle, aunque no se haga daño alguno; 3º verter espresiones groseras e inmorales; 4º el hurto de cualquier cosa, 5º responder al preceptor en alta voz, en tono ofensivo o despreciativo o diciendo palabras injuriosas (...)

Art. 23. Las faltas leves se castigarán...con una represión, con la privación de descanso con postura de rodillas o de plantón por media hora, o con dos guantes en las manos; la palmeta queda prohibida;

Art. 24. Los delitos graves se castigarán con cuatro o seis guantes con postura de rodillas por una hora o dos, con una hora de encierro, con la degradación haciéndole descender a asientos inferiores a su clase por un tiempo que no pase de 15 días, con la expulsión temporal; pero este último castigo se impondrá solo cuando el alumno fuese mui reincidente;

Art. 25. Los castigos enunciados en el artículo anterior se impondrán según la mayor o menor gravedad del delito; pero, cuando este fuere demasiado grave i merece un castigo más serio, se pondrá en conocimiento de los padres o guardadores del delincuente para que ellos lo verifiquen, más si se desentendiesen i el niño continuase con su mala conducta o reincidiese en su

falta, se expulsará del establecimiento con acuerdo del Inspector de educación o de la autoridad”<sup>97</sup>

En años posteriores, se aprecia un intento de agregar a las sanciones finalidades modeladoras de la conducta, con un predominio de las sanciones disciplinarias por sobre los castigos corporales. En un texto dirigido a los preceptores, se plantea que el ideal de comportamiento del preceptor en la escuela ha de ser el de un padre de familia; severo y a la vez indulgente, teniendo en cuenta la corrección del “alumno”. Normalización del comportamiento que se apoya en el empleo exhaustivo del tiempo de los menores internos:

“Formemos nuestro carácter...que sea suave afectuoso i complaciente con alumnos dóciles, sumisos y morales, que no salgan de la senda del deber; pero que sea también fuerte, serio, grave i sentencioso sin capricho, odiosidad o prevención, para con niños que acostumbrados al vicio, regalo de sus padres, i a ser los amos de su casa, ni están dispuestos a obedecer, ni preparados para el orden, trabajo i régimen del establecimiento (...) Su voz debe ser la de un magistrado que sentencia sin apelación y con la calma que da la rectitud de conciencia de causa probada. Manifestará en su semblante la dulzura mezclada a la gravedad (...) Ha de estar constantemente ocupado durante el trabajo, sin que sea causa saber su lección, haber escrito o resuelto su cuenta para entregarse al ocio: debiendo haber un tiempo para cada clase, este debe ser ocupado sin interrupción por los alumnos. Destiérrese el perjudicial sistema tolerado para el niño, que apenas lee un cuarto del tiempo destinado a la lectura; que escribe solo una plana en 60 minutos i en el tiempo sobrante, mira, conversa o se distrae con juguetes, que resuelve una cuenta en el tiempo en que podía resolver cuatro”<sup>98</sup>

A principios de siglo, había comenzado ya a discutirse sobre el discernimiento y sobre la permanencia de los menores en las cárceles, con argumentos correccionales:

---

<sup>97</sup> M. MONSALVE, *I el silencio comenzó a reinar. Documentos para la historia de la instrucción primaria 1840-1920*, Fuentes para la Historia de la República, Volumen IX. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos - Universidad Católica Blas Cañas, Santiago, 1998. Págs. 141-143.

<sup>98</sup> M. MONSALVE, *I el silencio comenzó a reinar....* Págs. 256 y 257

“La sociedad posee un medio todavía más eficaz que las cárceles para preservarse del pequeño criminal: es la educación que no se le ha dado tal vez. No se puede golpear tan rudamente una vida apenas comenzada, ni se puede juzgar incorregible y posible de pena a un ser que no se ha tratado de corregir. Sólo cuando la sociedad haya cumplido su deber respecto del niño como de su miembro futuro, que le haya dado la educación necesaria para evitar el delito, podrá exigirle que respete el orden jurídico establecido (...) En todo caso se necesitan esfuerzos sostenidos y perseverancia sostenida por algún tiempo y no algunos días de prisión para castigarles sus pequeñas e inconsideradas flaquezas, consiguiendo de esta manera la desmoralización precoz del individuo”<sup>99</sup>

Los primeros establecimientos correccionales se caracterizaron por la precariedad en su funcionamiento y una cierta distancia respecto de un modelo netamente pedagógico. De hecho, el correccional de Talcahuano se planteó como objetivo no solo “*promover la corrección moral de los detenidos*” sino también “*suministrar marineros para la armada nacional*”. La correccional de Talcahuano fue creada por decreto el 9 de septiembre de 1896 y la de Santiago, el 9 de diciembre del mismo año. En una fecha desconocida, aunque posterior, fue creada la de Valparaíso, que funcionaba en un edificio arrendado, que se encontraba en malas condiciones. Ya para 1900, solo continuaba funcionando la correccional de Santiago.

La Escuela Correccional de Niños de Santiago abrió sus puertas el 11 de julio de 1897. Tenía capacidad para recibir a doscientos niños, de entre 10 y 16 años. En un principio funcionó en el Internado Santiago, que hasta entonces había sido ocupado por el Instituto de Sordomudos, trasladándose en 1910 a un recinto anexo al Internado Nacional Barros Arana. En 1900 contaba con un director, un subdirector, dos inspectores, un capellán, un médico, un preceptor, tres maestros de talleres (carpintería, zapatería y sastrería), tres subinspectores-profesores, un profesor de música, un enfermero practicante y un portero. La Escuela Correccional de Niños de Concepción comenzó a funcionar en 1906. Con capacidad para 100 niños, en su mejor momento llegó a tener poco más que 30, por lo que fue cerrada el 12 de marzo de 1915 y su población trasladada a un patio especial en la cárcel de

---

<sup>99</sup> M. A. LEON, “Los niños en las prisiones”, en: *Sistema carcelario en Chile: visiones, realidades y proyectos (1816-1916)*. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997.

Concepción. A partir de entonces, sólo continuó funcionando la correccional de Santiago, en tan malas condiciones que, en 1913 cambió de nombre, pasando a ser denominada Escuela de Reforma, buscando dotarla de un funcionamiento menos represivo. Pero no hubo cambios. En la década de 1920 todavía se mantenía esta situación: a la correccional de Santiago sólo se sumaban tres establecimientos correccionales para niñas, más bien asilos regentados por religiosas<sup>100</sup>.

Entre 1900 y 1911 la principal causa de internación de los menores en las correccionales fue la petición de los propios padres, por tratarse de niños y niñas “incorregibles”<sup>101</sup>. Esta causal, en algunos años, superó el 50% del total, seguida por el hurto (en el caso de los niños), las lesiones corporales y el abandono de hogar. Los niños constituían la mayor parte de la población. Entre 1800 y 1911 las niñas representaron entre un 7 y un 17% del total, con excepción de los años 1903 y 1904, cuando subió a 23 y 27%, respectivamente.

En la correccional de Santiago, los niños eran internados en secciones separadas: en una estaban los llamados “castigados” (aquellos internados por la justicia civil a petición de los padres, por desobediencia, “malas inclinaciones”, abandono de hogar) y en la otra los “detenidos” o “reos” (menores procesados y condenados por la justicia penal por hurto, robo, lesiones corporales, vagancia, estafa). El reglamento establecía que los recién ingresados debían ser conducidos al departamento de reflexión, donde permanecían tres días mientras aprendían sus obligaciones, consistentes en:

- “1° Asistir a las clases y talleres y ejecutar todos los trabajos que se les encomienden,
- 2° Obedecer las órdenes de sus superiores con puntualidad y respeto,
- 3° Cuidar del aseo y buen estado de las personas y mantener en perfecto estado de limpieza todas las diferentes secciones del establecimiento,

---

<sup>100</sup> M. A. LEON, *Encierro y corrección. La configuración del sistema de prisiones en Chile (1800-1911)*, Universidad Central de Chile, Santiago 2003, tomo III, 760-792. Citado por J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Págs. 213-215.

<sup>101</sup> La situación jurídica de los menores de edad heredada del siglo 19, consideraba medidas contempladas en el Código Penal de 1874 y medidas correctivas solicitadas por los padres, incluidas en el artículo 233 del Código Civil de 1855. En ambos casos, se podía internar a un menor en un establecimiento correccional.

- 4° Cuidar de los objetos que se les hubiere entregado y de la buena conservación de todo lo que pertenezca a la casa,
- 5° Usar el uniforme que les proporcione el establecimiento y cuidar de su más perfecto aseo y conservación,
- 6° Cumplir los preceptos de la Iglesia,
- 7° Sufrir, sin excusa ni reclamo, los castigos que les fueren impuestos,
- 8° Observar un silencio absoluto en todos los movimientos en que tomen parte”<sup>102</sup>

Los niños internos debían levantarse a las cinco de la mañana en verano y a las seis en invierno, hacer su cama y bañarse, cortarse las uñas semanalmente y el pelo una vez al mes. Tras el aseo personal y de las habitaciones, se daba paso al desayuno en los comedores. Las clases se impartían de lunes a sábado. En la mañana, cursos básicos de instrucción primaria y algunos de secundaria (aunque la prioridad fue la alfabetización); en la tarde, talleres manuales e industriales (carpintería, encuadernación, sastrería, zapatería y herrería). Aunque se adquirió un terreno agrícola anexo a la Escuela, la chacra El Polígono, se desconoce si llegó a usarse con fines de instrucción agrícola. En las actividades de talleres era necesario mantener un absoluto silencio. Lo mismo en los recreos, donde se prohibía cualquier gesto de excesiva familiaridad. Además de usar uniforme, los niños *debían saludar a todos sus superiores y a las personas que visiten el establecimiento (...) llevando la mano derecha a la altura de la frente y sin hablar. Cuando el detenido camina y ve llegar hacia él al Director, debe cuadrarse y seguir su camino después que el director se haya ausentado. Con los demás superiores se saluda, sin cuadrarse.* La correspondencia debía ser escrita en un papel especial y a una hora determinada, debiendo ser leída por un inspector antes de ser enviada. La asistencia a misa era obligatoria los domingos festivos. El capellán debía ejercer estricta vigilancia sobre la conducta moral de los niños a través de la confesión y conferencias de instrucción moral y doctrinal. Los niños de mejor conducta o más aventajados recibían un reconocimiento público (una insignia, un grado o felicitaciones), además de premios especiales (libros, útiles, comida especial o asignación de alguna responsabilidad). Se reprimía faltas como no prestar atención en clases, desobediencia, infracción a la regla de silencio y desaseo. Los castigos iban desde una amonestación pública, a estar de pie frente a una muralla, privación

---

<sup>102</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 216.



de recreo, comida, visitas o correspondencia, hasta llegar al encierro en el calabozo con esposas y grilletes<sup>103</sup>.

Con respecto a las correccionales de mujeres, dependían de la congregación del Buen Pastor. La primera Casa de Corrección de Mujeres comenzó a funcionar en 1864 y a comienzos del siglo 20, ya había tres en las que ingresaban exclusivamente menores, en Santiago, Chillán y Concepción. La Casa Correccional de Santiago se inauguró en 1901, en la calle Lira y la de Concepción en 1908. Según las estadísticas de 1921-1925, entre 50 y 96% de las niñas no ingresaba por delito o vagancia, sino a petición de sus padres. En los establecimientos para mujeres, tanto adultas como menores, la atención se concentraba en diluir la amenaza de la “corrupción moral”, privilegiando la regeneración a través de la oración y del trabajo. En 1919, Adela Edwards de Salas creó el Refugio de la Misericordia (o escuela reformatorio para mujeres), a cargo de religiosas españolas y sostenido por la Cruz Blanca. A la inauguración del establecimiento asistió el presidente Sanfuentes. La institución tenía por objetivo *recoger a las jóvenes que están en peligro de ser arrastradas al vicio o que han sufrido ya la influencia de un medio corruptor*<sup>104</sup>.

En 1924, se propuso la reorganización de la Escuela de Reforma de Santiago, que pasaría a llamarse Escuela de Educación Preventiva, bajo la dependencia del recién creado Ministerio de Previsión Social, con el objetivo de atender no solo a los niños delincuentes, sino que también a aquellos que se encontraban “*en situación de delinquir previniendo que se transformen en pequeños criminales*”<sup>105</sup>. En 1925 un decreto ley creó los denominados “Establecimientos Especiales para Prevenir la Delincuencia Infantil”. En estos establecimientos se podía internar a *menores de 18 años, que se encontrasen en situación de abandono físico o moral, vagancia o recogidos por la policía; a los que recibían malos tratos de sus padres o guardadores; a los que no asistían a la escuela por desobediencia a los padres o guardadores y, por último, a los que el director del establecimiento considerara conveniente admitir. También se admitía a aquellos menores cuyos padres lo*

---

<sup>103</sup> J. LAVIN, *Memoria de la Escuela Correccional de Niños de Santiago*, Archivo Ministerio de Justicia, Santiago, 1910.

<sup>104</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Págs. 218-219.

<sup>105</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 383.

*solicitaban y pagasen la pensión correspondiente a su estadía.* La Escuela de Educación Preventiva de Santiago funcionó hasta 1927, fecha en que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados denunció graves irregularidades de tipo administrativo, de funcionamiento y de abuso contra los niños<sup>106</sup>.

En toda la década de 1920, el número de muchachos menores de 15 años que ingresaba a las cárceles (entre mil y dos mil) duplicaba o triplicaba a los que se encontraban en las escuelas correccionales (entre 330 y 500)<sup>107</sup>.

La creación en USA y Europa de tribunales tutelares terminó por suscitar un creciente interés político y académico por la situación de los niños delincuentes, que se precipitó en la década de 1920, para cristalizar en la ley de protección de menores de 1928. El argumento principal de los partidarios de sustraer a los menores del proceso penal de adultos, era la falta de un verdadero arraigo del *"impulso criminal"* en el niño, pues se trataba de un ser todavía en formación. En 1919, la creación del Instituto de Criminología, anexo a la Penitenciaría de Santiago, cuyo objetivo era estudiar a los delincuentes bajo un criterio objetivo o científico, mostró la influencia del positivismo criminológico de la escuela italiana. El doctor José Ducci fue designado jefe del laboratorio de psicología experimental y el médico neurólogo Hugo Lea Plaza (1891-1963), quedó a cargo de la sección antropológica. Lea Plaza había publicado en 1917 un artículo titulado *La escuela criminal positiva*, donde se explayaba sobre las ideas de Lombroso y Ferri. Como complemento al derecho penal clásico, los criminólogos positivistas proponían "sustitutivos penales" y el reemplazo de las categorías legales por la clasificación de los distintos tipos criminales y sus niveles de peligrosidad. La pena (determinada) debía ser reemplazada por el tratamiento (indeterminado). En marzo de 1920, Lea Plaza fue contratado para realizar un estudio sobre los regímenes carcelarios en Europa. En 1923 regresó y al año siguiente expuso en el Congreso Panamericano del Niño, donde propuso terminar con la internación de los niños abandonados en asilos y reemplazar esa práctica por la entrega a familias. El doctor Lea Plaza estudió medicina en la Universidad de Chile, titulándose en 1913 con la memoria "el examen Clínico del Laberinto Posterior", que dedicó al profesor Joaquín Luco: *"a mi distinguido profesor Arriagada con cuyo ejemplo de actividad i de talento clínico*

---

<sup>106</sup> C. URRUTIA, *Niños de Chile*. Colección Nosotros los Chilenos, Editorial Quimantú, junio de 1972.

<sup>107</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 213

*apreciados durante tres años de diaria labor, he sentido acrecentarse mi espontánea inclinación hacia el estudio de la neurología".* Fue el primer profesor de la cátedra de neurología en la Universidad de Chile, puesto que ocupó en 1925. Luego, fundó el Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile e impulsó también la fundación de la Escuela de Servicio Social, después de destacar que junto al estudio clínico de los enfermos existe la necesidad de una definición social del paciente, que debe realizar la visitadora social. Bombero y cronista de los principales diarios de la capital, se desempeñó por un tiempo breve como director interino de la Correccional de Santiago en 1926 y luego de la recién creada Dirección General de Protección de Menores, como resultado de la aprobación de la ley tutelar de menores, en 1928.

## **ORIGEN Y DEBATE DE LEY DE MENORES DE 1928**

En diciembre de 1926, un grupo de diputados presentó una moción referida a la *"protección a la infancia desvalida"*, que no fue discutida porque en agosto de 1927, el Ejecutivo envió su propio proyecto *"sobre protección a los menores abandonados, en peligro material y moral y delincuentes"*. El proyecto había sido elaborado por una comisión liderada por Lea Plaza y fue presentado en el Parlamento por una comisión de senadores y diputados presidida por el médico y diputado del partido radical, Arturo Lois,<sup>108</sup>. El proyecto fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, sin sufrir ningún cambio importante. En buena medida, ello se debió a la consistente alianza entre Lois y Lea Plaza. Arturo Hiparco Lois Fraga había sido elegido diputado de las provincias de Tocopilla, Antofagasta y Taltal por el Partido Radical, en las elecciones parlamentarias de 1925.

La ley N° 4.447 de 1928, creó los Juzgados de Menores, las Casas de Menores, que funcionaban anexas al tribunal, la Dirección General de Protección de Menores y un correccional modelo, el "Politécnico Alcibíades Vicencio". La judicatura de menores estaba facultada para ejercer una gran discrecionalidad en los procedimientos, que eran verbales y sin forma de juicio. Se exigía al juez, sin embargo, adoptar sus resoluciones *"con conocimiento de causa y oyendo a los*

---

<sup>108</sup> Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados, 1928, Tomo II. Pág. 1680.

*funcionarios respectivos”, refiriéndose a los informes periciales que debían elaborar los expertos de las Casas de Menores<sup>109</sup>.*

Los artículos del proyecto que resultaron claves en su discusión posterior, fueron el artículo 3: *Para los efectos de esta ley, se considerará menor a toda persona que tenga menos de 20 años* y el artículo 19: *Tanto el menor de dieciséis años, como el mayor de esa edad y menor de veinte que haya obrado sin discernimiento, que aparezcan como inculpadados de un crimen, simple delito o falta, serán juzgados por el Juez de Menores respectivo, quien no podrá adoptar respecto de ellos otras medidas que las establecidas en esta ley. La declaración previa acerca de si ha obrado o no con discernimiento, deberá hacerla el juez de menores, oyendo a la Dirección General de Protección de Menores o al funcionario que ésta designe<sup>110</sup>.*

El mensaje de la ley enfatizaba la cruzada por la infancia en peligro, por la infancia desvalida y abandonada que corría el riesgo de transformarse en peligrosa si no se emprendía una acción correctiva:

“La infancia desvalida, abandonada y delincuente es un hecho de tan grave y notoria trascendencia social, que no es posible continuar más tiempo ante él en una actitud de simple expectación. En efecto, por una parte, el niño abandonado o delincuente es síntoma de grave mal que urge remediar; por otra, es en sí mismo un peligro permanente que es indiscutible corregir (...) las causas del abandono y la delincuencia infantil, son en primer término (...) la constitución irregular de las familias y la desorganización de éstas, por irresponsabilidad o inmoralidad de los padres. En cuanto a las consecuencias, de íntimo interés para la conservación de la sociedad y de la raza, son tan visibles, que no ha menester insistir para convenir que la solución de este problema es de suma urgencia”<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> M. CILLERO, “Evolución histórica de la consideración jurídica ... Pág. 102

<sup>110</sup> “Proyecto de ley de protección a la infancia desvalida”. Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados, Tomo II, Sesión ordinaria N° 36, martes 28 de agosto de 1928.

<sup>111</sup> “Mensaje de la ley de protección de la infancia desvalida”. Historia legislativa de la ley 4.447, 28 de agosto de 1927.

El Ejecutivo, en nombre de la economía social e invocando postulados positivistas, proponía diferenciar el tratamiento jurídico que recibían los niños y los adultos. La mera represión de la peligrosidad de los niños delincuentes, subestimaba las virtudes de un *“tratamiento científico adecuado”* que, en determinadas circunstancias, podía sacar a luz aspectos de utilidad social en el comportamiento del niño. En su presentación del proyecto en la sala, el diputado y médico Ricardo Lois, relaciona directamente el fracaso del reformatorio, tal como se conocía hasta entonces, con la falta de una adecuada legislación y un enfoque pedagógico moderno:

”Sostuve en otra ocasión, refiriéndome a la Escuela de Reforma, que la verdadera causa del fracaso del reformatorio para niños era la antigüedad de sus reglamentos y la falta de una legislación moderna para proteger a la infancia desvalida y abandonada, para corregir a los delincuentes. Una comisión designada por el ministro de justicia para investigar cargos hechos a la escuela de reforma y su dirección, terminó manifestando textualmente: *“por lo expuesto, nos parece que mientras no se realice una reforma completa de la legislación de menores, no puede acometerse con eficacia la reorganización total y definitiva de la Escuela de Reforma”*<sup>112</sup>

En una larga exposición, coincide con el mensaje del Ejecutivo y afirma la conveniencia del tratamiento médico – pedagógico:

“La materia que se presenta a nuestra consideración y estudio está íntimamente ligada a la psiquiatría y medicina legal y tiene su base en las nuevas tendencias y doctrinas de estas ramas científicas. El libre albedrío que supone al hombre dueño de sus facultades y acciones y que al convertirse en delincuente lo hace porque si y porque quiere serlo, ha cedido paso a nuevas escuelas experimentales y científicas. (...) Merecen especial observación los factores externos que miran al medio ambiente social y físico en que actúa el futuro ser, delincuente o no, desde que nace. Los que conocen nuestro país de Norte a Sur y observan el medio que rodea al niño chileno desde que llega al mundo, la forma como se le educa, la falta de protección y ayuda que se le da, etc., no encuentra sino factores, parece buscados deliberadamente, para llevarlo a la miseria, el abandono y a la degeneración (...) El proyecto

---

<sup>112</sup> Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados, 1928, Tomo II. Pág. 1680.

presentado, tiene que utilizar al clínico, al psiquiatra, al juez paternal, conocedor de los nuevos principios de criminología y muy preparado en estas materias. Verdaderamente, profesor, médico y juez de menores, deben seguir este proyecto, entrar al estudio de cada caso. Un niño abandonado, un vagabundo, un criminal, un atrasado mental, es un caso clínico, de estudio, profilaxis y tratamiento. La medicina social, con frecuencia, cambiando el ambiente familiar y del niño, hace un gran papel”<sup>113</sup>.

Criticando el trabajo infantil en la región carbonífera, considera que *“la moral que se desenvuelve a su alrededor”* es propicia a formar *“el joven pervertido, malo y delincuente”*; y cuando considera el trabajo en la región salitrera, no deja de ver los *“factores de índole social que acarrear la miseria, el abandono, la inmoralidad y la degeneración familiar chilena”*. El diagnóstico se completa con una visión sobre la *“atmósfera infecta”* de la habitación obrera, el hacinamiento, la costumbre de vivir con animales, la familia incompleta, la falta de instrucción del obrero y el mal ejemplo de los vicios y el alcohol. *“A esto se agrega en nuestra capital, el gran porcentaje de niños con tara hereditaria sifilítica, alcohólica o tuberculosa que establecen un número regular con retardo mental, debilidad, raquitismo, perturbaciones nerviosas que forman un terreno propicio a la delincuencia infantil”*<sup>114</sup>. Los métodos de examen deben tener por objeto establecer las causas, condiciones y el diagnóstico del delito. Cita al psiquiatra Jorge Escobar: *“El criterio actual se aparta de esa preocupación de la responsabilidad para atender a la defensa social adaptada a la temibilidad de los delincuentes”*. Luego, presenta una clasificación psicopatológica de los delincuentes, tributaria, como otras clasificaciones de la época, de la tipología elaborada por Lombroso en *“el hombre delincuente”*:

“Anómalos morales:

Congénitos - delincuentes natos o locos morales;

Adquiridos - Delincuentes habituales o pervertidos morales;

Transitorios - Delincuentes de ocasión;

Anómalos intelectuales:

Congénitos - Delincuentes por locuras constitucionales;

---

<sup>113</sup> Cf. Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados, 1928, Tomo II. Pág. 1680, 1681 y 1684.

<sup>114</sup> Boletín... Pág. 1684.

Adquiridos - Delincuentes por locuras adquiridas, obsesiones criminosas;  
Transitorios - Embriaguez, locuras tóxicas, etc.  
Anómalos volitivos:  
Congénitos - degenerados, impulsivos natos, delincuentes epilépticos;  
Adquiridos - Delincuentes alcoholistas, crónicos, impulsivos, etc.;  
Transitorios - Impulsivos pasionales, delincuentes emotivos, etc.;  
Anomalías combinadas:  
Afecto - intelectuales - Delincuentes estéticos  
Intelecto - volitivos - obsesiones impulsivas  
Afecto - impulsivos - impulsivos pasionales  
Afecto – impulsivos – intelectuales - degeneración completa del carácter”<sup>115</sup>.

Culmina su defensa del proyecto, afirmando: *“El delito en el niño, mirándose como un síntoma o consecuencia de su estado moral, no es castigado. Debe aplicársele un tratamiento médico y pedagógico, tratándose de transformarlo en un elemento útil y, a la vez, defendiendo a la sociedad de él, conforme a su grado de temibilidad”*<sup>116</sup>. La temibilidad o la peligrosidad de los delincuentes, está directamente relacionada con su grado de degeneración. En cada uno de las tres tipos fundamentales, anómalos morales, anómalos intelectuales y anómalos volitivos, el primer grupo, el de los congénitos, representa a *“los delincuentes más degenerados”*, nada o poco reformables, *“contra los cuales deben ser más severas las medidas de secuestación”*. En cambio, respecto del tercer grupo, los transitorios, *“sólo cabe pensar en la condena condicional, la secuestación en reformatorios de régimen suave, la reeducación social y la liberación condicional, dentro de la pena indeterminada”*<sup>117</sup>. Invoca en su favor lo acordado en el Cuarto Congreso Panamericano del Niño, realizado en Santiago en 1924, que en el punto 6° tuvo como tema la criminalidad, en cuanto a que *“todos los especialistas coinciden en la forma como debe procederse con el niño abandonado, con el atrasado mental y el delincuente”*<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> Boletín... Pág. 1685 - 1686.

<sup>116</sup> Boletín... Pág. 1686.

<sup>117</sup> Boletín... Pág. 1686.

<sup>118</sup> Boletín... Pág. 1686.

En la discusión, algunos parlamentarios expresaron su discrepancia con un aspecto medular del proyecto, cuál era la propuesta de elevar la edad de irresponsabilidad penal de 10 a 16 años y supeditarla a la existencia de discernimiento entre los 16 y los 20 años. Edwards Matte, objetó que esto no se justificaba en Chile: *“en otros países de razas de más lento desarrollo puede justificarse establecer estas edades, relativamente altas; pero no creo que en un país como el nuestro, cuya raza es de precocidad extraordinaria, haya ventajas en aumentar, de esta forma tan sensible, la edad de exención de responsabilidad”*<sup>119</sup>. Lois, argumentó lo contrario. Por estar sumido en la miseria y por el ambiente social que le rodea, *“el niño chileno es mucho menos preparado, lo que justifica una edad mayor”*. Los niños chilenos son *“científicamente más atrasados”*, señaló<sup>120</sup>. De vuelta, las tesis de Lombroso, Ferri o *“cualquier otro positivista”*, fueron descartadas explícitamente por Edwards Matte, quien recomendó reponer los fueros del libre albedrío y considerar los beneficios de la responsabilidad. Los ánimos se apaciguaron cuando Guzmán García aclaró:

“Es cierto que se ha prolongado la edad en que se considera que un menor ha obrado con discernimiento y también aquella hasta la cual es precisa la declaración del juez de que consta que ha obrado con discernimiento para que incurra en responsabilidad (...) El proyecto deja expreso testimonio de que aun cuando se declare que el menor ha obrado sin discernimiento, eso no quiere decir que no queda sujeto a ciertas disciplinas o a la acción de reeducación de que aquí se trata. Las disciplinas son devolverlo a sus padres o guardadores previa amonestación, someterlo a la vigilancia de la Dirección General de Protección de Menores; confiarlo a un establecimiento de educación que el tribunal considere adecuado y dejarlo al cuidado de otra persona o familia”<sup>121</sup>.

Aclarado el punto, los opositores tuvieron que contentarse con que se reconociera que la disposición era contradictoria con la capacidad legal para testar que tenían los niños menores de 14 (o 12 años, en el caso de las niñas).

---

<sup>119</sup> Boletín... Pág. 1733.

<sup>120</sup> Boletín... Pág. 1734.

<sup>121</sup> Boletín... Pág. 1736.



El debate parlamentario se dio en los exclusivos términos de la amenaza representada por la peligrosidad de los niños, con el triunfo de la tesis de que el castigo debe administrarse de acuerdo con dicha peligrosidad, mezcla de habitualidad y enfermedad. Las necesidades de “asistencia y protección” de la infancia desvalida estuvieron completamente ausentes del debate. Asimismo, cuando se decidió ampliar la franja de inimputabilidad penal y se mantuvo el trámite del discernimiento, el primado de las tesis del positivismo criminológico fue también manifiesto.

Las ideas y planteamientos de los Congresos Panamericanos del Niño, ejercieron una significativa influencia sobre los Estados para legislar y planificar actividades de asistencia para la infancia. El tratamiento de las cuestiones de la infancia en peligro y la infancia peligrosa, se vio teñida por tópicos eugenésicos y de mejoramiento de la raza. El IV Congreso Panamericano de Derechos del Niño, realizado en Santiago de Chile, en 1924, declaró que buscaba *“la realización del más bello ideal humano, la conservación y mejoramiento de la especie”*. El niño abandonado o delincuente era lo opuesto a la imagen del niño ideal, que debía ser robusto, fuerte, sano, limpio y educado: *“Los congresos son verdaderas cruzadas de redención y solidaridad humana (...) en la defensa de la sociedad para lo más sagrado y lo más indispensable; el porvenir de la raza (...) la escuela debe formar desde temprano en el alma juvenil el horror a la mendicidad y el concepto de la dignidad del trabajo, el cuidado de los organismos empobrecidos para que no se conviertan más tarde en detritus y seres peligrosos”*<sup>122</sup>.

Los Congresos recomendaron aplicar el tratamiento pedagógico correccional a niños anormales y delincuentes y recomendaron que el diagnóstico clasificatorio fuese un requisito para el ingreso a cualquier escuela. El Primer Congreso Panamericano, de 1916, recomendaba *“que todos los niños que ingresen a las escuelas oficiales y particulares sean examinados y clasificados de acuerdo a su estructura físico-psíquica y moral”*. El Cuarto Congreso, realizado en Santiago en 1924, indicó que *“en vista de lo complejo que resulta la asistencia social de la infancia delincuente, una casa central de observaciones y clasificación individual de*

---

<sup>122</sup> S. IGLESIAS, H. VILLAGRA y L. BARRIOS, “Un viaje a través de los espejos de los Congresos Panamericanos del Niño”, en: *Del Revés al Derecho: La condición jurídica de la infancia en América Latina*. UNICEF, UNICRI, ILANUD, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1992.

*los menores sometidos al fuero de los tribunales para niños, a fin de indicar al juez respectivo el tratamiento que convenga aplicar a cada caso". En el Congreso de 1924, se recomendaba también que la educación para los niños anormales debiera realizarse por separado en escuelas especiales, pues "los débiles mentales serán considerados una amenaza para el bienestar social y el futuro de la raza y porque la deficiencia psíquica se transmite por herencia de acuerdo con la ley de Mendel". Debía encomendarse al Estado la instalación de "Escuelas especiales para anormales mentales o clases especiales para anormales o delincuentes, sin establecer diferencias entre ambos grupos y de asilos colonias para niños ineducables". A continuación, enumera los "establecimientos indispensables para la científica y completa asistencia social de la infancia: 1. Establecimientos primarios para los niños de edad escolar; 2. Colonias agrícolas y escuelas industriales de artes y oficios, de acuerdo con las características del país; 3. Escuelas de régimen y disciplina militares para los culpables reincidentes, los incorregibles, violentos, etc.; 4. Casas auxiliares dentro de las ciudades, en relación con los reformatorios, para alojamiento de los niños egresados de estos últimos, durante el peligroso período de readaptación a la vida libre; 5. Colonias climatéricas, de mar y de montaña, para niños débiles, pretuberculosos o afectados de tuberculosis latentes o larvadas; y 6. Institutos médico-pedagógicos con las secciones necesarias para inadaptables, epilépticos, retardados, imbeciles, etc."*<sup>123</sup>.

La transformación histórica del derecho de menores implicó tanto cambios como continuidades. La ley de menores mantuvo tanto el Derecho Penal de Adultos - atenuado-, como el Poder Penal Doméstico (en el derecho del padre a corregir a sus hijos a través del encierro correccional), incorporando una tercera forma de control, que en adelante será conocida como Derecho Tutelar de Menores, sustrayendo a los menores del proceso penal *"aumentando la franja de edad de aplicación del discernimiento, como mecanismo de selección en virtud del cual se elige a algunos niños de entre los mayores de 16 y menores de 20 para ser enviados al sistema penal de adultos-. Los menores de 16, así como los declarados sin discernimiento, pasaron a partir de ese momento a ser sometidos a la nueva forma de control que representaba el Derecho Tutelar de Menores"*<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> S. IGLESIAS, H. VILLAGRA y L. BARRIOS, "Un viaje a través de los espejos... 1992.

<sup>124</sup> J. CORTES, "¿Cómo entender la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes dentro de las transformaciones históricas globales del control social punitivo? Algunas reflexiones críticas y

Luego de más de dos décadas de aplicación de este sistema, las franjas de edad se modificaron mediante la Ley 11.183 de 1953, que rebajó la edad de responsabilidad penal de 20 a 18 años, con lo que el discernimiento pasó a aplicarse a los mayores de 16 y menores de 18, en lugar de a los mayores de 16 y menores de 20. Las restantes modificaciones realizadas a la ley de menores, consistieron en algunos cambios administrativos y de procedimiento. Los más importantes, tuvieron que ver con la creación de la categoría de “menores en situación irregular”, en la radicación de la competencia de protección de menores en distintos ministerios y en la creación de mecanismos de coordinación por parte del Estado.

La ironía del triunfo de los reformadores fue que, a pesar de las declaraciones sobre los nuevos centros que se crearían en el nuevo sistema, este siempre se caracterizó por su “baja intensidad” y escasez de recursos, y por la falta de voluntad política para impulsar su desarrollo. El reformatorio modelo, el “Politécnico Elemental Alcibíades Vicencio”, ubicado en la zona rural de Cerro Negro en San Bernardo, continuó siendo por mucho tiempo el único establecimiento correccional. El modelo educativo del politécnico consistía en la reeducación de los jóvenes por medio del trabajo agrícola (ganadería, lechería, avicultura, apicultura, plantaciones, etc.) e industrial (talleres de encuadernación e imprenta, herrería, carpintería, sastrería y zapatería). El centro recibía a niños y adolescentes de entre 9 y 19 años, por diferentes delitos y faltas. Contaba en su interior con una escuela primaria, además de una brigada de *scouts* y actividades deportivas y recreativas. Se aplicaba un sistema de premios (permisos para visitar a la familia, paseos) y castigos (en una escala ascendente: desde amonestación hasta privación de visitas y reclusión en la cámara de disciplina). Las instalaciones estaban ubicadas en un terreno abierto, que no tenía cercas y en su interior se intentó reproducir un sistema de pequeños hogares<sup>125</sup>. Pero el modelo no logró ajustarse –o tardó en hacerlo– y se hicieron muy frecuentes las fugas, las rebeliones de alumnos y las denuncias de maltrato, abusos sexuales y castigos excesivos. Se acusó incluso la existencia de una “cultura carcelaria” en su interior, con rituales de iniciación y códigos internos. En 1939, el teniente coronel Ricardo Dávila Budge

---

*propuestas de acción”, en: “JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO” Número 10, UNICEF, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Septiembre de 2008.*

<sup>125</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 427.

criticó las irregularidades y el exceso de libertades al interior del Politécnico: *“los niños dormían en los cerros del fundo, a toda intemperie y no asistían a las actividades programadas”*<sup>126</sup>.

## LOS MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR

En 1942, las organizaciones de protección fueron subordinadas al Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, creándose la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia, PROTINFA<sup>127</sup>. La PROTINFA aglutinó el Departamento de Bienestar de la Madre y del Niño y sus centros preventivos, el Servicio Dental Escolar Obligatorio, el Departamento de Sanidad Escolar y los médicos escolares de Santiago y provincias. Se creó el Departamento de Menores en Situación Irregular. La nueva estructura orgánica definió por primera vez a los niños abandonados, anormales y delincuentes como “menores en situación irregular”. El texto del decreto decía: *“Para los fines de protección y auxilio (...) se entenderá que un menor se encuentra en situación irregular, cuando su adaptación social sufre alteraciones, se encontrare moral o materialmente abandonado o en peligro de estarlo, o hubiere delinquido, cualquiera que sea su estado civil”*. El autor de esta definición, el médico psiquiatra Guillermo Morales Beltrami, reconocía que *“era desorbitadamente extensa e incluía a niños resentidos por perturbaciones individuales (motoras, sensoriales, psíquicas), sociales y morales”*<sup>128</sup>. En 1952, la PROTINFA y los servicios de atención a menores en situación irregular fueron integrados a la sección materno-infantil del Departamento de Fomento del Servicio Nacional de Salud (SNS) y en 1959 se creó la Sección Menores en Situación Irregular, dentro del nuevo Subdepartamento de Fomento de la Salud. Esta sección era la encargada de supervigilar y coordinar las acciones de protección a nivel nacional. El SNS definió la “situación irregular” como *una condición genérica, que comprende un gran número de estados adversos, cada uno de los cuales constituye un cuadro peculiar, con su etiología, pronóstico y tratamiento diferentes. Lo común de todos estos estados adversos estriba en el hecho de que alteran, inhiben e imposibilitan -transitoria o definitivamente- el desarrollo del niño y su normal*

---

<sup>126</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Págs. 430 - 431.

<sup>127</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 421.

<sup>128</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 422.

*convivencia dentro de la comunidad*<sup>129</sup>. El desarrollo y adaptación social del niño eran entendidos desde un enfoque médico-sanitario, que parecía primar por sobre el enfoque jurídico - pedagógico. En todo caso, los menores con “retardo intelectual” fueron asignados al Subdepartamento de Recuperación de la Salud.

Pero no todos estaban de acuerdo con esta manera de ver las cosas. Samuel Gajardo, el primer juez de menores relata en sus memorias que, desconfiando del régimen demasiado abierto del Politécnico Alcibíades Vicencio, dejó de enviar niños “peligrosos” a ese lugar y prefirió mantenerlos en la Casa de Menores que según él, debía recibir únicamente a menores delincuentes y de conducta irregular y no a niños abandonados. Rescataba con ello la intencionalidad originaria de la creación de las Casas de Menores, como centros de diagnóstico más que como establecimientos de educación y formación, que era en lo que se habían convertido. Por otra parte, defendió las prerrogativas de la justicia de menores cuando se “endureció” el Código Penal en 1953 a través de la ley 11.183, que rebajó la edad de imputabilidad penal, de 20 a 18 años. Gajardo alegó que eso era equivalente a traspasar a los muchachos a la justicia ordinaria y “eliminar” por esa vía la delincuencia juvenil, sin que realmente se enfrentara el problema<sup>130</sup>. Otras críticas en contra de la dependencia de los servicios de protección de menores de los servicios de salud, planteaban el traslado de esta función al Ministerio de Educación, juzgada más apropiada que su dependencia de salud o de justicia. La dependencia de Salud fue también criticada por la prensa. El diario La Nación, en una editorial del 5 de agosto de 1957, señalaba: *“constituyó un grave error haber ubicado los servicios de reeducación de menores en la compleja y pesada estructura del Servicio Nacional de Salud. Al parecer, influyó en la determinación aludida un criterio eminentemente médico en el enfoque de los problemas de la minoría desamparada. No se explica de otra manera que los establecimientos y organismos que antiguamente correspondieron al Departamento de Menores en situación irregular de PROTINFA, aparezcan en la actualidad diluidos en unidades de tipo sanitario”*<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> J. E. CORTÉZ, “Desarrollo de los sistemas de atención a la infancia en Chile”, en: F. PILOTTI (Coord.), *Infancia en Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile*, Instituto Interamericano del Niño (IIN), Montevideo, 1994.

<sup>130</sup> Citado por J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 506

<sup>131</sup> M. CILLERO, “Evolución histórica de la consideración jurídica ... Pág. 105

Los problemas de coordinación y regulación del sistema llevaron al propio SNS a proponer la creación de una Comisión Interministerial para la Protección de los Menores en Situación Irregular en 1960, integrada por los Ministerios de Interior, Justicia, Educación, Salud y del Trabajo y Previsión Social. La Comisión definió al menor en situación irregular *como todo aquel que por causas personales, psíquicas, ambientales o mixtas tiene problemas para su adaptación social o presenta una conducta antisocial, persistente o progresiva, que no puede ser corregida por los medios naturales, sino a través de una protección especial dada por el Estado o la comunidad*<sup>132</sup>

Las críticas al marco legal que regulaba la acción del Estado y su vinculación y coordinación con las instituciones privadas dieron pie a un debate que llevaría a modificar la legislación. En 1964 un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley para establecer un servicio que llevara a cabo *la planificación científica, la fijación de normas y la coordinación de la labor de los servicios públicos y privados que tienen por objeto la atención de los menores que requieren de un tratamiento especial para su resocialización o rehabilitación o que se encuentren en necesidad de protección*<sup>133</sup>. El proyecto fue respaldado por el gobierno y fue aprobado y promulgado en julio de 1966 (ley N° 16.520), creándose el Consejo Nacional de Menores, CONAME. Este texto fue refundido con la ley N° 14.902 y dio origen a la todavía parcialmente vigente ley de menores, N° 16.618, publicada el 8 de marzo de 1967. Las novedades de la ley eran la creación de la Policía de Menores y del citado CONAME. La ley también devolvió la dependencia de la protección de menores al Ministerio de Justicia, donde continúa en la actualidad. El CONAME estaba encargado de *planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y la organización de las entidades y servicios públicos y privados que presten asistencia y protección a los menores en situación irregular*. Entre sus funciones estaban la de coordinar la labor de protección que realizaran las instituciones fiscales, autónomas, municipales y privadas; reconocer la calidad de “colaboradores” a las instituciones privadas; destinar recursos a estas organizaciones, elaborar programas de tareas mínimas y supervigilar su observancia<sup>134</sup>. El reglamento del CONAME especificaba que el reconocimiento de

---

<sup>132</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 507

<sup>133</sup> M. CILLERO, “Evolución de la consideración jurídica...”, *Óp. Cit.*, Pág. 109

<sup>134</sup> Ley 16.520 y 16.618, en: Biblioteca del Congreso Nacional.

colaboradores no estaba reservada solo a los clásicos asilos, reformatorios e internados, sino que se abría también a iniciativas entendidas como preventivas, tales como los jardines infantiles en poblaciones populares y los clubes de menores. Reflejando las ideas de participación democrática en auge en esos años, se establecía que los clubes debían estar organizados con una directiva *formada por los propios menores*, asesorada por personal adulto. Con esto se buscaba *prepararlos para la vida comunitaria y desarrollarles su autocontrol*<sup>135</sup>.

La “situación irregular” recibió una clara formulación de parte del médico Hernán Montenegro en 1968, mientras ejercía de vicepresidente ejecutivo del CONAME. Montenegro identificó cuatro grupos de menores en situación irregular: “1. *Menores que presentaban graves problemas derivados del ambiente y leves problemas conductuales*; 2. *Menores que sufren alguna irregularidad de tipo física o psíquica y que le van a producir una inadaptación social*; 3. *Menores en conflicto con la justicia*; 4. *Menores cuya irregularidad está condicionada fundamentalmente por problemas económicos*”. Más tarde, en 1970, agregaría un quinto grupo, que incluye a aquellos que están en condiciones previas a las que caracterizan los primeros tres grupos de irregularidades señaladas en su clasificación original<sup>136</sup>. En esta clasificación volvemos a encontrarnos con los niños anormales y delincuentes, que se distinguen en las tres primeras formas de “conducta inadaptada”, pero se agregan en el cuarto grupo problemas sociales como la pobreza y en el quinto, la prevención, cuyo desarrollo daría origen, en las próximas décadas, al concepto y a la política de “prevención del *riesgo social*”.

El Consejo Nacional de Menores no estaba facultado para administrar directamente centros, lo que se hacía necesario porque las instituciones privadas no alcanzaban a satisfacer la demanda de los tribunales de menores. Para subsanar esta limitante, se creó en 1970 un ente jurídico, la Fundación Niño Chileno (FUNICH), que tuvo por misión crear y administrar centros de menores con aportes de CONAME. Su directorio estaba integrado por once miembros, de los cuales seis eran propuestos por el CONAME y los otros cinco por un grupo limitado de organizaciones: Fundación Mi Casa, Consejo de Defensa del Niño, Congregación del

---

<sup>135</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 513

<sup>136</sup> H. MONTENEGRO y OTROS, “El menor en situación irregular en un distrito del Gran Santiago: medición de su frecuencia y de su asociación con algunas variables”, CONAME, Santiago, 1970.

Buen Pastor, Fundación Hogar de Cristo y Fundación Niño y Patria (de Carabineros de Chile), es decir, las instituciones privadas y públicas más importantes de la protección de menores en Chile. El CONAME debía auspiciar la construcción de nuevos centros, pero el programa de construcciones tardó en aplicarse. Sólo a fines de 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular (1970 - 1973), la revista *Ramona* informaba del pronto funcionamiento de quince nuevos hogares, lo que permitiría aumentar de 11.726 a 26.397 el número de menores en situación irregular atendidos, lo que representaba el *esfuerzo de carácter remediativo más grande que se ha hecho por parchar el problema de los pelusas*<sup>137</sup>. Las cifras de atenciones que manejaban el Estado y las instituciones privadas variaban según la fuente. Un estudio realizado por Patricia Sboccia en 1971, mostró que el Servicio Nacional de Salud tenía una capacidad de atención de 4.150 plazas, el Ministerio de Educación mantenía algunas escuelas en establecimientos de protección y a ellas asistían unos 7.500 menores, el Servicio de Prisiones tenía a unos 1.200 menores en las secciones juveniles de las cárceles y a las instituciones colaboradoras del CONAME asistían unos 34 mil. De estos, 19 mil recibían recursos del Consejo y el resto provenía de fuentes propias.

La Unidad Popular, que emprendió la “vía chilena al socialismo” a fines del año 1970, utilizó varios lemas que sirvieron para resaltar la importancia del niño en su gobierno: “la felicidad de Chile comienza por los niños” y “de la seguridad de los niños depende el futuro de Chile”, son algunas muestras de los afiches de la época. Varias políticas aplicadas durante los tres años de gestión, como el esfuerzo por asegurar medio litro de leche diarios a todos los menores de 15 años (el Estado venía distribuyendo leche desde la promulgación de las leyes sociales en 1924, aunque en volúmenes poco significativos), debido a que según la visión de salud imperante entre los médicos de la UP, la situación alimentaria de los sectores populares era la causa directa de las altas tasa de “deficiencia mental” y de la baja estatura promedio del chileno; la educación preescolar, las campañas de vacunación y la ampliación de los derechos maternales, que la oposición

---

<sup>137</sup> “Un pelusa por cada cinco niños chilenos”, *Ramona*, Santiago, N° 47, 20/Sept. 1972. Págs. 22-27. “Pelusa” era la denominación por la que se conoció hasta la década de los 60 a los niños de hogares pobres que deambulaban por las calles, mientras que a inicios de los 70, la denominación que comenzaba a usarse era la de “cabros chicos”. Una revista para niños, auspiciada por el gobierno de Allende, llevaba también ese nombre.



desmereció y que, luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fueron ignorados por las estadísticas oficiales. El gobierno popular propuso la creación de un Ministerio de la Familia, por el cual se esperaba fortalecer las políticas de protección a la familia, la condición de la mujer, los ancianos y los niños. El proyecto comenzó a tramitarse en febrero de 1971 y en octubre de 1972 fue aprobado su texto en general. Aunque logró ser aprobado un poco antes del golpe, no fue promulgado y la disolución del Congreso hizo que quedara en el olvido. El proyecto proponía que el nuevo ministerio concentrara las funciones de varias instituciones relacionadas con la familia y la infancia, como la Consejería de Desarrollo Social, el Servicio de Asistencia Social, el Consejo Nacional de Menores (CONAME), la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Oficina de Atención al Niño en Situación Irregular del SNS. Para evitar objeciones presupuestarias, se proponía utilizar la planta funcionaria de las mismas organizaciones que confluían en el nuevo ministerio<sup>138</sup>. Finalmente, en lo que se refiere específicamente a la justicia de menores, se hizo una vaga referencia a una legislación que protegiera al menor, para *una adecuada organización nacional de la vida familiar y vecinal*<sup>139</sup>.

La política del gobierno popular en el área de los menores en situación irregular, tendió a plasmarse en iniciativas más generales de salud, recreación y participación de los niños populares. En sus acciones, el gobierno mantuvo o enfatizó quizá la tendencia -ya observada-, de poner énfasis en los aspectos sociales de la “situación irregular”. Se trataba más que nada de avanzar en justicia y protagonismo popular. Años después del golpe, a fines de la década de los 70, un estudio realizado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, que intentó definir sociológicamente la “situación irregular” y medir su magnitud en el país, revelaba el desfase de este enfoque respecto de la cruda realidad de esos años. En el estudio, se asoció la “situación irregular” con un estado de desprotección de los menores, en términos de la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y cuidado, tanto por razones socioeconómicas como familiares del niño o niña. Así entendida, resultaba que para ese entonces alrededor del 80% de los niños y adolescentes del país podía ser incluido en esta categoría. Emerge en

---

<sup>138</sup> J. ROJAS, *Historia de la Infancia en el Chile Republicano...* Pág. 624, 635, 637 y 650-651.

<sup>139</sup> “Líneas básicas de la política jurídica del Gobierno de la Unidad Popular”, *Archivos Salvador Allende*. En: <http://www.salvador-allende.cl>

este estudio el tema de los derechos de los niños, pero aun mezclado con las concepciones sobre la situación irregular. Se suponía que esta investigación serviría de base para la planificación de los programas sociales de la dictadura, pero ante los resultados obtenidos, fue descalificado e ignorado<sup>140</sup>. Por esos años, el autor principal del estudio publicaría un corrosivo “mapa de la extrema riqueza en Chile”, ampliamente leído y que revelaba cómo las políticas neoliberales de la dictadura habían favorecido el surgimiento de los “grupos económicos”, fuertemente golpeados luego por la crisis económica de 1982.

Las fuertes restricciones al sector público y la política de “shock” monetarista, impulsada por la dictadura militar en 1975, dieron la partida a las restricciones permanentes de presupuesto y de personal en el aparato del Estado, lo que afectó el funcionamiento del CONAME y su capacidad para seguir creciendo. A fines de 1979, del total de 33.564 niños del sistema, un 27% era atendido en el sector estatal y un 73% en las instituciones privadas. Por su parte, FUNICH administraba 33 centros, de prevención, protección, rehabilitación y de diagnóstico, donde se atendían 3.705 niños<sup>141</sup>.

La creación del Servicio Nacional de Menores, SENAME, en 1979, que reemplazó al CONAME, encarnó la etapa en que la orientación neoliberal, dominante en la segunda mitad de los años 70 en el ámbito de la economía, se introdujo en la administración de los servicios sociales. Los cambios en el sector económico, iniciados en 1974, involucraron a todos los sectores sociales a partir del año 1981: privatización de la salud, de la educación y de la previsión social y nueva legislación laboral. En todos estos sectores, la administración del Estado retrocedió en favor de la iniciativa privada, en función de la aplicación del principio de subsidiariedad. Los mecanismos de subsidio a la demanda que se instalan en la educación, la salud y, ahora, en la atención de los “menores en situación irregular”, -vigentes hasta el día de hoy- se justifican en aras del ejercicio de la libertad de elegir y emprender. A partir de la creación del SENAME, se institucionaliza un modelo de carácter

---

<sup>140</sup> J.E. CORTEZ, “Desarrollo de los sistemas....”, Óp. Cit., Pág. 240

<sup>141</sup> Cifras aportadas por J. ALVAREZ, “La experiencia neoliberal en la atención de menores en riesgo social”, en: F. PILOTTI (Coord.), *Infancia en Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile*, Instituto Interamericano del Niño (IIN), Montevideo, 1994. Pág. 267.

neoliberal que da forma a un sistema de atención a menores que no tiene similitud en el continente suramericano.

El decreto ley N° 2.465, que dio origen al SENAME, lo facultó para crear y administrar centros de menores *por si o a través de sus instituciones colaboradoras*. Esto último resultaría decisivo, pues la orientación definitiva dada al sistema en 1981, acorde a las orientaciones neoliberales, implicaría que en adelante la atención privada sería la norma. Así, mientras transitoriamente, a mediados de 1979, los centros de FUNICH fueron traspasados a la administración de SENAME, como también las Casas de Menores, los Centros de Gendarmería y todos los establecimientos pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, las demás instituciones estatales, como la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Educación, se definieron como instituciones colaboradoras de SENAME y comenzaron a recibir fondos de “mantención institucional”. Sin embargo, el DFL 1.385 del año 1980, que creó un mecanismo de financiamiento de la atención de menores vía subvención del Estado, hizo realidad el principio de subsidiariedad y durante el transcurso de los años 1981 y 1982, fueron traspasados a instituciones privadas los cuarenta centros administrados por el SENAME. Para evitar protestas de los tribunales de menores, se estableció que todas las plazas de los centros de diagnóstico y rehabilitación administrados por instituciones privadas y el 70% de las plazas de los centros de protección, debían ser ocupadas por los menores que eran enviados por los tribunales. SENAME contribuyó así a poner en marcha un “mercado” de instituciones que entre 1979 y 1989 aumentó la cobertura de atención de menores con financiamiento del Estado en un 55% (de 32.306 subvencionados en 1979 a 48.003 en 1989), aumento que se concentró en un fuerte desarrollo del sistema de protección de tipo internado, que llegó a constituir el 63% del total de plazas subvencionadas (30.014) en 1989. La pobreza y la desigualdad sociales, que tuvieron un fuerte incremento en la década de los años 80, en especial después de la crisis económica del año 1982, podían ser ocultas de este modo en sus aspectos más visibles y puestas bajo el control de las instituciones tutelares.

El concepto de “menor en situación irregular” continúa e innova al mismo tiempo, con la atención de la infancia anormal y delincuente. Innova, debido a la importancia dada a los aspectos sociales y ambientales en la explicación de la delincuencia de los menores. Si antes era la peligrosidad del pequeño criminal lo

que justificaba la pretensión educativa correccional, ahora esta ponía el acento en procesos de socialización “deficitarios” y en las insuficiencias del control de la familia, la escuela y las organizaciones barriales. La libertad vigilada se alineaba con la pedagogía correccional del centro de reforma, como una opción de control situacional, alternativa o complementaria al encierro. Una estrategia de los *desplazamientos vigilados*, acorde con la naturaleza de los problemas de socialización del niño o adolescente en la familia, el grupo de pares, la escuela, el trabajo y el vecindario. El trabajo pedagógico consistirá en ofrecer modelos de vida pro-sociales, antes que desviados o delictuales. La socialización (o resocialización, según se prefiera) va a ser entendida como la perfecta identidad entre los hábitos de los menores y el marco normativo y legal de la sociedad. El comportamiento ajustado será lo importante a lograr. La concepción de la situación irregular innova también en que la pobreza y los problemas sociales son señalados en parte como causa de la irregularidad social, insinuando una leve perspectiva de preocupación por los derechos de los niños y las niñas.

El nuevo enfoque continúa también con la visión tripartita de la infancia abandonada, anormal y delincuente, en particular las dos últimas. Como aquel enfoque, la definición de menores en situación irregular reproduce la lógica de reenvío de la “infancia peligrosa” a la “infancia en peligro”. El abandono y los problemas de adaptación al medio social llevarían a un niño a la delincuencia, a menos que se corrija su comportamiento. El enfoque de patología individual es también una característica en común. Las definiciones de “situación irregular” de PROTINFA, CONAME o SENAME, a pesar de una creciente abstracción, nos ofrecen los mismos conceptos, la misma mirada normalizadora de los procesos escolares o correccionales y la actuación tutelar, que encontrábamos en el origen:

*PROTINFA, 1942: “Se entenderá que un menor se encuentra en situación irregular cuando su **adaptación** sufre alteraciones, se encontrare moral o materialmente **abandonado** o **en peligro** de estarlo, o hubiere **delinquido** cualquiera sea su estado civil”.*

*CONAME, 1967: “Menores que presenten graves problemas derivados del ambiente y leves **problemas conductuales**. Menores que sufren alguna **irregularidad física o psíquica que les van a producir una inadaptación social**. Menores **en conflicto con la justicia**. Menores cuya irregularidad está condicionada por problemas económicos. Menores en **peligro moral**”.*

SENAME, 1979: “Menores que **carecen de tuición** o que teniéndola, su ejercicio constituye un **peligro** para su desarrollo normal integral; los que presenten **desajustes conductuales** y los que estén en **conflicto con la justicia**”.

El Decreto con fuerza de ley N° 1.385, del 15 de octubre de 1980, que fijaba el nuevo régimen de financiamiento vía subvenciones para las instituciones colaboradoras del SENAME, creó doce sistemas asistenciales en que se reconoce la primacía de la categoría de la “infancia anormal”: 1. Tránsito y Distribución, 2. Observación y Diagnóstico, “*destinada a acoger, en forma transitoria, a los menores que han cometido hechos constitutivos de crimen o simple delito, hasta que el juez adopte una resolución a su respecto y resuelva acerca de su discernimiento*”; 3. Prevención, 4. Protección simple, 5. Protección de deficientes leves y moderados, 6. Protección de deficientes leves y moderados diurna, 7. Rehabilitación psíquica, 8. Rehabilitación conductual, “*destinada a atender a aquellos menores que presenten alteraciones en su conducta, es decir, hubieren cometido hechos constitutivos de crimen, simple delito o falta*”, 9. Rehabilitación de deficientes mentales profundos, 10. Rehabilitación psíquica diurna, 11. Libertad Vigilada, “*medida de tratamiento aplicable por resolución judicial a los menores inimputables que han cometido una infracción a la ley, o que presenten graves problemas conductuales, tendientes a inducir cambios en su conducta social, logrando su readaptación y rehabilitación, bajo la influencia de un funcionario especializado denominado Delegado de Libertad Vigilada*” y 12. Colocación Familiar”<sup>142</sup>.

Los esfuerzos que se realizan para pensar el campo de la infancia anormal y delincuente o de la situación irregular en conexión con la pobreza y el intento por diseñar una política de protección de los derechos en paralelo; olvidan que este campo está constituido por un entramado de saberes jurídico, médico y pedagógico, que cumple funciones de control social y que no puede ser pensado de modo separado o, como plantean ciertos autores, ilusionarse con la primacía de un sector sobre el otro en la definición de las políticas y acciones que se desarrollan en el ámbito del trabajo con los menores.

---

<sup>142</sup> D.F.L. 1.385 de 1980. Disponible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5613>.

## **GESTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE**

Terminada la dictadura de Pinochet en 1989, e impulsados por la renovación del sector durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990 – 1994), los partidarios de las nuevas concepciones sobre la responsabilidad adolescente, lograron impulsar una discusión sobre la necesidad de construir recintos penales de custodia y de cumplimiento de penas para adolescentes separados de los adultos, que culminó con la aprobación de la ley N° 19.343, de erradicación de menores de las cárceles en 1995. La construcción de estos centros habría de servir de base a la actual red de centros privativos de libertad, que posibilitó la ejecución de la medida cautelar de privación de libertad (CIP) y la sanción de internación en régimen cerrado (CRC), establecidas por la ley N° 20.084, como vimos en el primer capítulo. Pero, este pequeño avance fue todo lo que pudo conseguir el grupo reformista pues, aunque el Ministerio de Justicia elaboró un anteproyecto de ley de responsabilidad adolescente en 1998, -que incluso fue difundido ampliamente en el mundo de la academia y de las instituciones de reforma-, nunca llegó a presentarlo. El gobierno de Eduardo Frei (1994 - 2000) no quiso o no supo aprovechar la oportunidad abierta por el amplio consenso político generado en torno a la reforma procesal penal que se discutió en esos años. El proyecto de responsabilidad penal adolescente fue finalmente presentado -con notorios cambios-, en el año 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006), en un escenario mucho más adverso para los propósitos de los reformadores. Ya el avance representado por la ley de erradicación de 1995, había dejado un sabor amargo. Si bien impulsó la construcción de nuevos recintos de custodia y cumplimiento para menores (denominados COD y CERECO, respectivamente), la erradicación de los menores de los recintos penales de adultos no llegó a concretarse. Los números son reveladores: No sólo fue aumentando rápidamente la población vigente en los COD, sino que también se revirtió la tendencia a la disminución que se venía registrando en las secciones juveniles de GENDARMERIA. En 1980, había 1.185 menores en estas secciones como promedio anual, cifra que descendió a 926 en 1990 y llegó a su punto más bajo precisamente en 1995, con 274 menores vigentes. A partir de 1996, este número empezó a aumentar nuevamente y el año 2000 había llegado a 769 menores. En los COD, a su vez, la población llegó a 704

menores vigentes el año 2000<sup>143</sup>. Además, se dispuso que estos centros fuesen custodiados por una guardia armada de Gendarmería de Chile, lo que supuso el inicio de una forma de privación de libertad desconocida en esos años en los centros de menores. Todos los centros fueron dotados de esta guardia y se construyeron inmensos muros para impedir las frecuentes fugas de los menores. La lógica carcelaria se instalaba así en los centros de menores, respaldada por una débil disposición legal. En 1998, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Nigel Rodney, visitó el más emblemático de esos centros, la “Comunidad Tiempo Joven”, y fustigó el encierro de los adolescentes en celdas solitarias como medida de castigo. Sólo en la región de Iquique, en el extremo norte del país, las autoridades defendieron la permanencia de un centro sin gendarmes, pero pronto esta “rebelión” fue sofocada, cuando se acusó que en esos recintos campeaba el consumo de drogas y los menores se encontraban “sin tratamiento”.

Los reformadores se habían trazado el objetivo de establecer un sistema de responsabilidad de los menores por los delitos que cometieran entre los 14 y los 17 años, remplazando la instancia del discernimiento, que afectaba a los mayores de 16 y menores de 18, a cambio de introducir el sistema de garantías sustantivas y procesales propias del derecho penal de adultos, que la justicia de menores negaba, restableciéndoles también de paso, la facultad de ejercer sus derechos y dejar de ser tratados como objeto de protección y tutela. El sentido de la idea de responsabilidad corría el riesgo de ser desbordado o suprimido y así terminó ocurriendo cuando se aprobó la ley.

Los reformadores definieron en el anteproyecto de 1998, un sistema penal de adolescentes de carácter especial, minimalista, con una definición de “infracción juvenil” acotada a un catálogo restringido de delitos, con privación de libertad sólo para los delitos graves y siempre que el adolescente tuviera 16 años, por un máximo de tres años. En el caso de los menores de 14 y 15 años, la privación de libertad sólo se podría aplicar si del delito resultaba la muerte de una persona. Además, todas las penas podrían ser revocadas o sustituidas después de la sentencia. El proyecto que finalmente presentó el Ejecutivo en 2002, después de

---

<sup>143</sup> “Antecedentes del proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente”, Documento de trabajo, División de Defensa Social, Ministerio de Justicia, 2002.

cuatro años de dimes y diretes, difería notablemente del anteproyecto. La espera había sido justificada por la necesidad de concentrar las energías del gobierno en lograr aprobar y poner en marcha la Reforma Procesal Penal de adultos, que entró en vigencia en forma gradual en tres regiones del país en diciembre del año 2000 y terminó de implementarse en la Región Metropolitana, en julio de 2005.

El proyecto de responsabilidad penal de adolescentes fue lanzado el día 2 de agosto de 2002, apoyado por una conferencia de prensa en que se entregaban estadísticas que hacían ver la escasa magnitud y gravedad de los delitos cometidos por los adolescentes y su estabilidad en el tiempo, incluso en comparación con otros países. La prensa, que había estado explotando cifras de Paz Ciudadana, según las cuales “los delitos de mayor connotación social” cometidos por adolescentes se habían triplicado entre 1995 y 2001, tuvo una recepción tibia y contradictoria. El diario *La Tercera* del 6 de agosto de 2002, publicó una nota titulada: *“Chile tiene una de las tasas de detención de menores más bajas del mundo”*, pero la nota confundía la significación del dato, ligándolo a una situación de impunidad. En su apoyo, citaba a la senadora de la UDI Evelyn Matthei, quién señalaba: *“Si las detenciones de menores se han mantenido en el mismo nivel por 20 años, es que la gente, por temor no denuncia y Carabineros simplemente no detiene porque sabe que los jóvenes van a ser soltados a los pocos días”*. El Ministro de Justicia, si bien había respaldado sus cifras, aparecía diciendo que se *“trata de un problema grave y por eso es importante que el Parlamento discuta y resuelva con la mayor prontitud posible el proyecto de ley que rebaja la responsabilidad penal a los 14 años”*. Con todo, la presentación de la noticia fue más moderada que en los noticieros de televisión, donde el ánimo de poner en jaque al gobierno fue manifiesto: utilizando el recurso de la pantalla dividida, la ponderación de la conferencia de prensa y la tranquilidad de las cifras se contraponía bruscamente, como una broma de mal gusto, a la imagen de un adolescente asaltando a un conductor de autobús, con un cuchillo en la mano. Esta imagen había estado en pantalla durante largo tiempo, y servía para fustigar al gobierno con el tema de la impunidad de la delincuencia juvenil.

En el contexto descrito, no fue de extrañar que el proyecto de 2002 acentuara la carga punitiva. El mensaje del proyecto del Ejecutivo introducía argumentos de defensa social, aludiendo a la seguridad ciudadana y a la necesidad de proteger los



derechos de las víctimas de la delincuencia. La tolerancia cero hacía su estreno en materia de delitos juveniles. Ciertamente, se enunciaba el propósito de asentar la posición jurídica del adolescente, pero sin referirse a ningún derecho concreto, solo a la necesidad del Estado de adecuarse a la Convención de los Derechos del Niño. La categoría de “infracción juvenil” sufrió un primer menoscabo, al referirse ahora a todos los delitos tipificados en el código penal y no solo a un catálogo restringido y se incrementó el número de las infracciones consideradas graves. También se incluyó como punibles algunas faltas. El máximo de la sanción privativa de libertad aumentó de 3 a 5 años y se impedía su revisión antes de que el adolescente hubiese cumplido la mitad de la condena.

En la discusión en la Cámara, el proyecto mantuvo una coherencia general, pero se incrementó su grado de punibilidad. Para seguir la discusión del proyecto en el Parlamento, accedimos a un extenso documento en el que se recogen todas las sesiones de las salas y el trabajo de las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Este documento se titula: *Historia de la Ley Nº 20.084* y ha sido preparado por la Biblioteca del Congreso Nacional.

Los defensores más ilustrados del proyecto, es decir, los que consideraban la responsabilidad adolescente como un asunto de derechos, se resistieron en un comienzo a algunos cambios, pero luego cedieron, con la esperanza de conservar más o menos inalterado el relativo carácter especial del nuevo sistema propuesto. Cuando el gobierno justificó la extensión del concepto de “infracción penal adolescente” a cualquier hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal, expresó la intención de que los ilícitos fueran comunes a todas las personas y que la edad se considerara como factor para determinar la responsabilidad. Los parlamentarios favorables a constituir un catálogo cerrado de delitos aplicables a los adolescentes, adujeron que existía una clara diferencia con los mayores, por lo que si se efectuaba una simple remisión a la normativa de adultos, ello significaría dar el mismo trato a ambos grupos. Pero, la mayoría adhirió a la tesis del ejecutivo<sup>144</sup>.

---

<sup>144</sup> Primer Informe Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, 8 de Junio de 2004, en: *Historia de la Ley Nº 20.084*, Biblioteca del Congreso Nacional, Pág. 67.

Igualmente, en la discusión sobre las faltas penales, el gobierno justificó la exclusión de la mayoría de las faltas por un principio de proporcionalidad, no obstante la necesidad de penalizar algunas, por su “relevancia pública o social”; pero cuando los diputados de la derecha Díaz y Forni presentaron una indicación para penalizarlas todas, el diputado Juan Bustos, quien estuvo primero por despenalizar las faltas y aplicar en su lugar medidas de protección, la diputada Soto y el diputado Ceroni, cerraron filas con el gobierno. En esta oportunidad, los reformadores argumentaron que ciertas faltas tienen un significado diferente entre los adolescentes, como por ejemplo, las lesiones leves. Sin embargo, los diputados de gobierno Burgos y Luksic, propusieron penalizar también los desórdenes públicos y el porte de armas, argumentando lo contrario, es decir, la urgencia de actuar cuanto antes, haciendo caso omiso al factor edad<sup>145</sup>.

En la discusión sobre el catálogo de delitos graves, ocurrió otro tanto. El gobierno respondió a la objeción de que el catálogo restringido justificaba la impunidad de los restantes delitos, en que siempre podía aplicarse la sanción inmediatamente inferior a la pena privativa de libertad. Los diputados de derecha Forni y Monckeberg, propusieron aumentar el número de delitos del catálogo, agregando los hurtos, la receptación, la estafa y el aborto. La indicación fue rechazada. Luego, los diputados de gobierno, Burgos y Luksic presentaron otra indicación para agregar la asociación ilícita para el tráfico de drogas, la que también se rechazó en votación estrecha<sup>146</sup>. La diputada Soto, apoyada por el diputado Bustos, propuso una indicación para eliminar del catálogo el delito de “robo con fuerza en las cosas en lugar habitado”, por ser evidentemente menos dañoso que el “robo con violencia”, pero el gobierno arguyó que entrar a robar en un lugar habitado *revelaba una intencionalidad que podría justificar la sanción privativa de libertad*. La indicación fue rechazada.

La discusión tuvo un punto de inflexión cuando se abordaron los supuestos de la responsabilidad penal adolescente. A estas alturas del debate, el diputado Bustos lanzó el reproche de que *el proyecto era, en realidad, un Código Penal en chico, por cuanto no presentaba desde el punto de vista substancial y también procesal, una*

---

<sup>145</sup> Primer Informe Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, 8 de Junio de 2004, en: *Historia de la Ley Nº 20.084*, Biblioteca del Congreso Nacional, Págs. 69 a 71.

<sup>146</sup> Primer Informe Comisión de Constitución, Legislación y Justicia... Págs. 71 a 74.

*mayor diferencia con el Código de adultos”, cuestión que estimó grave “porque no se hace otra cosa más que aplicar a los menores las mismas penas que a los mayores, pero rebajadas<sup>147</sup>. Consiguió hacer aprobar una indicación relativa a una cuestión técnica menor, pero el punto central de su argumentación fue convenientemente eludido por el gobierno. Avanzada la discusión, la Comisión aprobó por unanimidad un límite inferior para las sanciones privativas de libertad, fijándolo en un año si el adolescente tenía entre 14 y 15 años, y en dos años si tenía 16 o 17 años.*

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de julio de 2004. Ingresó al Senado el 11 de mayo de 2005, para ser discutido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, integrada por Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) -remplazado luego por Sergio Fernández, del mismo partido- ambos de la derecha, Marcos Aburto senador designado, de derecha y Andrés Zaldívar (DC) y José Viera-Gallo (PS), por la Concertación de “centro-izquierda”.

La Comisión tomó decisiones que alteraron profundamente el contenido del proyecto aprobado por la Cámara. El catálogo restringido de infracciones graves y su penalidad reducida fueron descartados, en función de los criterios de gravedad del sistema penal de adultos. De este modo, para la Comisión, la pena privativa de libertad debería comenzar a materializarse a partir de la sanción de presidio menor en su grado medio, es decir de 541 días hasta 3 años (para mayor información se sugiere consultar el apéndice 3, de definiciones). También acordaron que cuando la pena en adultos fuera igual o superior a cinco años y un día, no habría más alternativa de sanción que el internamiento en régimen cerrado o semicerrado. Finalmente, aumentaron dramáticamente la duración de las sanciones privativas de libertad, a 10 años si el adolescente tenía 16 o 17 años y a 5 años, si tenía 14 o 15 años.

Tuve la oportunidad de asistir a una sesión de la Comisión, en que se hizo ver a los senadores el efecto desocializador de las penas privativas de libertad, enfatizando los efectos criminógenos de las condenas de larga duración y respaldado todo ellos

---

<sup>147</sup> Transcripción no textual de la opinión de Bustos. Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Pág. 77

por datos. Tal punto de vista fue rechazado en forma unánime por los cinco senadores de la comisión y las razones del rechazo fueron claramente expuestas después por su presidente en la sala: el encierro aseguraba un tratamiento del consumo abusivo de drogas y hacía posible trabajar en la integración social del adolescente, lo que no se conseguiría si este cumplía su condena en libertad. Agregó además que, en adelante se haría exigible que cada centro tuviera un “programa de reinserción social”, consistente en una oferta educativa y de formación laboral. El gobierno toleró la introducción de dichos cambios. El Ministro de Justicia, Luis Bates, congeló la vía de recuperar el texto original, inclinándose por la negociación dentro de los márgenes que fijaron los senadores de la Comisión.

En adelante, los ánimos punitivos se expresaron más directamente. El jefe de gabinete del Presidente Lagos, Francisco Vidal, ubicó el proyecto dentro de la agenda contra la delincuencia. El Ministerio del Interior comenzaba así a liderar políticamente la reforma. Vidal señaló que el proyecto buscaba *sancionar y combatir la delincuencia juvenil. Es la forma en que seriamente el Ejecutivo combate la delincuencia*<sup>148</sup>.

En la discusión previa sobre la idea de legislar, antes de que el proyecto ingresara a la Comisión, el senador de gobierno José Antonio Viera - Gallo (que había sido subsecretario de justicia durante el gobierno de Allende) había allanado el camino al señalar: *El proyecto impone la pena máxima de cinco años de reclusión, ¿está la sociedad preparada para aceptar esa condena por delitos de tal envergadura?*<sup>149</sup>. El senador Novoa, de derecha, expresó a continuación: *El sistema actual, al considerar inimputables a los menores de edad, tiende a fomentar en éstos una conducta irresponsable e irrespetuosa hacia la vida y la propiedad ajenas. La inimputabilidad de esos menores frente a la ley penal facilita su utilización por adultos para la comisión de ilícitos (...) El proyecto establece una duración máxima de las penas de cinco años, cualquiera sea el delito cometido. Esto es ampliamente discutible. El Senador señor Viera-Gallo ya señaló que acerca de este punto se*

---

<sup>148</sup> L. DE FERARI, “Quince años de espera... hacia la creación de un sistema de reemplazo: Notas sobre la génesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes de Chile”, *JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO* N° 8, UNICEF, Santiago, noviembre de 2006. Pág. 140.

<sup>149</sup> Discusión en Sala del Senado. En: *Historia de la Ley N° 20.084*, Biblioteca del Congreso Nacional, Pág. 502.

*puede suscitar un debate profundo*<sup>150</sup>. Novoa resumió el pensamiento de los sectores más conservadores, señalando finalmente: *A mi parecer, hoy día estamos en el peor de los mundos. Los menores de 16 años que cometen delitos muy violentos, muy graves, no son imputables, no responden penalmente. Y, en el caso de los menores entre 16 y 18 años, la mayoría son declarados inimputables, por lo que tampoco asumen su responsabilidad penal. Este proyecto viene a establecer algo muy nítido: a partir de una edad determinada, 14 años, se es responsable penalmente. En todo caso, se fijan un procedimiento especial y sanciones adecuadas a la condición de menor*<sup>151</sup>.

Concluido el trabajo de la Comisión con los cambios señalados, Viera Gallo hizo una extraña afirmación en la nueva Discusión en Sala: *Señor Presidente, después de un largo debate, la Comisión, por 4 votos contra 0 -porque no había otra solución-, aceptó que la pena máxima para un adolescente mayor de 16 años y menor de 18 sea de 10 años de privación de libertad, y para un mayor de 14 y menor de 16, de 5 años*<sup>152</sup>.

El aumento de las penas generó debate en la prensa. El senador Espina, presidente de la Comisión, salió al paso de algunas críticas, argumentando con crudeza: *Señor Presidente, solicito especial atención a la Sala, porque trataré de explicar lo relativo a las penas, a fin de demostrar que no es efectivo lo informado por algunos medios de comunicación (...) Se ha sostenido que la iniciativa eleva las penas establecidas por la Cámara de Diputados y que es de carácter represivo (...) Si Sus Señorías reparan en la redacción del artículo 6, se darán cuenta de que el menor queda sometido a toda la red de protección del Estado en materia de educación, de reinserción social y de prevención de consumo de drogas y alcohol (...) ¿Cuál es la pena que se aplica a un menor que delinque?. (...) Todo menor va a recibir siempre un grado menos del mínimo de la pena de un adulto*<sup>153</sup>.

---

<sup>150</sup> Discusión en Sala del Senado. En: *Historia de la Ley Nº 20.084*, Biblioteca del Congreso Nacional, Págs. 506 – 507.

<sup>151</sup> Discusión en Sala... *Historia de la Ley Nº 20.084*, Pág. 509

<sup>152</sup> Discusión en Sala... *Historia de la Ley Nº 20.084*, Página 964.

<sup>153</sup> Discusión en Sala... *Historia de la Ley Nº 20.084*, Página 967.

El abanico de opiniones sobre el objetivo del proyecto había quedado reducido a una visión correccionalista “actualizada” en una línea argumental de tolerancia cero. Este discurso fue el único que llegó a enunciarse con nitidez en el Senado. En lo que respecta a la Cámara, el enfoque reformador, representado por los diputados Bustos y Soto, apenas logró hacerse oír. Una de las formas en que se expresó fue en la propuesta de Bustos de justificar el inicio de la responsabilidad penal de adolescentes a los 14 años, porque a esa edad el Estado ya debía haber cumplido con la obligación de proporcionar a todo niño al menos la educación básica y podría, por lo tanto, exigir del adolescente cierta responsabilidad. El diputado Luksic había hecho valer en la aprobación en general en la Cámara, más bien una visión neorrealista de izquierdas, también sobre la base de la tolerancia cero: *Con el proyecto pretendemos corregir una situación anómala, excepcional, que estaba viviendo nuestro país, al establecer la responsabilidad penal a los 16 años. Se termina esa sensación de indefensión que existe en la comunidad, frente a una creciente comisión de delitos con participación de menores de 18 años (...) Por lo tanto, debemos hacernos cargo de la realidad que vive la gente de los sectores populares. Cuando un menor de 18 años comete un delito -robo o hurto, o causa lesiones-, Carabineros lo lleva a la comisaría, presenta la denuncia; el menor pasa por los tribunales un día, y de nuevo está en libertad. ¿Cuál es la sensación del mundo popular? De absoluta indefensión. Por otra parte, además de terminar con esta indefensión, a los jóvenes se les otorga una oportunidad para rehabilitarse. Ahí está el equilibrio*<sup>154</sup>.

También encontramos argumentos neo correccionales que enfatizan la necesidad de tutela de los jóvenes peligrosos. Como señaló la diputada Saa, con agudeza al comienzo: *Señor Presidente, hoy estamos avanzando en pagar la enorme deuda que el país ha contraído durante los últimos 15 años con los jóvenes.... Sin embargo, me preocupan las distintas motivaciones que inspiran el proyecto. A veces, da la impresión de que ciertos sectores han cambiado el enemigo interno del país. En la ley de seguridad del Estado, el enemigo interno era el peligro izquierdista, y en la de seguridad ciudadana, es el joven poblador, ese que vive en Renca Nuevo o en La Pincoya. Varios diputados han entregado cifras que no se condicen con esa realidad. Algunos periódicos han ido construyendo una imagen comunicacional terrible en cuanto a que esos jóvenes pobladores son el mayor peligro que atenta*

---

<sup>154</sup> Discusión en Sala de la Cámara. En: *Historia de la Ley N° 20.084*, Pág. 258.

*contra la seguridad de las personas. Es un hecho que la delincuencia juvenil -eso está estudiado internacionalmente- tiene sus causas en un **daño psicosocial** (...) En tal sentido, el sistema de responsabilidad penal juvenil debe velar por **repararlo**, a fin de lograr la **rehabilitación conductual** y la **reintegración social**”<sup>155</sup>.*

Consciente de las repercusiones que importaría la nueva ley para los adolescentes chilenos, varias organizaciones, entre ellas UNICEF, se quejaron de la extensión del uso de la privación de libertad hasta límites inadmisibles. La mutación de la especialidad del proyecto fue de la mano con la incidencia de las consideraciones “peligrosistas”, que fueron adquiriendo mayor peso a medida que avanzaba su tramitación en el Congreso.

El sistema de responsabilidad adolescente resultó en una forma levemente modificada de derecho penal de adultos. Un mínimo de coherencia exigía que la autonomía reconocida a los adolescentes para responder por sus actos delictivos, se correspondiera con similares niveles de autonomía en otros aspectos de su vida como ciudadanos:

“Los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de atención de salud confidencial y gratuita, el derecho al reconocimiento de su especificidad y diversidad cultural, la protección efectiva frente a la violencia institucional sistemáticamente sufrida en el contacto con la policía y el sistema penal (que incluye el uso de la justicia militar contra jóvenes), el reconocimiento del derecho a voto al menos desde los 16 años... el derecho a la vivienda, a la protección en el trabajo y a seguridad social, a un urbanismo que considere las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, la eliminación explícita del castigo corporal en la familia, la escuela y en las instituciones de control, la posibilidad de extender la aplicación del sistema penal adolescente hasta los 24 años ... y obligar a hacer aplicable el principio del art. 37 de la CDN. Todo esto, que no pretende ser un listado exhaustivo, exige ser tratado ahora como parte esencial de las luchas emancipatorias que tiendan a poner en el centro de la vida social el respeto a los derechos de todas las personas, y en particular de los niños, niñas y adolescentes”<sup>156</sup>.

---

<sup>155</sup> Discusión en Sala de la Cámara. En: Historia de la Ley Nº 20.084, Pág. 254.

<sup>156</sup> J. CORTES, Óp. Cit. Pág. 37.

## **CAPITULO 4**

### **DISCURSOS Y GOBIERNO DE LA DELINCUENCIA DE MENORES EN CHILE: LA VITRINA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

---

En este capítulo revisamos discursos, imágenes e ideologías sobre la delincuencia de los menores en los medios de comunicación, desde los años 90 a la presente década. El campo del control del delito de los menores no se limita a la existencia del sistema de responsabilidad penal adolescente y de las ideologías de los actores de ese sistema, sino que se ejerce de una manera ampliada y globalizante a través de su puesta en el discurso de los medios de comunicación. La discusión del tema del delito de los menores se ha dado en los medios con el trasfondo de la instalación del tema de la seguridad ciudadana, en cuanto demanda supuestamente sentida por la población.

No hemos pretendido hacer una revisión exhaustiva de las noticias y sucesos mediáticos del periodo, sino solo detenernos en algunos que nos han parecido reveladores de la forma como se ha ido construyendo el actual campo de control de la delincuencia de los menores en Chile. Creemos que este campo puede ser comprendido en sus lógicas y propósitos a través de su exposición por los medios de comunicación, de una forma que permite apreciarlas en toda su extensión. Los medios no inventan la realidad, pero la reproducen con impactante eficacia.

#### **LA DELINCUENCIA DE MENORES Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS AÑOS NOVENTA Y DOS MIL.**

En un lúcido y valiente libro, titulado “La Guerra y la Paz Ciudadana”, los periodistas Juan Guzmán y Marcela Ramos denunciaron, a fines de los años noventa, las consecuencias de la guerra que se había declarado contra la delincuencia en



nombre de la seguridad ciudadana: *Debajo de lo que hemos entendido como la guerra contra los delincuentes se ha amontonado un enorme desastre social; también un negocio de proporciones y, sobre todo, una nueva forma de ordenar nuestra convivencia, de distribuir derechos, valoraciones morales, acceso a los espacios públicos*<sup>157</sup>. El nombre del libro apunta directamente a la Fundación Paz Ciudadana, creada por el dueño del Diario El Mercurio, Agustín Edwards en 1992.

En 1991, luego del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, la derecha y los empresarios se sintieron vulnerables como no lo estaban desde los días de la Unidad Popular. La sensación de amenaza fue avalada por el primer gobierno democrático después de la dictadura, que vio en la pervivencia de grupos que favorecían la lucha armada, el peligro de lo que llamaron una “colombianización” de la transición a la democracia. La moderación se impuso como estilo político en los inicios de este primer gobierno, que parecía a ratos pedir permiso para gobernar y ocupar los cargos. Desde el mismo día en que se produjo la asunción del gobierno democrático, un resentido y desconfiado traspaso de espacios de poder entre los militares y civiles que gobernaban con Pinochet y los nuevos grupos que representaban los anhelos de millones de personas, recordaban que la democracia pendía de un hilo.

El día 3 de abril de 1992, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile, Agustín Edwards anunció la creación de la Fundación Paz Ciudadana, cuya influencia en los años venideros colmaría la agenda política en las temáticas de seguridad y justicia. En su directorio figuraban altos dirigentes políticos de derecha e izquierda, -más de derecha que de izquierda, en realidad- y poderosos empresarios. Durante todo el año 1992, una seguidilla de editoriales del diario el Mercurio, denunciaba el desarrollo de un sentimiento de inseguridad en la población, *“con algunas ideas fuerza, como que el fenómeno de la delincuencia se inicia con la democracia; relacionar la ineficiencia policial con el discurso de los derechos humanos y hablar con sorna de los ‘derechos de los delincuentes’; personificar al terrorista y luego al delincuente como un ente con ‘mentalidad*

---

<sup>157</sup> Cf. J. GUZMAN y M. RAMOS, *La Guerra y la Paz Ciudadana*, LOM ediciones, primera edición, octubre 2000, Págs. 9 – 10.

*asesina`; atribuir el problema a una `falta de temor` del delincuente, por lo que la solución es el castigo o la amenaza de castigo”<sup>158</sup>.*

La violencia, en sus diversas formas, fue el tema de fondo de los primeros años de democracia. La violencia política del terrorismo de Estado, nuevamente recreada con la apertura de numerosas causas de derechos humanos y la violencia terrorista, fueron los temas más visibles. El discurso sobre la inseguridad influyó en forma natural en las clases medias, en relación con experiencias de precariedad social y personal, desde el inicio mismo de la transición a la democracia. La “delincuencia juvenil” se presentaba en simultáneo como una delincuencia depredadora y violenta y ayudó a que las imágenes del terrorista y el delincuente se mezclaran sin mayores problemas. Cuando las políticas gubernamentales implementadas hicieron desaparecer al primero, la delincuencia de los menores de edad pasó a llenar ese vacío. Pero, también se hizo notar la violencia de las relaciones sociales en ámbitos no asumidos con anterioridad, como la discriminación en las escuelas, la violencia doméstica, el maltrato en las relaciones laborales, la violencia entre vecinos, el maltrato infantil. El mismo año 1990, la muerte de un adolescente de 15 años, a manos de otro de la misma edad en un barrio marginal de Santiago, sirvió en los medios como botón de muestra de la peligrosidad de los delincuentes juveniles: *“Frente al porfiado e inexplicable intento de algunos para disminuir la gravedad de la delincuencia juvenil, surgió ayer el asesinato de un niño de 15 años... pero el dato esencial de este horroroso episodio es que el autor material del asesinato tiene también quince años, como su víctima (...) ¿Podrá quedar relegada a un segundo plano la lucha frontal contra la delincuencia, que requiere prioridad y recursos humanos y materiales?”<sup>159</sup>*. Tres años después, la violencia tocaba también a las “pandillas” juveniles. Una riña que terminó con la vida de una mujer, ajena a los hechos, involucró a miembros del grupo juvenil “Malas Juntas”, que se enfrentaron al grupo “CNI”, adversarios en la calle y en el rap. Hasta ese momento, dichos grupos eran conocidos solo por causar desórdenes y beber alcohol, pero el hecho fue difundido bajo títulos como

---

<sup>158</sup> L. HOECKER, “Antecedentes acerca de la instalación del problema de la inseguridad ciudadana como preocupación prioritaria de la opinión pública”, en: *Revista de la Academia N° 5*, Universidad Academia de Humanismo Cristiano - LOM ediciones, Santiago, otoño de 2000. Págs. 35-49.

<sup>159</sup> Diario La Segunda, 3 de octubre de 1990. En: GUZMAN y RAMOS, *La Guerra y La Paz Ciudadana*, Óp. Cit. Pág. 160.

*“Pandilleros aterrorizan a San Miguel” y “Delincuentes juveniles están fuera de control”*. En 1998, una riña similar afectó al grupo “Los Vatos Locos”, resultando muerto un niño de 15 años al interior de una vivienda. Los “Vatos Locos” fueron portada en los diarios y generaron debate por casi un mes: *“Probablemente porque los hechos ocurrieron dentro de los límites de una comuna acomodada de Santiago y porque el autor del homicidio fue declarado sin discernimiento por la Corte de Apelaciones de Santiago”*<sup>160</sup>.

Los hechos anteriores, leídos como irrupción de una delincuencia de menores violenta e “irresponsable”, adelantaban la discusión que se haría sentido común en la década del 2000: un persistente alegato por la ineficacia del sistema del discernimiento, característico de la justicia tutelar de menores vigente, que al considerar irresponsables a los menores de edad por sus delitos, los deja en la impunidad. Esta idea se reforzaba con la publicación de cifras que mostraban que la delincuencia juvenil estaba “fuera de control”. En 2002 un estudio de la Fundación Paz Ciudadana titulado: *“Delincuencia juvenil en Chile: tendencias y desafíos”*, destacaba un aumento de cerca de 400% en las *detenciones* por “delitos de mayor connotación social” (robos, hurtos, lesiones, violación, violencia intrafamiliar) entre 1996 y 2002, tanto en adultos como en menores, si bien las detenciones de menores lo hicieron en una menor proporción: 398% contra 436% en adultos.

En el cambio de siglo, se había instalado la imagen de un enemigo principal en la figura de un delincuente cada vez más próximo a una condición de niño, listo para atacar con una violencia creciente, apoyado en una pandilla igualmente salvaje, desertor escolar, y que no trabaja o lo hace muy esporádicamente. El editorial de un diario santiaguino, hacía extensiva esta condición a toda la generación de los 90, con el título de “juventud agresiva” y agregaba: *“La combinación entre agresividad e indiferencia, características reconocidas por los propios jóvenes, no es la más deseable y podría a largo plazo complicar su capacidad de adaptación al sistema laboral y social”*<sup>161</sup>.

---

<sup>160</sup> GUZMAN y RAMOS, Óp. Cit. Pág. 164.

<sup>161</sup> Diario La Tercera, 7 de noviembre de 1999.

El delincuente se instala como una corrosiva amenaza de alteridad, tanto o más peligrosa y disociadora cuanto más la motivación del actuar delictivo es el puro interés antisocial. El delincuente calcula los costos de delinquir, por lo que debe ser disuadido, en última instancia, por el miedo. Por otra parte, se sabe impune porque el gobierno y la justicia no cumplen con su deber de combatir el delito. Tolerancia cero, sin excusas. Un editorial del diario El Mercurio titulado, “Incremento en la autodefensa”, expresa con claridad este argumento: *“la probabilidad de que un delincuente sea aprehendido y condenado es inferior al 1 por ciento, por lo que la adopción de medidas de defensa por parte de las personas aumenta el riesgo de la actividad delictiva y tienen un potencial papel de disuasión. Un delincuente dudará más en cometer un delito si sabe que puede resultar seriamente lesionado o incluso morir en el intento”*<sup>162</sup>.

Hacia fines de la década, había cristalizado la idea de que la justicia era ineficiente o no funcionaba, o más bien funcionaba como “una puerta giratoria”, de entrada y salida para los delincuentes. La metáfora, un socorrido eslogan electoral de la derecha, expresaba la fuerza que había adquirido la demanda por seguridad y tolerancia cero frente al delito. Las cartas estaban sobre la mesa. En los debates por la segunda vuelta electoral, el futuro presidente, Ricardo Lagos Escobar (2000 – 2006), desafió a su adversario Joaquín Lavín, proclamando: *“Yo firmo todo lo que dice Paz Ciudadana”*<sup>163</sup>. En esta elección, la más reñida desde 1990, en que la derecha estuvo cerca de interrumpir la continuidad de los gobiernos de la Concertación, Lavín había logrado representar con éxito la figura de un candidato hacedor que, en sus tiempos como alcalde de la Comuna de Las Condes, la más rica del país, se había posicionado como el campeón de la lucha contra la delincuencia.

Paz Ciudadana inició en 1998, una campaña comunicacional preventiva cuyo público objetivo eran niños y niñas de 6 a 12 años, protagonizada por el perro Don Graf, que se convirtió en su cara visible. La Fundación había obtenido la licencia de una campaña que impulsaba en esos momentos la Asociación Nacional de Prevención del Crimen de los Estados Unidos (NCPC), protagonizada por su mascota oficial, Mr. Gruff, cuyo lema central era “Dale un Mordisco a la

---

<sup>162</sup> Diario El Mercurio, editorial 3 de marzo de 2000

<sup>163</sup> Cf. GUZMAN y RAMOS, Óp. Cit. Págs. 53 -57.

Delincuencia” (*Take a Bite out of Crime*), la que implementó en Chile con escasas variaciones.



Mr. Gruff y Don Graf

La campaña consiste en una serie de spots emitidos por la televisión. En ellos, [Don Graf](#) da consejos a los niños para cuidarse de delincuentes y drogadictos. La campaña confería a la Fundación un rostro amable y cercano a la ciudadanía, facilitado por el uso de la televisión, medio de emoción y contacto<sup>164</sup>. En sus palabras, apuntaba a entregar información a los niños para que evitasen conductas de riesgo en los espacios considerados más desprotegidos (el hogar, la escuela y el camino de la escuela al hogar), pero los mensajes buscaban también provocar temor, con el fin de que esta emoción quedase asociada en adelante a la conducta de riesgo. Es decir, buscaba una victimización vicaria de los pequeños telespectadores. En un spot de 1998, Don Graf advierte a los niños: *estar solo en casa puede ser muy divertido, pero no te descuides*. Toca a la puerta un extraño y le pregunta al niño por su tío Don Graf. Espabilado, el niño responde: *No está. Pero están mis otros tíos*. Sorprendido, el “delincuente” huye. El perro concluye: *Nunca entregues información a extraños. Prende una radio, cierra puertas y ventanas, enciende luces y así tu casa se verá como una fortaleza. Ya sabes cómo mantener lejos a los delincuentes, porque tú también puedes darle un mordisco a la delincuencia*.

---

<sup>164</sup> “Los medios sirven sobre todo a la publicidad y al entretenimiento (...) la radio es por encima de todo un instrumento musical y la TV un largometraje transmitido en casa”, V. ROMANO, *Desarrollo y Progreso*, Editorial Teide, Barcelona, 1993, Pág. 109.

En otro spot, de 1999, el noble can enseña cómo cuidarse en el autobús, durante el trayecto del colegio a la casa: *Siempre guarda tus cosas de valor, lejos de los bandidos. Ubícate siempre en los primeros asientos. En la parte de atrás, nadie podrá ver si te pasa algo. No te expongas y así estarás ayudando a darle un mordisco a la delincuencia.*



DALE UN MORDISCO A LA  
**DELINCUENCIA**

Spot de 1999

La campaña es un ejemplo de la puesta en escena de un discurso ideológico. Los spots, cual “manual de cortapalos”, invitan a hacer de la desconfianza hacia el otro una regla de supervivencia cotidiana. Los consejos, sensatos, infunden miedo cuando se acompañan de personajes siniestros o escenarios lúgubres y amenazantes.

Don Graf se puede ver como el perro guardián de la desconfianza y del prejuicio hacia los jóvenes populares, que aparecen caracterizados con atuendos hip hop o punk, realizando actos vandálicos o como sospechosos de haber cometido algún delito.





Otro aspecto relevante es la imagen de vigilante atento que se quiso imprimir al noble animal, quien se ubica en su puesto de operador de un dispositivo de control panóptico, siempre dispuesto a acudir en ayuda de los niños que lo necesiten.



**Don Graf en el mando de CONTROL**

La campaña tuvo partidarios y detractores. La Fundación citó en su apoyo las evaluaciones realizadas en USA, donde se aseguraba que la campaña no atemorizaba a la población, ya que los encuestados destacaron que se sentían con menor probabilidad de ser victimizados. En una evaluación realizada en Chile, se destacaba que el 94% de los niños encuestados aseguró que Don Graf le había enseñado a cuidarse de los robos<sup>165</sup>. Al margen de las encuestas, numerosos testimonios muestran el miedo que infundió a toda una generación infantil: *Recuerdo que me daba mucho miedo quedarme solo en casa.*

Pero el miedo no era una consecuencia de las campañas ni de la machacona insistencia de los medios en la peligrosidad de la delincuencia, sino que se apoyaba en razones más profundas. El crecimiento económico de los años noventa había permitido una mejora sustancial de las condiciones materiales de los chilenos, lo que generó entusiasmo y adhesión al “neoliberalismo con rostro humano” (como lo llamó recientemente Atria) que implementaron los gobiernos de la Concertación, junto con la ilusión de que el emprendimiento, la gestión y el mercado eran los medios adecuados para alcanzar los anhelos individuales de promoción social. Pero, el crecimiento económico había tenido costos y muchos no se sentían beneficiados. En 1998, investigadores del Programa de Naciones Unidas para el

---

<sup>165</sup> M. URRUTIA, *Don Graf, Una experiencia de prevención*, Fundación Paz Ciudadana, Santiago, julio de 2005



Desarrollo (PNUD), elaboraron un informe de desarrollo humano en el que señalaban que la mitad de los encuestados, a la hora de evaluar su condición personal, se situaba en el bando de los “perdedores”. Los investigadores, sostenían que el miedo generalizado a la delincuencia y al delincuente, se había convertido en el equivalente general de otros temores, cuyo origen había que buscar en la precariedad en que vivían muchas personas, en la ruptura de la sociabilidad, en el “miedo al otro” y en las dificultades propias de vivir en un entorno urbano colapsado y caótico: *“El delincuente es, al menos en parte, un “chivo expiatorio” que nombra (y esconde) otras inseguridades; aquellas provocadas por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y finalmente, de la noción misma del orden”*<sup>166</sup>.

Dos personajes televisivos de origen popular, “Faúndez” y “El Malo”, mostraron con claridad la polarización impulsada por el modelo entre las aspiraciones y sueños de los chilenos y sus peores miedos y pesadillas<sup>167</sup>. “Faúndez” encarnaba al trabajador convertido en microempresario, que “sale adelante” y es capaz de codearse con los ejecutivos del nuevo sector privado chileno, mientras que “el malo” era la negación de ese camino: un delincuente intrínsecamente malo, sin historia ni motivos. En un comercial, Faúndez va en un ascensor rodeado de ejecutivos y suena un teléfono celular. Todos buscan entre sus ropas, pero es Faúndez el requerido: *“Faundez, ingeniería electrónica e instalaciones varias, buenas tardes”*. Su acento delata su origen popular y las miradas inquisidoras, que luego se transforman en sonrisas, revelan el peso del prejuicio tanto como la aprobación de sus “pares”. Por otro lado, El Malo era simpático y sus “maldades” eran crudas aunque menores, hasta que se sentía interpelado. Entonces, miraba de manera amenazante. En una entrevista, Daniel Muñoz, el actor que encarnaba al “Malo”, decía: *“a quien más odia Faúndez es al “Malo”, a los que no trabajan, a la gente que no hace nada por surgir (...) Faúndez piensa que el que quiere, puede. Pero El Malo es muy cómodo. Es malo porque es flojo”*<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> *Desarrollo Humano en Chile 1998*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pág. 128.

<sup>167</sup> GUZMAN y RAMOS, Óp. Cit., Pág. 38

<sup>168</sup> GUZMAN y RAMOS, Óp. Cit., Pág. 39.



**El malo, por Daniel Muñoz**



**Faúndez, Ingeniería**

## **TOLERANCIA CERO *MADE IN CHILE***

La orientación de las políticas de Paz Ciudadana, reflejaba la ambivalencia de las medidas de tolerancia cero y, en tal sentido, la Fundación se abrió a las críticas que formularon algunos expertos. Las campañas del tipo “Dale un mordisco a la delincuencia” promovían a un ciudadano responsable que reduce las oportunidades de los delincuentes para delinquir, y al mismo tiempo, generaban el efecto no deseado de encerrar a los ciudadanos honestos en sus casas y “regalarle la calle a los delincuentes”. Enterados de que “la ONU y la revista Forbes habían designado a Toronto como la ciudad más segura y con mejor calidad de vida en el

mundo”, en 1999 el economista Carlos Valdivieso, gerente de la Fundación y otros profesionales, viajaron a conocer la experiencia y firmaron un convenio con el Departamento de Desarrollo Urbano de Toronto para reproducirla en Chile en las comunas populares de La Granja y Peñalolén, controladas por alcaldes de la Alianza por Chile, la coalición de derecha. La experiencia era defendida como “lo último en anti delincuencia: una seguridad sin rejas” y apuntaba a la implementación de una serie de medidas para la prevención situacional del delito en el entorno urbano y para aumentar la sensación de seguridad de los habitantes de los barrios. Defendida como réplica menos represiva de la tolerancia cero, en la que se inspiraba, encarnaba el espíritu de los nuevos programas comunales que comenzaban a extenderse por el país. *Sentirse seguro no significa aislarse, encerrarse. Por el contrario, sentirse seguro es adueñarse del espacio público, hacerlo suyo. Creo que el mejor vigilante es la persona a la que le gusta su barrio*, explicaba en su oportunidad Carlos Valdivieso<sup>169</sup>.

En diciembre de 2000, el principal *think thank* de la derecha chilena, el Instituto Libertad y Desarrollo organizó un seminario que contó con la participación de Carlos Medina, director del área de educación del Manhattan Institute, Michael O'Connor, experto en planificación de seguridad urbana y William Bratton, ex jefe de la Policía de Nueva York. En el evento, se expuso la estrategia de tolerancia cero ante una audiencia de alcaldes de derecha de la región Metropolitana y otras comunas del país. La idea del encuentro era implementar una suerte de asociación entre municipalidades para enfrentar de manera común los problemas de seguridad. En la oportunidad intervinieron, además, Cristián Larroulet, director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo; Eugenio Guzmán, director del programa político de ese organismo y Joaquín Lavín, a la sazón alcalde de Santiago, quien cerró el seminario. Bratton, el principal orador, destacó en especial el tema de los grafitis y los definió como “*un cáncer de la ciudad que con su permanencia da a entender a los delincuentes que hay zonas descuidadas que a nadie le importan*”<sup>170</sup>. Esto significa que la policía debe reprimir aquellos comportamientos que, aun no constituyendo propiamente un delito, resultan molestos, fastidiosos y ofrecen al ciudadano una imagen degradada de la ciudad: los *graffiti*, el pedido

---

<sup>169</sup> “Lo último en antidelincuencia: seguridad sin rejas”, El Mercurio, sábado 26 de agosto de 2000.

<sup>170</sup> “Expertos extranjeros: Análisis a fondo de problemas de seguridad”, El Mercurio, Miércoles 6 de diciembre de 2000.

agresivo de limosna, la insistencia de quienes lavan los cristales de los vehículos en los semáforos, la prostitución callejera, la embriaguez en lugares públicos, la presencia de sin techo en las calles y demás situaciones similares. Los conceptos conocidos del Plan de Tolerancia Cero, se presentaban ante todo como una “fuerte señal” en materia de delincuencia y de seguridad ciudadana. Desde Nueva York, se exportaba la doctrina de la tolerancia cero, *instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta -la que se ve, la que provoca incidentes y desagradados en el espacio público y alimenta por lo tanto un sentimiento difuso de inseguridad e incluso, simplemente de malestar tenaz e incongruencia*<sup>171</sup>.

Paz Ciudadana había pasado a ser un actor consolidado en la definición de las políticas públicas de seguridad de los gobiernos de la Concertación. El año 2001, durante el gobierno de Lagos, el Ministerio del Interior, asociado con la Fundación, puso en marcha el plan “Comuna Segura, Compromiso 100”. Su objetivo era coordinar la participación de la comunidad en la definición de los problemas de seguridad y financiar proyectos de prevención. En línea con los principios de la tolerancia cero, estos programas han priorizado, por ejemplo, temas como: *el comercio ambulante (“promoviendo campañas que desincentiven al público a comprar mercaderías comunes o pirateadas en la vía pública”), el consumo de alcohol y drogas por parte de jóvenes en lugares públicos, reducir las oportunidades de delitos (“se propone implementar sistemas de alarmas comunitarias y sistemas de cámaras de seguridad en conexión con Carabineros”), reducir el temor y promover la denuncia (“reforzar los lazos entre la policía y la comunidad a través de iniciativas que apunten a capacitar a las policías para acoger las denuncias en los distintos procedimientos y entregar un buen trato a la población”), promocionar conductas seguras, prevenir el equipamiento y recuperación de espacios públicos (“el plan propone proyectos de iluminación participativa de espacios públicos”), reducir los conflictos vecinales*<sup>172</sup>.

Bratton volvió a Chile en 2001, invitado esta vez por el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Pablo Zalaquett. El Mercurio destacó el perfil del ilustre visitante: “Gracias a su gestión, el súper policía -como lo bautizó la prensa norteamericana-

---

<sup>171</sup> L. WACQUANT, *Las Cárceles de la Miseria*, Manantial, Buenos Aires, 2000. Pág.32.

<sup>172</sup> Portal de la Municipalidad De Santiago, [www.municipalidaddesantiago.cl](http://www.municipalidaddesantiago.cl).

*hoy es considerado el máximo estrategia contemporáneo de los sistemas de seguridad ciudadana en el mundo*<sup>173</sup>. Esta vez se destacaba, dentro de las estrategias del plan de tolerancia cero, el sistema de gestión del trabajo policial, en que los policías a cargo de determinados sectores son responsabilizados por la cantidad de delitos que en ellos ocurren, lo cual se hace posible mediante un sistema de información y evaluación, el "CompStat". Habría que esperar hasta el año 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010 – 2014), para que Carabineros adoptara oficialmente este sistema de gestión, que fue bautizado simplemente como "Stad" (Sistema Táctico de Análisis Delictual).

En 2004, un proyecto de ley difundido como "la tercera es la vencida", versión criolla de la ley conocida como "3 strikes", aplicada en California desde 1994, fue rechazado por el Congreso. El proyecto proponía aplicar en forma obligatoria una pena superior a 15 años de cárcel, cuando se trata de la tercera condena. Carlos Medina, del Manhattan Institute, residente en Chile, aseguraba que la delincuencia disminuía con este tipo de legislación. Replicando a los detractores, aclaraba que en USA la aplicación de la ley había resultado injusta en algunos casos *porque no quedó en claro que sólo se aplicaría a los delitos graves y se hizo una enmienda a la ley para que jueces o fiscales puedan eliminar uno de los cargos cuando no son delitos graves*. En Chile su impulsor, Joaquín Lavín, en la época alcalde de Santiago, dijo que *"la norma propuesta se asemeja en que la condena por tercera vez de un delito grave no debe ser menor a 15 años de cárcel, pero además para otros ilícitos, como el "lanzazo" o los asaltos, cuando el delincuente es detenido por tercera vez, no pueda salir en libertad bajo fianza"*<sup>174</sup>.

Las diferencias suscitadas respecto de estas últimas iniciativas y el escaso apoyo encontrado, se debían probablemente a que muchos actores estaban comprometidos con el nuevo sistema procesal penal, que había entrado en vigencia de manera gradual el año 2002. Una situación similar comenzaba a vivirse en el caso de la delincuencia de menores, donde las voces partidarias de reformar el sistema tutelar e introducir un nuevo sistema de responsabilidad penal

---

<sup>173</sup> El Mercurio, sección Economía y Negocios, martes 10 de Septiembre de 2002

<sup>174</sup> El Mercurio, "Combate a la delincuencia: 'La tercera es la vencida' tuvo positivos efectos en California", lunes 23 de Agosto de 2004

adolescente, desde distintas trincheras, pugnaban por realizar la pendiente puesta al día con la Convención de Derechos del Niño en materia de justicia de menores.

En la década de los 2000, se instala un diagnóstico de los jóvenes como generación desarraigada y desconectada del mundo adulto. Jóvenes “hijos de nadie”, que debían extremar los recursos para constituirse como tales. Se anunciaba que la sociedad chilena se estaba transformando progresivamente en una “sociedad del riesgo”, en la cual las personas viven en condiciones esencialmente móviles, teniendo que adaptarse a condiciones cambiantes. Esta esencial movilidad (laboral, espacial, de estado civil, educacional, etc.), si bien resulta una oportunidad para muchas personas, constituye una amenaza para otras, sobre todo aquellas personas con menor nivel educativo, con menos recursos, que tienden a percibir más negativamente los cambios y a procesarlos como “inseguridad”<sup>175</sup>. Este discurso sobre la generación joven como población en riesgo, se volvería inaudible con la irrupción de las protestas estudiantiles el año 2006 y, definitivamente, el 2011, pero en esos momentos constituía la moda intelectual dominante.

Nada parecía haber cambiado mucho respecto de la década anterior. No obstante, sería la continuación del debate entre inimputabilidad y responsabilidad penal de los adolescentes, el punto nodal de la lucha librada entre los partidarios de terminar con el sistema del discernimiento, considerado injusto y arbitrario, e instalar un sistema de garantías y de responsabilidad penal especial de adolescentes; y los partidarios de rebajar simplemente la edad de responsabilidad penal y castigar de manera ejemplar a los “delincuentes juveniles”.

El ingreso a tramitación parlamentaria del proyecto el año 2002, que se había venido postergando por años, reflejó la ansiedad de los sectores reformistas por contar con un escenario favorable que permitiese un abordaje legislativo *racional y acorde con las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos*, inútil ilusión de que una supuesta racionalidad permitiría soslayar el carácter ideológico de las posturas de partidarios y detractores. Naturalmente, dicho escenario no se dio y cuando el proyecto fue finalmente presentado, tanto en el mensaje del proyecto como en los eventos de apoyo, se

---

<sup>175</sup> INJUV, *Encuesta Nacional de Juventud 2005*, Instituto Nacional de la Juventud, Santiago 2006.

intentó un difícil equilibrio, finalmente malogrado, entre un mensaje garantista y uno de cero tolerancia.

La aprobación y puesta en marcha de la ley de responsabilidad penal de adolescentes, significó una nueva delimitación institucional del tratamiento de la delincuencia de menores como hemos visto, pero aquí nos interesa mostrar cómo era la construcción que se realizaba de los delitos de los menores de edad a través de los medios, el modo como se representaba lo que estaba en juego y lo que significaba que fuesen juzgados por una nueva justicia.

El programa “Contacto” emitido por el canal 13 de televisión, que había conquistado en esos años una bien merecida fama de programa de impacto con un adecuado equilibrio entre el formato denuncia y el formato de análisis (y que al día de hoy, aun en pantalla, se presenta bajo el lema: *investigamos para que tu verdad esté en contacto*), dedicó un reportaje a la nueva ley. Emitido el 7 de agosto del año 2007, el reportaje evaluaba el nuevo sistema con un mes de funcionamiento y lo hacía en términos de las expectativas que había generado su implementación. El discurso del reportaje es una puesta en escena de una suerte de “ver para creer”. Haciendo adecuado uso de la fortaleza de la televisión en hacer que el público conozca las intimidades que oculta la vida cotidiana de un conjunto de actores por sus propios ojos, el programa consigue generar impacto emocional.

Cuando se realizó el reportaje, la expectativa pública era de incertidumbre sobre los efectos de la nueva legislación, pero también de que el nuevo sistema nacía como una iniciativa destinada al fracaso. Los parlamentarios de la oposición política acusaban al gobierno de no tener en pie ni la infraestructura ni los programas que necesitaba la ley, ni siquiera al nivel mínimo prometido y de haberle mentido al Parlamento y a la ciudadanía. Pero también se quejaban los trabajadores del SENAME y los mismos jóvenes, que acusaban malas condiciones de vida y falta de oportunidades. Todo esto se ponía en tensión en el reportaje.

La finalidad de la nueva ley, tal como había sido presentada en el discurso público, se destacaba en primer lugar. En la presentación del programa, luego de mostrar imágenes de jóvenes en acción –“lanzas” y carteristas “trabajando” en el centro de la ciudad-, se decía: *“Estos son los jóvenes para quienes se creó la nueva justicia. Hoy, desde los 14 años son responsables de sus delitos”*; es decir, con la nueva ley

los menores delincuentes recibirían un castigo y se terminaría la impunidad. La impunidad era atribuida al mecanismo del discernimiento, que imperaba con la antigua ley de menores. Recordemos que, de acuerdo con ella, los menores de 16 años eran inimputables y los mayores de 16 años y menores de 18 lo eran condicionalmente, según si eran o no declarados con discernimiento. Si eran declarados con discernimiento quedaban bajo la jurisdicción del tribunal de menores, de lo contrario, debían ser juzgados como adultos. En el cuerpo del reportaje, la periodista pregunta a un menor recluido en un centro, cuantas veces ha sido declarado antes sin discernimiento y ante la respuesta del joven, ironiza: *O sea, ¿antes no te dabas cuenta de que robabas?*

Aunque no realicemos un análisis detallado, es preciso mencionar que en la instalación de la temática de la seguridad ciudadana, el consumo y el tráfico de drogas tuvieron un lugar casi tan destacado como la delincuencia de adultos y de menores. Incluso se llegó a plantear la estrecha relación entre ambos. Con oportunidad de la nueva ley, el supuestamente alto consumo de drogas entre los menores delincuentes, había sido el caballo de batalla de un involucramiento intensivo del CONACE en el nuevo sistema, al punto de disponer equipos de tratamiento intensivo del “consumo problemático” de drogas, tanto en los centros como en la comunidad, sobre la base de estimaciones de demanda de tratamiento para el 50% de los jóvenes ingresados<sup>176</sup>. Naturalmente, esta predicción resultaría completamente alejada de la realidad, pero la asociación drogas-delincuencia hacía tiempo que estaba siendo presentada por los “expertos en seguridad ciudadana” y los guardianes del orden público, como un hecho demostrado “científicamente”<sup>177</sup>. En la presentación del reportaje, se destaca el testimonio de un muchacho, que dice: *“Me fui a la calle y ahí empecé a drogarme, a juntarme con malas juntas y eché a perder mi vida”*.

---

<sup>176</sup> El CONACE (en la actualidad SENDA) es el organismo encargado de coordinar el control y tratamiento del consumo de drogas en la población y depende del Ministerio del Interior.

<sup>177</sup> En el nuevo discurso de los expertos, el uso del término “evidencia”, ha servido de salvoconducto del saber de los especialistas locales. Comentando el papel de los intelectuales nativos en la difusión del nuevo sentido común de la tolerancia cero que llegaba desde USA, Wacquant dice: “Una tercera y última etapa consiste en dar un fino *barniz científico* a esos dispositivos, y la jugada está hecha: se nos venden gatos conservadores por liebres criminológicas”, L. WACQUANT, Óp. Cit, Posfacio, Pág. 167.



El marco en que se mueve la nueva justicia, de acuerdo con el relato que se construye en el reportaje, recoge el testigo de la ideología tutelar. Los otros actores del drama delictivo son las madres, que piden al tribunal que se haga cargo de controlar el comportamiento de sus hijos y los testimonios sobre la ausencia de escuelas en los centros y sobre talleres laborales que nunca se instalaron.

El reportaje gira todo el tiempo en torno de las tareas no cumplidas. *Con SENAME hicimos lo que se pudo*, dijo el Ministro de Justicia de la época. La demanda por un mayor castigo estaba en primer plano, pero la construcción del significado de la nueva ley también conllevaba la promesa de integración social del antiguo sistema tutelar, aunque de manera aún más ilusoria y utópica. Ahora se decía que se encerraba a los menores para darles la oportunidad de salir de la calle y apartarse de las drogas: *Todo indica que en esta etapa todavía es posible sacarlos del delito*, dice el presentador del programa; pero el discurso no logra equilibrar la necesidad de castigo y la oportunidad de ayuda: proteger a los jóvenes, rehabilitándolos, volviéndolos a la escuela y a la familia; pero con la mirada puesta en su contención, en la neutralización del peligro, en la necesidad de ganarle la batalla a la delincuencia juvenil. La pregunta, cuya respuesta ya es conocida por el espectador: *¿Están los centros preparados para recibir a los jóvenes? ¿Es posible la rehabilitación en estas condiciones?*, desemboca en una declaración final que denota una conciencia culpable ante la irre realidad de las promesas del nuevo sistema. El castigo aparece como la última esperanza de redención. El cierre del presentador es elocuente al respecto:

“Cuando uno ve las imágenes del reportaje, cuando uno ve la falta de previsión, los preparativos hechos a la rápida, por cumplir, uno tiene derecho a preguntarse cuanto nos importan como sociedad estos jóvenes, cuanto valor les damos, cuanto nos interesa que se rehabiliten y, ojo, cuanto queremos que su reinserción ayude a disminuir la delincuencia en Chile. El padre Nicolás Vial de la Fundación Paternitas, asegura que su trabajo con menores infractores de ley tiene un 90% de efectividad. Igual que otros expertos, el padre Vial piensa que el modelo de reinserción social, para ser exitoso, se basa en cómo se trabaje con las personas, que a los jóvenes delincuentes hay que reencantarlos con sus vidas, que tienen que encontrarle sentido a sus existencias, que no se les puede dejar botados, que hay que darles tratamientos psicológicos, de adicciones, con familias que se integren a esa

labor. De otro modo, los resultados siempre serán más bien modestos. Mientras las condiciones sean las de hoy, la cárcel para adolescentes será el peor remedio, tan malo que la madre de uno de ellos prefiere ver a su hijo muerto antes de mandarlo de nuevo a un centro cerrado. Y si el problema sigue así, es difícil ganarle la pelea a la criminalidad. ¿Dónde está entonces el futuro mejor que todos parecemos querer para esos jóvenes? ¿Y dónde está entonces el nuestro?”<sup>178</sup>

### **La explosión del malestar.**

La inseguridad tenía sus raíces en formas de vida desarrolladas bajo el pujante sistema neoliberal chileno, donde la inserción social es un rumor frágil y la precariedad del trabajo una realidad cotidiana; la vulnerabilidad se abate sobre el endeudamiento masivo de la población y la falta de seguridad social, como una hipoteca sobre el futuro. Sin embargo, tras el ciclo de movilizaciones sociales que comienza a manifestarse desde 2006, y que se afirmó con las movilizaciones estudiantiles del año 2011, la sociedad chilena expresó abiertamente su desencanto. La conciencia creciente de la injusticia de un modelo que favorece la desigualdad, la especulación financiera y el robo a gran escala, unida a la frustración ciudadana con una clase política ajena a las nuevas demandas, produjo un nivel de movilización que se creía ya perdido. Sin embargo, como veremos luego, iniciada la década del 2010, otros discursos y programas darían una nueva vuelta de tuerca al desarrollo del campo del control punitivo del delito de los menores de edad.

El año 2006, las protestas estudiantiles habían roto el silencio de la transición. Ese año, bautizado como el de la “revolución de los pingüinos” (por los colores del uniforme escolar de los estudiantes secundarios), se instaló la demanda por la gratuidad del pase escolar y luego las críticas se extendieron a la municipalización de la educación, instaurada por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), durante la dictadura de Pinochet. Entre gritos de: *“Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet”*, los estudiantes expresaban la primera crítica ciudadana a uno de los pilares del modelo neoliberal. La respuesta de la elite, que logró

---

<sup>178</sup> Programa “Contacto”, canal 13 de televisión, 7 de agosto de 2007

aprobar apresuradamente una Ley General de Educación (LGE), no fue capaz de ofrecer una alternativa a la gestión municipal de los liceos, sino que prefirió reafirmar la “viabilidad” de la “política de los acuerdos”, dejando las cosas tal como estaban. Pero, el horno ya no estaba para bollos. La falta de acogida a la demanda estudiantil, generó una gran frustración en la ciudadanía, instaló la semilla de la desconfianza institucional y afirmó la idea de que había que reclamar con más fuerza, desde otras tribunas<sup>179</sup>.

Las movilizaciones y manifestaciones alcanzaron un alto nivel el año 2011. Ese año se inauguró con las protestas en contra del proyecto hidroeléctrico “Hydroaysén”, continuó con la movilización de los habitantes de la región de Magallanes en contra de las alzas en los precios del gas, siguió con protestas de la población de Calama en contra de la instalación de una termoeléctrica y culminó con una masiva y prolongada movilización estudiantil, secundada por padres y profesores, en pos de una “educación pública gratuita y de calidad”. Las calles de la capital y regiones estuvieron ocupadas por jóvenes, trabajadores y simpatizantes del movimiento estudiantil a lo largo de siete meses, acompañado de la paralización de establecimientos educacionales, en virtud de masivas y recurrentes “tomas”. El gobierno reaccionó de la manera acostumbrada: en nombre de la seguridad y el orden público, intentó prohibir las tomas de colegios y las manifestaciones de los “encapuchados” (estudiantes que ocultaban su identidad), anunciando el envío de un proyecto de ley, conocido como “ley Hinzpeter” (nombre del Ministro de Interior de la época), por el cual se criminalizaban las tomas y el accionar del movimiento estudiantil.

Los colegios tomaban represalias y expulsaban a los dirigentes y voceros de las tomas. Numerosos recursos ante las Cortes de Apelaciones fueron acogidos y los estudiantes debieron ser reintegrados. Entre los argumentos esgrimidos por los fallos estaban el que los estudiantes no habían sido oídos, que no se les había permitido presentar pruebas en su favor y que las instancias que habían resuelto las expulsiones no eran imparciales. Como señalaba el Informe de Desarrollo

---

<sup>179</sup> A. MAYOL, *No al Lucro: de la crisis del modelo a la nueva era política*, Editorial Debate, Santiago, 2012.

Humano del PNUD del año 2012: *“Mientras la sociedad ha perdido los miedos, la elite dirigente parece acuñar miedos relevantes”*<sup>180</sup>.

## **UNA MIRADA A LOS DISCURSOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.**

Después de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal de adolescentes, y particularmente durante la actual década, los presuntos delitos y transgresiones de los niños menores de catorce años poblaron la vitrina de los medios. Los casos de “niños delincuentes”, como “Cisarro”, “Miguelito”, “Byron” y otros, fueron destacados por los medios de comunicación con tonalidades de alarma, en el ya extendido contexto de la instalación de la agenda de la seguridad ciudadana y de las políticas de tolerancia cero en nuestro país. Se trata de una explosión mediática que no se corresponde con la realidad de un fenómeno menor cuya magnitud no aumenta sino que, por el contrario, va en disminución. Según cifras del SENAME, la cantidad de menores de 14 años vigentes en el sistema de protección por “faltas y delitos no penalizables” disminuyó de 1.027 en 2010 a 747 en 2013, lo que representa un descenso de 27.3%<sup>181</sup>.

Se instalan también, de una manera silenciosa aunque visible en los medios, nuevos hitos del discurso criminológico de la tolerancia cero, en la forma de acciones y programas de prevención del delito para niños en riesgo e inimputables, tales como “Vida Nueva” o “Terapia Multisistémica”, que emergen con fuerza en un espacio que los operadores se resisten a estriar penalmente, confiando en poder captar más casos en el sistema de protección por la vía de estos nuevos programas de prevención de los riesgos. Con estos planes se ha querido implementar una “economía” de control más eficiente de los delitos que cometen los menores de catorce años, ya que los expertos coinciden en que la solución no

---

<sup>180</sup> PNUD, *Desarrollo Humano en Chile, Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, 2012, Pág. 42.

<sup>181</sup> Fuente: SENAME, *Anuario Estadístico Institucional de SENAME*, años 2010 y 2013.

pasa por rebajar nuevamente la edad de responsabilidad penal: *“se estima que bajo esa edad estamos frente a sujetos que están en desarrollo”*<sup>182</sup>.

El caso que revisamos a continuación, María Música y el “jarrazo”, describe una lógica de control tutelar que involucra al sistema escolar y que ocupa un lugar en el abanico actual de respuestas de control frente a los delitos y transgresiones de los menores de edad. Los casos que siguen a continuación de este, de Cristóbal “Cisarro” y Byron, muestran las reacciones frente a los supuestos delitos cometidos por menores de 14 años. Cierra esta sección el caso “Peaje Quino”, de aplicación de la legislación antiterrorista a menores de dieciocho años, en abierta violación de sus derechos y en una impúdica exhibición de los criterios punitivos más extremos.

### **María Música y el “jarrazo”.**

El día 14 de julio de 2008, la estudiante María Música Sepúlveda arrojó un jarro de agua a la Ministra de Educación, con motivo del cierre de los “Diálogos Participativos por la Educación Pública”, organizados por el Ministerio, en el que participaban estudiantes y profesores. El tema del diálogo era la futura ley general de educación (LGE), propuesta por el gobierno en reemplazo de la cuestionada ley de educación de la dictadura (LOCE). Los estudiantes estaban exasperados por la represión de Carabineros y la estudiante fue, al parecer la que llegó más lejos en su protesta por hacerse oír.

---

<sup>182</sup> Ana María Morales, Gerente de Fundación Paz Ciudadana, en reportaje periodístico realizado el año 2012. <http://prontus.ivn.cl/cambio21/site/artic/20120629>. Lo peculiar de este argumento, es que es el mismo que se usó en su momento para justificar la ley de responsabilidad penal adolescente.



**Foto Diario *Las Últimas Noticias***

La Ministra dijo inicialmente que se haría cargo personalmente del asunto: *"Yo no soy persona de sanciones, yo soy persona de conversaciones. Yo quiero que ella lo piense. No he pensado en sanciones, lo único que quiero es encontrarme con esa niñita y quiero conversar con ella"*, dijo de regreso en el edificio del Ministerio de Educación tras el incidente. En una muestra del tipo de relación asimétrica en que se dio la acción de la estudiante, había dicho en los subterráneos del hotel donde se desarrolló el evento: *"Esto ha desprestigiado el movimiento de ellos. Han demostrado que no son capaces de dialogar. Me gustaría conversar de a uno, porque en grupo se aleonan (...) Si ellos querían que sintiera cómo se siente que te moje el guanaco, pues bien, lo sentí. Gracias por el jarro de agua, que es menos fuerte que el guanaco"*<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> Diario El ciudadano, 14 de julio de 2008.

<http://www.elciudadano.cl/2008/07/14/2253/secundaria-de-catorce-anos-castigo-a-privatizadora-ministra-de-educacion/>

María Música Sepúlveda, por su parte, declaró:

“La ministra se estaba yendo. Entonces dije: ‘voy a contarle lo que está pasando en mi liceo, lo que pasó conmigo...’. Me acerqué corriendo y le dije: ‘Ministra, ¿sabe qué? Me golpearon, me tomaron detenida cuatro veces, mojada, empapada, llena de lacrimógenas, me han mantenido más de trece horas en la comisaría... A mis compañeros los han golpeado, tienen cicatrices enormes tanto físicas como psicológicas, están en Fiscalía Militar por montajes y acusaciones absurdas... Yo los quiero libres, no tiene sentido tener niños detenidos (...) Le dije eso, pensando -creo que fui un poco fantasiosa- que me iba a responder, por último con una de sus respuestas irónicas. O que me iba a decir ‘este no es momento de conversar, puede ser después’. No me dijo absolutamente nada, ni siquiera me miró. Ordenaba sus papeles. Después dijo que no me había visto. Dudo de eso, porque yo estaba al lado de ella, y no es muy normal que una estudiante esté al lado de una ministra. Me vio, me escuchó, pero no me quiso prestar atención. Fue como hablarle a una pared. Me dio pena, me sentí frustrada. No me pescó, no le importó nada. Encontré un jarro que estaba allí y le lancé el agua. Fue un impulso”.

Pronto la reacción ante el caso reveló que los actores estaban dispuestos a aplicar una sanción, siguiendo una lógica tutelar. La Ministra de Educación, que había comprendido la motivación que llevó a la niña a volcarle el jarro con agua, cuando asimiló el acto a una vuelta de mano de los estudiantes por el accionar del carro lanza aguas (“guanaco”) de Carabineros, posteriormente criticó la conducta de la niña y la atribuyó a una mala formación recibida de la madre, quien no solo no la había reprendido por su comportamiento sino que la justificaba. Insinuó que debía ponerse un tutor, que cautelara su educación. No fue la única en hacerlo, por cuanto otros personeros criticaron duramente a la madre de la niña, echándole en cara su falta de educación formal y su mal ejemplo, al justificar sus acciones.

Tras los primeros momentos de desconcierto, en que se conservaron las formas, tocó el turno al liceo en que estudiaba la niña. El día 2 de agosto, el emblemático liceo público Darío Salas, la expulsó. Se dijo que la medida fue adoptada por el consejo general de profesores, *“de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82, letra g, del reglamento interno”* del liceo y acorde al proyecto educativo institucional. La abogada de la madre Ruth Cavieres, señaló que la alumna no había sido oída: *“Las resoluciones internacionales de DDHH señalan que los niños merecen ser*

*escuchados. Las autoridades administrativas deben escuchar a los niños y acá eso no está pasando". Los estudiantes, en toma, marcharon por las calles, exigiendo el reintegro de María Música.*

Un senador salió en su defensa: *"Todos saben y han visto las fotos de María Música golpeada por Carabineros. Más allá de las causas y consecuencias de estos hechos, debemos entender que Música es una niña, tiene sólo 14 años, por lo que se le debe aplicar la Convención de Derechos del Niño. No parece ser una amenaza al orden público el que una niña proteste. A la luz del derecho internacional en materia de DDHH, ella no debe ser expulsada, sino como dice el informe de la ONU, ella debe acceder a medidas de reparación integral y de reintegración social"*<sup>184</sup>. La Presidenta Michelle Bachelet, también criticó la medida: *"En primera instancia no me parece la mejor decisión. Me parece que dentro de todo es preferible que efectivamente se haya permitido que termine el año dentro del colegio y no de manera inmediata, como se rumoreaba"*, dijo en entrevista con radio ADN. En línea con la intervención de la Presidenta, la Ministra de Educación envió una carta a la dirección del colegio solicitándole que "reconsiderara" la medida de expulsión inmediata:

"Con todo respeto me permito sugerir a la comunidad educativa del liceo Darío Salas que pondere este factor y reconsidere la medida adoptada, permitiendo así que la estudiante pueda terminar el año escolar 2008 en el establecimiento (...) Como Ministerio de Educación respetamos la medida disciplinaria que adoptó la comunidad educativa del Liceo Darío Salas. La institución ha dado un verdadero ejemplo de autonomía, reflexión, diálogo y de respeto al debido proceso".

La "clase política" cerró filas en torno al ministerio. La iglesia católica se plegó a las reprobaciones. La prensa informó que en un colegio católico de la ciudad de Puerto Montt, rogaron para que ningún otro niño se atreviera a imitar a María Música y para "sacarle el diablo de adentro"<sup>185</sup>. Los medios de comunicación recogieron con

---

<sup>184</sup> <http://lamusicalibre.wordpress.com/2008/08/01/autoridades-del-dario-salas-prohiben-ingreso-de-maria-musica/>

<sup>185</sup> Entrevista a María Música, revista Punto Final, 25 de julio de 2008.  
<http://www.puntofina.cl/667/musica.php>.



entusiasmo los cuestionamientos y repitieron, una y otra vez, la imagen del lanzamiento del jarro con agua.

El día 4 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección ante la medida de expulsión, presentado por la madre de María Música Sepúlveda. El recurso señalaba que *“los hechos que condujeron a la expulsión de María Música del Liceo se originan fuera del Liceo, en una actividad pública al margen de sus actividades, que no se encuentra regulada por las normas que regulan la convivencia escolar”*. Posteriormente, se discutió si cabía aplicarle la ley de responsabilidad penal de adolescentes, buscando su imputación por un delito. El 17 de agosto, Carabineros de Chile, presentó una denuncia por "atentado contra la autoridad" en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago; habiéndose establecido que la niña había cumplido los catorce, edad mínima para ser procesada por un juzgado de garantía acorde a la ley penal adolescente. Entonces, la ministra de Educación presentó una denuncia por “atentado y amenaza a la autoridad” en el Ministerio Público. Ninguna de estas acciones prosperó.

### **El caso de un niño inimputable: Cristóbal o “Cisarro”.**

Finalizaba julio de 2009 y los televidentes y lectores se enteraban, con asombro, de la detención de Cristóbal C. M., un niño de 9 años, conduciendo un vehículo robado, en compañía de otros tres menores de entre catorce y dieciséis años. Se informó que el niño conducía el coche y que habría chocado al intentar huir. Lo acompañaban el “loquín”, “el gorila” y “el garra”, todos apodos que denotaban su procedencia social y su cercanía al mundo delictivo<sup>186</sup>.

---

<sup>186</sup> Diario La Tercera, 30 de julio de 2009. <http://www.latercera.com/contenido/6801629659.shtml>.



**Detienen al Cisarro tras persecución policial en comuna de Peñalolén**

El revuelo mediático fue breve, pero intenso. La cobertura de los medios se concentró en un lapso de tres días, lapso en el que cubrieron la internación y posterior fuga de Cristóbal e hicieron notar su modo de hablar y comportarse, inusual para un niño de su edad<sup>187</sup>: *"Tribunal de familia ordena internación del 'Cisarro' en Centro del SENAME. A la salida del juzgado, el menor de 10 años reaccionó de forma violenta y dijo 'déjenme tranquilo', lanzando patadas"*<sup>188</sup>. Del centro fue "rescatado" al día siguiente por otros menores. El domingo 2 de agosto, el diario El Mercurio titulaba *"Carabineros recaptura al 'Cisarro', tras fuga armada desde centro del SENAME"*. El epígrafe de la noticia señalaba: *"Solo estuvo 26 horas en el recinto hasta que un grupo trepó una pandereta e intimidó a uno de los guardias"*. Testigos independientes señalaron que no hubo tal intimidación ni tal arma y que los menores salieron por la puerta del recinto. Cristóbal fue descrito como un niño *"que se creía"* gánster, de un carácter incorregible y violento y capaz de un actuar delictivo, como es patente en los términos que emplea la nota. De hecho, agrega: *"tras quedar en libertad, el delincuente juvenil y los rescatistas abordaron un taxi que los esperaba"*. Sin embargo, el centro al que fue enviado no es un recinto carcelario ni un lugar de custodia y no cuenta con vigilancia armada

<sup>187</sup> El mismo apodo del niño se debería a su dificultad para pronunciar la palabra "cigarro".

<sup>188</sup> Diario La Tercera, 31 de julio de 2009.

ni medidas de seguridad. Formalmente, el niño tampoco estaba acusado de cometer un delito. Por tanto, lo particular del caso no era que hubiese intentado huir, lo que podía hacer sin dificultad, sino que fuese ayudado por otros niños. La huida fue breve, generando su “detención” número 17, según la contabilidad policial.

Su rostro estuvo en la portada de un matutino. La portada insinuaba que Cristóbal no estaba en sus cabales y que, por su comportamiento, él y sus amigos no podían ser considerados niños.



Luego de esta detención, Cristóbal fue ingresado a la Unidad Psiquiátrica del hospital Luis Calvo Mackenna. El tribunal descartó su posterior traslado a un recinto especializado de SENAME en Valparaíso y optó por dejarlo en la unidad siquiátrica, tras recibir un informe que señalaba su adicción al alcohol y a las drogas. Las “locas” circunstancias de su frustrada huida, reforzaron también la idea de que el niño tenía “*problemas mentales*”. En el recinto estuvo siete meses. Luego de una posterior huida de un centro de tratamiento de drogas en La Florida, donde nuevamente habría sido “ayudado” por dos adolescentes, manifestó su deseo de volver al Hospital Calvo Mackenna, donde decía haber recibido un mejor trato.

Años después, cuando Cristóbal fue nuevamente detenido -ya con 14 años- luego de su nueva fuga desde el centro de Valparaíso, al que había sido finalmente trasladado; el siquiatra Rodrigo Paz, quien lo había tenido a su cargo en la unidad siquiátrica del hospital, afirmó que *“el 80% de los niños que cometen actos delictuales, tienen patologías siquiátricas graves, que si no se tratan, hacen imposible cualquier intento de rehabilitación”*. Fue enfático en declarar: *“No faltó a principios éticos si digo que “Cisarro” tiene una gravísima enfermedad bipolar”*. El niño (...) *“está ilegalmente formalizado y recluido en una institución del Ministerio de Justicia y este chico está enfermo, por lo tanto le corresponde estar internado en un servicio de siquiatria donde no se fugue a cada rato, donde se le medique adecuadamente”*<sup>189</sup>.

Significativamente, luego de esta última detención en la que fue formalizado por amenazas, ya con catorce años, el noticiero de la Televisión Nacional, TVN 24 horas, lo catalogó como “el niño símbolo” de la delincuencia juvenil. La exposición descarnada del caso de Cristóbal llevó a un Tribunal de Familia a prohibir que los detalles de su vida personal o médica fueran ventilados en la prensa. En la actualidad, sabemos que está cumpliendo con una sanción de libertad asistida, a la que fue condenado por intentar asaltar una bencinera... con una pistola de juguete.

### **Un nuevo caso, un nuevo paso: “Byron”**

El caso más reciente de “niños delincuentes” es el de Byron A.H.M. Este caso, en varios aspectos, recibe un tratamiento similar al de Cristóbal. Pero, con una importante diferencia: Byron es sometido a tratamiento en el programa “Terapia Multisistémica”.

Byron A.H.M. se hizo conocido el año 2012 cuando se vio implicado en la muerte de una profesora, luego de protagonizar un accidente automovilístico tras ser perseguido por la policía. Byron, acompañado de otros dos niños, habría robado en una casa de la comuna de La Reina y al volante de un auto igualmente robado luego de una corta persecución policial, impactó el automóvil de una profesora tras no respetar una luz roja. La mujer, de 53 años, falleció producto del impacto. En

---

<sup>189</sup> <http://www.24horas.cl/nacional/el-cisarro-nino-simbolo-de-la-delincuencia-juvenil-634599>.

ese momento Byron tenía solo 11 años. Según la policía, el niño llevaba más de 10 detenciones, siendo la primera el año 2010 por robo frustrado<sup>190</sup>.



**Similar persecución policial, con distinto desenlace**

Un rasgo notorio de este caso es que la prensa destacó desde un comienzo el alto número de detenciones del niño y se dedicó a llevar, en adelante, su contabilidad. Instaló la imagen de que este hecho era señal de un comportamiento irreductible. Y en solitario. No se mencionó nunca alguna “pandilla” que lo secundara o a la que perteneciera, ni tampoco habría incurrido en algún comportamiento violento. De hecho, no se le podía atribuir ningún delito consumado, como hizo notar un observador atento.

Sus delitos se remontan en el tiempo y parecieran reducirse a la historia de un niño que huye de la policía: *“Menor de 14 años que registra 39 detenciones es capturado huyendo en un automóvil (...) Se trata del mismo niño que en 2012, mientras huía de la policía a bordo de un vehículo robado, impactó a una mujer provocándole la*

---

<sup>190</sup> Diario La Cuarta. <http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2014/01/63-163514-9-el-byron-sumo-al-historial-su-octava-detencion-con-solo-12-anos.shtml>.

*muerte*". Aparte del número de detenciones, añade dramatismo el tratamiento de reincidente que recibe Byron:

"Un menor de 14 años, reincidente en la delincuencia, fue detenido durante las últimas horas por Carabineros de la 47° comisaría mientras se trasladaba a bordo de un automóvil robado. El adolescente, conocido en el ambiente como "Byron", tiene un prontuario que indica que ha sido detenido 39 veces por robo y otros delitos. En esta última oportunidad fue aprehendido cuando viajaba con otros dos cómplices en un vehículo robado en los Dominicos".



Si en el caso de Cristóbal se describía a un niño *"que se creía gánster"*, ahora el trato se parece más al que recibiría un delincuente adulto. No puede ser "reincidente" un niño inimputable, que no ha sido nunca condenado. Los términos "prontuario", "ambiente" y "cómplices", se distribuyen convenientemente para sellar su pertenencia al mundo de la delincuencia. Al parecer su delito es su pasado y este consiste en haber estado "implicado en la muerte de una profesora". En esa oportunidad, "Byron" tenía 12 años y estaba acompañado por dos menores, de 11 y 14 años<sup>191</sup>.

En este caso, como en el anterior, el descontrol conductual del niño es atribuido a "familias disfuncionales", donde "los roles de los padres son casi inexistentes". La causa inmediata es ahora la falta de competencias de crianza de su padre, a quien el tribunal de familia había otorgado la custodia del niño. Según señalaba un

---

<sup>191</sup> Emol.com. <http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/29/657684/menor-de-14-anos-registra-39-detenciones-y-nuevamente-es-sorprendido-robando.html>.

familiar, en una entrevista al diario *La Segunda*: "El problema fueron las 'malas juntas'. Empezó con tonteras, como ir al supermercado con amigos a robar cosas para comer, como dulces, y se fue metiendo más y más". Luego de su primera detención, su familia comenzó a ser tratada por psicólogos del programa de Terapia Multisistémica, mientras que Byron era internado en el mismo establecimiento de SENAME en el que se encontraba recluso en aquel entonces, Cristóbal, para su "contención". El Subsecretario de Prevención del Delito dijo en esa oportunidad: *"Su familia está siendo tratada con una terapia multisistémica traída desde Estados Unidos (...) Para lograr que el niño se pueda reinserir, además de intervenirlo a él, hay que hacerlo con su familia. Así lo estamos haciendo, con su madre, hermana y primo"*. Detalló que la terapia multisistémica con la familia dura entre cuatro y seis meses: *"(El niño) no va a mostrar cambios a menos que se sienta en un entorno seguro, que tenga una familia donde se sienta acogido y motivado para retomar sus estudios"*<sup>192</sup>. Tras su siguiente detención, el tribunal de familia ordenó como medida de protección internar a Byron en un centro psiquiátrico. Los psiquiatras aprovecharon de descalificar la terapia multisistémica, al señalar que *"la intervención de psicólogos no es apropiada, pues estos son casos clínicos que requieren intervención médica"*. Con argumentos ad-hoc, el psiquiatra Rodrigo Paz, manifestó su acuerdo con la medida del tribunal: *"Existe un mal funcionamiento de los circuitos cerebrales que tiene que ver con el control de impulsos, con la regulación emocional y eso lo hace muy peligroso, tanto para sí mismo como para los demás"*<sup>193</sup>.

### **El caso "Peaje Quino" y la criminalización de jóvenes mapuche.**

El domingo 11 de octubre de 2009, la prensa informaba: *"Encapuchados quemaron camión y asaltaron peaje en la Araucanía"*. La noticia detallaba: *"Decenas de encapuchados quemaron un camión y asaltaron un peaje en La Araucanía, además de generar destrozos y dejar consignas referentes al conflicto mapuche. Ante los hechos, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones realizan operativos*

---

<sup>192</sup> Diario La Segunda, 17 de agosto de 2012.

<sup>193</sup> Diario La Segunda, <http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/07/866468/Carabineros-detiene-a-menor-Byron-cuando-se-preparaba-para-robar-una-residencia-en-Las-Condes>



*para dar con el paradero de al menos 15 sujetos que prendieron fuego a un camión cerca del peaje Quino, en Victoria.*"<sup>194</sup>

Aunque al día siguiente, la Coordinadora Arauco - Malleco (CAM) se adjudicó los atentados y pese a la presencia de *"consignas referentes al conflicto mapuche"*, el gobierno negó cualquier motivación política y calificó el suceso como un acto terrorista-delictual. Según el Subsecretario de Interior de la época, Patricio Rosende, el comunicado no era creíble porque *"la Coordinadora Arauco Malleco es una organización cuyos dirigentes principales están hoy día presos. La capacidad operativa de esta organización, a nuestro juicio, está disminuida al extremo."*<sup>195</sup>. El día 13, anunció la aplicación de la ley antiterrorista. Haciendo evidente que la razón de la aplicación de la ley no eran los delitos cometidos, sino sus presuntos autores mapuche, Rosende declaró: *"Hemos tomado la decisión invocar la Ley Antiterrorista para perseguir a estos grupos de gente que lo único que quiere es causar desorden, delitos e intranquilidad en una región (La Araucanía) que busca un camino de concordia"*<sup>196</sup>. Al día siguiente, el ministro coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, sostuvo que dichos grupos *"deslindan entre la actividad político violenta y la actividad delictual"*<sup>197</sup>. Siguiendo, a Viera-Gallo, Rosende señaló que *"en ese sentido, esto poco tiene que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche. Aunque usen eslóganes de la causa mapuche, la verdad es que se trata de un grupo extremista delictual"*. Dos días más tarde, integrantes de fuerzas especiales y de inteligencia de Carabineros, detuvieron a un grupo de comuneros en dos de las comunidades de la "zona roja" del conflicto territorial entre el movimiento mapuche y el Estado de Chile: Ercilla. Se trataba de las comunidades Temucuicui Autónoma y Cacique José Guiñón, la primera en conflicto territorial con propietarios privados y la segunda en conflicto con

---

<sup>194</sup> [http://www.cooperativa.cl/encapuchados-quemaron-camion-y-asaltaron-peaje-en-la-araucania/prontus\\_notas/2009-10-11/091623.html](http://www.cooperativa.cl/encapuchados-quemaron-camion-y-asaltaron-peaje-en-la-araucania/prontus_notas/2009-10-11/091623.html).

<sup>195</sup> <http://www.lanacion.cl/gobierno-justifica-ley-antiterrorista-por-atentados-en-malleco-y-cuestiona-a-la-cam/noticias/2009-10-14/172855.html>.

<sup>196</sup> <http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/10/14/380113/subsecretario-del-interior-visita-la-araucania-tras-serie-de-atentados-incendiaros.html>.

<sup>197</sup> <http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/10/14/380113/subsecretario-del-interior-visita-la-araucania-tras-serie-de-atentados-incendiaros.html>.



propietarios privados y con empresas forestales. El tribunal de Victoria se declaró incompetente y la denuncia pasó a la justicia militar<sup>198</sup>.

La Fiscalía, falta de pruebas, presentó el testimonio de un joven que se acogió al beneficio de la “delación compensada” (Art. 14 de la ley). El testimonio se utilizó en varias causas diferentes y eso le hizo perder credibilidad. Además, el testigo “sin rostro” resultó ser un delincuente conocido por la policía y con abundante prontuario, aunque no por hechos violentos. El tribunal de garantía desechó las pruebas relacionadas con hechos anteriores y la Corte Suprema no solo reafirmó lo resuelto por el tribunal, sino que descartó de plano al testigo. Adicionalmente, no avaló la aplicación de la ley antiterrorista y obligó al Ministerio Público a recalificar los delitos. Los imputados recuperaron primero su libertad y luego, en agosto de 2012, fueron sobreseídos<sup>199</sup>. Dos años de cárcel y una huelga de hambre de por medio (que tuvo gran relevancia en el vuelco del caso), fue el costo para los comuneros. Pero lo peor estaba por venir. La absolución sólo tuvo efecto para los mayores de edad. La persecución continuó en contra de los dos menores de edad detenidos. El 28 de junio de 2013, a cuatro años de los hechos, Luis Marileo Cariqueo, menor al momento de ser detenido y procesado por delito terrorista, señaló: *“Desde la fiscalía de Victoria me mantienen acusado en el caso peaje Quino, a pesar que los mayores de edad de esa época ya fueron absueltos”*<sup>200</sup>.

La causa quedó a la espera de que el tribunal de garantía ordenara un nuevo juicio oral. El longko Víctor Queipul Huaiquil, protestó:

“Con esta nueva resolución queda claramente demostrado que el Estado Chileno a través de este Gobierno, lo único que busca es continuar con la práctica de persecución política judicial hacia nuestra comunidad, puesto que en los últimos días han golpeado fuertemente a nuestra comunidad trasladando a los prisioneros políticos Camilo Toris Quiñinao y Omar Huenchullan desde la cárcel de Angol hacia Concepción y por último revocando la resolución del Tribunal de Victoria en sobreseer definitivamente la causa donde varios de nuestros integrantes permanecieron varios años encarcelados y posteriormente absueltos en el caso peaje Quino. Ahora

---

<sup>198</sup> <http://www.clave9.cl/?p=30707>

<sup>199</sup> <http://diario.latercera.com/2012/08/25/01/contenido/pais/31-116835-9-absuelven-a-ocho-mapuches-acusados-en-caso-de-asalto-a-peaje.shtml>.

<sup>200</sup> <http://paismapuche.org/?p=6733>

nuestros menores de edad serán nuevamente enjuiciados y enfrentarán el mismo juicio, pero queremos ser enfáticos en señalar que también continuaremos demostrando la inocencia de nuestro niños”<sup>201</sup>.

Luis Marileo estuvo encarcelado durante un año y cuatro meses, un año más con arresto domiciliario total y a partir de entonces, con arresto domiciliario parcial. El año 2010, cuando se realizó una “huelga de hambre” generalizada de los presos políticos mapuche en varias cárceles del sur del país, Marileo fue quien se mantuvo por más tiempo. El bochorno causado por el espectáculo de la aplicación de la legislación antiterrorista a menores de edad en la opinión, o más precisamente entre los políticos legisladores, que habían estado hace poco peleando para tener una ley penal adolescente, generó una rápida iniciativa legislativa para hacerla inaplicable a menores de edad<sup>202</sup>. El caso tuvo impacto en el ámbito de los derechos humanos y la UNICEF, ONG’S vinculadas a la protección de la infancia, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos reformistas, emplazaron al gobierno, siguiendo de cerca su desenlace. Las implicancias racistas tampoco pasaron desapercibidas, menos tratándose de jóvenes de los pueblos originarios. Se hacían comparaciones con casos más graves, en que no hubo imputados mapuche. En todos los casos de los últimos años, donde había habido personas acusadas de poner bombas -casos *Bombas*, *Pitronello*, *Niemeyer*-, la calificación de delito terrorista había sido rechazada por los tribunales.

Sin embargo, también se manifestó en esta oportunidad la recurrente y callada resignación de los actores que se oponen al uso de la herramienta penal. La prensa fue pródiga en destacar las conductas “terroristas” del *grupo delictual* involucrado en los hechos. El Ejecutivo no sólo sobrerreaccionó en el ámbito jurídico, sino también en lo policial y carcelario. La tónica cuando se trata de imputados

---

<sup>201</sup> <http://paismapuche.org/?p=6733>.

<sup>202</sup> La ley antiterrorista, dictada en 1984 durante la dictadura, fue modificada por la ley Nº 20.467, que en su artículo 3º establecía que los menores imputados debían ser juzgados por la ley de responsabilidad penal adolescente. Los fiscales, interpretaron que eso no les impedía aplicar las medidas cautelares y de investigación especiales que otorga la ley antiterrorista y actuaron en consecuencia. Para zanjar la cuestión se dictó la ley Nº 20.519 del 21 de Junio de 2011, que estableció taxativamente que no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años.

pertenecientes al pueblo mapuche, es que sean perseguidos y detenidos con violencia, considerados peligrosos en los recintos penales y sometidos a vigilancia especial y a un aislamiento del resto de la comunidad. Este caso no fue la excepción.

La idea de que hay terrorismo en la Araucanía es un viejo tema en los medios. El discurso ideológico que se despliega en estos casos, tiene una estructura que se reproduce en varios momentos y lugares: *la lucha del pueblo mapuche es inexistente y lo que de verdad ocurre, es que un grupo de terroristas “infiltrados” siembra el pánico entre los honrados agricultores de la zona, perjudicando con sus acciones al auténtico pueblo mapuche, que quiere trabajar y vivir en paz.* También se manifiesta esta estructura cuando se habla del “conflicto mapuche”, dando a entender en la proposición misma, quienes son los causantes de tal situación.

## **LOS PROGRAMAS.**

Junto con los caos expuestos, nuevos programas de prevención de la delincuencia dirigidos a niños inimputables, alcanzaron una importante presencia en la última década. En los casos revisados, fueron un complemento a las respuestas de control que pasaron, como respuesta principal, por el encierro en un establecimiento correccional o psiquiátrico. A diferencia del encierro, sin embargo, instalan un modelo diferente de control del comportamiento, buscan fortalecer la vigilancia y control del niño por la familia y la red social local, para evitar que progrese en una trayectoria delictiva. Se han implementado a partir del año 2007, dos programas: “Vida Nueva” y “Terapia Multisistémica”.

### **El programa Vida Nueva.**

El programa “Vida Nueva” es un plan para instalar un modelo de gestión local de casos de niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, inimputables e infractores de la ley penal, a partir de la información generada por el Programa de

Seguridad Integrada, PSI 24 Horas de Carabineros<sup>203</sup>. El PSI 24 horas había partido en ocho comunas de la región metropolitana y en el periodo de 2005 a 2009, durante el primer gobierno de Bachelet, llegó a generar convenios con 279 municipalidades, lo que representa una cobertura del 80% de los municipios del país. En el año 2010 se puso en marcha el programa Vida Nueva, para atender a todos los niños registrados en los listados del PSI 24 horas.

En el programa se coordinan la Subsecretaría de Carabineros, el SENAME, la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud, que se integró el año 2011. El modelo del programa consiste en dos componentes de diagnóstico y derivación y tres componentes de intervención. El primer componente de diagnóstico son los *Equipos de Evaluación de Riesgo, EER*, que utilizan una adaptación del ONSET, herramienta aplicada por el *Youth Inclusion Programme* (YIP) de Reino Unido, que busca detectar a los niños y adolescentes de entre 10 y 17 años, que presentan “*conductas transgresoras y factores de riesgo socio delictuales*”. Los EER son el único componente programático nuevo, ya que los restantes existían con anterioridad. El segundo componente de diagnóstico y evaluación son las *Oficinas de Protección de Derechos, OPD*, que fueron creados por el SENAME para diagnosticar y derivar a otros programas a los niños y adolescentes levemente vulnerados en sus derechos o en situaciones de baja complejidad<sup>204</sup>. Un tercer componente, son los *Programas de Intervención Breve para la Prevención Focalizada, PIB*, para niños y adolescentes con vulneraciones de derechos más serias y leves conductas transgresoras, o mediana complejidad. Un cuarto componente, son los *Programas de Intervención Integral Especializada, PIE*, para niños y adolescentes gravemente vulnerados y con conductas transgresoras graves, o alta complejidad. Un quinto componente son los programas de apoyo al PIE, como el *Programa de Tratamiento en Drogas, PDC* y el *Programa de Reinserción Educativa, PDE*. A los componentes anteriores, se suman los Equipos de Salud Mental del Ministerio de Salud y una orgánica de coordinación local, llamada Mesa

---

<sup>203</sup> 24 Horas. *Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes*. Dirección de Protección Policial de la Familia, Carabineros de Chile y Subsecretaría de Carabineros, Ministerio de Defensa Nacional, 2007.

<sup>204</sup> Para mayores detalles del programa y los niveles de complejidad, se puede consultar el apéndice 3, de definiciones de programas.

de Gestión de Casos, que tiene la misión de priorizar los casos de alta complejidad, de manera que sean abordados en forma integral por distintos servicios locales.

El presupuesto del programa creció en un 71% entre 2010 y 2012, llegando a 5.000 millones de pesos (4.992.810.000). El incremento se debió a la inclusión dentro de sus componentes, del nuevo programa de “Terapia Multisistémica”, al que nos referiremos luego.

Una evaluación efectuada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, DIPRES, concluyó que el programa tiene dificultades para articular actores con enfoques de política diferentes, lo que se aprecia en que el programa focaliza su accionar en el trabajo de los EER y los PIE y programas complementarios, en los que es notoria la influencia de la perspectiva de seguridad pública de la Subsecretaría del Interior, mientras que los componentes OPD y PIB, responden a una lógica de protección de derechos, más afín al SENAME. El panel objetó también que, antes de cumplir los tres años de la etapa piloto, se haya introducido un nuevo instrumento para la atención de los niños, la Terapia Multisistémica, *“que focaliza su atención en aquellos con mayor riesgo socio delictual a un costo mayor al actual con instrumentos similares (PIB y PIE)”*<sup>205</sup>. El modelo de gestión crea también algunos problemas de coordinación entre los EER y las OPD. Los enfoques de trabajo difieren entre sí lo suficiente como para nublar la visión global del programa. Dice la DIPRES:

“(SENAME se orienta) hacia la protección de derechos de los niños/as y adolescentes, donde se entiende que la población susceptible de ser atendida presenta de manera recurrente situaciones de vulneración de derechos en sus historias de vida, especialmente aquellas asociadas a malos tratos, negligencia y abandono. En esta situación, comienza a darse en el sujeto de atención la presencia de conductas transgresoras, ya sea durante la adolescencia temprana o tardía, etapa asociada a su vez a una mayor autonomía del sujeto respecto de las familias y escuelas como agentes socializadores. Por otra parte, la visión de la Subsecretaría de Prevención del Delito está enfocada de manera más específica a la ‘detección temprana’ de lo que pueden constituir

---

<sup>205</sup> El costo por intervención, considerando su duración promedio es de 983.000 pesos en PIB, de 2.144.000 pesos en PIE y de 2.268.697 en TMS. *Evaluación programa Vida Nueva*. Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), DIPRES, Ministerio de Hacienda, 2012.

trayectorias delictivas. Estas diferencias de enfoque entran en contraposición en algunas etapas del programa, por ejemplo, en la mayor focalización en identificar el riesgo socio delictual del menor solo en aquellos que, dentro del listado del PSI 24 horas, ingresan como ‘transgresores’, cuando en etapas previas también se trabajaba con los vulnerados”<sup>206</sup>.

Los evaluadores hacen ver las consecuencias en términos de gestión, pero exageran en cuanto a las consecuencias ideológicas. De hecho, en lo esencial ambos enfoques están de acuerdo, cuando consideran que los niños vulnerados en sus derechos tienen una chance elevada de convertirse en infractores de la ley penal. Tanto los partidarios del enfoque protector como los partidarios del enfoque preventivo, comparten la idea de que la actuación temprana sobre las trayectorias de los niños vulnerables, ayuda a evitar su más que probable deriva delictual<sup>207</sup>.

### **Terapia Multisistémica.**

Quizá hayan sido las consideraciones financieras y de gestión, las que hayan obligado a que desde un comienzo la decisión de adoptar este instrumento programático se haya revestido de una fuerte carga ideológica, que se expresó como una racionalidad político – técnica de la inversión. El subsecretario de Prevención del Delito del gobierno de Piñera, Cristóbal Lira, anunció de manera entusiasta las bondades del nuevo programa:

“El Programa de Terapia Multisistémica, modelo de intervención creado en E.E.U.U., constituye una innovación en cuanto a intensidad y calidad de intervención psicosocial a menores infractores de ley. La intervención toma a los jóvenes vulnerables y les realiza un tratamiento integral que incluye todo el

---

<sup>206</sup> DIPRES, *Evaluación programa Vida Nueva*. Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), Ministerio de Hacienda, 2012.

<sup>207</sup> Un estudio reciente, aunque poco discutido y difundido, reveló que sólo un 7.9% de niños y niñas, que egresan de programas de protección ingresan a programas de justicia juvenil, lo que da al traste con la idea de que los niños abandonados o vulnerados, en peligro, tienen una elevada chance de convertirse en futuros delincuentes. Cf. J. ALVAREZ, “Niños y niñas egresados de la Red de Protección de SENAME que ingresan a medidas de Justicia Juvenil”, Revista SEÑALES, Año 4 - Nº 9, Diciembre de 2011.

entorno del niño: colegio, barrio, familia, entre otros. A la fecha, el 70% de los menores tratados por la terapia no han vuelto a reincidir”<sup>208</sup>

La reforma de la responsabilidad adolescente, de la que nos ocupamos en los capítulos anteriores, había instalado la idea de que la responsabilidad adolescente, entre los 14 y los 17 años, sólo cabía respecto de infracciones a la ley penal y no sobre cualquier otro comportamiento no normativo de los niños (desobediencia a los padres, abandono de hogar, mal comportamiento, deserción escolar, consumo de drogas) como ocurría en el antiguo sistema tutelar de menores. Como se aprecia en la cita, hay un desplazamiento de la frontera punitiva hacia los niños más pequeños, con la utilización del término “infractores de ley” y otros supuestos.

El programa Terapia Multisistémica se define como un componente de tratamiento intensivo del 24 horas, que aborda de manera intensa las transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual e integración social de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años, que presentan los más altos perfiles de riesgo socio-delictual, según la evaluación arrojada por el instrumento ONSET. El programa se implementa en unidades de trabajo territorial, constituidas por 5 psicólogos (un supervisor y cuatro terapeutas), donde cada terapeuta se hace cargo de 6 familias de manera simultánea y está disponible las 24 horas del día, a fin de atender cada caso de manera personalizada. Esta estrategia supone la realización de varias sesiones de tratamiento a la semana, principalmente con sus padres o cuidadores, hermanos, amigos y profesores. Contraria a la moderación exhibida por sus evaluadores, el programa se precia de estar respaldado por la “evidencia” científica. En declaraciones al diario La Segunda, el Subsecretario Lira señaló:

“A diferencia de casos similares tratados con otros métodos o no tratados, esta terapia ha obtenido resultados acreditados sumamente importantes: 30% menos de reincidencia en delitos comunes, 38% menos en delitos sexuales, 70% menos arrestos, 80% menos tiempo en centros de detención, 10 semanas menos (promedio) de encarcelamiento, mayores tasas de abstinencia del consumo de marihuana”<sup>209</sup>.

---

<sup>208</sup> TMS. *Programa Terapia Multisistémica*. Departamento de reinserción Social. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Santiago, Chile, 2014.

<sup>209</sup> Diario “La Segunda”, viernes, 17 de agosto de 2012

Refrendando lo anterior, al año siguiente El Mercurio dedicó un editorial para referirse al programa como un “*antes y un después*” en materia de políticas preventivas en el país. El editorial, posiblemente escrito por Paz Ciudadana, da a entender que el gobierno va por el camino correcto en su afán de ganar “*la guerra contra la delincuencia*”. El texto del editorial puede encontrarse en el apéndice 1, de material de prensa.

En un trabajo paralelo, publicado en la serie *Conceptos* de la Fundación, se defiende con entusiasmo la inversión en programas de prevención de la delincuencia basados en el enfoque de factores de riesgo. Estos estarían respaldados por la “evidencia”, tendrían una buena relación costo-efectividad, ahorrándole dinero al Estado en el largo plazo y logran un buen arraigo en la comunidad. Las desventajas, curiosamente el anverso de las anteriores, serían menos importantes que las ventajas: no hay certeza causal de la influencia de los factores de riesgo, falta información sobre su eficacia en “países en vías de desarrollo”, el privilegio de los factores de riesgo por sobre los factores protectores puede conducir a la estigmatización de los beneficiarios y los procesos de implementación son muy dificultosos<sup>210</sup>.

El nuevo gobierno de Bachelet (2014 – 2018), ha continuado con la implementación del programa, que ha rebautizado como de Apoyo Integral Familiar, anunciando su ampliación a 11 nuevas comunas durante el actual periodo de Gobierno, llegando a un total de 36 comunas del país el año 2016, pensando invertir más de 24 mil millones de pesos hasta el año 2018. Respecto de los resultados del programa, se señala que los equipos de evaluación de riesgo, entre el año 2012 y marzo del año 2015, han diagnosticado a 11.177 niños y adolescentes, en tanto que Terapia Multisistémica ha realizado 2.574 atenciones, con 1.400 casos egresados, de los cuales el 70% no tuvo nuevas detenciones durante su tratamiento, un logro bastante modesto, considerando que se trata de un tipo de intervención intensivo, en un periodo máximo de seis meses<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> Cf. C. DROPPPELMANN, ¿Vale la pena invertir en estrategias de la delincuencia basadas en el enfoque de factores de riesgo?”, en: *Conceptos* N° 20, Fundación Paz Ciudadana, julio de 2011.

<sup>211</sup> Programa 24 Horas 2015, Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. Página web.



Lo que ningún medio ha mencionado nunca es que la Terapia Multisistémica es un programa intensivo a corto plazo, que según sus promotores, se ha comprobado efectivo en la disminución de comportamientos antisociales de los *delincuentes juveniles violentos y crónicos*, no de inimputables<sup>212</sup>.

La Terapia Multisistémica encarna a la perfección la “tendencia de punta” en los modelos de control: actuación preventiva a través de la gestión de los riesgos, tratamiento de intensidad intermedia sobre el entorno ecológico del sujeto intervenido, actuación asistencial orientada a radicar la responsabilidad del control en el grupo familiar, colonización y subordinación tecnológica, y rendición de cuentas a una agencia extranjera.

## **IDEOLOGÍA Y TECNOLOGÍA EN EL CONTROL DEL DELITO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Las tendencias observadas en la instalación y desarrollo de los temas de seguridad ciudadana y violencia delictiva juvenil en la opinión pública y en las acciones y políticas gubernamentales, destacan la conformación de un espacio discursivo que convoca diferentes estrategias de control del comportamiento de los menores que cometen delitos. Los discursos que se dicen en los casos que hemos presentado, en algunas noticias destacadas, en los espacios de la televisión, en las medidas de tolerancia cero, en los programas de prevención de la delincuencia, describen diferentes definiciones ideológicas sobre el control de los menores delincuentes, que se decantan en torno a diferencias de edad establecidas institucionalmente, como en el caso del sistema de responsabilidad penal adolescente. Este sistema, que regula los delitos que cometen los menores que tienen entre catorce y diecisiete años, se consolida como un límite bajo el cual se organiza la punición de los menores de catorce años.

Diferentes discursos y tecnologías se manifiestan en los casos que hemos presentado: tutela, correccionalismo, responsabilidad penal adolescente, segregación punitiva. Estrategia tutelar, en el caso de “la niña del jarrazo”, ejemplo

---

<sup>212</sup> J. MULLER y S. MIHALIC, “Blueprints: A Violence Prevention Initiative”, en *Fact Sheet*, June, # 110, OJJDP, Washington DC, 1999. Disponible en: <http://www.ojjdp.ncjrs.org>

de reproche moral. Estrategia correccional, en los casos de “Byron” y “Cisarro”, donde se oscila entre el encierro “proteccional” y el encierro “sanitario”, sin más puntos en común que la privación de libertad para la normalización del comportamiento y el control conductual. Estrategia de segregación en el tratamiento del caso “Peaje Quino”, distante y despersonalizado. Aquí, el colorido de los personajes infantiles desaparece, en favor de una inscripción del caso en un contexto de guerra. La presencia de personajes sin rostro, la irreductible identidad comunitaria de los detenidos, el carácter fantasmagórico de su lucha, legitima un tratamiento segregador y excluyente de la conflictividad de los adolescentes mapuche involucrados.

El programa “Vida Nueva” innova en la definición de una red de tratamiento de niños “vulnerables” e “inimputables”, que se gestiona como población en “riesgo”, es decir, alejándose del enfrentamiento de la peligrosidad de forma directa y “cara a cara”, doblando la pretensión estadística (estática) en dirección de una gestión de trayectorias (dinámicas). Novedosa tecnología de poder, que ejerce un control a distancia (detección del riesgo y asignación de un tratamiento compensatorio) y, a la vez, localizado -gestión individual de los casos, con una pretensión de integralidad-.

De distintas maneras, el lenguaje de las noticias expresa asociaciones positivas y negativas con respecto a los protagonistas involucrados. Se magnifica el daño que causan los menores con sus delitos y se minimizan o ignoran las vulneraciones sufridas por estos o los abusos que cometen en su contra los adultos y agentes del orden. Su historia es interpretada de manera simplista y siempre en función de su actual realidad “criminal”. En general son vistos como extraños al cuerpo social, como una “invasión” de elementos exógenos, que tienden a perturbar el orden social y nunca como un producto de la misma sociedad que los rechaza. Sus motivaciones son presentadas como irracionales. Hay elementos comunes a todos los casos y es que sistemáticamente falta el punto de vista de los menores afectados, nadie les pide su opinión, siempre hablan acerca de o por ellos los adultos y particularmente, los “especialistas”.

Aunque centrada en el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, la red discursiva que estructura las formas ideológicas de idear acciones y respuestas, las

concepciones diferentes de control y castigo que van de la prevención especializada de los riesgos a la punición pura y dura, y que parecen tender a conformar una entidad continua de vigilancia y control; se decantan del lado de la intensificación de la respuesta punitiva, en la idea de “adelantar” el castigo, de disponer de formas de control y vigilancia a una edad cada vez más temprana. “Castigar cuanto antes, antes de que sea tarde”, pareciera ser la consigna implícita en la tendencia general. Como dijimos: Tolerancia cero *made in* Chile. Una respuesta punitiva intolerante ante el miedo y la inseguridad, siempre mayores que el riesgo real. Castigar sí, pero con garantías y límites, plantean como alternativa impotente quienes se oponen a la ideología de la tolerancia cero.

En su propuesta de análisis del discurso noticioso y en sus investigaciones sobre el racismo, Van Dijk propone el estudio de prácticas discursivas que tienen un fundamento ideológico. Los discursos ideológicos son “*sistemas básicos de creencias*”, que tienen una estructura y un formato *proposicional*, rastreable en los textos. Así, el discurso noticioso puede ser estudiado como un mecanismo reproductor de determinadas ideologías. Los casos expuestos y los programas de prevención de la delincuencia revisados, dan cuenta de una diversidad de estrategias de gestión del delito infantil y adolescente en la actualidad, ligadas a su expresión a través de los medios masivos de comunicación. Estas estrategias son discursos ideológicos constructores de imágenes y efectos de control social del delito y de la producción de seguridad.

Hemos visto por ejemplo cómo, los programas de prevención son destacados en un editorial de un medio de “*prensa de prestigio*”, donde a la vez que se defiende y promueve el programa, se legitima la terminología técnica especializada que lo sustenta<sup>213</sup>. La estrategia básica del discurso ideológico es, según Van Dijk, hablar de “nuestros” aspectos positivos y de “sus” aspectos negativos. Se trata de: “*Poner énfasis en Nuestros aspectos positivos; Poner énfasis en Sus aspectos negativos. Quitar énfasis de Nuestros aspectos negativos. Quitar énfasis de Sus aspectos positivos*”<sup>214</sup>. Este “cuadrado ideológico” es reconocible en las construcciones

---

<sup>213</sup> Como señala Bourdieu, “La diferencia entre ‘la prensa sensacionalista’ y la ‘prensa informativa’, reproduce en definitiva la oposición entre los que *hacen* política en actos, palabras o pensamiento, y los que la *reciben*”, citado en G. ABRIL, *Teoría General de la Información*, Cátedra, 2º Ed., Barcelona, 2005. Pág. 226.

<sup>214</sup> T. VAN DIJK, *Ideología y discurso*, Ariel Lingüística, Barcelona, 2003, Pág. 58.

discursivas en torno a los casos: del delincuente como enemigo interno; de los niños incontrolables con “anomalías” conductuales o diagnosticados como personalidades antisociales, sin redes de protección familiar; de los que son ajenos a la convivencia educada e incurren en actos violentos; de los que carecen o no han gozado de un adecuado cuidado y supervisión paterno; así como en los supuestos sobre los que están contruidos los programas.

El tratamiento discursivo de la delincuencia de menores por los medios, tiene la estructura de un proceso judicial: se trata de definir qué pasó, quien hizo que, quienes son los responsables y que pena o medida debe aplicarse. Y, paradójicamente, ya se sabe prácticamente todo. Los casos de niños inimputables son presentados como *narraciones* que dan cuenta de trayectorias delictivas que se vienen construyendo desde muy temprano en las vidas de los protagonistas de la noticia. La selectividad del sistema de control, que criminaliza preferentemente a los niños más vulnerables, a los fragilizados, a los que “*han incurrido en falta*”, hace aparecer este hecho como natural. La imagen de los niños populares, inseparable de su peligrosidad, es también la expectativa de un público que quizá no espere otro protagonista de la noticia que el que efectivamente tiene ante sus ojos.

Así, cuando nos referimos a un campo de control del comportamiento de niños y adolescentes, apuntamos a un conjunto de ideologías y estrategias de gobierno, que se relacionan entre sí y que se han ido instalando históricamente, como hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo. Campo designa aquí un conjunto más amplio y también más difuso que aquel conformado por el sistema de la ley de responsabilidad penal adolescente y sus antecesores, que constituye un campo institucional por el hecho de contar con una base jurídica y el respaldo de saberes legítimos. No obstante, las tendencias que describen los casos y programas descritos, se encaminan a una consolidación institucional e instalan igualmente nuevos saberes, que se legitiman de manera acelerada.

Para finalizar la investigación que hemos realizado, dedicamos algunas páginas a profundizar algunos de los conceptos articuladores que nos han permitido proponer la existencia de un campo de control del delito de niños y adolescentes. Estos conceptos son los de *discurso ideológico* y *tecnologías de poder* y, más ampliamente, de *gobierno*.

## Discurso ideológico

La relación entre discurso e ideología, que destacamos más arriba en el planteamiento de Van Dijk, es una relación del tipo continente/contenido, en el que la ideología representa el contenido, cargado de valor y el discurso la forma o el vehículo. Se corresponde con la deriva posestructuralista del concepto de ideología que, según Larraín, se traslada a la construcción de sujetos y objetos dentro de un discurso dado. La ideología en esta visión se “aplana”, se vuelve coextensiva con el discurso y pierde en parte su significado, aunque lo recupera, porque no se trata de cualquier discurso sino que “del discurso que pretende ‘suturar’ o ‘cerrar’ la permanente formación de significados, objetos y sujetos”<sup>215</sup>. En esta dirección, Zizek ha entendido la ideología como una “*matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación*”<sup>216</sup>. La ideología, en esta concepción es tanto forma como contenido y la forma está sujeta a importantes variaciones. Así, la ideología puede manifestarse como *doctrina* o cuerpo de ideas; como *institución*, es decir, bajo la forma de un régimen material y como “lo que se da por sentado” en lo cotidiano y en las creencias, que preferimos llamar en concordancia con otros autores: *sentido común*. Esta concepción tripartita de la ideología es de gran utilidad para nuestros propósitos, ya que permite pensar y describir distintas manifestaciones de lo ideológico, por ejemplo en el discurso de los medios, en los discursos de poder de las instituciones, en el habla de los sujetos, sin perder lo esencial de lo ideológico, que es ser una perspectiva valorativa y no meramente representativa.

Lo ideológico es un hecho social que da cuenta de la “realidad social” desde una cierta perspectiva de habla, que guarda correspondencia con una posición social. Como lectura o escritura desde una determinada perspectiva, es *interesada*, tiene un “valor” para el sujeto que habla, está “filtrada” por lo que puede decir o hacer y por lo que no. Más que las condiciones de visibilidad de Zizek, mejor es referirse a las condiciones de enunciación, las condiciones de habla: un pliegue sobre el

---

<sup>215</sup> J. LARRAÍN, *El concepto de ideología. Vol. 4. Posestructuralismo, postmodernismo y postmarxismo*. LOM ediciones, Santiago, 2010, Pág. 173.

<sup>216</sup> S. ZIZEK (Comp.), “Introducción”, *Ideología. Un mapa de la cuestión*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.

mundo simbólico. Lo ideológico es una limitación a nivel de la lengua, pero que invita a infinitas hablas. Lo ideológico es el material constitutivo de la subjetividad: “*Hoy sabemos que no toda la fuerza y toda la acción están del lado de la enunciación; la fuerza retenida en el signo -en el enunciado- nos enlaza en la cadena hablada, y -a través de esa cadena- nos enlaza en el orden social*”<sup>217</sup>. Desde su forma, lo ideológico es una estructura. No tiene la forma de una conciencia o representación, aunque puede producirla<sup>218</sup>. Desde su contenido, la ideología es lo que tiene *valor* (saberes, sentidos comunes, intereses, deseos), lo que tiene *sentido* y no se agota en el significado. Lo ideológico es un ámbito de temas acentuados axiológicamente, según los presupuestos socioeconómicos más importantes de la vida de un grupo<sup>219</sup>. Es un punto de vista interesado, un *desplazamiento* de la realidad, sin que esto implique que sea verdadero o falso, sino que, tal como sucede con el significado del *sentido común* en Elias, es parte de un fondo social de conocimiento compartido, más o menos *congruente* con la realidad y que desempeña una función de supervivencia<sup>220</sup>. La *perspectiva* y la *discursividad*, son las dos caras del proceso ideológico. La fuerza que pueda haber en el habla es la fuerza que pueda haber en lo *dicho*. Según Bourdieu, hay formas de hablar legítimas o autorizadas, que tienen la eficacia de las cosas *dichas*<sup>221</sup>. Lo ideológico

---

<sup>217</sup> J. IBAÑEZ, *Más allá de la sociología*. Siglo XXI de España, segunda edición, Madrid, 1986. Pág. 172

<sup>218</sup> “Es más bien un proceso que atraviesa la formación social y se manifiesta en un sistema de variaciones estructurales”, J. IBAÑEZ, *Del Algoritmo al Sujeto*. Siglo XXI de España, Madrid, 1985. Pág. 185.

<sup>219</sup> “Por la intersección de intereses sociales orientados en distinto sentido dentro de la misma comunidad de signos (...) La clase dirigente se esfuerza por extinguir u ocultar la lucha entre los juicios sociales de valor que aparecen en aquél, por hacer que el signo sea uniacental”. V. VOLOSHINOV, *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1976. Págs. 36-37.

<sup>220</sup> El sentido común conecta al sujeto con la comunidad: “Un concepto nuevo (...) sólo puede alcanzar este carácter cuando ha pasado por la prueba de diálogos que incluyen y entrelazan las actividades mentales de muchas personas”. N. ELIAS, *Teoría del Símbolo*, Ediciones Península, Barcelona, 2000. Pág. 103

<sup>221</sup> “Los rituales representan, en extremo, las situaciones de *imposición* en las que, a través del ejercicio de una competencia técnica que puede ser muy imperfecta, se ejerce una competencia social, la del locutor legítimo, autorizado para hablar, y para hablar como autoridad: Benveniste hacía observar que, en las lenguas indoeuropeas, las palabras que sirven para enunciar el derecho se vinculan a la raíz decir. El bien decir, formalmente correcto, pretende por eso mismo, expresar el derecho, es decir, el deber ser”. P. BOURDIEU, *Qué significa hablar*, Ediciones Akal, Madrid,

aparece aquí como lo instituido en y por las instituciones, lo estratégico, lo legítimo, lo que significa hablar o decir, constitutivo otra vez del sujeto mismo.

### **Tecnologías de gobierno.**

Se han realizado algunos análisis de las tendencias del control del delito en las sociedades neoliberales, desde la perspectiva de la gubernamentalidad, inaugurada por Foucault. En estas sociedades se habría desarrollado un nuevo modelo de control y de gobierno, el *management* o gestión de los riesgos, que habría desplazado al correccionalismo del ideal rehabilitador, característico del “*welfare penal*” o paradigma de control del Estado de bienestar. En la nueva gestión de los riesgos, la idea de responsabilidad es central. Se espera que las personas gestionen sus propios riesgos en función de un actuar responsable o bien, asuman las consecuencias de sus malas decisiones. Las nuevas estrategias médico-psicológicas y sociales pretenden ser, sobre todo, detectoras de los riesgos. A diferencia de lo que ocurre con la gestión de la “peligrosidad” de los individuos, en la gestión de los riesgos los problemas sociales son enfrentados en abstracto y manejados a “distancia”, sobre la base de la identificación y medición de *factores estadísticos* que caracterizan a individuos “vulnerables” como población en riesgo. Para esta población se estipula una intervención preventiva “temprana”, a modo de tratamiento compensatorio. La gestión de los riesgos define destinos colectivos, trayectorias sociales diferenciadas y “marcadas”. La “ayuda” no es gratuita sino que supone compromisos y flujos de deuda ante organismos burocráticos, una “responsabilización” exigente y ambigua, como contrapartida de las oportunidades de integración social ofrecidas. La responsabilidad es la coartada ideológica de una suerte de “tómalo o déjalo”, característica de los arreglos sociales del Estado de post bienestar<sup>222</sup>.

---

1985. Págs. 15-16. Una posición semejante, sobre el poder de ciertos discursos que producen lecturas ideológicas y visiones autorizadas del mundo, en J. IBAÑEZ, “Publicidad, la tercera palabra de Dios”, en: *Por una sociología de la vida cotidiana*, Siglo XXI de España, Madrid, 1994. Págs. 165-184.

<sup>222</sup> (...) Por ello, prevenir es ante todo vigilar, es decir ponerse en posición de anticipar la emergencia de acontecimientos indeseables (enfermedades, anomalías, conductas desviadas, actos delictivos, etc.) en el seno de poblaciones estadísticas detectadas como portadoras de riesgos”. R. CASTEL, *La Gestión de los Riesgos*, editorial Anagrama, Barcelona, 1984. Pág. 153.

Otros autores hablan del desarrollo de una “nueva penología”, cuyo nacimiento sitúan en los años 60, para la cual no es tan relevante la cuestión de la responsabilidad. La nueva penología, opera sobre la base de una lógica “actuarial”, que legitima la exclusión social y elimina por completo toda preocupación por la moral y la responsabilidad, para ocuparse del manejo eficiente de los delitos como “accidentes”, en un marco preventivo de gestión de riesgos. Utiliza la estadística y no el examen clínico para revisar y actualizar continuamente las estimaciones de riesgo. En el extremo, esta lógica puede operar en forma totalmente independiente de la comisión de delitos<sup>223</sup>. Simon plantea que es la adopción de políticas neoliberales lo que explica el aumento del control del delito. Mientras más un país adopta políticas neoliberales, más adopta la cultura del control. El crimen y el miedo al crimen, permiten a los gobiernos neoliberales “gobernar a través del delito”<sup>224</sup>.

Algunos analistas se enfocan en las mutaciones del régimen de vigilancia. El cambio de modalidades de control disciplinarias a modalidades pos disciplinarias, involucraría el paso de una tecnología de poder panóptica a una post panóptica. De acuerdo con Deleuze, estamos saliendo de sociedades disciplinarias y entrando en sociedades de control, que ya no funcionan mediante el encierro sino mediante un régimen de control continuo y una comunicación instantánea. Las sociedades de control se apoyan en los mecanismos de seducción y sujeción de la sociedad de consumo. El lenguaje numérico del control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. El hombre ya no está encerrado sino endeudado. Los nuevos mecanismos socio-técnicos de control se están instalando en lugar de los centros de encierro disciplinarios, en crisis: no localización, estrategias predictivas de actuación antes del hecho, entre otras<sup>225</sup>.

Aun cuando la lógica de la gestión de los riesgos se haya ido consolidando como una tendencia cada vez más destacada, en las tendencias de gobierno de la

---

<sup>223</sup> M. FEELEY y J. SIMON, “La nueva penología. Notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicancias”, en: *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, Año 4, nº 6 - 7, Págs. 33- 58.

Buenos Aires, 1995.

<sup>224</sup> Cf. J. SIMON, *Gobernar a través del delito*, GEDISA, Madrid, 2012

<sup>225</sup> Cf. G. DELEUZE, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en: *Conversaciones, 1972–1990*, Pre-Textos, Valencia. Págs. 277-286.



criminalidad en general y en particular de los niños y adolescentes delincuentes, creemos que se observa más bien una coexistencia de distintas racionalidades. Garland, por ejemplo, plantea dos modelos de acción: “Una estrategia de *adaptación*, de *asociaciones preventivas*, que hace hincapié en la prevención y la asociación y una estrategia del Estado soberano, de *segregación punitiva* que subraya el aumento del control y el castigo expresivo. La estrategia de *asociaciones preventivas* “denota una serie de supuestos criminológicos (las nuevas criminologías de la vida cotidiana); un estilo de gobierno (responsabilización, gobierno a la distancia); y un repertorio de técnicas y conocimientos, todos los cuales son en gran medida novedosos y distintos de las formas previamente consolidadas de pensar y actuar”<sup>226</sup>. En el análisis de las políticas de tolerancia cero que hemos realizado, también se distinguen dos tendencias, una preventiva y otra incapacitante, aunque unidas por una misma racionalidad.

Finalmente, en el trabajo realizado por Foucault sobre las tecnologías del biopoder, se encuentra quizá el mejor ejemplo de estrategias diferenciadas de poder unificadas en un régimen de convivencia. En su genealogía de los mecanismos del poder, Foucault delinea el desarrollo histórico y el modo de funcionamiento de los mecanismos del poder de soberanía, del poder disciplinario y del poder de regulación. Tres mecanismos que tanto se oponen como se combinan. En la combinación, uno de ellos da su carácter al conjunto. Una sociedad que combina el derecho de *soberanía* y los mecanismos de adiestramiento, *disciplinarios*, se define como una sociedad de normalización, pero la soberanía sigue presente. De igual modo, una sociedad que combina mecanismos *disciplinarios* de vigilancia y normalización y mecanismos de control *asegurador* o *regulador* de la población o de gobierno, se define como sociedad de la norma, del biopoder. El biopoder es una tecnología no disciplinaria, pero no excluye la técnica disciplinaria, se instala sobre ella misma, pero, se ubica en otro nivel, a distinta escala, tiene otra área de acción y recurre a instrumentos diferentes<sup>227</sup>. ¿Y qué ocurre en la sociedad de la

---

<sup>226</sup> D. GARLAND, *La Cultura del Control*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005. Pág. 238.

<sup>227</sup> Cf. M. FOUCAULT, “La gubernamentalidad”, en: *Espacios de Poder*, Ediciones Endymión, Madrid, 1991 y *Genealogía del Racismo*, Editorial Altamira, Buenos Aires, 1996. Este último texto corresponde a la transcripción del curso 1975 – 1976 que dictara Foucault en el Collège de France, y que ha sido publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica con su título original: “Defender la sociedad”.

biopolítica con el poder soberano? En una sociedad que ya inventó el biopoder, la soberanía vuelve a ocupar un lugar bajo la figura del racismo. El racismo fragmenta el continuo biológico establecido por el biopoder, plegándose a la funcionalidad de mejoramiento de la vida, pero a partir de su negación: *“la muerte o la exclusión del otro, de la mala raza (o del degenerado o del inferior) es lo que hará la vida más sana y más pura (...) se podría decir lo mismo de la criminalidad, la locura y las distintas anomalías (...) Lo que hace la especificidad del racismo moderno está ligado con la tecnología del poder”*<sup>228</sup>.

Concluimos estas líneas reafirmando el carácter mediador de los conceptos de discurso ideológico y tecnologías de poder, que ayudan a entender el funcionamiento actual del campo del control del delito de los menores. Ambos conceptos no se diferencian totalmente el uno del otro, por cuanto una tecnología de poder tiene también una dimensión discursiva y un discurso ideológico posee una dimensión tecnológica, al menos en la forma en que los hemos entendido aquí. Aunque desconfiara del concepto de ideología y prefiriera el de discurso, Foucault parecía referirse a aquella, cuando afirmaba: *“El discurso es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel, y polémicos y estratégicos en otro”*<sup>229</sup>.

De cualquier forma, estos conceptos mediadores nos dan pistas adicionales para explicar cómo las transformaciones del capitalismo neoliberal influyen en las mutaciones de los regímenes de control. Las explicaciones sobre las transformaciones actuales en las tendencias del control han apuntado a las mutaciones del sistema productivo, con el advenimiento del posfordismo; al gobierno de la miseria y el encarcelamiento masivo determinado por las consecuencias excedentarias del funcionamiento del mercado capitalista del trabajo, al retroceso de la sociedad salarial y la instalación de nuevos regímenes de marginalidad urbana; pasando por los análisis de los neorrealistas de izquierda sobre la tendencia a la legitimación de la sociedad excluyente y de la exclusión social -Young-, el advenimiento de la sociedad pos panóptica o del social panoptismo -Deleuze, Wacquant y otros-, etc. Estos análisis, aunque

---

<sup>228</sup> FOUCAULT, *Genealogía Del Racismo*, Págs. 208 - 209.

<sup>229</sup> M. FOUCAULT, *La Verdad y las Formas Jurídicas*, Editorial GEDISA S.A., Barcelona, 1999, Pág. 15.

esclarecedores, plantean una relación demasiado directa entre la estructura de los procesos productivos y el campo social, entre las necesidades de regulación del mercado de trabajo y el control del delito. Necesitamos hacer concurrir ciertas mediaciones, modelos que incorporen la cultura, los discursos, las ideologías. Al mismo tiempo, las estrategias de poder, el gobierno. Los conceptos mediadores de discurso ideológico o tecnologías de poder, se sitúan directamente en el nivel político e ideológico de nuestras formaciones sociales y ayudan a esclarecer la naturaleza de los obstáculos que enfrentan las luchas por la profundización de nuestras limitadas democracias actuales.

## **CAPITULO 5**

### **IDENTIDAD, CARRERA, INTEGRACION SOCIAL: LOS DICHOS DE JOVENES Y EDUCADORES**

---

Es momento de oír la palabra de los niños y adolescentes que delinquen, mudos e ignorados en su precarizada condición social, criminalizados social e institucionalmente, rotulados por los medios, designados en lo teórico y programático como antisociales y marginales.

¿Qué tendrán para decir, que voz pueden hacer audible ante su negada condición, proclamada a los cuatro vientos por las apocalípticas trompetas de los defensores del orden neoliberal y las políticas de tolerancia cero? No podemos finalizar el presente trabajo, sin dedicar un espacio a su acallada voz y a sus ignorados motivos. Este esfuerzo no es el menos importante sino, por el contrario, el más relevante e inquietante. Es también la tarea más dura y riesgosa, por la tentación de la infidelidad. Quizá lo más difícil de hacer es dar cuenta de los dichos de un sujeto tan particularmente criminalizado, desacreditado y silencioso, sin contribuir todavía más a su estatus marginal.

El capítulo se divide en cuatro partes. En la primera, exploramos el discurso social y la identidad de los menores, en dos momentos del tiempo: 1994 y 2005. Recogemos aquí el discurso ideológico de los muchachos y muchachas en torno a su práctica delictiva, desde la construcción de un núcleo de identidad con sentido. Esta indagatoria arranca con el discurso producido a través de la realización de dos grupos de discusión en 1994, que luego contrastamos con dos grupos focales realizados en 2005. La estrategia metodológica seguida en esta parte, se aproxima a las recomendaciones metodológicas para el estudio de grupos generacionales a

lo largo del tiempo, comparando en este caso a sujetos distintos, pero que pertenecen al mismo grupo etario<sup>230</sup>.

En la segunda y tercera parte, abordamos las trayectorias de los adolescentes en el delito, desde los principales procesos y contextos involucrados. Buscamos discursos de compromiso y discursos de desistimiento y procuramos dotar de contenido, en términos de carrera, a los discursos que caracterizan posiciones con anclaje en las prácticas. En esta parte, analizamos un grupo de ocho entrevistas realizadas en años recientes.

En la cuarta parte, revisamos la cuestión de la integración o inserción social, desde el punto de vista de los educadores que trabajan con los muchachos. Estos tienen una concepción muy particular sobre el proceso de inserción de los menores y, ciertamente, la cuestión de la "reinserción social" constituye un objetivo programático, formulado explícitamente como mandato de la justicia penal adolescente. En esta sección, el discurso sobre la inserción social, captado en un grupo de discusión realizado por nosotros con operadores y educadores en el año 2013, es contrastado con un estudio realizado el mismo año por sociólogos de la Fundación Tierra de Esperanza, que incluyó a educadores y adolescentes.

Para transitar los caminos analíticos anteriores, hemos puesto en juego, a modo de contexto interpretativo y en la forma dinámica de hitos subjetivos, los recursos teóricos identificados en la revisión realizada de las distintas teorías del delito desarrolladas a lo largo del siglo XX por los sociólogos norteamericanos. Nos valemos también de la noción de discurso ideológico, desarrollada en el capítulo anterior, en la acepción de la ideología como *sentido (en) común*, que define a un sujeto de lenguaje y conocimiento, que es competente en el manejo de un fondo de conocimiento y de saberes colectivos, responsables de las condiciones de eficacia de su palabra enunciada, de los *dichos* antedichos.

La perspectiva metodológica escogida es la perspectiva estructural de la investigación social (Ibáñez, Ortí). Este enfoque es el indicado para conocer los discursos y perspectivas de habla de un sujeto social determinado, mientras construye la génesis y estructura de su objeto de indagación. Permite seleccionar

---

<sup>230</sup> J. CASI, L. FOLGUEIRA y C. FORMOSO, *Investigación Cualitativa Longitudinal*, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid, 2014.

una muestra con un criterio de representatividad distinto al estadístico, debido a lo cual basta con entrevistar a un número reducido de personas para dar cuenta de las perspectivas de habla que interesan al investigador. En cuanto a las técnicas, el grupo de discusión se utiliza como dispositivo de total apertura del habla, con el objetivo de obtener consensos grupales y tópicos de identidad, que aglutinan el horizonte de sentido común de la práctica estudiada. El grupo focal, permite una apertura más localizada, útil para conocer -como también la entrevista en profundidad-, la estructura motivacional en que se despliega el discurso ideológico en estudio y los hitos biográficos que dan cuenta de la identidad de los menores y jóvenes involucrados en la empresa del delito.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que la realización de grupos de discusión o grupos focales es, en este caso, una tarea necesaria e imposible, dada la índole del tema a tratar y la condición de los sujetos investigados. Por un lado, si los adolescentes (que a diferencia de los niños a los que socialmente les está negada la palabra), están comenzando recién a construir las condiciones para enunciar una palabra válida; a ello hay que añadir la dificultad casi insuperable para discutir el tema propuesto, sobre todo si se trata de un tema como este, prohibido, casi tabú. Estas condiciones limitan la cantidad y calidad de las reuniones posibles de efectuar, a la vez que llenan el camino de obstáculos para llevar adelante la investigación. Sin embargo, las mismas circunstancias que explican la negación social de la palabra de las personas catalogadas como delincuentes, se ofrecen como claves analíticas que permiten situar las coordenadas de identidad que los caracterizan y el sentido de su discurso social.

## **EL DESPLIEGUE DE LA IDENTIDAD DELICTIVA. ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS.**

Comenzamos, en esta primera parte, con los discursos producidos en dos grupos de discusión, cuyo tema es la identidad delictiva de los adolescentes y jóvenes, reuniones realizadas el año 1994 con muchachos sometidos a la sanción de libertad vigilada. Las edades de los participantes iban de los 16 a los 18 años y los delitos por los que cumplían condena eran fundamentalmente robos, más algunos hurtos y delitos sexuales. Los integrantes provenían de comunas de la periferia norte y sur

de la ciudad de Santiago, especialmente de las comunas de San Miguel, San Joaquín, Estación Central y Conchalí. En esos años y hasta la década de 2000, no había ingreso de mujeres al sistema, por lo que solo se seleccionaron participantes hombres.

Realizamos luego una comparación con los resultados de dos grupos de discusión realizados el año 2005, en el contexto de un estudio sobre delitos graves y menos graves cometidos por adolescentes del programa PIA, sucesor de la libertad vigilada y en transición a la futura libertad asistida de la ley 20.084; estudio del que formé parte<sup>231</sup>. Recomendamos al lector consultar el apéndice 4, que contiene un glosario terminológico que le ayudará a entender los discursos de los menores y jóvenes, que se analizan a continuación. Las citas provenientes de los grupos de discusión, se identifican con letras al final del párrafo y su referencia son las transcripciones que se pueden encontrar en un anexo de esta investigación.

### **Análisis de la identidad en los grupos de discusión**

El análisis arranca constatando la enorme dificultad que tienen los adolescentes para tomar la palabra y asumir una posición respecto del tema que los convoca. El planteamiento del tema se realizó de manera cuasi directa, cotejando a los presentes con la opinión que los medios de comunicación supuestamente tienen sobre la delincuencia juvenil, evitando de este modo aludir directamente a ellos, como representantes de esa condición. Los muchachos aceptan la invitación a discutir el tema de esta forma, en cierto modo adivinan hacia donde se dirige la propuesta y aprovechan el ofrecimiento de hablar de “otros”, ironizando o refiriéndose a sí mismos en tercera persona. No obstante, les cuesta asumir que, en el fondo es de ellos mismos de quien hablan y se justifican en la existencia del prejuicio y la marginación:

- “¿Qué quiere que le hablemos? ¿De la delincuencia?
- Si nosotros somos delincuentes, pos (risas).

**P: Entonces, con mayor razón. ¿Qué pasa con la delincuencia: aumenta, no aumenta, es una amenaza para la tranquilidad ciudadana?**

---

<sup>231</sup> M. CANALES y OTROS, “Factores que inciden en la comisión de delitos graves”, Cit.

- Para los que se persiguen sí. Yo creo que la gente se persigue, no más. Porque uno es igual que la demás gente. La otra gente lo mira a uno como malo, como delincuente. Al menos, yo no estoy ni ahí, ando en la mía no más.
- Uno tiene que vivir la de uno, no puede andar pendiente de las demás personas. Si las demás personas hacen cagás, por ahí, cosas malas, uno no tiene que estar ni ahí. Uno tiene que estar en la de uno no más.
- Es que los ricos siempre le han tenido bronca a los pobres, siempre les han llevado la contra a los pobres, por eso yo creo que los cabros son así.
- Lo que pasa es que la mayoría de la gente, los que son bacanes, lo miran a uno como delincuente. No importa como sea, igual lo miran como delincuente". GD1

La resistencia a tomar la palabra creemos que puede ser atribuida solo en parte a la dinámica normal en que se desenvuelve una discusión de grupo, en especial si los participantes son adolescentes. En toda discusión grupal, operan supuestos imaginarios que encuadran la discusión, al tiempo que son responsables de la constitución del grupo mismo. El supuesto que cabe reconocer en este caso es el de *dependencia*: los integrantes del grupo delegan en el preceptor (supuesto líder del grupo) las condiciones de enunciación del discurso: qué decir, cómo y cuándo decirlo. El supuesto de dependencia se manifiesta cada vez que los participantes ponen pegas a la discusión, hacen consultas, expresan dudas, inquieren la opinión del preceptor, etc. Por lo general, la dependencia se manifiesta al comienzo de la reunión, pero puede aparecer o reaparecer en cualquier momento de la misma<sup>232</sup>. De hecho, en medio de la reunión, interpelan al preceptor o a su ayudante para que digan su palabra en lugar de la de ellos, o apelan al juego de lenguaje pregunta - respuesta, que evita la responsabilidad de tener que tomar la palabra:

- (...) Algunos no saben pa' donde van, ni a que van tampoco (Silencio)
- ¿Y qué piensa usted sobre los delincuentes?

**P: Yo quiero que ustedes me cuenten...**

- Nosotros ya le contamos un resto y queremos saber lo que piensan ustedes.

---

<sup>232</sup> Cf. J. IBÁÑEZ, Más Allá de la Sociología. El grupo de discusión: teoría y crítica, Siglo veintiuno de España editores, 2° edición corregida, Madrid, 1986, Págs. 295 – 317.



- Ahora les toca a ustedes.
- Usted no ha opinado nada.
- ¿Y qué opina usted? ¿Qué le sigan robando a los ricachones, o no? (risas)
- Usted no opina nada, pos míster (dirigiéndose al ayudante del preceptor)

**A: Yo aquí muero pollo.**

**P: Los estamos escuchando a ustedes.**

- Ya no tenemos qué opinar
- Hay más, pero tienen que hablar lo que tenemos que decir. Claro uno habla y habla y le salen las mismas cosas, tenemos que ir cambiando.
- Ustedes nos tienen que decir lo que tenemos que hablar.
- Ustedes son como profesores aquí, po'.

**P: Ese es un error. No somos profes.**

- Bueno, pero si ustedes nos van diciendo, nosotros les vamos contestando. Igual que en los tribunales. Usted nos pregunta y nosotros le damos la respuesta". GD1

La resistencia a tomar la palabra se aprecia también en los dos grupos de 2005. El primero estaba integrado por seis adolescentes acusados de cometer delitos graves (GDG), como robo con violencia y robo con intimidación. El segundo, estaba integrado por siete adolescentes acusados de delitos menos graves (GDMG), como abuso sexual, riña, hurto y desórdenes en la vía pública:

- "¿Esta entrevista nos ayuda en algo con la libertad vigilada?". GD2
- "¿Tenemos que opinar de lo que dijo? ¿Qué ganamos nosotros con esta conversación?". GDG
- "¿Hasta qué hora dura esto?". GDMG

En las secuencias discursivas expuestas, la tendencia a eludir el tema revela el supuesto de *dependencia*, un querer estar del grupo en esa posición, pero también salta a la vista que la reticencia a discutir es una condición social del tema mismo, de quien lo enuncia. Muchos grupos estarían gustosos de discutir un tema que los involucra, pero no directamente. Otros tampoco tendrían problemas para tocar un tema que los involucra directamente y hasta a hablar de sí mismos, como podría ser el caso de las víctimas de la delincuencia. Es precisamente la situación contraria. Por ejemplo, la consulta por la recompensa también puede interpretarse

como la certeza de que, en su caso, hablar cuesta, o la pregunta por la duración, como una expectativa de tener que soportar una situación que pesa.

El funcionamiento del grupo, cuando habla, tampoco es fluido. El proceso involucrado en el proceso colectivo de la reunión y del grupo, es el supuesto de *ataque – huida*, que hace posible el flujo del discurso en forma ordenada, en una dinámica tanto de competencia como de colaboración: nadie quiere ser el primero en hablar ni el último y todos desean el acuerdo de los demás<sup>233</sup>. Tampoco es el caso. Los numerosos silencios que se suceden a lo largo de las reuniones, atestiguan que el discurso hay que sacarlo como con tirabuzón. El habla de los jóvenes es trabada y ansiosa. Un discurso que apresura un habla extremadamente escueta, como si quisiera abreviar el tiempo de exposición al estigma:

- “Tienen que dejarlos tranquilos. Ellos tienen que vivir su vida. Si quieren ser malos, que sean malos. Pero si un loco viene a trampearle a otro, uno no le compra. Uno se le para...
- Hay delincuentes que son malos y otros que no son malos.
- Bien tontos...
- La piensan.
- La piensan para ser delincuentes.
- La piensan bien. Algunos tienen talento.
- Hay que tener talento para hacer algo.
- Algunos la saben pensarla”. GD1
- “Esta grabación se destruirá en cinco segundos”. GD2

El problema hasta aquí es que, de los malos, de los delincuentes, no se puede hablar. Nadie puede reivindicar serlo, ocupar su lugar de enunciación socialmente obturado, desacreditado, maldito. El secreto de la comprensión de esta posición está en desentrañar cómo vencen esta dificultad, o no la vencen: Cómo logran hablar de ellos desde una posición audible, que no se desmorone, o pierden la cara en el intento. Desafío urgente, antes de volver al silencio:

- Usted mismo, dice: *delincuente*, no refiriéndose a uno. Porque si estamos conversando y usted me dice: *Oye tú, delincuente, de adonde saliste*, yo le puedo tirar hasta la silla. Pero no, si usted se refiere por gente...

---

<sup>233</sup> J. IBÁÑEZ, Óp. Cit.

- Usted está hablando en general. Esto es una reunión. Yo creo que si usted quiere decirme algo a mí, usted me llama pal lado y me lo dice a mí. No tiene por qué decírmelo con gente.
- Entre nosotros, al loco, yo no puedo decirle: *compadre delincuente*. Usted se refiere a nosotros como delincuentes, pero nosotros entre nosotros no nos definimos como delincuentes, po'. Claro, como gente no más. Gente de la calle.
- Habla en general. Delincuente, delincuencia, maldad, siempre va a existir". GD2
- "¿Pero suena bonito *delincuente*, ah? (risas)
- Lo que pasa es que la palabra es medio rara, ¿cierto?
- De repente a uno no le gusta ser un delincuente, uno mismo". GD2

## LÓGICA DE LA IDENTIDAD

A continuación revisamos la construcción de identidad de los adolescentes, de acuerdo con las líneas argumentales que se refieren al estatuto de la maldad y el lugar que ellos dicen ocupar frente a ella, así como en torno a la evaluación del orden y la sociedad en regla, cuando se mide el discurso con el rasero de la dañinidad.

No solo los medios sino que también los expertos en seguridad ciudadana, consideran que los delincuentes son intrínsecamente *antisociales*. Esta posición *marcada*, en principio la hacen suya los menores. Pero no podría ser de otra manera. Según este modo de ver, la diferencia entre ellos y el resto de los ciudadanos estaría en la base misma del orden social: están marcados por el término *malo*: son "los malos". Esta identidad *atribuida*, que se supone les pertenece, tiene dos consecuencias en su despliegue discursivo. La primera, es que la discusión sobre la identidad gira en torno al estatuto mismo de la maldad. La segunda, es que se ven obligados a mirar a la raíz del orden social y cuestionar el orden, no tan en regla. Podría querer despacharse el tema considerándolo como un caso de uso de técnicas de neutralización, como plantean Sykes y Matza, evitando un análisis más matizado. Preferimos considerar los argumentos como verosímiles, puntos de vista de un mayor o menor grado de coherencia, desde la posición de enunciación que al mismo tiempo describen.

Para exponer los tópicos principales de la identidad, el análisis fue caracterizando diferentes hitos argumentales en las discusiones grupales.

- *La necesidad. “Mientras haya necesidad, habrá maldad”. “La maldad es necesaria”.*

El argumento de la necesidad para explicar la delincuencia es verosímil. Se acepta la equivalencia entre maldad y delincuencia común, pero se alega que se trata de una condición independiente de la propia voluntad, porque está gobernada por un estado de *necesidad*. El discurso de la “necesidad” justifica la conducta delictiva a partir del rol de proveedor. Si se acepta este orden de cosas, la maldad es inevitable, su existencia es anterior y posterior, ajena a una posible conversión de ellos mismos. El escenario actual de la maldad es el más propicio. Los adultos contagian a los menores. Soplan vientos apocalípticos:

- “O sea, la maldad siempre ha existido y nunca se va a terminar. Aunque uno, no por estar en libertad vigilada, aunque salga de esto siempre va a haber libertad vigilada. Aunque todos los que estamos aquí nos recuperemos, siempre va a haber maldad.
- A las finales, nosotros no somos ná los primeros; tampoco los últimos. Siempre va a existir la delincuencia, porque uno necesita, po’. Si es por necesidad que uno cae en la delincuencia...
- No hay trabajo....
- “Hay pocas oportunidades en este país”. GD2
- “Falta en la casa también y no hay trabajo y hay que ponerle nomás pa’ la casa.
- La necesidad.
- No es tanto para ti, hay que ver la casa también”. GDG
- “Casi siempre en la tele cargosean con los menores (...) Si uno cuando necesita algo de repente, es porque necesita. No tampoco por gusto ni por amor al arte.
- La maldad nunca se va a terminar. O sea, antes no existía la delincuencia juvenil. Por lo que me contaba mi abuelo. O sea, la gente que hacía maldades era grande. Eran mayores. Ahora no.
- Salíamos sobrando nosotros.

- Claro, es solo tomar la Biblia no más. No soy religioso, ni mucho menos. Pero también de repente hay que tomar esas cosas. Y también sale ahí: *Cuando se acabe el mundo, va a empezar la delincuencia juvenil, prostitución en los jóvenes y otra pila de cosas. Se van a separar los matrimonios, se va a romper el enlace familiar.*
- ... Las guerras, el sida.
- O sea, es como inevitable.
- Se necesita la maldad, porque a las finales no puede haber puros pacos (risas). Si no, a quien van a agarrar”. GD2
- “Nosotros mismos los hacemos trabajar a ustedes. Sin nosotros, ustedes estarían en otro lado. No habría estudios para hacer”. GD1
- “¿Ha sentido necesidad usted? ¿Usted lo haría si tuviera necesidad y no le dieran trabajo?
- Que usted se pusiera en el caso de nosotros. Que nosotros seamos usted y usted sea nosotros. Una cosa así. Que si usted no tuviera nada, que haría usted”. GD2

Con fina ironía y una argumentación cuasi Durkheimiana, afirman la normalidad del delito y la necesidad de la *innovación*. Y ese recurso se lo endosan al mismo preceptor, desafiándolo a que diga si, puesto en el caso, no haría lo mismo. Pero, este argumento los atrapa también a ellos. No sirve para refutar la atribución de maldad.

La necesidad es, en realidad, un horizonte de aspiraciones. No es pobreza, no es la mera sobrevivencia. Son necesidades propiamente “juveniles” y están motivadas por una aspiración promocionista, que en la superficie se presenta como aspiración al consumo. Lo interesante es que respecto al propio actuar delictivo, si la aspiración se viste de necesidad, permite no hacerse cargo de ella, no responsabilizarse de sus consecuencias no deseadas, presentadas como inevitables. Este recurso es manifiesto -aquí y también más adelante- en el uso frecuente que hacen de la alusión a sí mismos como *uno*, que permite eludir el “yo” o el “nosotros”:

- “- O sea, realmente uno, necesidad –necesidad, no es tanto, porque el plato de comida todos lo tenemos. Nunca nos va a faltar. Lo que pasa es que de repente uno puede ir caminando y le gustan unos bluyines en una vitrina y

uno quiere ese bluyín y no puede comprarlo. Entonces, uno se las rebusca, por aquí, por allá. Llega a su grupo: *Ah, mi amigo tiene unas zapatillas buenas, yo no*. Entonces, uno lo hace. Y cuando lo hace se las compra y se siente feliz. Claro: *No me pillaron. Estuvo bueno. Esta otra semana me compro una casaca...* Y así parte.

- O sea, yo pienso que es la necesidad vestual. Uno es lolo. Yo creo que a usted tampoco le gustaría andar con un terno viejo". GD2
- "Si pos, la mayoría no roba por necesidad. La mayoría roba porque quiere, porque el mismo quiere tener su ropa, que la mamá no se la compre. El mismo quiere comprarse su ropa, quiere tener para sus vicios, para todo". GD1

En un momento, tratan de justificar su actividad como una actividad laboral o un oficio, el trabajo que no tienen:

- "Ahora, sería el pecado más grande robarle a un pobre. Es pecado porque no tiene. Si uno es pobre se la anda ganando como puede. Algunas personas salen a robar o algo. Se la ganan, ¿ve? No faltan los cocodrilos, ¿cierto? Le roban a los mismos tatitas de la población". GD1
- "Sería otra forma de sobrevivir no más, la delincuencia. Sería lo mismo que un profesor. Su rol.
- Hay gente con corbata que roba más que uno.
- ¿Y nosotros? Nosotros robamos la cuarta parte de eso y aquí estamos pagando más". GD2
- **"P: ¿y tú estabas trabajando?"**
- -Si po', con otros compañeros.
- **P: ¿en qué?"**
- -En la monra ... hay que aportar pa' la casa igual. GDG

El recurso de considerar el robo como un trabajo, como extensión de un oficio informal ("*uno se las rebusca, por aquí, por allá*") no se sostiene, por la índole contradictoria e insolidaria de sus actividades, porque no pueden impedir que se mire -y se mida- la dañosidad de lo que hacen. El argumento se vuelve en contra de ellos mismos, porque conduce al descrédito. Pero también abre posibilidades de argumentar que su práctica no es dañosa y que el castigo sufrido no es proporcional al daño causado. Se les discrimina. Los grupos se percatan de la fuerza de este argumento y toman esa dirección.

- *No hacer daño: Saber pensarla, saber hacerla.*

Hay delincuentes malos y otros que no lo son. La diferencia está en que algunos piensan antes de actuar. La clave está en no hacer daño. Era lo que se insinuaba con la frase citada más arriba: *“no me pillaron, estuvo bueno”*, que era hacer del robo algo bueno, en algún aspecto. Argumento germinal, que permitirá hablar posteriormente de un ladrón “bueno”, cuando hace las cosas según un modo de proceder pautado por la tradición delictual:

- “La mayoría de todos no son malos. Algunos la piensan antes de hacer la embarrá: ‘Si caigo por esto, voy a estar todo esto, mejor no lo hago’.
- Saben a qué van a llegar. Otros no. Llegan y matan de repente, pegan. Uno ve para dónde va la micro.
- Los que no la piensan están mal, deberían pensarla. Esos están mal.
- No deberían ser así, tan cara duras. Porque hay algunos que, por ser, ven una percha y se lo pitean.
- No piensa. Llegar un cabro y no piensa antes de hacer la cuestión, llega y reacciona. Y pega la puñalada. Hay otro que no, que la piensa: ‘Ah, puedo caer preso, voy a estar todo esto’. La piensa y no la hace, po’. Sabe a lo que va.
- Con más inteligencia. Si va a hacer un asalto, tiene que pensarla primero. Porque no va a entrar solo. Tienen que ir tres o cuatro, ¿cierto?
- Su par de loros (risas)
- Tiene que hacer un plano...
- Un plano en la cabeza.
- El que la piensa tiene una ventaja.
- Si pos, si va a la segura, libra. Si no, cae preso. Sabe a lo que va, que pasa y todas las movidas, con lo que aprende adentro...
- Algunos no saben pa’ donde van, ni a que van tampoco.
- El que tiene mente para pensar, la piensa.
- Hay unos que la trabajan de malos y no pasa na’, poh. Andan pintándola no más, ¿cierto?”
- “O sea, está bien para los que la saben hacer y saben pensarla. Para esos está bien.
- Hay algunos que la pintan de choros y no pasa na’, poh.
- Igual son cocodrilos”. GD1

No causar daño, no hacer daño, es la clave que separa al buen ladrón del malo. El argumento oscila entre la moralidad y la eficacia. Al final, decanta por esta última. Robar sin ser vistos, con información o con prestancia. Es posible obtener credenciales de inteligencia y habilidad, pero también de valentía (“tener corazón”):

- Hay cabros que se drogan y que se les agranda el corazón. Cabros que se toman una pastilla: *Pah, compadre, yo me le paro. Ya. Pásamelo. Yo se lo quito.*
- Eso mismo también, a veces.
- Entonces, na’ que ver. Si uno quiere hacer algo, uno tiene que hacerlo como lo piensa. No saca nada con resguardarse tras una pastilla. Si la pastilla al final no le va a pagar la fianza. Tampoco va a pegarle al gallo. Uno es el que va a hacer la cuestión. Yo, de las cuestiones que he hecho, nunca he salido volado. Una vez salí volado y me fui preso. Andaba con así una cara. Nunca más”. GD2
- “Somos pacíficos. Ahora, si hay un atao, se conversa. Nosotros lo conversamos a lo caballero, ¿ve? Se conversa primero y luego, si ya no entienden a palabras, hay que golpearlos (risas).
- Hay que golpear, no queda otra.
- No, porque arrancando no puede salir uno.
- Si no entienden a palabras, ya son animales.
- ¿Por qué va a salir uno arrancando de otro? No pasa ná. No pasa ná, ¿cierto?
- No. Ahí sería tenerle miedo. Y tenerle miedo y ser pacífico, es otra cuestión”. GD1
- “Por eso, po. Datos buenos que tenis que tener.
- Porque si va sin datos te ven la persona, en la cara.
- La personalidad, en la cara, la cara así de pálido, de asustado así, al tiro. En cambio tranquilo”. GDG

Hay también credenciales de prestigio, que los sitúan en lugares altos o bajos de la escala de notoriedad delictual. Los ladrones denominados “domésticos” o “cocodrilos” (los que roban al interior de los mismos barrios pobres) o los violadores (“violetas”) o abusadores sexuales, son mal mirados. En el caso de los traficantes de drogas, se considera como una especialidad de una carrera en



decadencia. Curiosamente, como veremos luego, esta segregación de los malos al interior de la cultura de la delincuencia común, es equivalente a la discriminación que sufren ellos respecto de los delincuentes de cuello blanco.

- “Uno no va a andar robando en la población.
- Eso es otra cosa ya.
- Esa es gente torpe. Es gente que hace daño. Es gente de otro lado. Esos donde llegan van a llegar mal siempre.
- Ese es el ladrón más mal mirado.
- Esa es la gente que anda en la población cogoteando.
- Claro, eso es daño ya. Es gente igual que uno. Si uno quiere hacer una maldad, hay que hacerla fuera. Aquí mismo, po’. Yo sé que hay gente de plata. Yo sé que si me meto a una casa voy a pillar una buena radio, un televisor. Pero es gente que tiene, ¿ve?
- Si yo voy a robarme una cuestión, me robo una cuestión buena al tiro. Una moto. Me meto a una casa y la dejo desnuda. Pero para hacer daño, para robarse un par de pañales, un pantalón y una camisa, no po’. Mejor que se ponga a machetear.
- ¿Sabe? Yo todos los condoros que me he piteado no me los he piteado en la población. Siempre he salido pa’ arriba. He ganado hartos sí. Y he perdido también. Pero no me lamento, porque estoy en la calle”. GD2
- “Los violetas son malos
- Sí, esos son malos
- Esos no son malos, son malas
- Los violetas son los que van por violación. Que violan a una cabrita de siete, de catorce años, que el viejo se violó a la hija. Esos locos son gente mala. No tienen sentimientos.
- Sí, po’ (varios)
- Claro, es una persona totalmente desequilibrada, sin sentidos.
- Qué le cuesta ir con un poco de plata por ahí.
- Claro, cuantas putas hay por ahí.
- Con una persona de más edad”. GD2
- “No, porque los traficantes son giles, trafican con el vicio, hay algunos que son vivos adentro, los traficantes, porque han estado en la calle, la mayoría de los traficantes han sido choros antes y después se vuelven traficantes ya con el tiempo cuando ya ven que les cuesta hacerla”. GDG

El argumento de no hacer daño les permite denunciar la falsa respetabilidad de los delincuentes de cuello blanco y el ignorado actuar antisocial de los operadores del sistema de control del delito: policía, justicia. Condenan el doble rasero del sistema y se ponen del lado de la justicia, denunciando no solo las situaciones de daño material, sino sobre todo, de corrupción, de pérdida de los fines propios, de daño moral:

- “Hay gente con corbata que roba más que uno.
- ¿Y nosotros? Nosotros robamos la cuarta parte de eso y aquí estamos pagando más.
- Lo mismo que ese gallo religioso en Estados Unidos, que tenía puras iglesias. Hace tiempo atrás le encontraron que tenía casas de prostitución, que tenía mujeres trabajándole. Y claro, se fue preso. O sea, preso no se fue. Lo demandaron. Entonces yo digo que si a ellos los demandan teniendo plata para pagar y a uno que de repente por no hacer nada, tiene que hacer cinco días... De repente le cortan hasta el pelo, porque tiene una ficha”.
- Aquí se mira mejor a la policía que a los delincuentes y no saben que la policía es más ladrona que uno (...)
- ¿Qué creís que hacen los cabros con plata?: *Ya. Cuánto querís vos, para que te bajís.*
- Son coimeros. Yo me he fijado, los mismos traficantes. O sea, los llevan en cana, pero coimean. Si con plata cualquiera se baja (...)
- Según la sociedad, uno es el malo”. GD2
- “Además, la cuestión de los asaltos es puro cuento. Una hoja de papel y se llevan la parte para la casa. Son pacos los que lo hacen. O ir a buscar a un guardia a la casa para quitarle la plata. ¿Y cómo saben tanto? ¡Son amigos de ellos!: *¿Sabís que? Te mostramos un cartel y vamos cuatro. Veinte millones y lo repartimos entre todos.* No saben na’ que los mismos milicos pasan la cuestión para acá. Les gusta la plata a los milicos. Aquí en Chile se llenó de pura delincuencia y drogadicción. Mejor para ellos, más plata tienen (...)
- Creo que Pinochet fue a buscar coca y no lo dejaron entrar a España. ¿Quién les va a trajinar a ellos cuando entran al país? La pasan toda para acá. Y ellos mismos te dicen después: *¿De dónde sacaron esto? (...)*
- Alguna gente no cree que los pacos son así. Y no saben tampoco. No sé en qué parte, en el sur, habían 70 detectives involucrados en la droga, en la cuestión. 70. Aparte de los que no saben. De repente hasta jefes malos,

cualquier jineta y andan más volaos que uno. Transmiten volaos. Igual que Merino cuando hablaba en la tele. Bueno pa'l tinto"

- No. Los pacos tratan de aconsejarlo a uno, los jueces.
- ¡Qué los jueces, loco! Todas esas cuestiones del Parlamento; están todos esos metidos en la cuestión de la droga". GD1

Como emprendiendo una verdadera cruzada, se entusiasman en la denuncia de dos males esenciales: La discriminación social, en los privilegios de que gozan los sectores medios y altos (*"los ricachones", los "bacanes", los "cuicos"*), que actúan lejos del alcance de la ley y del reproche social; y las violaciones de los derechos humanos, donde la ley revela su impotencia y futilidad ante las heridas, todavía frescas, en la memoria nacional, en este caso, vueltas a abrir. En los grupos de 2005, es la anunciada nueva joya de los derechos humanos de los adolescentes infractores, la inminente ley de responsabilidad adolescente, la que queda en entredicho. La ley es vista como una máquina amenazante, muy bien aceiteada para arrasar con sus derechos y ejercer la venganza de la sociedad "bien constituida" contra los menores:

- "Aquí no hay ley.
- Aquí no hay derechos humanos.
- O sea, si uno a un carabinero le dice: *¿Qué estaba haciendo yo?* Y el, luego: *No. Vamos, allá conversamos.*
- Allá los pescan a palos, los llegan a ladear. Y después le dicen: *Ya, ándate ahora.*
- En otros países, lo pillan a un monrero y lo pillan con ocho ropas. Yo creo que a ese monrero, en Estados Unidos, Francia, no le colocan la máquina. Se ponen tres sicólogos al lado de él y empiezan a conversarle y si le sacan la verdad se la sacan. Yo creo que se la sacan". GD2
- "En Chile no hay justicia.
- Se perdió ya, que tiempo.
- ¿Por qué uno le tiene mala a los pacos? Mire: cuando los argentinos les pegaron en la cancha a unos pacos, no les hicieron nada, ni los tocaron a los argentinos, ¿cierto? Pero si hubiera sido uno el que les hubiera pegado, le habrían sacado la cresta.
- Lo llevan al calabozo y lo dan vuelta a patadas.
- Lo desarman a palos". GD1

- Más encima la ley, va agrandarse toda. La ley, los juzgados van a estar ahí mismo. Y trabajo, todos pasando, caminando. Van a agrandarse hasta las cárceles. Ya están mandando a algunos ya. Y están terminando algunas ya po', lo que he sabido. Tan puro esperando recibir gente y secarlo. Secarlo y secarlo no más, po". GDG

En su discurso sostienen que han sido discriminados del acceso al recurso esencial del dinero, que todos valoran y desean. Si la necesidad, por pobreza, era lo que disculpaba a unos y a otros (*"somos un país pobre y todos necesitan"*), ellos aparecen como los chivos expiatorios (*"según la sociedad, uno es el malo"*). Pero en el caso de la discriminación, el discriminado se siente parte del sistema, aunque esté en una posición de desventaja. En cambio, ellos se sienten injustamente "expulsados" de un sistema donde todos son marginales. Son el término excluido: *"siempre los términos son diferentes... usted siempre va a ser más"*, sin derecho a la palabra: *"ustedes están para preguntar y nosotros para responder"*, sin posibilidad de demanda: *"muchas veces se nos corta. O se nos dice: no"*. Acepta que su palabra no tenga valor ante el público. Trata de hablar más alto, pero no puede evitar que los demás hagan oídos sordos: *"Yo, cuando quiero decir algo, lo digo. Aunque no me escuchen. Por último, lo digo. Total, igual lo dije"*. En la identidad de los menores se va sedimentando el deseo y la imposibilidad de *ser más*. La siguiente secuencia, de la que han sido extractadas las frases de más arriba, refleja esa frustración, en la medida en que se vuelve a producir por obra de la situación grupal:

- "Claro, es que siempre es eso. Siempre los términos son diferentes. Siempre es usted el que realiza la reunión, usted siempre va a ser más. Igual a la señorita. Ustedes estaban para preguntar y nosotros para responder. Entonces, nosotros cuando queremos opinar algo muchas veces se nos corta. O se nos dice no. Entonces, por eso viene la agresividad.
  - No, cuando yo quiero decir algo, igual lo digo, aunque no me escuchen. Por último lo digo, total igual lo dije". GD2
- *La soledad del fuero interno: "malos en el sentido de robar, no más, pero en la forma de ser no"*.

La última carta que pueden jugar y, quizá la más valiosa en términos de su identidad, es la que apela a su fuero interno -que bien podríamos llamar foro interno, en cuanto estamos refiriéndonos al auditorio de la conciencia-. La versión que de sí mismos leen con esta apelación, es que es preciso distinguir entre esencia y apariencia: *“el ladrón es la persona que tiene más sentimientos”* y entre el ser y el hacer. *“malo en el sentido de robar, no más, pero en la forma de ser no”*. Gracias a esta diferencia, resisten ser señalados con el dedo y sufrir las consecuencias del estigma, aguantan la vergüenza: *“nosotros mismos nos adaptamos, incluso a la forma en que nos está conversando”* y también buscan mostrarse comprensivos, evitando el lenguaje duro, delictual: *“en la pandilla de nosotros, como dicen ustedes, tenemos otra personalidad”*:

- “Nosotros no somos malos. O sea, malo en el sentido de robar, pero en la forma de ser no (...)
- Es que uno no puede dar una opinión de una persona si no la conoce. Entonces, muchas veces dicen: *Ah, los ladrones, la delincuencia*. Pero muchas veces la gente cree que es mal agestado, un gallo con un tajo en la cara, que anda todo cochino, que tiene la mente sucia, que a donde vamos, damos una puñalada. No, pos. Al contrario. Somos gente igual que ellos. A lo mejor podemos hacer mucho más que ellos. Eso no lo sabemos. Pero, en fin (...) la gente mira carachos, mira pinta. Tal como lo veo, lo trato.
- No y también donde vive uno. Donde vive uno hay ladrones, pero no todos son ladrones (...) Y no saben que no es uno solo el que anda robando, sino que son de todos lados que andan robando”. GD2
- “Yo cuando robo, no he hecho nunca daño.
- No haciéndole daño a las personas...
- Hay que tratar de robar, pero no caer en cana
- Claro, porque ahí el daño sí que se lo hace uno... la familia.
- El delincuente para mi es la persona con más sentimientos que hay en el mundo. El ladrón es la persona que tiene más sentimientos, encuentro yo. Es una persona que se adapta a todo tipo de vida. O sea, nosotros estamos aquí y nos adaptamos a la forma en que nos está conversando, ¿me entiende? A lo mejor salimos de aquí y llegamos a la pandilla de nosotros, como dicen ustedes. Y allá tenemos otra personalidad. Y en la familia también, adoptamos otra personalidad. Lo mismo que con nuestras pololas y familiares, amigos. Tenemos distintas personalidades. Pero a la vez somos una persona, en fin. Igual. Lo que creo yo”. GD2

Antes de seguir, vale la pena subrayar algunas certezas que se afirman en el discurso: En primer lugar, la de un Estado que no incluye. Una certeza que forma parte de la historia popular en Chile y que no fue sino mitigada por el movimiento que entre las décadas de los años 40 y 70 del pasado siglo, apostó por algunas políticas sociales de integración, por el desarrollo de un “Estado de compromiso” como se le llamó, que no de un “Estado de bienestar”. Durante la dictadura, la transición en las décadas de los 90 y 2000 y hasta el momento actual, el orden neoliberal impuesto y profundizado, obligó a los jóvenes a hacerse cargo de las “verdades históricas” y de renovadas formas de desafiliación y marginación. En segundo lugar, la pérdida del Estado de Derecho y de una cierta ciudadanía que permitió ampliar los límites de la justicia; y habiendo sido las experiencias de profundización democrática de los años 60 y 70, un hecho de mayor alcance que la integración económica, el impacto de su pérdida o retroceso son aún mayores. En tercer lugar, puede verse como la lógica mercantil del negocio y el dinero fácil han permeado el cuerpo social, debilitando -aunque no descalificando- la verosimilitud de los medios legítimos (estudios, trabajo, ahorro) que caracterizaron el relato de la “promoción popular” y que aún escuchan las familias populares. El discurso de los menores remata con la descripción de un mundo en el que tras la fachada institucional y los criterios morales en uso, se oculta un interés asocial: el dinero, medio universal. La plata es lo que moviliza: “*con plata se compran huevos*”. Antisocialidad también de los fines: “*todo está en la plata*”. Por quererse salvar y no poder, tienen que conformarse con una *integración desencantada*.

- “Todo está en la plata, les importa más la plata...
- Claro, la plata. Si aquí lo único que corre es la plata. Si somos un país pobre y todos necesitan, así es que la plata es lo que moviliza. Moviliza la masa.
- Con plata se compran huevos”. GD2

- *Una identidad desacreditada. Una aspiración frustrada, pero persistente. El deseo de salvarse y ser más.*

¿Y todo para qué? Para “ser más”. La aspiración promocionista, ya muy distorsionada, confía en un salto bien dado, que les permita franquear el abismo,

clausurados los caminos del estudio o del trabajo. Su disposición activa los diferencia, con todo, del jugador que se afana en la suerte:

- "Yo voy pa' arriba
- Pa más adelante, cada uno de los que estamos aquí va a formar una familia. Va a formar algo bonito. Es lo que creo yo, porque tampoco por ser delincuente lo hemos cachado todo (risas). Igual tiramos pa 'arriba. Pero siempre uno va a buscar más. Si uno siempre ha querido más. Si uno quiere un bluyín bueno, va a querer otro bluyín mejor. Si uno quiere andar con plata. Anda fumando Belmont, quiere fumar Kent. Siempre quiere más uno, ¿sabe? Yo quiero un nivel superior al que quiere mi familia. Salvarme bien.
- Siempre quiere sobresalir uno.
- Ya. Yo me instalo mi distribuidora, cualquier cosa y ahí me quedo.
- Claro, más adelante uno va a tener su familia, no la va a tener na ' con hambre ahí. Hay que tenerle de todo.
- Comprarse sus dos micros, que te las trabajen. Colocar una tienda de ropa.
- Nos robáramos un pasaje. Ya: todos los menores pa' Europa. Llegaríamos todos empresariales aquí. Edificios por todos lados". GD2

### **El espesor cultural de la identidad.**

La lectura de los contenidos ideológicos en el estudio de las culturas populares, se enfrenta a un doble riesgo: realizar una lectura exclusivamente *legitimista o miserabilista* -que da razón de la ideología dominante y caracteriza la cultura popular solo por sus déficits-; o, realizar una lectura solo *esencialista o relativista* -que afirma la cultura popular como cultura de resistencia o contracultura-. Empeñarse en una sola de las dos posibles lecturas, implica clausurar la posibilidad de comprender las coordenadas de dicha cultura<sup>234</sup>. Para escapar de los extremos, la lectura que hemos realizado de las coordenadas de la identidad de los adolescentes, sigue las líneas argumentales en sentido legitimista o autonomista según su propio mérito. Es decir, las virtudes de la argumentación discursiva y la

---

<sup>234</sup> C. GRIGNON y J.C. PASSERON, *Lo Culto y Lo Popular*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992.

fuerza de las palabras dichas, se relacionan con el contexto social y el contexto discursivo, con el objeto de dirimir su alcance<sup>235</sup>.

Una lectura legitimista nos lleva a reconocer la presencia de técnicas de neutralización en su forma clásica<sup>236</sup>. Por ejemplo, se observan: El delito como un trabajo: *"Si uno es pobre se la anda ganando como puede"*; la negación del daño: *"Hay delincuentes que son malos y otros que la piensan bien"*, *"Nosotros mismos les damos trabajo a ustedes"*. La negación de la víctima: *"Es pecado robarle a un pobre, porque no tiene"*; el rechazo de los juzgadores: *"No saben que la policía es más ladrona que uno"*, los chivos expiatorios: *"Según la sociedad uno es el malo"*. Quizá las técnicas de neutralización se puedan reducir a un solo argumento: *No responsabilización*. Una lectura relativista lleva a reconocer argumentos más allá de la neutralización. Por ejemplo, la expresión: *"el ladrón es la persona que tiene más sentimientos"*, se constituye en un sentido más bien flotante, que lo mismo abarca toda la significación atribuida a la no dañosidad (no hacer daño, no robarle a los pobres, saber pensarla, saber hacerla), como la resistencia activa a la discriminación y al descrédito. La argumentación relativista se anota un triunfo frente al estigma, en el momento mismo en que reconoce su derrota: *"Malos en el sentido de robar no más, pero en la forma de ser no"*; *"Hacemos cosas malas, pero no somos malos"*.

Solo en su fuero interno pueden hacer efectiva la separación entre ser y hacer. Para los demás y también para sí mismos, lo que cuenta es la *identidad desacreditada* que reciben como reflejo del juicio de los otros y que ellos también se atribuyen. Aun cuando muchos de sus argumentos los toman prestados del mundo cultural de los adultos, que los anteceden en el delito, no creemos posible sostener una tesis contracultural como definición absoluta del mundo de vida de los ladrones. Es clara la adscripción convencional de muchos de los contenidos observados, principalmente de la aspiración promocionista que, frustrada y deformada, ha dado lugar a la posición que hemos caracterizado como *integración desencantada*.

---

<sup>235</sup> Sobre la interacción entre el contexto existencial y el contexto situacional, ver: J. IBÁÑEZ, "Análisis sociológico de textos y discursos", Revista internacional de Sociología, 43, Española de Investigaciones Sociológicas, enero-marzo de 1985.

<sup>236</sup> G. SYKES y D. MATZA, "Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia", Cad. CRH, vol.21, N° 52, Salvador, 2008. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792008000100012>.



## CONTEXTOS Y PROCESOS QUE INFORMAN TRAYECTORIAS.

El discurso de la identidad de los adolescentes participantes en los grupos de discusión, que nos interpela como identidad *desacreditada*, lo hemos tomado como objeto estático, fijo en un momento del tiempo, como una fotografía en la cual podemos distinguir algunos rasgos característicos de la mirada reflexiva que los muchachos arrojan sobre sí mismos. Falta ahora ver el movimiento de esa configuración congelada, el flujo de los procesos y los contextos institucionales y sociales que jalonan trayectorias de involucramiento o de desistimiento de los muchachos y muchachas en el delito. Para conocer la versión que ellos y ellas tienen sobre el asunto, hay que escuchar en sus relatos los quiebres, los procesos donde ocurren cosas malas, los sucesos por los que toman conciencia de su mala conducta, sus aprendizajes frustrados. Para avanzar en esta dirección, identificamos procesos familiares, escolares, laborales y con los pares, a partir del análisis de ocho entrevistas realizadas con menores condenados a diferentes sanciones el año 2013<sup>237</sup>.

La mayoría de las entrevistas dan cuenta de una experiencia ascendente de los muchachos y muchachas en el delito; pero comienzan también a replantearse la continuidad de su trayectoria, a propósito de estar cumpliendo o haber cumplido una o más sanciones de cierta duración, que les ha llevado a experimentar una criminalización intensa.

El proceso principal, que corre en el mismo sentido del avance o mantención de las trayectorias en el delito, es la integración escolar. Tanto los registros institucionales como los relatos biográficos, dan cuenta de una pérdida de la conexión escolar, aun cuando los muchachos no relacionan este quiebre con su experiencia delictiva - como si lo hacen con la experiencia familiar o con el asunto drogas-, en consonancia con el relato que suelen escuchar de boca de los “especialistas”.

---

<sup>237</sup> Las entrevistas (anexo 1) fueron realizadas con el auspicio del Servicio Nacional de Menores, por Bárbara Quintana y Catalina Villagra, para su tesis de licenciatura: “*Trayectorias de vida y carrera delictual de adolescentes y jóvenes infractores de ley en la región metropolitana*”, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2014. Como profesor guía de la tesis, tuve acceso a las entrevistas y realicé a partir de ellas un análisis orientado por los objetivos del presente trabajo.

En las entrevistas se puede apreciar que, cuando los muchachos refieren cometer delitos de escasa gravedad, de manera más bien espontánea u oportunista, no necesariamente hay deserción escolar o esta no es prolongada y la actividad delictiva no es la única alternativa que los jóvenes utilizan para conseguir dinero. En cambio, en los casos en que hay una evolución hacia delitos más graves, generalmente va acompañada de una más intensa y prolongada desvinculación con la escuela. Una evolución típica va de los hurtos o robos de autos, al robo en casas. Los jóvenes se especializan como “monreros” y, eventualmente se lanzan al robo fuera del país. Una de las entrevistas realizadas muestra un temprano desarrollo de tal experiencia como “ladrón internacional”. Otro camino característico parece arrancar del robo por sorpresa (comúnmente conocido como “lanzazo”) y desembocar en el robo con intimidación o con violencia. En el caso de las muchachas, en los años 90 su presencia en el sistema era nula, pero comenzó a aumentar hacia fines de los 2000, a partir de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. Otro cambio que parece haber acontecido, es que si antes se las veía involucradas por el hecho de convivir con los muchachos o por practicar el robo en tiendas (“mecheras”) o el hurto, al menos en las dos entrevistas realizadas se observa la presencia de bandas integradas exclusivamente por mujeres y con grados de violencia involucrada en sus delitos. En las dos entrevistas que revisamos, las chicas han ido del robo por sorpresa al robo con violencia, aunque sin llegar a cometer asaltos.

### **Escuela: frustración, renuncia, estigma.**

Los procesos escolares constituyen el sustrato principal. Es central la frustración de la posibilidad de hacer aprendizajes significativos, de la que los muchachos y muchachas se culpan, ya sea por su falta de interés o por las dificultades que tienen para concentrarse en las rígidas condiciones que le impone su estancia en el aula. Pero, aunque acusan falta de competencia para desenvolverse en el ambiente escolar, saben que no carecen de habilidades en otros ámbitos. En el caso de una temprana deserción escolar, los menores manifiestan que la escuela les ha sido completamente inútil para la adquisición de conocimientos importantes para la vida:

“Está bien que vayan (a la escuela)...así se desarrollan más, tienen más mente. En cambio yo igual me considero que sé algo más que todos los que están aquí. Se mucho más, sé manejar en diferentes lados, según la situación que esté... si yo poco sé escribir e igual no más, po”. EJM1

“Que no me gusta, yo aprendo así rápido todo bien, pero no me gusta... me aburría en el colegio... es que es igual que cuando un niño sabe algo y le enseñan la misma lección siempre, se aburre”. EJM2

“Era aburrido, estar todo el día ahí escuchando a los profesores (...) Igual para estudiar, hay que ser habiloso, y yo no soy mucho, porque igual soy medio flojo”. EJM4

“Tss!... ni escribía, tenía los cuadernos nuevitos ahí”. EJM6

“Yo cuando era chica... nunca supe. Todavía no sé ni dividir, ni multiplicar, nada. Si iba en un colegio en que me tenían que hacerme pasar po’....porque estaba con psicólogo, con terapia, todas las cuestiones... y ahí salí de octavo y me echaron... no pude seguir la media en ese colegio”. EJM8

Otro proceso importante, es la adquisición de credenciales de mal comportamiento, de la que se culpan, por sus supuestas dificultades para controlarse, aunque también por un modo de ser propio, al que la escuela no se ajusta:

“Igual cuando yo estaba chico me arrancaba de la sala, pero no me portaba mal, eran cosas así como travesura. Aunque igual yo faltaba, porque me iba pa’ otras comunas con los amigos (...) Era el único en el colegio que iba con zapatillas. Nunca me gustó usar terno, zapatos de colegio, no. Ni cagando. Es que es la personalidad de uno”. EJM2

“Es que me encendían la llama y explotaba al tiro...y con mis compañeros era peleador igual...me llevaban siempre a la inspección (...) Me retaban caleta, me decían que ya estaban aburridos, que ya no querían... que siempre era lo mismo”. EJM4

“Es que repetía por andar leseando, andaba hueviando, tirando papeles, molestando... me llamaban siempre al apoderado. Por eso me echaron”. EJM5

“Es que no me gustaba estar ahí sentado con todos los demás. Era muy inquieto, no era desordenado, pero si teníamos que estar en silencio yo hablaba. No podía estar en silencio”. EJM6

“No hacía caso. Me mandaban a buscar el apoderado todos los días y mi mamá igual se fue aburriendo de mí”. EJM6

Uh, el colegio quedó ahí. Por qué: uno, por carretera. Dos, porque me tomé un año sabático. En primero medio me rebelé. Es que conocí a mi primer pololo, entonces hacíamos la cimarra”. EJM7

“Repetí porque soy desordená, porque peleábamos, rompíamos los cuadernos, las mochilas, y aparte nunca entiendo nada en las clases. Le pegaba a mis compañeros y no respeto a los profesores. Me carga que me manden, ni mi mamá me manda y me carga que me mande la profesora. Soy entera loca... y no cacho ná en clases”. EJM8

Una gran importancia tiene el proceso de construcción de la figura del *malo*, que se da en la interacción de los muchachos con la escuela. Esta construcción se observa también en los grupos de discusión que revisamos en la sección anterior:

“No quise ir más al colegio y anduve haciendo maldades”. EJM3

“- Yo también era maldadoso en el colegio. De primero básico empecé a ser maldadoso. Me echaron al tiro.

- El profe decía que era maldadoso, que era malo, que en este colegio era malo yo. Pa’ que le voy a decirle que me portaba bien yo, que era un niño Dios. Era malo”

- Porque tu podis ser el más piola, pero te mandaste un condoro y estái en el piño. Te mandaste un condoro y te tienen marcado. Yo voy a ser el culpable siempre. Si estai piola, a quien le van a echar la culpa. A uno, po’. Es pa’ volverse loco.

- Y es verdad, porque lo confunden con el diablo a uno. Lo tratan de drogadicto, de delincuente. Pero no saben que se ganan la vida de una forma no más”. DMG

### **Pares. Aprendizaje, afiliación.**

La vinculación con los pares marca el momento del aprendizaje y de la conversión a la actividad delictiva. El aprendizaje práctico, a través de la observación, se contrapone al saber escolar, de tipo teórico. Los mayores enseñan a los menores y todos terminan convirtiéndose en compañeros de delito. En esa empresa, a medida que crecen y que aumenta su fuerza y capacidad, acometen con delitos más

complejos, como el robo en las casas del “barrio alto”. O de los “lanzazos” pasan a los robos con intimidación.

“Uno aprende mirando. Y después tenís que hacerlo no más Por ejemplo, pa’ entrar a una casa con el destornillador, yo miraba cómo lo hacían y me metía con ellos, y ahí miraba y a la segunda, pescaba el destornillador e iba solo (...) no me junto con nadie, solo pa’ puro trabajar no más y repartir lo que ganamos”. EJI1

“Cuando chico, ahí uno empieza a hacer cosas chicas, y después a medida que va creciendo, empezai a... veís que tenís la fuerza, la capacidad pa hacer cosas grandes. Robar casas... siempre pa allá arriba, si (...) En la calle, con los amigos, ahí aprendís todos los días. Es que no es que te enseñen, sino que lo vai aprendiendo solo. Uno anda escuchando, anda mirando (...) Si po’, si yo ando metió en cosas y una cuadrilla de allá también. Nos unimos, vamos a trabajar con ellos o al revés”. EJI2

“Un amigo de la Pintana, tenía como 3 años más que yo, y me presentó más amigos que también eran más grandes (...) y ahí empecé. Salía en grupo’ y mirando aprendí a cortar cadenas (lanzazos). A casas a robar no me gustaba, porque soy asmático y con la adrenalina como que me ahogaba ahí adentro de la casa, trajinando. Y en el centro no po’. Tirai una cadena, corrí 5 pasos y era y te cambiái la polera”. EJI3

“Na, en el centro andaba así como de “descuido”, andar robando cosas en las tiendas. De mechero igual, supermercados. Ya fue como a los 15 o 16 que andábamos de “monra”, en las casas y todo eso. No casas así. Nos metíamos a casas bacanes, a veces estaban habitadas y a veces no (...) Éramos como 4, algunos casi de la misma edad que yo y los otros eran mayores (...) Si po’, mirándolos. Me decían: “ya, vo soy más chico... pásate”. Probaban suerte con uno. Me metían a mi primero, y apañaba”. EJI5.

“De los autos, el que nos enseñaba era viejo ya. Pero el viejo no sabía manejar. Y un amigo mío sabía manejar y ahí nos metimos todos. La hacíamos corta (...) De cualquier lado, de los estacionamientos, de cualquier lado. Los Nissan V16 son fáciles, se abren solas las puertas (...) Nos robábamos los autos en el día y esperábamos la tarde. Es que en la tarde igual es fácil, porque están todos prendiendo luces y la casa que no tenga luces prendidas, es porque está vacía. Aunque de repente igual nos metemos a las casas y ellos vienen llegando de la pega. Los dueños de casa, y nosotros estábamos adentro. Entonces, saltábamos por las ventanas y nos arrancábamos por los patios. Así que dejé sus luces prendidas (ríe)”. EJI6

“Hacíamos cuestiones chicas. No se po’, en las tiendas comerciales o súper, cosas chicas (..) Eso no es robar, eso es sacar algo no más. Era como más pa diversión, nomás. Porque después con la misma plata nos volábamos, hacíamos algo”. EJM7

Siempre he robado a personas y con violencia. Y siempre he andado acompañá. Con las cabras, andamos pa todos lados y robamos cuando queremos (...) Si no hacía nada. O sea, iba les pegaba y les quitaba las carteras o todo lo que anduvieran trayendo. Eso era como a los 14 años, de chica po”. EJM8

En solo una de las entrevistas se preguntó por la relación con los amigos de la escuela y la respuesta sugiere una vinculación, que podría ser de sucesión, entre el grupo contraescolar y la agrupación delictiva:

“No, es que mis amigos son más grandes. Pero igual tenía mi grupito, que hacíamos maldades. Es que siempre en los cursos hay grupitos, los mateos, los porros. Y yo era de los porros”. EJM5

### **Trabajo. Nueva renuncia, nueva frustración.**

La mayoría tiene una experiencia laboral fallida o nunca han trabajado. Por sus testimonios, pudiera pensarse que rehúyen los trabajos de tipo obrero o cualquier otro que implique disciplina y que solo están dispuestos a realizarlo por la posibilidad de ganar algún dinero esporádicamente. Pero, también puede interpretarse que es la falta de calificación del trabajo y los bajos sueldos asociados lo que los aleja de él. El deseo mayoritario es poder organizar ellos mismos su trabajo y, en lo posible, poner a otros a trabajar.

“No me lo imagino tampoco. Pero, si yo soy el jefe, ahí me lo imagino. Es que no me gusta que me manden”. EJM1

“No, nunca he trabajado así, no podría opinar, pero si un día lo tengo que hacer voy a tener que hacerlo no más”. EJM2

“Ahora trabajo en puro comercio ambulante, compro cosas, voy a la feria, las revendo, voy a los persas e igual me gano los beneficios los fines de semana, porque llego siempre a la hora (...) No me gusta (el trabajo formal) porque

estai muchas horas y pagan muy poco (...) trabajé como 3 días en la bodega de unos coreanos, pero me salí, además que ni hablan. Me cargó trabajar con jefe”. EJM3

“De repente yo le decía que me llevara a trabajar con él (su padre) porque es albañil y me decía que no, que yo no era pa la pega. Y un día me llevó y a mí no me gustó (...) la pega era terrible pesá, a todo sol, todo el día, todo cochino... y a mí me gusta andar así limpiecito”. EJM3

“Haciendo piscinas con un amigo. Ni un brillo. Es brígido, es cansador. Pero las lucas, igual bien. Piola. Es que el que gana más es el que la lleva, el maestro. Pero, cuando necesitai plata, tenías que hacerla no más. Más encima que el sol te mata. Estuve 2 meses haciendo eso, como a los 17 años. Ganaba como 16 mil pesos diarios y pa’ ese tiempo, igual estaba bien. Si estaba solo. No tenía ni un gasto. Pero es que me aburrió, por eso no seguí”. EJM4

Una vez, y duré cuatro días. Estuve en el Telepizza y duré esos pocos días porque me aburrió. Es que como siempre hay un viejo mala onda, entonces él influenció harto. Lo que pasa es que yo igual soy media flojita, prefiero quedarme acostá, dormir hasta tarde. Por eso no aguanté más”. EJM7

“Duré una semana. Después dos semanas, porque trabajé en un súper y me echaron por pelear con la jefa de todas las cajeras. Después trabajé en La Vega, en un negocio donde vendían cosas de plástico. Y me echaron porque hacía las cuestiones de mala gana y cuando me dijeron, casi le pegué al jefe y ahí me dieron una segunda oportunidad, hice lo mismo y me echaron”. EJM8

### **Las penas: dentro o fuera del circuito.**

La ley de responsabilidad penal adolescente ha aumentado el peso del castigo a los muchachos, generando una experiencia de encierro de larga duración, *antes de* enfrentar una pena como adultos. En tiempos pasados, un muchacho de 16 años, por ejemplo, podía ser declarado sin discernimiento y tratado como menor. Si era enviado a un centro correccional, su estadía era breve. Ahora es juzgado y condenado con el solo beneficio -relativo- de una rebaja en la intensidad de la pena que corresponde a un adulto. Puede que los educadores de los centros logren implementar un modelo socioeducativo que marque diferencia, pero lo cierto es que la duración que puede alcanzar una sanción privativa de libertad en el nuevo sistema -hasta 10 años, en el caso de los mayores de 16- echa por tierra esta pretensión:

“Lo que no me gusta es tener que trabajar acá, por la justicia, son muy altas las penas. Si mi primera causa, así que he estado en un centro, me pusieron 5 (años) y 1 al tiro y la primera causa. Y el robo lo calificaron y ahí me pusieron más tiempo. Tenía eso de conducta intachable, que nunca había estado preso, pero tenía un agravante que era “banda de malhechores”, porque éramos 4”. EJM1

“Si yo cuando cumplí 16, ahí salió la nueva ley y yo caí por causas más brígiditas (uno con violencia y otro con homicidio) y ahí me condenaron a 8 años. Pero antes ya había cometido robos. Y ahí me dijeron: *que haga 8 años*. Y las otras personas que andaban conmigo, que eran mayores, les dieron 15 y 10”. EJM2

“(Entré aquí) gracias a todas las condenas acumuladas como menor. Eran robos con sorpresa, un robo con intimidación, de todo me hicieron un globo”. EJM3

“Yo estoy aquí por un robo con violencia (...) es que me mandé una cagá” EJM7

“Por un robo con violencia. Pero igual antes hacía cosas, po”. EJM8

### **Promocionismo comprometido**

A la pregunta de por qué lo hacen o que piensan hacer a futuro, sacan a relucir con fuerza su afán promocionista, de acceder a un estilo de vida que los saque de la pobreza. Hay también una fuerte adhesión a los valores de una familia nuclear tradicional, en la que la mujer no trabaja fuera del hogar. Sin embargo, en algunos esta aspiración comienza a verse comprometida por las condiciones u obligaciones que emergen del presente, como la necesidad de llevar una vida más tranquila o tener que hacerse cargo de una familia propia. Comienza a agotarse el tiempo para asegurar su futuro mediante el robo. Algunos sienten que más vale ir pensando en el trabajo como medio para conseguirlo:

“Tener una casa, una familia y su negocio que sea mío y me lo administre alguien más y que mi señora no trabaje, que se quede en la casa, que se entretenga en cosas, que se relaje, que vea a los hijos y listo y yo sacarlos a todos a pasear (...) Es que según, po’. En un día, podí ganarte 20 millones, o más si tení suerte. Pero igual quiero puro tener mi negocio, pa vivir tranquilo, igual po’”. EJM1.



Porque me gustaba, porque en la casa tampoco faltaba comida para comer, siempre había cosas. Pero igual faltaban como ropa, vestirse bien, cosas así, tener plata pa' salir. Me gusta andar bien vestido, andar a la moda. Y aparte, yo tampoco le pedía a mi abuela, nunca le pedía nada... ni zapatillas". EJM2

"Es que tenía cualquier plata. Si cortaba una cadena y sacaba 70, 80 lucas, al toque. Y me gastaba la plata en ropa, zapatillas (...) Ahora no po', tengo una hija, le doy la plata a ella. Si yo quiero cambiar, no quiero hacer nada malo, no quiero que me vaya a verme pa' la cárcel". EJM3

"Conseguir lucas pa salir con las chiquillas, y tener mi ropita así, porque todos se visten bien (...) Trabajar, trabajar y afirmarme en una pega y no salir más. Estar con una señora, unos hijos, tener mi casa". EJM4

### **La familia. Un anhelo perdido.**

Los muchachos manifiestan que la familia representa un conjunto de cosas que no tuvieron proyección. Más que causa, los recuerdos familiares testimonian el efecto corrosivo que las mismas aspiraciones promocionistas inculcadas habrían tenido en ellos. Pero, no culpan a la familia por llevar la vida que llevan, sino que se atribuyen toda la responsabilidad, por su espíritu independiente o su carácter rebelde. A lo más, culpan a sus padres por no haber sido más enérgicos en impedir que tomaran el "mal camino", pero reconocen que nada habría sido distinto:

"Me gustaría cambiar mi vida cuando falleció mi padre, porque si hubiera estado él nosotros hubiéramos sido otra persona. No así, porque cuando estábamos con él íbamos a la escuela, hacíamos de todo, teníamos todo. Quería sacarnos pa' delante, vivíamos en un condominio, en escuelas particulares, nos sacó de donde vivíamos. Pero después que murió, mi madre se fue con otro, y quedó la media cagá en la casa (...) Pa' mi sería un sueño que mis hijos llegaran con un diploma y que me digan: Ya, saqué un título, un trabajo y ya podré trabajar como ingeniero, esas cosas, así como lo mismo que mi papá quería pa' mí. Si total mi papá igual trabajaba pa' fuera". EJM1

"Igual uno es rebelde, uno se arrancaba. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer". EJM4

"Debieron haberme pegado. Debieron haberme amarrado y no haberme dejado salir en un mes. Así de malos (...) Es que me pilló con plata y me pegó. Igual, me retaron: *Ná, que ya estaba hecho ya*. Si no es algo tan terrible

tampoco. Nunca me vieron tan mal. Igual hay harta diferencia y todo, pero igual yo tenía plata, nunca anduve mal y siempre he sido buena tela. Lo que necesitaban se los daba”. EJM5

“No. Si uno hace esto porque quiere no más. Es que igual me gustaba la plata y todo. Ná que ver meter a la familia aquí. Si igual ganando plata (trabajando), te dura. Me da más estabilidad. Antes la plata no se hacía nada, la gastaba en puras cuestiones: celulares, ropas. De repente me compraba un celular y andaba curao y se me perdía. O me compraba zapatillas y andaba tomando y se me rajaban. Era fácil. Me gustaría tener un negocio, no sé, cualquier cosa. Para no trabajar más”. EJM6

“Ahora ya soy más grande. Y, por ejemplo, la primera vez, yo dije: mi mamá me va a reventarme a palos, pero me vio y me dijo: *las hueás que andai haciendo*. Y nada más po’. Después era como: *Ya*. Y de nuevo iba pa’ la comisaría a buscarme”. EJM8

### **Las muchachas: convidadas de piedra.**

A pesar de que, como vimos, varias de las experiencias que sustentan las trayectorias son compartidas por muchachos y muchachas, los muchachos en general las discriminan. Recelan de la autonomía exhibida por ellas: Las acusan de “carreteras”, infieles, violentas. No quieren verlas trabajando ni estudiando. Las quieren caseras, dedicadas a las labores domésticas. Se expresa una concepción muy conservadora de la familia y del lugar de la mujer en ella. Por su parte, ellas se muestran dependientes en sus relaciones con ellos y están dispuestas a dejar sus proyectos para más adelante:

“No me gustó, porque a mí me gustan las chiquillas que son señoritas, que son tranquilas. O si trabajan, que lleguen a la casa, y que sean inteligentes. No que ande así como uno, o que hable con todos los hombres y sea como uno más. Ella no hacía lo mismo que yo, pero le gustaba andar con los cabros, tomar y todas esas cosas. A mí me gustan las chiquillas tranquilas, que sé que pueda tener una familia y que nunca me va a engañarme. En cambio, sí tengo un hijo con una cabra cualquiera, quizá el hijo de quién va a ser”. EJM1

“Ellas esperaban más allá no más. Pero las mujeres que roban son pocas y son pesás, son rudas, pero es cosa de ellas. Igual está bien, porque ellas roban e invierten bien la plata. En cosas mejores que el hombre, porque lo invierten en

los hijos. Porque no hay mina que no tenga un hijo ahora. Así que pa' sus casas y sus cosas. Y así se ganan su respeto, po'". EJH4

"No, no la dejo pololear (hermana menor). Pero depende como sea el loco. Si es un zángano, que no hace nada, que ande puro... no vale la pena. Igual es como volá de ellos, pero yo la paqueo no más, porque es chica. Yo nunca fui camboyano, por decirle (ríe), nunca fui mujeriego. Igual tenía mi uno que otro enganche. Si he pololeado como tres veces no más". EJH5.

## **PROYECCIÓN O NO PROYECCIÓN. LAS ÍNFULAS DEL DESISTIMIENTO.**

*Saber verla, saber hacerla, tener mente*, son todos argumentos a favor de negar o disminuir el daño causado, pero pueden tener un sentido distinto cuando irrumpen el deseo de abandono de la actividad delictiva. Los muchachos, en los momentos en que el nuevo sistema les impone todo su rigor criminalizante, hacen oídos -y también memoria- de esos proyectos de vida que alguna vez oyeron -o que siguen escuchando-, que en grados diversos implican terminar la escuela, conseguir un buen trabajo y formar una familia. Los cambios que acarrea satisfacer el deseo de abandonar el delito, requieren de ciertas condiciones que los muchachos y muchachas identifican muy bien.

### **Reinserción escolar.**

El deseo de retomar la escuela o no perderla definitivamente, revela la fuerza en ellos del camino prescrito para llegar a ser una persona mejor. En las condiciones que impone el sometimiento a una sanción, las posibilidades de cumplirlo varían. Si el muchacho tiene que cumplir con una sanción en libertad o semiprivativa de libertad, puede acceder a la red local de escuelas -normales o de adultos-, mientras que si está condenado a una sanción privativa de libertad, no tiene otra alternativa que la escuela del recinto o la regularización de estudios. La situación es diferente también en el tiempo, antes y después de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. En los grupos de discusión de 2005, realizados el mismo año en que se aprobó la ley y dieciocho meses antes de su entrada en vigencia, la diferencia entre muchachos que han cometido delitos graves y

muchachos que han cometido delitos menos graves, se organiza en términos de una urgencia vital: menores o mayores. Bajo el argumento de “hay que verla”, llaman a hacerse cargo de sí mismos, aunque esto exige esconder las marcas:

- “Pero nosotros los menores, lo hacíamos de diversión y algunos todavía la hacemos de diversión.
- Es que los cabros chicos, lo hacen de diversión (...) Son cabros chicos que van pa’ arriba, no la ven todavía.
- Verla, porque ya ahora, ya soy mayor ya. Voy a tener los papeles manchados.
- Es que cuando uno es chico es distinto. Pero siendo mayor, con los papeles manchados, adónde. Tienen que ser puras movidas, vai a tener que seguir robando, no más.
- No po’, caí. Salí e igual estuve estudiando. En el colegio no sabe nadie”. GDG

En las entrevistas, realizadas en un periodo en que la nueva ley está en pleno funcionamiento, las condiciones de encierro revelan, con mayor claridad que antes, la importancia del buen comportamiento en el espacio escolar, tal como se exige en la prisión, que revela su carácter de institución total:

“Y ahora voy a la escuela, más para aprender y por la conducta que se lleva acá. (En la escuela) no tenía problemas. Me portaba igual que acá. Uno tiene que agachar el moño no más y seguir las instrucciones que te dan. Porque si no, puros problemas. Esa es la lógica acá, igual po’. Portarse bien o pierde el beneficio. Igual hay gente que le gusta estar acá dentro porque está mejor aquí que afuera, pero como yo estoy mejor afuera, prefiero agachar el moño y seguir la instrucción que me dan los educadores”. EJJ1

“Estoy yendo ahora, estoy independizándome más, porque igual tengo una hija y con el tiempo’ uno tiene que estar bien. Ella es hija con la cabra que le contaba en delante y tiene tres añitos. Pero lo malo es que estamos mal con mi pareja. Pero igual me deja ver a mi hija. Es como manipuladora, igual. Estoy tratando de ser mejor sí. Estoy trabajando, estoy yendo al colegio”. EJJ3

“Sin estudios no somos nada, pienso yo. Igual estoy estudiando aquí, estoy en primero y segundo”. EJJ4

## La salida: más laboral que escolar

Los muchachos ven en el trabajo el medio preferente de salida. Pero, arrancan desde distintos puntos de partida. Algunos no han trabajado nunca antes y cuando se plantean el tema, en su discurso queda la impresión de que continuarán por el camino acostumbrado. Otros, más curtidos en el trabajo, ponen algunas condiciones, como que valga el esfuerzo cotidiano que demanda, que no es como “ganarse la plata fácil” y que ofrezca una fuente de ingresos estable y segura, frente al riesgo actual. La satisfacción de esas dos condiciones, abre el camino a que sacrifiquen su autonomía, en pos de unos objetivos más modestos, pero satisfactorios. Pero, la “tentación” de invertir en una buena salida, mediante un golpe afortunado, que permita por ejemplo montar un negocio para vivir del trabajo de otros, persiste:

“Trabajar (risas). Buscar un curro, por ahí (...) Hacer un negocio, eso es lo fundamental. Lo que yo tenía pensado es un restaurant o una disco, algo así, que deje plata. Y tener a alguien ahí a cargo de todo eso. Yo tenía pa’ haberlo hecho, pero no lo hice porque andaba puro vacilando y cosas así”. EJI1

“Comerciante, tener un puesto en algún persa, en el Bío Bío, en una carnicería, una botillería, sin jefe, porque ellos siempre van a querer ganar más que tú” EJI3.

“Ahora trabajo, en un restaurante, en la cocina. Hago de todo, soy ayudante de cocina. Es que mi hermano trabaja en eso y él me metió en eso y me gustó (...) me aburrí, me aburrí de delinquir, de estar preso, de todo eso (...) Los profes me hablan de eso (estudiar gastronomía), pero es que igual tengo que sacar el cuarto (enseñanza media). ¿Y después estudiar de nuevo? Yo creo que voy a sacar el cuarto y de ahí a pensarlo bien. Si igual con el cuarto ya, igual hago algo. Así que... tendría que ser una carrera de dos años, algo corto (...) Porque aprendí a trabajar y me gustó. Aparte, tenía más amigos que son otra onda (...) Deberían aumentar los sueldos, la plata es muy poca, (los jefes) son abusadores (Aunque)... prefiero trabajar así no más, porque así no arriesgo nada po’, me cuido yo, po’. En cambio, si querí ganar más plata de forma ilegal, igual estai arriesgando tu libertad, po’ (...) Aunque igual uno sueña con ser su propio jefe, pero del sueño al hecho, ¡uh!”. EJI4

“Si he trabajado, pero no me gusta mucho, porque mucha esclavitud, pero las pegas son así. Pero, es que tengo los papeles manchados. En lo único que

puedo trabajar es en construcción. Y la “contru” te mata, me entiende (...) Si igual he trabajado, igual he apañado y el día de mañana pienso en trabajar, pienso en mi familia, en mi señora, mi hijo o hija (...) No podí andar en la misma, porque si te pillan, no vai a ver a tu hijo crecer. Nada, po’. Tu señora se busca a otro hueón y era, po’ (...) No sé, la tentación es grande. Yo estudio, pero de repente con los cabros, necesito unas monedas, voy y les digo que quiero trabajar con ellos. Si hay que salir, salgo, ¿me entiende? (...) Pero igual hago cosas productivas a la vez, estudio, hago mis cursos de capacitación, todo eso. Se puede hacer todo a la vez yo creo, po’”. EJM5

“Primero, trabajaba en una fábrica descargando sillones. Entregábamos sillones para todos lados: Calama, Iquique, Antofagasta... conozco todo Chile. Ahora estoy trabajando en una fábrica de napa, dónde hacen los plumones. Eso estamos haciendo (...) Me gustaría trabajar de comerciante en la feria, hay plata todos los días. Tener plata todos los días. O un almacén con máquinas o juegos de video, cualquier cosa”. EJM6

### **El centro: ayuda o confirmación.**

El cumplimiento de penas en los centros, e incluso los proyectos que funcionan en el medio libre, confrontan a los muchachos con un tiempo de aprendizaje y confirmación en el delito o con un tiempo de ayuda y reflexión. La diferencia la ponen los educadores:

“Creo que ningún centro te rehabilita, porque todos los cabros salen peor de acá. Como que les enseñan más cosas. Aquí lo único que sirve es para que aprendan hasta los que ni roban y después salen hablando de cajeros, de esto y lo otro. Salen con más ganas de robar. Y, por ejemplo, acá la escuela no es obligatoria, es voluntaria. Entonces, los cabros se portan mal y al toque los tiran pa’ la 5 (casa de castigo). Pero aquí va en uno no más po’. Si yo quiero irme pa’ la calle, me porto bien. Voy a la escuela, voy a talleres alternativos”. EJM1

“El SENAME es como puro aprendizaje para los que quieran delinquir. El SENAME siempre ha sido eso, nunca ha sido otra cosa. Qué la rehabilitación y eso. Mentira, mentira. Porque si los jóvenes quieren... Mire, la cosa siempre ha sido así. Uno llega y conoce a nueva gente y se juntan las ideas, y ahí aprendí cosas nuevas, en todos los lugares (...) Incluso, cuando llegué aquí, los profes me decían semilla de maldad”. EJM2

“Que sean más ordenados con las cuestiones de condenas, porque a veces te las quebrantan, te ponen más causas y no terminai nunca. Y más encima, te pasan de un simple (libertad asistida) a un semicerrado o a un cerrado. Pero, igual por un lado bueno, porque igual apoyan, quieren sacar a los jóvenes de la rutina, hacen paseos. Y al estar preso, igual esas cosas son buenas”. EJJ3

“Igual sirven para rehabilitarse, creo yo. Yo creo que me rehabilitó, porque uno cambia po’. Escuchas a los profes y uno haba con ellos y aprende cosas po’, y medita después po’. Los profes igual te dan consejos buenos, y todo eso. Te ayudan igual, cuando andai mal te dicen: *oye, conversemos*. Y te sacan igual del psicoseo. Cuando andai medio aburrió y no tenía ganas de hacer nada, me han apoyado (...) Uno en la calle aprende todo, no adentro. ¿Qué voy a aprender? Uno conoce gente, no más. Quizá podí salir a la calle a buscarte moneas, a robar, pero na (...) Aquí todos tienen roces con los profes, porque son sapos. Te fumai un cigarro, te paquean, te fumai un pito, te paquean. Si ellos no van a ganar más plata porque sapean”. EJJ5

“Igual es bueno, porque ayuda a sacar tus estudios. (Lo malo) es el encierro”. EJJ6

“Es que aquí igual me da flojera venir, porque es muy lejos y todo. Pero yo encuentro que son buenos, ayudan hartito, por ejemplo las tías son mis amigas, me quieren hartito y me dicen siempre que tengo que luchar por mi guagua, que tengo que hacer esto, esto otro. Lo encuentro súper bueno. Ahí conoces hartos amigos, pero amigos, no amigos de carrete. Personas que marcan en la vida. Igual le voy a contar a mi hija después sobre las tías”. EJM7

“Son buenos, me han ayudao caleta, po’. Me dan consejos. El otro día, el tío me felicitó, porque he cambiao mucho, po’. Igual yo ya ni he peliao tanto, po’ y eso, po’”. EJM8

### **Los pares: Decisión colectiva o individual.**

Sin llegar a dar por supuesto que, a estas alturas, los muchachos ya han tomado decisiones sobre su desistimiento, un aspecto interesante es si esa decisión supone un alejamiento individual, de un pequeño grupo, o de todo el grupo de muchachos o muchachas. Nuevamente, ellos narran una variedad de situaciones. De una decisión personal, donde los nuevos amigos no delinquen y los anteriores se mantienen como compañeros en el delito, a una opción de aislarse para evitar el contacto con los otros compañeros, o darse cuenta que hay otros que están en la

misma empresa e incluso se han adelantado en el intento. Cualquiera de estas alternativas que se reportan, son difíciles de concretar en un centro donde todos se conocen.

“No me junto con nadie yo acá. Los conozco a todos, pero no me gusta juntarme con ellos. Yo soy más solitario, me junto con dos amigos que tengo, que son piola (...) el aprendizaje de cuando caí en los centros, y hacís meses preso. Te veí solo y te aburrí de escuchar siempre lo mismo. A los cabros decir: *me robé esto*”. EJM4

“El loco que anda en la volá, es como fallao. Porque te hablan de eso todo el rato, po’. *ipah, pah, pah!*, en la cabeza. Lo tienen muy metido en la cabeza (...) los otros loquitos se chantan, po’. Y hablan otras cosas, po’. Cosas de la vida, futbol, del pololeo, de cualquier cosa”. EJM5

“Que todos formaron su familia y otras amistades que van saliendo po’. Es que hay varios que trabajan ahora”. EJM6

### **La responsabilización: Responder por ellos mismos.**

Uno de los objetivos explícitamente planteados en la nueva justicia penal adolescente, es que el joven se responsabilice. Entre los legisladores, como vimos, este objetivo tiene dos significados. El primero es el corriente en la mirada de tolerancia cero y también el mayoritario: que el muchacho afronte las sanciones a que se ha hecho merecedor. El segundo es propio de los reformadores y está escasamente representado: que el joven se haga cargo del perjuicio causado a terceros de un modo que fortalezca su proceso de desarrollo y el ejercicio de sus derechos. En algunos, más ilustrados, incluye la reparación del daño causado. Entre los operadores de SENAME, se ha recogido en la práctica un significado funcional al trabajo cotidiano de los centros y, al mismo tiempo, emparentado con el significado de la reforma: que el joven aprenda a comportarse de un modo que sus obligaciones equilibren sus derechos. Entre los técnicos encargados del desarrollo programático, circula un significado de la responsabilización asociado a la toma de conciencia sobre el daño causado por el delito, pero esta disposición la han concebido sólo como producto de la aplicación de instrumentos de diagnóstico estandarizado, como indicador que asigna un determinado puntaje; por lo que su utilidad no acaba de ser comprendida por los educadores ni tampoco por los



menores. Un significado más amplio aun de la responsabilización, vinculado a la toma de conciencia y la adopción de decisiones sobre la propia trayectoria vital en el delito, no ha pasado de ser una declaración programática, que no ha encontrado traducción explícita en el quehacer de los equipos<sup>238</sup>. Pero esta toma de conciencia, como hemos visto, es el camino. Se trataría de buscar el modo de concretarlo.

Las entrevistas nos muestran varios de estos significados en proceso: la toma de conciencia del daño causado por el delito, en particular. *Saber verla*, despunta como una toma de conciencia crítica de la vida que llevan:

“Varios millones. Íbamos a una casa y andábamos tres: 40 pa’ los tres, o 20. Puras joyas, plata en efectivo y ningún bulto. Pero ya era ya. Es que si lo sigo haciendo, voy a perder todo lo que tengo. Como que uno es joven y la adrenalina. Una casa, tiene gente: *Si*. Pero, con el tiempo, uno se va dando cuenta que hace daño y si me llegan a pillar van a ser más años (...) Cuando uno es menor, es inconsciente de esas cosas y uno dice: *me da lo mismo, ni ahí*. Pero ya después, cuando empezai a madurar, a tomar conciencia un poco, como que ya después la vei, po’ (...) Porque ya tengo lo que quería (un minimarket)... Yo ya no quiero nada más, quiero estar tranquilo”. EJJ2

“He visto hartas cosas brígiditas, muertes, no sé. He visto lo que es pasar hambre, cosas malas, cosas feas, cuando he estado preso. Allá en la peni (penitenciaria), yo veía a locos mal. Me daba a pensar: *¡Oh!, donde estoy metío*. De ahí, como que empezai a calmarte, a bajar las revoluciones”. EJJ2

“Lo más grave que he hecho, es haber hecho las cosas mal: ser papá a temprana edad, dejar el colegio tirado -si no, ya hubiera tenido listo el 4º medio- haberme metido en problemas, a vivir la vida muy rápido (...) Por un lado igual es bacán, porque tenía cualquier plata, po’. La plata es bacán, porque tenía lo que quería. Pero, por otro lado es malo, porque si te gusta lo dulce, tenía que aguantar lo amargo. Y yo estoy pagando lo amargo, todavía estoy amargo. Yo considero que lo que hice fue malo”. EJJ3

“Tenía otra mente, era más cabro, tenía 12 años. Fue brígido, porque amarramos a toda la gente. Es que no me gusta hablar de eso (se sonroja). Sacamos todo lo que pudimos, y nos pillaron afuera (...) fue con prensa y todo, fue violento, un asalto, po’. Apuntai a alguien con una pistola, la intimidai, la amarraí, igual es brígido (...) a mi mamá le daba vergüenza (...) y la otra gente...

---

<sup>238</sup> “Sistema Nacional de Atención Socioeducativa, 2006 – 2010”, SENAME, Santiago, marzo de 2007.

me da lo mismo la otra gente a mí, yo no vivo de nadie. Le pedí disculpas a mi familia no más, po'. A mi abuela, por hacerle pasar la vergüenza". EJM5

"Es muy arriesgado, porque si me llego a ir preso, quién va a estar con mi hija. Después tu señora igual se aburre de ir a verte po'. Y que tenga otro papá, ni cagando. Por ese lado yo lo veo (...) porque nunca había hecho eso. Nunca le había pegado a alguien robando, maltratando a la gente, es fuerte po'. (...) El daño que le hicimos a las personas. Si igual le pegamos a una señora que podría haber sido tu mamá. Menos mal que el loco que andaba conmigo no tenía balas de verdad. Si no, yo cacho que se le hubieran salido sus balazos, si estaban todos pegándonos, nos teníamos que defender". EJM6

"Estábamos con amigas, pero una libró po'. La vio por ella y no estuvo ni ahí con nosotras. Es que, bueno, se dio la ocasión y nos pitamos una loca. Le robamos la cartera y la loca se resistió y le pegamos. Es que ahora yo lo pienso y digo: *puta, pobrecita*. Si a mí igual me da pena, po'. Me da cosita (...) Es que igual, no dejé el robo así de una. No, po'. O sea, igual cosas chicas no más, po'. Igual si salíamos a carretear y había algún curao, decíamos: *Ya, pitiémonos a este hueón*. Lo hacíamos. Pero pa' vacilar no más". EJM7

## **DESANDAR LO ANDADO: ¿UN CAMINO DE RETORNO? ¿RETORNO A QUÉ? ¿UN CAMINO DE INGRESO... A QUÉ?**

El objetivo principal de la ley de responsabilidad penal adolescente, lo han entendido la mayoría de los actores, al menos desde el punto de vista doctrinario, es el logro de la reinserción social de los jóvenes. El artículo 20, que define el objetivo de la ley, reza:

"Artículo 20: Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia, orientada a la plena integración social".

Ha sido traducido programáticamente por el SENAME como un objetivo de reinserción social, que a su vez sería el "*resultado de una acción socioeducativa compleja e integral, que busca limitar los efectos de la sanción con un conjunto de acciones intencionadas de responsabilización, reparación, habilitación e integración*".

*social del adolescente*”<sup>239</sup>. Los cuatro objetivos específicos así delineados, se conocen en la red SENAME como los *componentes* y fueron introducidos en todas las orientaciones técnicas elaboradas para la ejecución de las sanciones en el periodo 2007 - 2010. Han servido de marco orientador sobre los aspectos que hay que lograr en el trabajo con los muchachos, aunque no dan cuenta de *cómo* se puede hacer esto en la práctica o *cuál es la organización y estilo de trabajo de los equipos* que permitirían su logro. Es decir, no dan cuenta de un *modelo socioeducativo* a la base, carencia histórica del trabajo en el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, que en los últimos años se ha pretendido subsanar con la introducción -de modo más bien autoritario- de un modelo de gestión de los riesgos, basado en un diagnóstico del riesgo con instrumentos estandarizados y en la intervención diferenciada, de acuerdo a los distintos “perfiles” de jóvenes que el diagnóstico permitiría identificar. La diferencia entre uno y otro modelo, uno educativo y otro del riesgo, son profundas y el trabajo de los educadores lo refleja, encontrándose en la práctica modelos de trabajo inspirados más bien en la tradición de base de la educación popular, en modelos vigotskianos, que enfatizan el aprendizaje significativo en un contexto cercano facilitado por un educador, en la “pedagogía de la presencia” (Gómez Da Costa) o en la psicología comunitaria.

En lo que sigue, exponemos la visión que los educadores que trabajan en la ejecución de las sanciones tienen del trabajo de reinserción social con los jóvenes, de acuerdo con material procedente de un grupo focal realizado por nosotros con operadores de la sanción privativa de libertad en régimen semicerrado, la más compleja del circuito, en el contexto de una evaluación realizada por el SENAME en el año 2013 (anexo 1, transcripciones), la que es comparada con un estudio realizado por sociólogos de la institución colaboradora de SENAME “Tierra de Esperanza, en el año 2013”<sup>240</sup>.

Los investigadores de “Tierra de Esperanza”, se plantearon conocer el significado del concepto de reinserción social que tenían los operadores que ejecutan la sanción de libertad asistida, así como los menores que cumplen con ella.

---

<sup>239</sup> Sistema Nacional de Atención Socioeducativa, Óp. Cit.

<sup>240</sup> V.V.A.A., *Reinserción Social, Un concepto desde los actores vinculados a la ley de responsabilidad penal adolescente*, Trama impresores, Fundación Tierra de Esperanza, Concepción, Chile, julio de 2013.

Identificaron tres significados del concepto de reinserción social entre los operadores. Un primer significado, al que llaman positivo, que se resume en la fórmula: “*Nunca han salido de la sociedad*”; un segundo significado, negativo, bajo la fórmula: “*Nunca estuvieron insertos*” y un tercero, neutral: “*Estuvieron insertos y salieron*”.

El significado *neutral*, sería el comportamiento de un sujeto que por algún motivo se desajustó de las normas y busca una nueva oportunidad para adecuarse o insertarse dentro de un grupo de personas que lleva una vida convencional. El trabajo educativo -en esta visión- debería poner énfasis en que el joven se comporte de acuerdo con valores universales, lo que exigiría que este abandone principalmente la actividad delictiva, pero también el consumo de drogas y la violencia en general. Es una exigencia amplia, ya que la inserción en algún sistema social formal, no es suficiente para darla por realizada. Cito del estudio:

“Un joven puede decir que está inserto socialmente, porque algunos me lo han dicho porque están estudiando, pero siguen delinquiendo. Hay otros que pueden estar trabajando, pero consumen pasta base o le pegan a la polola y ahí existe una violencia de base y yo no encuentro que estén reinsertos (...)

”Yo logro que una persona se reinserte socialmente cuando vuelve a la sociedad y empieza a cumplir un rol real y efectivo dentro de la sociedad; ya sea volviendo a estudiar, volviendo a formar parte en forma sana de una familia, empiece a trabajar y empiece a producir en forma sana y teniendo una convivencia sana y armónica con el resto” (Delegados de libertad asistida, pág. 67)

En relación con el material que hemos revisado, podría decirse que esta postura subestima y sobrestima a la vez el potencial convencional en la conducta de los jóvenes. Lo subestima, porque como vimos, los muchachos adhieren a la mayoría de los valores convencionales e incluso a pautas que marcan fuerte la cultura de los sectores populares urbanos en la sociedad chilena (como el machismo o una visión tradicional de la familia), siendo el plano de las aspiraciones el más destacado en este aspecto. En tal sentido, tampoco es adecuado subestimar la importancia de la reinserción escolar o la integración laboral. A su vez, sobreestima dicho potencial,

porque en realidad lo que pide es una sobre adaptación que, pocos muchachos están en condiciones de cumplir.

El significado *positivo* de la reinserción social, se centra en la adhesión del joven al marco normativo de la sociedad que se podría considerar “normal”, ya que en otros planos, nunca ha dejado de estar inserto, nunca ha salido de la sociedad. Es decir, se ha desviado. Cito del estudio:

“Cuando nosotros hablamos de reinserción social es que el joven sea “normal” y digo entre comillas, porque él se cree dentro de la sociedad, al llegar aquí sancionado (...) pero es un anormal porque no cumple las normas ni las leyes establecidas (...) que él entre al mundo estructurado y a la normalidad que nosotros entendemos, que el joven se autoabastezca, que le sude la frente, que trabaje por lo que tiene o por lo que quiere, que se proyecte utilizando toda la red que tiene a su alrededor...” (Delegado de libertad asistida, Pág. 70)

Esta postura, que subraya la necesidad de activar el potencial de habilitación de los muchachos, no se toma realmente en serio el efecto de desinserción social que implican los procesos de criminalización, así como el potencial criminógeno del aspiracionismo desenfrenado que circula en la sociedad o la ambición desatada y el increíble desprecio por la ley exhibidos por los criminales de cuello blanco, de cuyo actuar e influencia impune hemos sido testigos privilegiados en los últimos años.

Finalmente, el significado *negativo* de la reinserción social implicaría abrir a los muchachos espacios de participación que nunca han conocido, mostrándoles nuevas alternativas, que los integren y los habiliten para desarrollar una nueva vida. Cito del estudio:

“Cuando una persona previamente no ha tenido esos espacios, no ha participado, no lo ha conocido y tú debes señalarlo, informarlo, encaminarlo, enseñarle una nueva opción que es distinta de la que él tenía (...) entregarles las herramientas para que ellos sean los gestores de su propio desarrollo, que no avalen el tema del delito como una forma de conseguir recursos” (jefes técnicos, Pág. 47)

Esta opinión supone que los muchachos no han tenido ningún contacto con las instituciones, cuando lo que ha ocurrido es que estos “espacios” no han sido ni atractivos ni adecuados para ellos, sino por el contrario, en ellos han sido discriminados y empujados a la frustración. En realidad, los educadores que trabajan directamente con los muchachos no plantean este significado negativo, sino que exponen un significado “funcional”, por el cual el trabajo no pretende lograr grandes cambios, sino que se conforma con lograr que los muchachos aprendan a convivir con otros, respetando sus derechos:

“Es súper difícil reinsertarlo y nosotros ocuparnos de la totalidad del joven, sino darle a conocer que esto es otro mundo (...) en el cual las relaciones no se rigen por la violencia o por la usurpación sino más bien por lazos de sociedad, de cooperación, de ayuda, de trabajo” (Delegado de libertad asistida, pág.67 )

Sin embargo, a pesar de que este significado se plantee como práctico, minimalista o funcional, es en realidad maximalista y unilateral, ya que plantea la existencia de solo un aspecto de la convivencia, negando la otra cara de una sociedad secuestrada por las relaciones mercantiles.

Cualquiera sea el significado al que adhieran los educadores y los técnicos, lo cierto es que comparten la expectativa de que el logro de la reinserción social por los muchachos, es una posibilidad remota. Las expectativas de los equipos son siempre modestas y la mayoría se aboca al trabajo en torno a alguno de los *componentes*, como la reparación (abordaje de la problemática desde el punto de vista terapéutico), la responsabilización (que el muchacho se haga cargo de los delitos cometidos y reflexione sobre el daño causado), la habilitación (desarrollo de habilidades en los jóvenes o adecuación de espacios en las redes institucionales) e inserción sociocomunitaria (relación del joven y su familia con la oferta institucional y comunitaria existente), confiando en que la receta del éxito es la adecuada articulación de estos componentes en un plan de intervención individual (PII) que responda al “perfil” y características de cada joven. Reconocen, sin embargo, que las mismas falencias del trabajo de habilitación, la carencia de una oferta adecuada de educación y capacitación laboral que dependa del programa o que esté disponible en el territorio y la falta de redes formales o informales de carácter local, son los obstáculos principales para tener éxito. En otros términos, la

vinculación, la integración social, aparecen como los objetivos naturales de un tipo de sanción como la libertad asistida, más allá de si este es el significado dominante de reinserción social en los equipos.

Por otra parte, la vinculación del joven con una figura adulta significativa que le sirva de modelo y le muestre el camino, es considerada la clave del éxito del trabajo educativo. En tal sentido, la falta de apoyo de la familia es presentada como un factor de fracaso en el trabajo. Pero, el programa de sanción aspira en realidad a ser ese referente para el muchacho:

“... que si la familia está presente se pueden conseguir cosas y si la familia no está presente lamentablemente no tienen muy buen pronóstico” (Delegado de libertad asistida, Pág. 83)

“Los educadores van cambiando los referentes de los jóvenes, tratamos nosotros mismos de transformarnos en referentes también para ellos (...) los referentes claros son la familia, los educadores, el encargado de casa, psicólogos, coordinadores, ahí sería como la figura. Le doy bastante realce a la pega que hace el educador” (Delegado de libertad asistida, Pág. 84)

Sobre los resultados reales del trabajo de reinserción, los educadores concuerdan en que no está habiendo reinserción social, que los jóvenes son los mismos, que circulan de una sanción a otra sin mayores cambios. Cuando hay cambios, estos se refieren a un perfil muy definido de jóvenes. Si el joven tiene una identidad delictual configurada, las opciones son nulas. Pero si el contacto de los muchachos con la justicia es esporádico u obedece a alguna situación ligada a su proceso normal de desarrollo como adolescente, las posibilidades son casi plenas. Con todo, destacan que la motivación del propio joven para lograr el cambio es fundamental, pero esta voluntad de cambio estaría limitada por factores presentes en ellos mismos, como un bajo nivel cognitivo, un alto compromiso delictual o la carencia de vínculos relacionales, a los que hay que sumar la falta de apoyo familiar.

“El bajo nivel cognitivo, tal vez el retraso socio-cultural o, a veces, la inteligencia limítrofe, yo creo que también dificulta, porque los chiquillos no logran una comprensión adecuada de cuál es el propósito y te das cuenta de que tu tratas de mostrarles, pero hay un limitante que va más allá de su

historia y todo. Es que no logran comprender el propósito y tú te vas ahí midiendo (...) la historia delictiva, o sea, que haya mucha complejidad, que tu veas que hubo un inicio muy temprano en la comisión de delitos” (Delegados de libertad asistida, Pág. 81)

Los educadores que trabajan en la sanción privativa de libertad en régimen semicerrado, aportan algunas conclusiones complementarias sobre el trabajo de los equipos. Estos consideran que la naturaleza responsabilizadora de la sanción la hace apta para un amplio espectro de jóvenes:

“-Aporta la idea de que el adolescente está sometido a un control interno y que su vida está restringida durante un periodo de tiempo en búsqueda de ciertos objetivos. Por lo tanto va *estar a cargo de*. Es la expectativa que se tiene respecto al Semicerrado (...)

- Yo creo que básicamente, en el fondo no tenemos individualizado el tipo de jóvenes que atendemos (...)

- El Semicerrado es como un nivel intermedio-alto de privación de libertad, de restringir la libertad del joven y progresivamente ir posibilitando su responsabilización y su inserción. Si un joven no responde a esto, debería bajar a una sanción más restrictiva, que es el cerrado. Aunque nos llega el joven por todas las vías: por quebrantamiento de libertad asistida, por sustitución del cerrado, condenado directamente, etc. (...) de todos los perfiles, de todos los sistemas” GFO.

El trabajo tendiente a lograr la responsabilización del joven es entendido por los operadores como un trabajo para generar “adherencia”, que tendría su grado cero en el hecho de que llegue a dormir por las noches. Cumplida esta meta, se puede pensar en otros logros:

- “Con el solo hecho de que el joven llega a presentarse para la elaboración del plan y llega a presentarse para pernoctar, aunque no haga nada más, ya se está responsabilizando. O sea, si el joven llega a dormir como se pensó, está dejando de delinquir en las noches afuera.



- Después, que cumpla cierto reglamento interno, que se adecue a la convivencia interna. Y después, que salga a cumplir con su plan de intervención. Otro proceso más de responsabilización.
- Entonces, tenemos cumplidores, de responsabilización máxima, donde el joven realmente se responsabilizó de su sanción, cumplió con su plan, tiene excelente convivencia interna, respeta las normas y además tiene un proyecto prosocial, desistió del delito y está en otra. Entonces ahí, misión cumplida". GFO

La adquisición de hábitos es vista como fundamental para generar la "adherencia" de los jóvenes a la sanción. Este trabajo, concebido en términos educativos, adopta en el caso de las muchachas, rasgos correccionales:

"Hay niñas a las que les cuesta lavarse la cara: *Que por qué hoy día me voy a bañar*. O sea, de repente nosotros estamos trabajando con chiquillas que vienen con un nivel de daño súper grande. O sea, hay chiquillas que comen con la mano (...) la realidad de un centro de mujeres es bastante distinta a los centros de varones".

"Yo creo que hoy día al menos en un femenino, han llegado más chiquillas de las desordenadas, que es como pasaba antes". GFO

Aunque no se plantean en términos dicotómicos respecto del perfil de joven que permite cumplir con la meta deseada, los educadores plantean que la sanción no es adecuada para primerizos, sino para aquellos que han conocido diversas sanciones del sistema y que desean aprovechar la oportunidad que el semicerrado les brinda para "responsabilizarse" de sus delitos e insertarse:

- "Nos hemos ido dando cuenta de muchos jóvenes que van circulando: libertad asistida, semicerrado, cerrado, libertad asistida, semicerrado, como en espiral. Y en segunda vuelta del espiral, como que ya "probaron la mano" y no se van al tiro.
- De la misma forma que cuando un joven llega de libertad asistida, quebrantado (...) igual es fuerte la experiencia de tener que llegar a dormir al semicerrado. Pero, casi todos los que nos llegan por primera vez, se van.

Entonces, después uno los ve por segunda y ahí aumenta su periodo de permanencia y hay hasta algunos que también se pegan la cachá”. GFO

Tal como ocurría con los educadores de libertad asistida, los educadores del semicerrado opinan que el compromiso de la familia y la voluntad del sujeto por cambiar, son requisitos indispensables:

- “Nosotros ponderamos de manera significativa el apoyo familiar. Si tenemos una familia presente, que no va a justificar, no va de alguna manera a encubrir las acciones del chiquillo, tenemos un aliado más, un aliado bastante potente. Por otro lado, visualizamos el proceso de voluntad. Un cabro que está en sección juvenil, que lleva un año sin cometer falta alguna, sabemos que ha llevado un proceso al interior de la sección juvenil (...) es un cabro que sabemos que va a responder a la invitación que le hacemos en un semicerrado. Nos hemos equivocado, pero son criterios que están a la base de lo que nosotros realizamos”. GFO

Pero, la decisión definitiva sólo la tienen los muchachos:

- “Y nos ha pasado que el joven puede estar llegando a dormir todas las noches, teniendo una excelente convivencia interna, estar cumpliendo fabulosamente su plan de intervención, en el colegio, qué se yo... pero sigue robando. Entonces claro, en este proceso de responsabilización en Semicerrado hay algo más que tiene que ver con el proceso interno que hace el joven de legitimar su proyecto de vida prosocial o anti social o desistir de él”. GFO

Por el contrario, la acumulación de sanciones por un mismo menor, que la justicia penal adolescente permite, no solo juega en contra del cumplimiento de la meta, sino que fractura la racionalidad del sistema:

“- Este sujeto de atención, sería hermoso que pudiera tener una causa, una condena. Pero sabemos que tiene dos condenas en Semicerrado, tiene unos trabajos comunitarios, tiene la pena de adulto de reclusión nocturna, libertad asistida. Entonces allí se empieza a ver si priorizamos el Semicerrado, si el

tribunal nos acepta un semi cumplimiento de libertad asistida; porque si no, la libertad asistida la va a terminar a los 30. Entonces, es una madeja...

- Tenemos una chica que tiene seis condenas de Semicerrado y no ha cumplido una. ¿Para qué le vamos a dar la séptima?"

Cuando en el estudio de "Tierra de esperanza" se preguntó a los mismos menores sobre su proceso de reinserción, contestaron con una oposición: la reinserción se asocia con *"estar tranquilo"* y *"estar en libertad"*. La no reinserción, con *"seguir robando"*. Pero, la situación intermedia también es posible: *"Podís estar inserto en la sociedad, robando piola (...) es que no porque uno robe, uno no va a poder socializarse con las otras personas (...) ¿Insertos en la sociedad? Yo creo que la mitad"* (jóvenes sancionados, Pág. 98.)

Las preguntas reflexivas que pueden hacerse los muchachos: ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy?, ¿Para dónde voy?, no son preguntas que se puedan contestar con sentido desde una mirada dicotómica de la reinserción social. Los muchachos denuncian las injusticias, las desigualdades, como dimensiones olvidadas de las políticas públicas. La respuesta a la pregunta por la inserción/ desinserción con la sola dimensión conductual es limitada. Los muchachos se sienten a veces dentro, a veces fuera. En un ir y venir y tal vez, en un no terminar de salir de su criminalización.

## CONCLUSIONES

---

Hemos llegado al final de un recorrido zigzagueante e incierto, procurando satisfacer nuestro objetivo inicial: describir la existencia y características de un campo de poderes y de saberes, de instituciones y especialistas, de discursos y prácticas en torno a la delincuencia de los menores de edad que, al mismo tiempo, construye material y simbólicamente la identidad social de un sujeto puesto al margen de la convivencia.

De seguro, me referiré a las coordenadas de un fracaso relativo, inscrito desde el principio en un propósito que excede todos los esfuerzos desplegados a partir de los modestos materiales que he podido reunir. Sin embargo, creo haber dado algunos pasos en la dirección correcta, ayudado por las fuerzas invisibles que pugnan por hacerse presentes cuando la investigación sociológica se enfrenta a tareas necesarias e imposibles. Sin duda que los frutos no son -y tal vez no pueda ser de otro modo- respuestas para entregar, sino que nuevas y más urgentes preguntas por contestar.

Sacaré algunas conclusiones a partir de las distintas partes en las que se divide la investigación: desde el funcionamiento y los resultados de la justicia penal de adolescentes, eje central del campo descrito, que constituye los hechos que fundan el interés de esta investigación; desde el marco conceptual que han formulado investigaciones señeras en el tema de la delincuencia juvenil y sus implicancias para la investigación sociológica sobre delincuencia de menores en Chile; desde la historia de la formación del campo institucional de la justicia de menores, que procura destacar los discursos de los protagonistas de las reformas, los avances y también los retrocesos y las cuestiones en juego; desde la descripción de las distintas lógicas de control que se pueden identificar en el campo actual, tal como se despliegan a través de los medios de comunicación y la historia de la instalación de la temática de la seguridad ciudadana y las políticas de tolerancia cero; desde las visiones y las voces de los protagonistas más directos, menores y educadores,

en su lucha por la integración y en contra de la marginación. Por último, basándonos en las implicancias del análisis de discursos realizado, exponer algunas aproximaciones relativas a las necesidades de integración social de los menores y al trabajo de intervención que se realiza con ellos.

### **Un dispositivo que produce lo que combate: la justicia penal adolescente y la construcción de un sujeto marginal.**

Para caracterizar el sistema de justicia penal de adolescentes, expusimos un conjunto de datos estadísticos y evaluaciones realizadas por diversos actores, que dan cuenta de la importancia de este dispositivo institucional, situado en el centro del campo del control de los delitos de menores.

Los datos estadísticos nos muestran la realidad de un sistema que alcanza un gran volumen de operación, con cuantiosos recursos invertidos. Entre los datos principales destacamos que poco más del 10% de los adolescentes y jóvenes está cumpliendo penas privativas de libertad, mientras que el porcentaje restante cumple sanciones en el medio libre. Las mujeres representan el 10% del total de condenas, pero solo el 4% del total cumple penas privativas de libertad; es decir, sus condenas son menos severas que las de los muchachos. También es relevante destacar que cerca del 60% del total de adolescentes y jóvenes, tiene más de 18 años; es decir, que la nueva justicia penal de adolescentes se ha transformado en un apéndice de la justicia de adultos. La oferta programática cumple con los mínimos exigidos: hay escuelas instaladas en los centros de cumplimiento y en el medio libre los programas tienen acceso a la red educativa local. Los menores cuentan con opciones de formación laboral, aunque los centros de cumplimiento carecen aún de la oferta de talleres que estipula la ley.

Entre los resultados del sistema, los egresos exitosos están al nivel de los egresos por incumplimiento y los niveles de reincidencia son comparables a los de otros países. En cuanto a las evaluaciones realizadas, las críticas a la justicia penal de adolescentes se concentran en su falta de especialidad respecto de la justicia penal de adultos. Los actores jurídicos del sistema opinan que la reinserción social es un objetivo lejano y en falta y alegan que el sistema criminaliza a los menores. Es

decir, contribuye a consolidar una delincuencia “dura” en el ámbito de la menor edad, lo que es contrario a sus fines declarados. Sin embargo, los actores manifiestan que este era un resultado esperable, dada la dependencia del sistema de adultos que, por el expediente de la reforma procesal, ha incrementado la dureza del tratamiento penal.

Con todo, los peores efectos del funcionamiento del sistema permanecen ocultos o no son considerados. Constatamos que la justicia penal adolescente oculta su responsabilidad en la precarización de la inserción educacional y laboral de los menores. Al hacer comparaciones en estas dos dimensiones, se aprecia que los datos de inserción de los menores condenados son peores que los datos del conjunto de los jóvenes populares, los que también presentan indicadores de inserción más bajos que la población juvenil en general. En mayor o menor grado entonces, el sistema de justicia penal adolescente tiende a precarizar la inserción social de los menores, pero además ejerce un efecto específico, al estigmatizar y criminalizar las identidades sociales de los afectados o agravando las consecuencias de lógicas de control similar, que actúan antes en la vida de los muchachos y muchachas, como es el caso del modelo escolar uniforme de los colegios, que genera el fracaso de los más distantes y los estigmatiza, como ocurre también con los programas de prevención del riesgo social.

La naturalización de la precariedad y marginalidad en la que viven los adolescentes que cometen delitos es tan ostensible, que los mismos modelos de intervención hacen de estas características un fetiche, que luego toman como las causas de la conducta delictiva. La denuncia de este aspecto del funcionamiento de la justicia penal de adolescentes, podría aportar a su necesaria transformación.

### **Las implicaciones actuales de la investigación sociológica clásica sobre la delincuencia juvenil.**

El mapa conceptual expuesto en este capítulo nos proporciona un útil repertorio de ideas, pacientemente elaboradas por la investigación sociológica en el estudio de la delincuencia en general y juvenil en particular, a lo largo del pasado siglo. Así, discutimos enfoques que consideran que la delincuencia es un comportamiento

*adaptativo*, que obedece más a la frustración de expectativas que a la *deprivación*, explicación favorita de los patólogos sociales. La atribuida “antisocialidad” del comportamiento de los menores se ve relativizada, porque en otros aspectos se ajusta a las expectativas de todos. Similar situación encontramos en la discusión sobre las subculturas delictivas, que no son solo opositores, sino que también satisfacen objetivos socialmente aceptados. Apreciamos también que los procesos de estigmatización y criminalización no pueden separarse de la comisión de delitos. La empresa de la delincuencia no es puramente una situación en que ocurre un delito y hay un autor, sino que también forman parte del fenómeno criminal quienes reaccionan frente al mismo e imponen etiquetas y castigos. La delincuencia de menores no es un asunto privativo de los muchachos y muchachas que delinquen, sino que de todos los que se ven involucrados en su promoción o en su control. No podemos dejar de lado los enfoques que hacen ver el impacto de las instituciones totales en la identidad de quienes se ven afectados por su pesado y descarnado funcionamiento.

Por último, gracias a las ideas desarrolladas por los sociólogos de la desviación, sabemos de la importancia de conocer el mundo del delito en la versión de sus protagonistas.

Una característica sobresaliente de todos estos enfoques, es que unen la investigación sociológica y la intervención social, en una relación de mutuo beneficio. Recordar esto es especialmente relevante en la situación actual, en que la criminología del control en lo teórico y los programas de tolerancia cero, en la práctica, han silenciado el debate y cerrado las puertas a cualquier otra alternativa teórica o de política. El mismo punto de vista sociológico ha sido dejado a un lado o ha sido subordinado a las perspectivas de los grupos tecnocráticos y los expertos de la seguridad ciudadana.

La perspectiva sociológica niega que la delincuencia en general y de los menores en particular, pueda ser comprendida desde una visión puramente psicológica. Los criminólogos de la evaluación del riesgo, se atrincheran en las diferencias *individuales* del comportamiento *antisocial* de los menores, remitiendo los restantes asuntos a los servicios sociales. Una perspectiva de procesos y contextos relacionales, como la que proponen los sociólogos de la desviación: familia,

escuela, grupo de pares, trabajo e instituciones de control, desmiente la conveniencia de adoptar una perspectiva puramente individual de la delincuencia de los menores y sus causas. Una perspectiva sociológica de procesos, que indague en la genealogía del campo del control del delito, que se interese por las configuraciones que se forman histórica y discursivamente y que integran tanto los aspectos sociales como los rasgos individuales, no es compatible con una visión que se reduce al menor y sus circunstancias o necesidades delictivas. Es preciso adoptar enfoques teóricos integrados, aplicables a contextos de intervención focalizados, tal como aconsejara Edwin Sutherland, el gran sociólogo del delito. Estos enfoques deben integrar la subjetividad de los afectados y la experiencia de los operadores y ser sensibles a la dinámica de los procesos sociales.

Una perspectiva sociológica de procesos, es también un arma que permite denunciar los efectos de los discursos ideológicos en los actores que impulsan procesos de cambio o se resisten a ellos. El enfoque jurídico, tiende a evaluar los procesos de cambio desde la racionalidad del progreso. Así ocurre con la evaluación de las reformas de 1928 y de 2007, donde la visión del Derecho sobre el surgimiento y evolución del campo del control del delito de menores, es una mirada benigna de la historia de una juridización creciente, que abre camino a una vigencia cada vez más plena de los derechos de las personas. Pero, como hemos visto, el respeto de los derechos civiles resulta ilusorio y sobre todo insuficiente, en vista del peso de la precarización y la negación de los derechos sociales y de ciudadanía, padecida por los menores. La perspectiva jurídica puede beneficiarse del trabajo sociológico con una mejor inteligencia de los procesos sociales, que ayude a superar la ilusión de que el Derecho puede transformar la realidad como si se tratara de una varita mágica, o que los procesos de reforma alentados por el Derecho están destinados a imponerse por el solo peso de la razón jurídica.

La investigación sociológica proporciona a los trabajadores sociales y a los educadores, teorías e interpretaciones para el diseño de modelos y planes de intervención. El punto de vista sociológico fortalece el trabajo educativo y de acompañamiento social, reforzando la legitimidad del trabajo vincular y cara a cara, ante la actual tendencia a su reemplazo por los modelos de gestión “a distancia” que proponen los nuevos expertos de la contabilidad y la gestión de los problemas sociales. La estrecha vinculación de sociólogos y trabajadores sociales en el pasado,



para impulsar conjuntamente procesos de reforma, puede servir de aliciente para emprender nuevos desafíos conjuntos en estos tiempos de desesperanza neoliberal.

Al final de este camino, constatamos que la mayoría de los problemas teóricos en la comprensión del delito juvenil conservan una palpitante actualidad. Confiamos en que un recorrido teórico por estas notables aportaciones permitirá encontrar las herramientas y materiales necesarios para construir en el futuro marcos teóricos integrados y sistemáticos, útiles para aproximarse a un conocimiento cada vez más coherente con la realidad del delito de los menores en nuestro país.

### **Una realidad hecha costumbre. La breve historia del control institucional de los delitos de menores y su significado para el presente.**

La mirada de tiempo largo del cambio histórico permite tomar nota de los procesos sociales responsables de la emergencia de un campo de acción institucional de reciente origen y como consecuencia de aquello, desmontar el mito de la “modernización” continua del sistema, en la que el nacimiento de la justicia de menores sería el primer paso, seguido luego de un segundo, con el advenimiento de la justicia penal adolescente.

La justicia de menores representa un movimiento de reforma que, en buena medida, hizo realidad la separación de los menores de los adultos, en lo que a consecuencias por la comisión de delitos se refiere. Pero esta realidad tiene sus claroscuros. En buena medida, los reformadores lograron sustraer a los menores de edad de la justicia penal de adultos, eximirlos de responsabilidad e inventar para ellos un tratamiento correccional adecuado a su condición dependiente. La sombra de este proceso fue que algunas categorías de niños, los “anormales” y los “desertores escolares”, calificados como delincuentes, fueron considerados refractarios al mismo sistema de control institucional que los estigmatizaba y excluía.

Los procesos examinados nos permiten ser testigos de la conjunción en el origen de formas diversas de control del delito o del “mal comportamiento” de los menores: un control doméstico representado por las prerrogativas del poder paterno, que es

reemplazado por el control tutelar del tribunal de menores; un control disciplinario, que se ejerce bajo la atenta mirada del poder correccional, novedosa tecnología resultante de una singular amalgama de saberes médicos, jurídicos y pedagógicos; un control penal duro, que se ejerce sobre aquellos muchachos y muchachas que la justicia de menores selecciona para ser juzgados como adultos. Este abigarrado conjunto de formas de control no solo sobrevive hasta el día de hoy, sino que ha continuado desarrollándose y expresándose con distintos énfasis - como se concluye del análisis efectuado en el capítulo cuatro-, haciendo ver que la responsabilidad penal adolescente y los programas de prevención de los riesgos, asumen el relevo de modalidades más antiguas de vigilancia y disciplinamiento.

Bajo esta luz, la reforma de la justicia penal adolescente se ve con otros ojos y hasta se revela, en cierto modo, como una auténtica contrarreforma. Resulta irónico apreciar que los esfuerzos de los primeros reformadores que lucharon por imponer la justicia tutelar y sustraer a los menores de una responsabilidad propia del sistema penal de adultos, son replicados por los nuevos reformadores en sentido contrario, buscando reponer una responsabilidad que ilusoriamente han querido ver como una afirmación de los derechos de niños y adolescentes. La “responsabilidad” que hoy se les exige, vuelve a consistir en que acepten el castigo como un “justo merecido”, mientras se diluye la contrapartida de reinserción social prometida, como si fuese una declaración vacía, o más bien fraudulenta, a la vista de las pobres herramientas y recursos provistos para ella en los programas financiados por el Estado.

La solución al dilema planteado está al alcance, aunque es difícil llevarla a cabo: instalar una modalidad completamente diversa de reacción frente a los delitos de los menores, sustrayéndolos a la acción de las políticas de tolerancia cero, que instalan en cambio una lógica dual: de prevención temprana de los riesgos, para asignar a determinadas poblaciones tratamientos compensatorios que terminan sellando su destino social, y de punición pura y dura para los sujetos considerados peligrosos e incorregibles.

Pero no basta con centrarse solo en los sujetos y dejar intocadas las instituciones. La rigidez del sistema escolar es un obstáculo para la integración no solo de los menores delincuentes sino, como lo revela el análisis realizado, también de los niños calificados como “anormales”, que son segregados en escuelas especiales, de educación compensatoria para niños “raros” y que constituyen un pingüe negocio

en el actual panorama del mercado educacional chileno. Como bien decía un educador peruano que trabajaba con niños de la calle: *la escuela es la única institución que no se ha modificado en lo más mínimo en los últimos cincuenta años*. La puesta en marcha de una pedagogía de la diversidad en una escuela integrativa, es un desafío que debiese asumir la actual reforma de la educación chilena.

### **El campo actual del control del delito de los menores de edad: ¿hacia un socialpanoptismo de la minoridad delincuente?**

El análisis del discurso de los medios de comunicación continúa la indagación histórica sobre los orígenes del campo de control del delito de los menores y añade una dimensión específica: un conjunto de ideologías que se reproducen y amplifican a través de los medios y que completan algunas de las tendencias observadas. En particular, se aprecia con claridad como la instalación del tema de la seguridad ciudadana y la implementación de políticas de tolerancia cero, es la consecuencia anunciada del conjunto de reformas que implantaron un modelo neoliberal de desarrollo en Chile, que impone formas inéditas de desigualdad social y enormes obstáculos a la construcción democrática. Los actores políticos parecieran pensar que este hecho instala, -aun cercana la dictadura que gobernó férreamente el país entre 1973 y 1989- una demanda duradera de “gubernamentalización” de la democracia.

Así como en los días de la dictadura militar, la ideología del “enemigo interno” justificó la represión e instalación del “terrorista” o “subversivo” en los márgenes de la sociedad, durante la transición a la democracia el temor al delito y al delincuente juvenil, pusieron sobre el tapete antiguos miedos y nuevas vulnerabilidades. Diversas ideologías y técnicas de gobierno de los delitos de menores se han abierto paso en la actualidad, configurando un panorama complejo y de difícil pronóstico.

El panorama político en materia de “seguridad ciudadana” invita a la preocupación. De momento, no hay diferencia entre los bloques políticos principales en lo que se refiere a la implementación de una política estatal de seguridad; pues no es cierto

que, como se dice, las fuerzas democráticas, encarnadas primero en la Concertación y luego en la Nueva Mayoría, estén más próximas a la realidad europea y, particularmente a la realidad francesa, en la que, según Loic Wacquant *“la regulación punitiva de los sectores pauperizados del nuevo proletariado posfordista se efectúa principalmente por medio de dispositivos panópticos cada vez más elaborados e invasivos, directamente integrados a los programas de protección y asistencia”*<sup>241</sup>; en tanto que los partidos de derecha preferirían cerrar filas en torno a las políticas de tolerancia cero. Si bien es cierto que los nuevos programas sociales que la Concertación impulsó, incorporan la responsabilización y el monitoreo de los asistidos, ambos bloques apuestan fuerte por la ideología de la tolerancia cero, y buena parte de las diferencias se refieren a manifestaciones de esta misma ideología.

Existe, por lo tanto una tendencia de mediano plazo a la intensificación y diversificación del control punitivo del delito de los menores de edad, lo que no quiere decir que no puedan desarrollarse esporádicamente acciones que van en sentido contrario y que la atenúan o refrenan, pero solo de manera transitoria. Por ejemplo, el fuerte impulso que dio a las tecnologías preventivas el gobierno de Sebastián Piñera (2010 - 2014), no fue obstáculo para que promulgara también una ley de penas alternativas a la privación de libertad y decretara un indulto a la población penal. A la inversa, el gobierno entrante no tuvo ningún empacho en señalar que dicho indulto era la causa de un supuesto aumento de la delincuencia, mientras anunciaba un importante refuerzo de las políticas de tolerancia cero, al tiempo que los actores sociales, particularmente los estudiantes y los profesores, denunciaban la “criminalización” del movimiento social que exige reformas al sistema educacional.

Precisamente, se trata de la lucha por los derechos sociales en contra de la criminalización y la marginación. Hay un fuerte cuestionamiento al rol que desempeña el Estado, cautivo hasta el día de hoy del principio de subsidiariedad. Hasta ahora ha renunciado a poner freno a la creciente mercantilización de los derechos sociales, de la que continúa cautivo nuestro ordenamiento democrático post dictatorial.

---

<sup>241</sup> L. WACQUANT, ÓP. Cit. Pág. 124

## **La identidad de los menores y su lucha por la inserción social.**

El análisis de las ideologías, tecnologías y estrategias de poder en liza, contribuye al develamiento de los mecanismos de dominación que están presentes en el campo de control que hemos descrito a lo largo de este trabajo. En este nivel, el mismo sujeto del poder, en cuanto cuerpo manipulable en y por las instituciones disciplinarias y cuerpo regulado en el espacio social estriado por las tecnologías de biopoder, puede ser aprehendido en los dichos e identidades que lo constituyen.

Como hemos postulado, la identidad de los menores se aprecia como un corolario subjetivo de procesos de precarización y de vulnerabilidad “objetivos”. Su identidad social se revela como una identidad *desacreditada*, que lucha por librarse del estigma y de la frustración. Los modelos teóricos empleados para comprender los discursos de los menores, no son una perspectiva evaluadora externa sino que permiten reconocer los procesos en el habla de los sujetos que “padecen” la acción de la justicia penal adolescente, así como en el habla de los educadores que se identifican con los menores con que trabajan. Tal como la marginación de los muchachos y muchachas significa desinserción, desafiliación, no estar ni aquí ni allá; en el plano de la identidad los menores viven esta situación enajenadamente. Se sienten insertos cuando están libres, cuando “se portan bien”. No se sienten insertos cuando están presos, cuando “se portan mal”. No estarían propiamente ni dentro ni fuera. Su integración es también una integración *desencantada*, que asume que los valores “antisociales” están tan presentes en los modelos de integración ofrecidos, como los valores “prosociales” o de adaptación conforme.

Por lo anterior, planteamos la necesidad de emprender una reforma absoluta de la nueva justicia penal de adolescentes, que evite el desarrollo y la profundización de los procesos indeseados ya descritos. El primer paso en esa dirección es debiera ser la desvinculación de la justicia de adolescentes del sistema penal adulto. Sin embargo, es posible que a estas alturas ya no sea suficiente con insistir en los lineamientos originales del proyecto que, como tuvimos ocasión de ver, fue desvirtuado en sus fines de manera categórica, aunque esperable. Tal vez se estuvo siempre ante una muerte anunciada de la reforma, debido al peso adquirido por la ideología de la tolerancia cero en prácticamente la totalidad de los actores políticos.

Más aun, pienso que en la actualidad hay un manejo consciente de las posibilidades que esa ideología ofrece para la manipulación de los sentimientos del público y la desarticulación de las demandas sociales. ¿Para qué molestarse con reformas si se tiene a la mano la posibilidad de llamar a la unión solidaria frente al peligro antisocial? El miedo a perder lo que creemos propio y nuestro lugar en el sistema -aunque sea precario, son poderosos alicientes para demonizar a los menores delincuentes y distraer las energías de las reivindicaciones ciudadanas y de la denuncia de las fechorías cometidas por los delincuentes de cuello blanco. Por lo tanto, creemos que es hora de plantearse una reforma radical que sustraiga totalmente a los menores de cualquier forma, aun especial, de justicia penal. Los menores podrían estar a cargo de un cuerpo de educadores especializados, pero completamente al margen de todo sistema represivo.

Se nos objetará que sin castigo o sin sanción penal no hay chance de que los menores asuman su responsabilidad por los delitos cometidos, ni aliciente para su inserción social. Habrá entonces que fundamentar de qué forma la responsabilización es todavía posible o deseable en este escenario. Discutir las prerrogativas del discurso de la tolerancia cero y mostrar que no es la única opción posible. ¿Cómo concretar entonces nuestra postura?

El mismo discurso de los menores nos da la respuesta: se puede trabajar en dirección de dar a la responsabilización un sentido reflexivo, que permita que los propios muchachos y muchachas se percaten y tomen conciencia del delicado momento vital en que se encuentran: si continuar dando pasos hacia la confirmación en el mundo del delito o, por el contrario, volver atrás o mejor, dar un paso al costado, saliendo del camino delictual. Vimos que expresiones que tienen sentido para los menores, como *saber verla*, *saber hacerla*, *tener mente*, que son todos argumentos a favor de acrecentar la esfera de dominio propio, pueden ser aprovechados cuando irrumpe el deseo de abandono de la actividad delictiva. La ausencia de responsabilización no es tampoco un deseo de impunidad, ni indiferencia por el daño causado, sino que simplemente la situación de quien se siente *todavía con tiempo, entre una escuela o mercado que no retienen ni expulsan y un camino delictivo que todavía se evita y que no se percibe como definitivo*. La responsabilización es entonces un llamado al menor para que ejerza su autonomía y se haga cargo de su propia vida, sin castigo o encierro de por medio. Podría ser un modo de compensar el daño causado *antes* de que el menor

comience a delinquir, pues no es lógico ni justo pensar que la marginación escolar o laboral no hayan causado en él un sentimiento o una situación de desmedro. Es decir, no es la sanción penal la única *pena* que el menor experimenta, sino quizá solo sea la pena más dura.

Podemos hacer un paralelismo entre la situación que viven los menores y el estudio de Paul Willis, "Aprendiendo a trabajar", en el que el autor muestra que el fracaso escolar de los chicos de clase obrera es funcional al sistema porque los conduce a aceptar con más facilidad realizar trabajos de clase obrera o, en nuestro caso, trabajos precarios. En una sociedad como la chilena, en la que el negocio de la educación superior ha permitido que los sueños de las familias de sectores medios y populares se hagan realidad, nuestros menores ya han padecido un doble castigo social.

No podemos dejar de mencionar la delicada situación en que se encuentran las muchachas. En el pasado, en las correccionales, el trato dado a las chicas era más severo que el trato dado a los chicos. La corrección era mucho más en su caso un tratamiento moral de la conducta "descarriada". En el presente, los muchachos las discriminan por motivos parecidos, por estar en "falta moral", por diferir del modelo de mujer tradicional al servicio del marido, que a ellos les han inculcado. Rechazan verlas como proveedoras, que eso es cosa de hombres. Ni tampoco nada de mezclarse con ellos. Por su parte, ellas asumen, en mucho mayor grado que los muchachos, que se encuentran al debe, incluso con respecto a ellas mismas. En este caso, habría que realizar un trabajo con ambos sexos. Con las chicas, para fortalecer su autonomía y con los chicos, para que reconozcan en ellos mismos todos esos injustos prejuicios patriarcales.

Pero no es suficiente con la responsabilización de los menores, aun cuando pueda intentarse que vaya en su propio beneficio. Todavía hace falta desarrollar un trabajo de recomposición de la identidad criminalizada, de reapropiación subjetiva y de redefinición biográfica; así como prestar los soportes institucionales adecuados para su integración: Una escuela inclusiva; reinserción escolar en escuelas de segunda oportunidad; posibilidad de aprendizaje de oficios profesionales; apoyo y acompañamiento educativo post sanción, por enunciar algunas ideas. Reciclar las viejas prácticas de la educación popular y las tradiciones de "pedagogía de la presencia", en nuevas o renovadas modalidades de acompañamiento.

Soportes institucionales y vínculos, que solo pueden proporcionar, una política social que de verdad apunte a integrar a los muchachos y muchachas y educadores comprometidos, dispuestos a ayudar a los menores a salir de su triste e injusta marginación.





## BIBLIOGRAFIA

---

- ABRIL G., *Teoría General de la Información*, Cátedra, 2º Ed., Barcelona, 2005.
- AGURTO I., DE LA MAZA y G., "Ser joven en Chile hoy", en: *Juventud Chilena, Razones y Subversiones*, ECO-FOLICO y SEPADE, Santiago, 1985, Pág. 57-71.
- ALONSO L. E. *La Mirada Cualitativa en Sociología*, editorial Fundamentos, Madrid, 1998.
- ÁLVAREZ J., "Niños y niñas egresados de la Red de Protección de SENAME que ingresan a medidas de Justicia Juvenil", Revista *SEÑALES*, Año 4 - Nº 9, Diciembre de 2011.
- ALVAREZ S., SANCHEZ P., ZUÑIGA S., "La Escuela, ¿un camino de integración social?, experiencia escolar de adolescentes infractores de ley, de las comunas de Lo Espejo, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda", Tesis para optar al título de asistente social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2008.
- ÁLVAREZ- URÍA, F., *Miserables y Locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*, Tusquets editores, Barcelona, marzo de 1983.
- \_\_\_\_\_, "Retórica neoliberal. La gran ofensiva de los científicos sociales contra las políticas sociales en USA", *Claves de la Razón Práctica*, nº 80, 1998, Págs. 20-28.
- ÁLVAREZ-URIA F. y J. VARELA, "La escuela y sus funciones sociales", en: *Sociología de las Instituciones. Bases sociales y culturales de la conducta*. Ediciones Morata, Madrid, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Genealogía y Sociología. Materiales para repensar la modernidad*, Ediciones El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Sociología, Capitalismo y Democracia*, Ediciones Morata, Madrid, 2004.
- ARIES, P., *L'enfant et la vie familiale sous l'ancien regime*, Seuil, Paris, 1973 (Traducción: Ed. Taurus)
- BECKER, H., *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009
- \_\_\_\_\_, "La relación de la clase social en la relación maestro-alumno", en: SPRINTHALL R., y SPRINTHALL A. (Comp.), *Psicología de la Educación*, Ediciones

Morata, Madrid, 1973. BERRÍOS G., “La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”. *Política Criminal*, Vol. 6, Nº 11, Junio 2011. Págs. 163-191.

BERRIOS G. y VIAL L., *Informe estadístico 3 años de vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente. 8 de junio de 2007 a 7 de junio de 2010*, Defensoría Penal Pública - UNICEF, Santiago, abril de 2011.

BOURDIEU P., *Qué Significa Hablar*, Ediciones Akal, Madrid, 1985.

BUSTOS J. (Comp.), *Un Derecho Penal del Menor*, Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago, 1995.

CANALES M. y OTROS, “Factores que inciden en la comisión de delitos graves en adolescentes infractores de ley”, Universidad de Chile-SENAME, Santiago, 2005.

CASASÚS J., *Ideología y Análisis de Medios de Comunicación*, Editorial Mitre, Barcelona, 1985.

CASE S., “Young People ‘At Risk’ of What? Challenging Risk-focused Early Intervention as Crime Prevention”, *The National Association for Youth Justice, U.K.* 2006

\_\_\_\_\_, “Questioning the ‘Evidence’ of Risk that Underpins Evidence-led Youth Justice Interventions”, *The National Association for Youth Justice, U.K.* 2007.

CASE S. y HAINES K., “The Rhetoric and Reality of the ‘Risk Factor Prevention Paradigm’ Approach to Preventing and Reducing Youth Offending”, *Youth Justice 8: Sage*, 2008. Págs. 5-20.

\_\_\_\_\_, *Understanding Youth Offending: Risk Factor Research, Policy and Practice*, Willan Publishing, Devon, UK, 2009

CASI J., FOLGUEIRA L. y FORMOSO C., *Investigación Cualitativa Longitudinal*, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid, 2014.

CASTEL R., *La Gestión de los Riesgos*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1984.

\_\_\_\_\_, *La Metamorfosis de la Cuestión Social: Una crónica del salariado*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997.

\_\_\_\_\_, “La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales”. En: F. ALVAREZ – URÍA (ed.), *Marginación e Inserción*, Ediciones Endimión, Madrid, 1992.

\_\_\_\_\_, *El Orden Psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1980.

CAVALLO A., SALAZAR M. y SEPULVEDA O., *La Historia Oculta del Régimen Militar. Chile 1973-1988*, Editorial Grijalbo Mondadori, 1997.

CICOUREL, Aaron, *The Social Organization of Juvenile Justice*, Transaction Publishers, New Jersey, 1967.

CILLERO M., “Evolución histórica de la consideración jurídica de la infancia adolescente en Chile”, en PILOTTI F. (Coord.), *Infancia en Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile*, Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, 1994.

COHEN A., *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1955.

COLEMAN J., “Review of Harold Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology*”, *American Sociological Review*, 33, 1968, pp. 126-130.

CONGRESO NACIONAL, “Informe Boletín S 1555-14 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre los cinco años de aplicación de la Ley 20.084 que crea un sistema de Responsabilidad Adolescente por Infracciones a la Ley Penal”, Marzo 2013.

\_\_\_\_\_, “Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados”, 1928, Tomo II. Págs. 1680 – 1736

\_\_\_\_\_, “Historia de la Ley Nº 20.084”, Biblioteca del Congreso Nacional, Págs. 1-1.207

COOPER D., *Delincuencia y Desviación Juvenil*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005.

CORREA S., *Con las riendas del Poder. La derecha chilena en el siglo XX*, Random House Mondadori de Bolsillo, Santiago, marzo de 2011.

CORTES J., “Principales características del sistema penal de adolescentes creado por la ley 20.084”, en: *Infractores de ley adolescentes*, Ediciones Servicio Médico Legal, impreso en gráfica LOM, Santiago, octubre de 2009.

\_\_\_\_\_, “¿Cómo entender la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes dentro de las transformaciones históricas globales del control social punitivo? Algunas reflexiones críticas y propuestas de acción”, en: *Justicia y Derechos del Niño N° 10*, UNICEF, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Septiembre de 2008.

CORTEZ J.E., “Desarrollo de los sistemas de atención a la infancia en Chile”, en: F. PILOTTI (Coord.), *Infancia en Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile*, Instituto Interamericano del Niño (IIN), Montevideo, 1994.

COSER, L., “Presidential Address. Two Methods in Search of a Substance”, *American Sociological Review*, 40, 6, diciembre 1975, pp. 691-699.

COULON A., *La Etnometodología*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1988.

- COUSO J., "Notas para un estudio sobre la especialidad en el Derecho Penal y Procesal Penal de Adolescentes: el caso de la ley chilena", en: *Justicia y Derechos del Niño N° 10*, UNICEF, Santa Fe de Bogotá, Colombia, septiembre de 2008.
- CULLEN F. y GENDREAU P., "Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas", en: *Justicia Penal Siglo XXI*, R. Barberet y J. Barquín (eds.), Granada, 2006.
- DE FERARI L., "Quince años de espera... hacia la creación de un sistema de reemplazo: Notas sobre la génesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes de Chile", *JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO N° 8*, UNICEF, Santiago, noviembre de 2006
- DELEUZE G., "Post-scriptum sobre las sociedades de control", en: *Conversaciones, 1972-1990*, Ediciones Pre-Textos, Valencia.
- DONZELOT J., *Policía de las Familias*, Ediciones Pre-Textos, Valencia, 1979.
- DROPPELMANN C., ¿Vale la pena invertir en estrategias de la delincuencia basadas en el enfoque de factores de riesgo"?, en: *Conceptos N° 20*, Fundación Paz Ciudadana, julio de 2011.
- DUBET F., "Exclusión social, exclusión escolar", en: J. LUENGO (Comp.), *Paradigmas de gobernación y de exclusión social en la educación. Fundamentos para el análisis de la discriminación escolar contemporánea*, Pomares-Corredor, Barcelona, 2005.
- ELIAS, N., *El Proceso de la Civilización*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Teoría del Símbolo*, Ediciones Península, Barcelona, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Compromiso y Distanciamiento*, Ediciones Península, Barcelona, 2002.
- ESCOBAR E., "Profesor Hugo Lea Plaza Jencque (1891-1963)", *Revista Chilena de Neuropsiquiatría*. Vol. 50 N° 2, Santiago, junio de 2012.
- FEELEY M. y SIMON J., "La nueva penología. Notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicancias", en: *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, Año 4, nº 6 -7, Págs. 33- 58. Buenos Aires, 1995.
- FERNANDEZ P., *Niñez y adolescencia en Chile: las cifras. Datos estadísticos y principales estudios*. Centro de Estudios de la Niñez, Corporación OPCION, 2014.
- FOUCAULT M., "La gubernamentalidad", en: *Espacios de Poder*, Ediciones Endymión, Madrid, 1991.
- \_\_\_\_\_, "Presentación", en: R. CASTEL. *El Orden Psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Genealogía del Racismo*, Editorial Altamira, Buenos Aires, 1996.
- \_\_\_\_\_, *La Verdad y las Formas Jurídicas*, Editorial GEDISA S.A., Barcelona, 1999.

FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA, "Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal", 2010.

GARFINKEL, H., "Conditions of Successful Degradation Ceremonies" *The American Journal of Sociology*, 51, marzo, 1956, pp. 420-424.

GARLAND D., *La Cultura del Control*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005.

GINZBURG C. *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1989.

GODOY H., *Estructura Social de Chile*, Editorial Universitaria, 1971

GOFFMAN E., *Estigma. La identidad deteriorada*, Amorrortu, Buenos Aires, 1989.

\_\_\_\_\_, *Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*, Amorrortu, Buenos Aires, 1988.

GRIGNON C. y PASSERON J.C., *Lo Culto y Lo Popular*, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1992.

GOULDNER A., *La Crisis de la Sociología Occidental*, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

GUZMAN J. y RAMOS M., *La Guerra y la Paz Ciudadana*, Ediciones LOM, octubre 2000.

HOECKER L., "Antecedentes acerca de la instalación del problema de la inseguridad ciudadana como preocupación prioritaria de la opinión pública", en: *Revista de la Academia N° 5*, Universidad Academia de Humanismo Cristiano - LOM ediciones, Santiago, otoño de 2000. Págs. 35-49.

\_\_\_\_\_, "Generando nuestros "extraños". Legitimación y reproducción del sistema de justicia infanto-juvenil reformado", en: *Revista de la Academia N° 15*, ediciones LOM, primavera 2010. Págs. 11-40.

HULSMAN L., y BERNAT DE CELIS J., *Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: hacia una alternativa*, Editorial Ariel, Barcelona, 1984

IBÁÑEZ J., *Del Algoritmo al Sujeto*. Siglo XXI de España, Madrid, 1985.

\_\_\_\_\_, *Más Allá de la Sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*, Siglo XXI de España, 2° edición corregida, Madrid, 1986.

\_\_\_\_\_, "Publicidad, la tercera palabra de Dios", en: *Por una Sociología de la Vida Cotidiana*, Siglo XXI de España, Madrid, 1994. Págs. 165-184.

\_\_\_\_\_, "Análisis sociológico de textos y discursos", *Revista Internacional de Sociología*, 43, enero-marzo de 1985.

\_\_\_\_\_, "Perspectivas de la investigación social", en: ALVIRA F., GARCÍA FERRANDO M., IBÁÑEZ J., *El Análisis de la Realidad Social. Métodos y técnicas de investigación*, Alianza, Madrid, 1994.

IGLESIAS S., VILLAGRA H. y BARRIOS L., “Un viaje a través de los espejos de los Congresos Panamericanos del Niño”, en: *Del Revés al Derecho: La condición jurídica de la infancia en América Latina*. UNICEF, UNICRI, ILANUD, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1992.

INE, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS “Población por sexo, según edad simple”, 2014.

INJUV, *Encuesta Nacional de Juventud 2005*, Instituto Nacional de la Juventud, Santiago 2006.

KITSUSE J., “Societal Reactions to Behavior. Problems of Theory and Method”, *Social Problems*, vol IX, nº 3, 1962, pp. 247-265.

LARRAIN, J. *El Concepto de Ideología. Vol. 4. Posestructuralismo, postmodernismo y postmarxismo*. Ediciones LOM, Santiago, 2010.

LAVIN J., *Memoria de la Escuela Correccional de Niños de Santiago*, Archivo Ministerio de Justicia, Santiago, 1910.

LAZARSFELD P., *¿Qu'est-ce que la sociologie?* Gallimard, Paris, 1970.

LEON M., “Los niños en las prisiones”, en: *Sistema Carcelario en Chile: Visiones, realidades y proyectos (1816-1916)*. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997.

MAFFIOLETTI E. y VERA A., “Estudio Caracterización del Delito Adolescente”, *Revista Jurídica del Ministerio Público* N° 57, diciembre de 2013.

MATZA D., *El Proceso de Desviación*. Editorial Taurus, Madrid, 1981.

MAUGER, G., *La sociologie de la délinquance juvénile*, la Découverte, Paris, 2009.

\_\_\_\_\_, “Jeneusse: l'âge des classements. Essai de définition sociologique d'un âge de la vie”, *Recherches et Prévisions*, 40, 1995, pp. 19-36.

MAYORGA R., “Los conceptos de la escuela: aproximaciones desde la historia conceptual al sistema educativo chileno. 1840-1890”, *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, Volumen 15, N° 1, 2011. Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Págs. 11-44

MERTON R., “Social Structure and Anomie”, *American Sociological Review*, October, 1938, pp. 672-682.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional*, CASEN 2011.

MINISTERIO DE JUSTICIA, “Primer informe de la comisión de expertos de la ley de responsabilidad penal adolescente”, Santiago, octubre 2006

\_\_\_\_\_, “Segundo informe de la comisión de expertos de la ley de responsabilidad penal adolescente”, Santiago, abril de 2007.

\_\_\_\_\_, “Antecedentes del proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente”, 2002

MINISTERIO PÚBLICO, “Boletín Estadístico del Ministerio Público”, 2011.

MONSALVE M., *El silencio comenzó a reinar. Documentos para la historia de la instrucción primaria 1840-1920*, Fuentes para la Historia de la República, Volumen IX. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos - Universidad Católica Blas Cañas, Santiago, 1998.

MONTENEGRO H. y OTROS, “El menor en situación irregular en un distrito del Gran Santiago: medición de su frecuencia y de su asociación con algunas variables”, CONAME, Santiago, 1970.

MORRIS J., *Las Elites, los Intelectuales y el Consenso. Estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales en Chile*. Departamento de Relaciones Industriales INSORA, Universidad de Chile, Editorial del Pacífico, Santiago, 1967

MUEL F., “La escuela obligatoria y la invención de la infancia anormal”, en: V.V.A.A. *Espacios de Poder*, Ediciones Endimión, Madrid, 1991. Págs. 123 - 142.

MULLER J. y MIHALIC S., “Blueprints: A Violence Prevention Initiative”, en *Fact Sheet*, June, # 110, OJJDP, Washington DC, 1999.

ORTI A., “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social”, en: DELGADO J. y GUTIÉRREZ J., *Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales*, Editorial Síntesis, Madrid, 1999.

PERROT, M., “Dans la France de la Belle Epoque, les “Apaches”, premières bandes des jeunes” en VVAA., *Les Marginaux et les Exclús dans l’histoire*, UGE, Paris, 1979

PIZARRO N., *Metodología Sociológica y Teoría Lingüística*, Alberto Corazón editor, Madrid, 1979.

PLATT A., *Los Salvadores del Niño o la Invención de la Delincuencia*, Siglo XXI, México, 1982.

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Desarrollo Humano en Chile* Santiago, 1998.

\_\_\_\_\_, *Desarrollo Humano en Chile, Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*, Santiago, 2012.

RITZER, G. *Teoría Sociológica Moderna*, McGraw Hill, Madrid, 2001.



ROJAS J., *Historia de la Infancia en el Chile Republicano, 1810 - 2010*, Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, Santiago, 2010.

ROMANO V., *Desarrollo y Progreso*, Editorial Teide, Barcelona, 1993.

SALAZAR G., "Los dilemas históricos de la auto-educación popular en Chile", *Revista Propositiones N° 15*, Ediciones SUR, diciembre de 1987.

\_\_\_\_\_, "Investigadores jóvenes de los 60 e investigadores jóvenes de los 90: ¿a dónde va la diferencia?", *Revista Propositiones N° 27*, ediciones SUR, octubre de 1996.

SALINAS R. y DELGADO M., "Los hijos del vicio y del pecado. La mortalidad de los niños abandonados (1750-1930)", *Revista Propositiones N° 19*, Ediciones SUR, 1990

SENAME, "Anuario Estadístico Institucional 2010"

\_\_\_\_\_, "Anuario Estadístico Institucional 2013"

\_\_\_\_\_, "Boletín Estadístico Niños/as y Adolescentes, 3° trimestre 2014.

\_\_\_\_\_, "Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente", junio de 2011.

\_\_\_\_\_, "Informe estadístico 5 años de LRPA", 2012.

\_\_\_\_\_, "Informe de proyección de la demanda de CIP – CRC, 2014 – 2018, junio 2014.

\_\_\_\_\_, "Medición de la reincidencia delictiva", 2014.

\_\_\_\_\_, "Sistema Nacional de Atención Socioeducativa, 2006 – 2010", marzo 2007.

SIMON J., *Gobernar a Través del Delito*, Editorial GEDISA, Madrid, 2012

SUMNER, C., *The Sociology of Deviance: an Obituary*, Open University Press, Buckingham, 1994.

SYKES G., *The Society of captives. A study of a maximum security prison*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974

SYKES G. y MATZA D., "Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia", Cad. CRH, vol.21, N° 52, Salvador, 2008.

TMS. Programa Terapia Multisistémica. Departamento de Reinserción Social. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Santiago, Chile, 2014.

URRUTIA C., *Niños de Chile*. Colección Nosotros los Chilenos, Editorial Quimantú, junio de 1972.

VALENZUELA E., *La Rebelión de los Jóvenes*, Ediciones Sur, Santiago, 1984.

V.V.A.A., *Reinserción Social, Un concepto desde los actores vinculados a la ley de responsabilidad penal adolescente*, Trama impresores, Fundación Tierra de Esperanza, Concepción, Chile, julio de 2013.

VAN DIJK T., *Ideología y Discurso*, Ariel Lingüística, Barcelona, 2003.

\_\_\_\_\_, *La Noticia como Discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*, ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1990.

VASQUEZ C., "Teorías criminológicas sobre delincuencia juvenil", *Delincuencia Juvenil. Consideraciones penales y criminológicas*, Colex, Madrid, 2003.

VOLOSHINOV V., *El signo Ideológico y la Filosofía del Lenguaje*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1976.

WACQUANT L., *Las Cárceles de la Miseria*, Manantial, Buenos Aires, 2000.

\_\_\_\_\_, *Parias Urbanos*, Manantial, Buenos Aires, 2005

WEINSTEIN J., AGUIRRE R. y TELLEZ A., "Los jóvenes dañados: una revisión de las conductas problema en la juventud popular", en: *Los Jóvenes en Chile Hoy*, CIDE-CIEPLAN-INCH-PSI-SUR, Santiago, 1990.

WILLIS P., *Aprendiendo a Trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera*, Editorial Akal, Madrid, 1988.

WINN P., *La Revolución Chilena*, LOM ediciones, Santiago, 2013.

WINKIN Y., *Erving Goffman. Los Momentos y sus Hombres*. Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin, Paidós, Barcelona, 1991

ZIZEK S. (Comp.), *Ideología: Un mapa de la cuestión*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.



## APÉNDICE 1

### MATERIAL DE PRENSA

---

#### **Panorama de la prensa escrita y la TV.**

El diario El Mercurio es el principal medio de comunicación escrito de Chile, con más de cien años de vida y marca la agenda política y noticiosa. De propiedad de Agustín Edwards, su holding comunicacional incluye también el vespertino La Segunda y Las Últimas Noticias, de corte más popular; y cuenta con la red de diarios regionales más extensa del país con 21 medios desde Arica, por el norte, a Chiloé, en el sur. El directo competidor de El Mercurio, en tanto, es La Tercera, principal diario del Consorcio Periodístico S.A, COPESA, de propiedad de Álvaro Saieh, propietario también del matutino La Cuarta, del semanario político Qué Pasa, la revista Paula y el vespertino gratuito La Hora. En términos ideológicos, se sitúan en el mismo espectro político conservador y se les conoce como el duopolio.

Fuente: C. LAGOS, L. CHECA y C. CABALIN, “Adolescentes infractores: de delincuentes juveniles a víctimas del sistema”, *Serie reflexiones Infancia y adolescencia* Nº 9, UNICEF, Santiago, noviembre de 2008.

En la televisión abierta, hay un solo canal público: TVN-Televisión Nacional de Chile, un canal universitario: UCV TV-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un canal privado universitario: Canal 13/Grupo Luksic-Pontificia Universidad Católica de Chile y cuatro canales privados: Chilevisión, Mega, RedTV, Telecanal. En el último tiempo se ha añadido la señal de CNN Chile. El año 2010 hubo dos cambios muy importantes en la TV abierta chilena. Chilevisión (CHV) fue originalmente el tercer canal universitario creado en Chile el año 1960; pero tuvo una historia llena de altibajos al punto que el año 1995 fue vendido a Venevisión; el año 2000 CHV se vende al grupo Claxson, y luego el año 2005 al político y empresario chileno Sebastián Piñera. El 11 de Marzo de 2010 Sebastián Piñera asumió como nuevo Presidente de la República, y en agosto de 2010, CHV fue vendido a la operadora global Time Warner, propietaria de CNN, HBO, TCM, TNT, Cinemax, los canales programados en Argentina I-Sat, Space, Infinito y TruTV, y los canales infantiles Cartoon Network, Tooncast y Boomerang, entre otros. El segundo cambio fue la

venta del 67% de UC TV, Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile al grupo empresarial chileno Luksic (agosto de 2010); la Universidad conserva un 33% de la propiedad del canal y tiene una representación proporcional en el nuevo Directorio de la empresa. Con ambas ventas al parecer se cierra la experiencia chilena de tener canales masivos operados por las dos más importantes universidades del país, canales pioneros que comenzaron su operación en 1959-1960

Fuente: V. FUENZALIDA y P. JULIO (Eds.), *Panorama del audiovisual chileno*, Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y Egeda Chile, Santiago, 2011.

### **Editorial Terapia Multisistémica**

(...) En la década de 1970 se pensaba que “nada funcionaba” y que la prevención social o la reinserción de personas ya condenadas eran esfuerzos infructuosos. Hoy, la ciudadanía en general sigue creyéndolo así (...) Sin embargo, en el mundo anglosajón existen ya a lo menos 12 “bancos de proyectos” con evaluaciones de impacto positivo, esto es, de intervenciones que demuestran empíricamente lograr resultados en cuanto a evitar la participación de personas en hechos antisociales (...) Uno de estos enfoques es la denominada “Terapia Multisistémica”, que está siendo implementada en Chile por la Subsecretaría de Prevención del Delito desde 2012 a 840 familias, con asesoría de la organización estadounidense que la creó (...) Profesionales capacitados trabajan intensivamente, a cualquier hora y en cualquier lugar, con los adultos significativos para menores con perfiles de alto riesgo delictivo -perfil establecido mediante instrumentos y metodologías basadas en evidencia-, para restaurar o generar un funcionamiento familiar que permita el cese de comportamientos negativos y de delitos en particular. El escepticismo de los detractores de estos enfoques, que no pretenden abordar todas las desventajas sociales que rodean a estos menores, aumenta al saber que este proceso se realiza de forma exitosa en promedio en 145 días. Pero si bien el tiempo de implementación no permite una evaluación de impacto y el programa ciertamente no eliminará por completo estas conductas en todos los menores, los resultados parciales ya demuestran sendas de vida más positivas y han permitido a dicha subsecretaría certificarse como ejecutor de este programa. Si se considera el

reducido presupuesto de esta iniciativa -el Proyecto de Ley de Presupuestos contempla ampliarlo a 1.400 casos con un costo total de 3,2 mil millones- y que el universo potencial es solo de 5 mil niños, ella debiera marcar un antes y un después en las políticas preventivas en el país, priorizando la prevención secundaria temprana (focalizada en menores de edad con alto riesgo delictivo), y aplicándola en un programa que realmente le otorga una segunda oportunidad a menores que, de lo contrario, engrosarán la población penal en el futuro”.

*<http://www.elmercurio.com/blogs/2013/11/08/16783/Terapia-multisistemica.aspx>.*



## APENDICE 2

### CUADROS, TABLAS y GRAFICOS

---

#### **Definiciones sobre la información incluida en tablas y gráficos:**

*VIGENTES:* Corresponde a los niños, niñas, adolescentes (menores de 18 años) y jóvenes (mayores de 18 años) que se encuentran en los centros o proyectos de la red SENAME en un día determinado. Es como una “fotografía”, que va cambiando continuamente debido a nuevos ingresos y egresos.

*ADOLESCENTES Y JÓVENES INGRESADOS Y EGRESADOS:* Corresponde a la cantidad de ingresos o egresos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (mayores de 18 años) durante un periodo determinado (en este caso, un año). El recuento está asociado a una causa judicial.

*ATENDIDOS:* Corresponde a la cantidad de ingresados durante un periodo determinado (generalmente un año), más todos los que se encontraban vigentes el último mes del año anterior.



Tabla 1. Imputados por LRPA en relación con el total de imputados, por año

Año	Imputados ley penal adolescente	Imputados Ministerio Público	% de adolescentes imputados
<b>2010</b>	62.592	1.381.751	4.5%
<b>2011</b>	73.460	1.524.048	4.8%
<b>2012</b>	65.485	1.455.934	4.5%
<b>Total</b>	201.537	4.361.733	4.6%

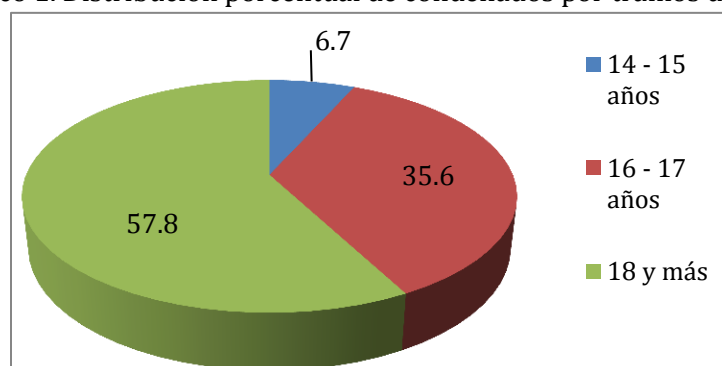
Fuente: E. MAFFIOLETTI y A. VERA, “Estudio Caracterización del Delito Adolescente”, Revista Jurídica del Ministerio Público N° 57, diciembre de 2013.

Tabla 2. Distribución de condenados por sanciones y sexo

	Femenino	Masculino	Total
<b>CRC - Centro en régimen cerrado</b>	14	453	467
<b>CSC - Centro en régimen semicerrado</b>	29	589	618
<b>PLA - Programa de libertad asistida</b>	238	1848	2086
<b>PLE - Programa de libertad asistida especial</b>	307	3633	3940
<b>SBC - Servicios en beneficio de la comunidad</b>	427	2130	2557
<b>Total</b>	1015	8653	9668

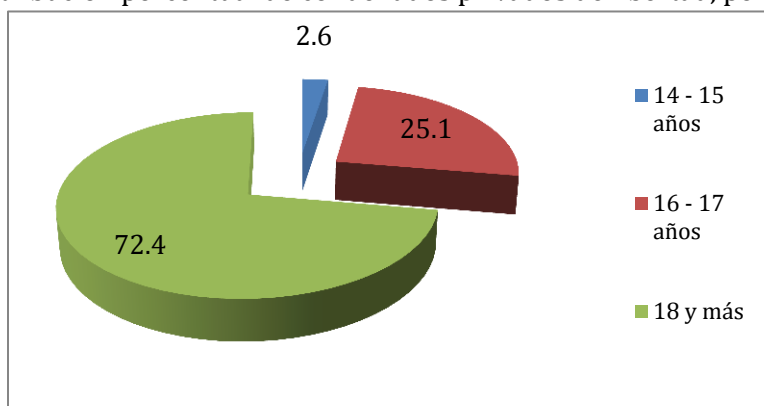
Fuente: Boletín Estadístico Niños/as y Adolescentes, SENAME, 3° Trim. 2014. Elaboración propia.

Gráfico 1. Distribución porcentual de condenados por tramos de edad



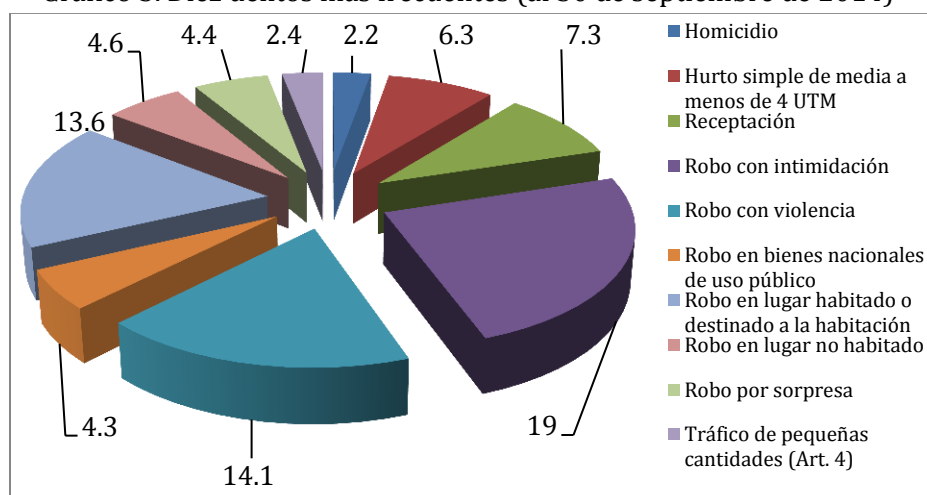
Fuente: Boletín Estadístico Niños/as y Adolescentes, SENAME, tercer trimestre 2014.

Gráfico 2. Distribución porcentual de condenados privados de libertad, por tramo de edad



Fuente: Boletín Estadístico Niños/as y Adolescentes, SENAME, tercer trimestre 2014

Gráfico 3. Diez delitos más frecuentes (al 30 de septiembre de 2014)



Fuente: Boletín Estadístico Niños/as y Adolescentes, SENAME, tercer trimestre 2014

Tabla 3. Oferta del área de justicia juvenil, al 31 de diciembre de 2014

Número de centros y proyectos	Denominación	Número de plazas
<b>17</b>	CIP-CRC	1366
<b>1</b>	CIP	120
<b>1</b>	CRC	170
<b>19</b>	<i>Total CIP-CRC</i>	1656
<b>16</b>	CSC	531
<b>48</b>	MCA	1362
<b>50</b>	PLA	1063
<b>56</b>	PLE	3930
<b>27</b>	SBC	1933
<b>35</b>	PSA	2003

Fuente: Oferta programática SENAME, diciembre de 2014. Elaboración propia.

Tabla 4. Porcentaje de ocupación de plazas en centros cerrados y semicerrados

Región	CIP - CRC			CSC		
	Vigentes	Plazas	%	Vigentes	Plazas	%
XV Arica y Parinacota	18	64	28,1%	8	20	40,0%
I Tarapacá	57	45	126,7%	51	20	255,0%
II Antofagasta	77	44	175%	61	26	234,6%
III Atacama	20	70	28,6%	25	20	125,0%
IV Coquimbo	42	40	105%	42	24	175,0%
V Valparaíso	72	102	70,6%	74	76	97,4%
VI O'Higgins	33	112	29,5%	26	28	92,9%
VII Maule	47	92	51,1%	15	40	37,5%
VIII Biobío	70	125	56%	21	35	60,0%
IX La Araucanía	29	134	21,6%	20	30	66,7%
XIV Los Ríos	34	70	48,6%	0	0	0
X Los Lagos	37	48	77,1%	29	28	103,6%
XI Aysén	16	28	57,1%	5	6	83,3%
XII Magallanes	5	38	13,2%	6	10	60,0%
XIII Metropolitana	383	644	59,5%	252	168	150,0%
Total nacional	940	1656	56,8%	635	531	119,6%

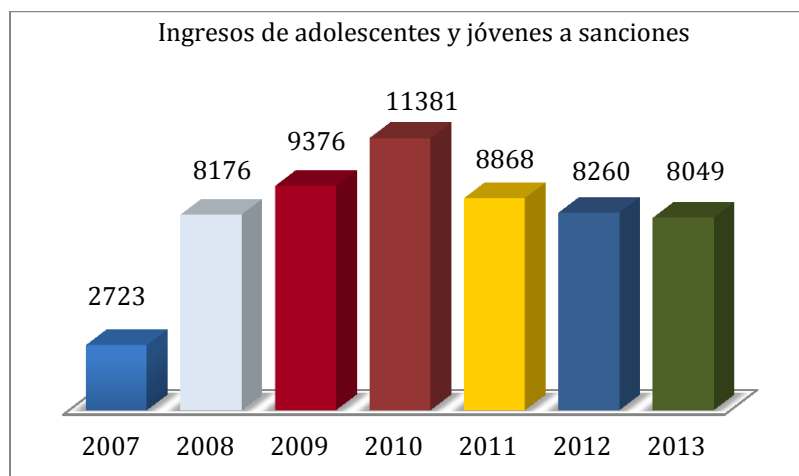
Fuente: Anuario Estadístico 2013, SENAME, 2014. En la región de Los Ríos, no existe centro semicerrado

Tabla 5: Vigentes por plazas y región en libertad asistida especial, libertad asistida y servicios en beneficio de la comunidad

Región	PLE			PLA			SBC		
	Vig.	Plz.	%	Vig.	Plz.	%	Vig.	Plz.	%
XV Arica y Parinacota	40	35	114,3%	29	12	241,7%	8	15	53,3%
I Tarapacá	227	150	151,3%	36	12	300,0%	251	35	717,1%
II Antofagasta	217	139	156,1%	145	32	453,1%	136	157	86,6%
III Atacama	120	110	109,1%	46	14	328,6%	72	65	110,8%
IV Coquimbo	156	140	111,4%	77	38	202,6%	37	40	92,5%
V Valparaíso	384	444	86,5%	193	100	193,0%	176	195	90,3%
VI O'Higgins	229	209	109,6%	96	44	218,2%	109	90	121,1%
VII Maule	278	236	117,8%	120	56	214,3%	162	50	324,0%
VIII Biobío	338	375	90,1%	147	154	95,5%	120	98	122,4%
IX La Araucanía	324	325	99,7%	101	51	198,0%	125	168	74,4%
XIV Los Ríos	107	190	56,3%	21	24	87,5%	68	75	90,7%
X Los Lagos	100	153	65,4%	66	40	165,0%	107	110	97,3%
XI Aysén	32	25	128,0%	22	12	183,3%	30	30	100,0%
XII Magallanes	39	45	86,7%	4	10	40,0%	35	25	140,0%
XIII Metropolitana	1459	1354	107,8%	998	464	215,1%	1176	780	150,8%
Total general	4050	3930	103,1	2101	1063	197,6%	2612	1933	135,1%

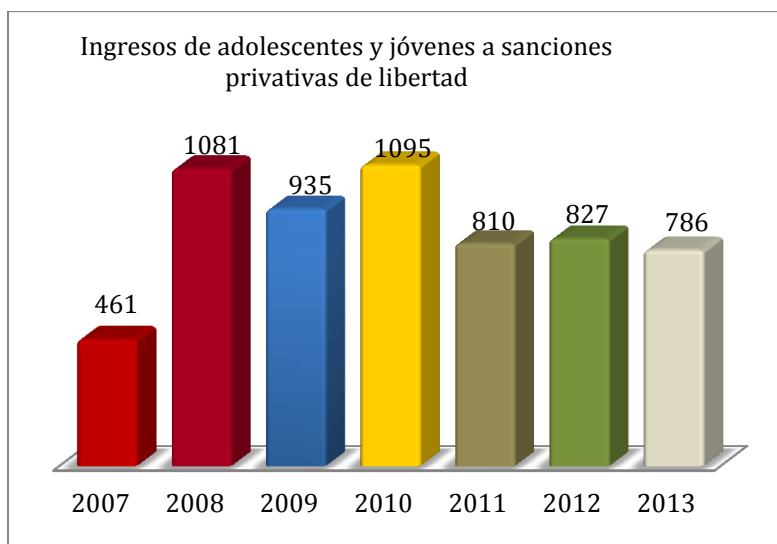
Fuente: Anuario Estadístico 2013, SENAME, 2014.

Gráfico 4. Adolescentes y jóvenes sancionados por año



Fuente: Elaboración propia a partir de boletines estadísticos institucionales de SENAME

Gráfico 5. Adolescentes y jóvenes sancionados por año



Fuente: Elaboración propia a partir de boletines estadísticos institucionales de SENAME

Cuadro 1. Resumen de inversión en obras de centros cerrados del país entre 2006 y 2012

REGION	CENTRO	AÑO DE INVERSIÓN							TOTAL POR CENTRO
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Arica y Parinacota	CIP CRC Arica	0	143.526.356	65.202.566	5.701.290	4.056.263	0	148.200.000	366.686.475
Tarapacá	CIP CRC Iquique	0	134.922.818	136.806.180	26.361.499	41.519.742	4.136.678	148.581.941	492.328.858
Antofagasta	CIP CRC Antofagasta	0	83.529.000	78.400.493	0	92.987.401	5.654.880	50.974.728	311.546.502
Atacama	CIP CRC Copiapó	2.999.984	255.104.322	41.982.378	0	41.717.892	17.149.090	72.599.998	431.553.664
Coquimbo	CIP CRC La Serena	0	108.083.608	32.462.670	3.385.550	9.270.629	79.624.439	367.212.324	600.039.220
Valparaíso	CIP CRC Limache	28.704.571	319.603.503	272.416.539	44.178.137	42.190.356	85.564.376	1.115.748.671	1.908.406.153
O'Higgins	CIP CRC Graneros	52.826.423	205.188.946	200.645.031	12.042.740	24.825.159	30.162.316	157.540.839	683.231.454
Maule	CIP CRC Talca	0	354.654.801	155.863.882	688.250	73.397.275	147.378.680	416.270.202	1.148.253.090
Bío Bío	CIP CRC Coronel	29.595.300	300.216.198	156.525.805	38.709.391	20.696.516	5.139.610	175.081.045	725.963.865
Araucanía	CIP CRC Chol Chol	0	180.202.217	111.561.408	183.087.774	125.413.109	8.959.400	709.637.520	1.318.861.428
Los Ríos	CIP CRC Valdivia	15.641.312	233.999.182	70.531.681	30.078.065	0	26.828.223	81.919.116	458.997.579
Los Lagos	CIP CRC Puerto Montt	27.823.866	27.511.314	168.136.386	24.387.663	8.233.550	63.911.677	169.976.299	489.980.755
Aysén	CIP CRC Coyhaique	0	0	0	7.564.199	13.547.728	15.916.250	24.000.000	61.028.177
Magallanes	CIP CRC Punta Arenas	0	49.196.920	47.574.340	6.054.125	4.243.143	7.616.000	243.450.888	358.135.416
Metropolitana	CIP CRC San Bernardo	28.863.656	565.231.068	197.493.198	18.926.664	108.127.696	122.458.957	14.177.321	1.055.278.560
	CIP CRC San Joaquín	0	446.547.199	121.630.395	5.784.709	11.064.858	20.179.247	31.149.928	636.356.336
	CIP CRC Santiago	0	224.811.111	26.682.577	1.421.456	20.263.990	3.423.814	55.240.895	331.843.843
	CIP CRC Metropolitano Norte	0	0	0	0	0	0	257.230.777	257.230.777
<b>TOTALES</b>		<b>186.455.112</b>	<b>3.632.328.563</b>	<b>1.883.915.529</b>	<b>408.371.512</b>	<b>641.555.307</b>	<b>644.103.637</b>	<b>4.238.992.492</b>	<b>11.635.722.152</b>

Fuente: "Informe estadístico 5 años de LRPA", SENAME, 2012.

Cuadro 2. Resumen de inversión en obras de centros semicerrados del país entre 2006 y 2012

REGION	CENTRO	AÑO DE INVERSIÓN							TOTAL POR CENTRO
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
XIV Arica y Parinacota	CSC Arica	0	0	0	0	0	0	0	0
I Tarapacá	CSC Iquique	0	0	0	0	0	0	0	0
II Antofagasta	CSC Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0
III Atacama	CSC Copiapó	0	29.239.744	0	0	0	0	0	29.239.744
IV Coquimbo	CSC La Serena	0	15.325.359	0	0	0	0	0	15.325.359
V Valparaíso	CSC Limache	55.735.832	0	0	6.047.996	9.554.790	7.409.987	6.854.500	85.603.105
VI O'Higgins	CSC Rancagua	0	83.986.185	0	7.457.730	0	0	0	91.443.915
VII Maule	CSC Talca	0	32.217.348	3.206.931	5.187.058	0	0	0	40.611.337
VIII Bio Bío	CSC Concepción	0	60.897.608	9.891.875	15.305.398	0	0	0	86.094.881
IX Araucanía	CSC Temuco	0	34.277.412	60.694.279	0	0	0	6.000.000	100.971.691
X Los Lagos	CSC Puerto Montt	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Aysén	CSC Coyhaique	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Magallanes	CSC Punta Arenas	0	0	0	0	0	0	669.018	669.018
XIII Metropolitana	CSC Calera de Tango	0	126.319.957	55.940.608	0	34.971.726	19.003.569	0	236.235.860
	CSC La Cisterna	0	121.850.854	2.719.150	0	0	10.985.190	0	135.555.194
	CSC Santiago	0	41.209.213	452.200	0	0	36.421.156	0	78.082.569
	CSC Entre Calles	0	0	0	41.936.020	0	0	0	41.936.020
TOTALES POR AÑO =		55.735.832	545.323.680	132.905.043	75.934.202	44.526.516	73.819.902	13.523.518	941.768.693

Cuadro 3. Inversión en infraestructura de centros, antes de la ley 20.084

Inversión en Infraestructura COD-CERECO por región (en M\$) 1990-2005				
Región	Antes de 2003	2003	2004-2005	Total
I	2.706.269	560.000	100.000	3.366.269
II	1.235.000	0	* 0	1.235.000
III	2.131.000	0	* 0	2.131.000
IV	2.170.000	0	* 0	2.170.000
V	3.290.150	0	* 0	3.290.150
VI	2.424.000	0	0	2.424.000
VII	3.052.236	0	0	3.052.236
VIII	5.151.619	0	* 0	5.151.619
IX	1.472.000	408.000	* 0	1.880.000
X	2.315.000	401.500	* 100.000	2.816.500
XI	32.750	854.515	200.000	1.087.265
XII	30.500	755.803	350.000	1.136.303
XIII	8.132.600	60.600	* 3.797.600	11.990.800
TOTAL	34.143.124	3.040.418	4.547.600	41.731.142

Pesos a diciembre de 2003

Fuente: Ministerio de Justicia, antecedentes del anteproyecto de responsabilidad penal adolescente, 2002

Cuadro 4. Ejecución presupuestaria desde la puesta en marcha de la ley hasta el año 2011

	Del 8/6 al 31/12 de 2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
<b>CIP - CRC</b>	8.055.367.034		15.975.303.961		18.659.349.522		20.538.077.041		21.781.963.242	
<b>CSC</b>	1.609.078.142		3.270.148.129		4.008.892.428		4.624.237.129		5.088.712.724	
<b>Subtotal</b>	9.664.445.176	94,9	19.245.452.090	66,2	22.668.241.950	60,2	25.162.314.170	61,6	26.870.675.966	60,6
<b>Colaboradores</b>	523.450.587	5,1	9.833.534.050	33,8	14.997.691.387	39,8	15.685.762.313	38,4	17.437.554.032	39,4
<b>Total</b>	10.187.895.763	100	29.078.986.140	100	37.665.933.337	100	40.848.076.483	100	44.308.229.998	100

Fuente: "Informe estadístico 5 años de LRPA", SENAME, 2012.

Cuadro 5. Dotación de funcionarios en centros de administración directa 2007 - 2012, por estamento.

ESTAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Total</b>	1630	1816	1864	1936	1940	1949
<b>Administrativo</b>	816	863	906	963	946	922
<b>Auxiliar</b>	341	340	320	306	307	306
<b>Profesional</b>	450	567	579	604	623	649
<b>Técnico</b>	23	46	59	63	64	72

Total Profesionales Centros Justicia Juvenil						
Categoría	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Administración	8	9	9	8	12	15
Area Formación	32	60	58	55	56	56
Apoyo a la Reinserción	16	17	16	17	20	23
Area Salud	3	7	6	6	4	5
Area Seguridad	0	7	7	7	6	7
Educadores Profesionales	142	159	161	185	193	202
Area Juridica	2	15	12	12	10	9
Directivos Centros	84	82	80	75	80	81
Profesionales Intervención	130	175	194	197	197	208
Profesionales Coordinación	33	36	36	42	45	43
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>567</b>	<b>579</b>	<b>604</b>	<b>623</b>	<b>649</b>

Fuente: "Informe estadístico 5 años de LRPA", SENAME, 2012.

Tabla 6. Ocupación de centros CIP – CRC según máximo de ocupación anual

Máximo de vigentes por año	2010	2011	2012	2013	2014 (abril)
CIP	892	609	639	677	546
CRC	837	835	705	662	565
Total CIP - CRC	1729	1444	1344	1339	1111
Plazas	1656	1656	1656	1656	1656
% ocupación	104.4	87.2	81.2	80.9	67.1

Fuente: Informe de proyección de la demanda 2014 – 2018 de los centros CIP-CRC, SENAME, 2014.

Tabla 7. Egresos favorables y no favorables de sanciones, 2008 – 2013

	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Egresos favorables	1020	40%	3260	53%	3320	52%	4292	51%	6281	56%	5551	54.7%
Egresos desfavorables	1540	60%	2923	47%	3117	48%	4100	49%	4937	44%	4598	45.3%
Total	2560	100%	6183	100%	6437	100%	8392	100%	11218	100%	10149	100%

Fuente: “Informe estadístico 5 años de LRPA”, y “Anuario Estadístico” 2013.

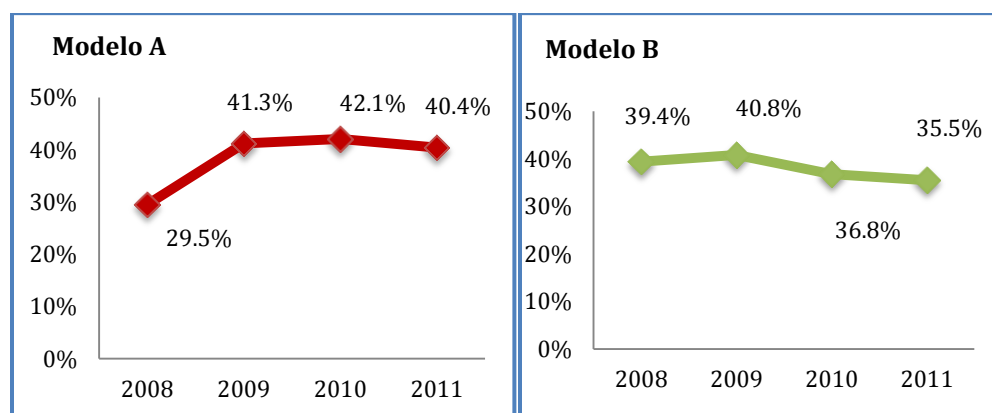
## Estudio de reincidencia

El estudio evalúa la reincidencia de la población condenada a las sanciones de SENAME. No incluye a los sancionados a amonestación y multa, esto es a más del 20% del universo de condenas impuestas. Se trabajó con cohortes anuales y no con muestras. Incluye una “ventana” de un mes, para descartar los “delitos concurrentes”.

El estudio mide la reincidencia a través de dos modelos distintos, denominados modelo A y modelo B. En el modelo A se realiza el seguimiento de una cohorte anual conformada por los adolescentes y jóvenes que *ingresaron* a cumplir condena en sanciones en medio libre y en centros semicerrados (CSC) durante ese año, y de los adolescentes y jóvenes que *egresaron* de cumplir condena en los centros cerrados (CRC) en el mismo periodo. En cambio, el modelo B mide la cohorte anual conformada solo por los *egresados*, de cualquier sanción. También se les conoce como modelo “al ingreso” y modelo “al egreso”.



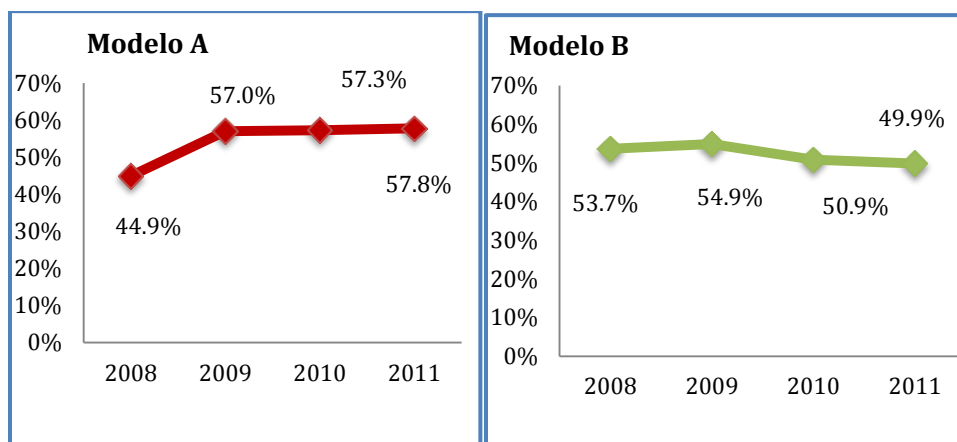
Tabla 8. Tasa de reincidencia general modelos A y B, a 12 meses de seguimiento



Reincidencia (12 meses)	Modelo A			Modelo B		
	Frecuencia	Cohorte	Tasa	Frecuencia	Cohorte	Tasa
2008	1886	6384	29,5%	656	1667	39,4%
2009	2860	6933	41,3%	2067	5062	40,8%
2010	2862	6798	42,1%	2204	5992	36,8%
2011	2605	6443	40,4%	2135	6015	35,5%

Fuente: Medición de la reincidencia delictiva, Unidad de Estudios, SENAME, 2014

Tabla 9. Tasa de reincidencia general, modelos A y B a 24 meses de seguimiento



Reincidencia (24 meses)	Modelo A			Modelo B		
	Frecuencia	Cohorte	Tasa	Frecuencia	Cohorte	Tasa
2008	2865	6384	44,9%	896	1667	53,7%
2009	3950	6933	57,0%	2779	5062	54,9%
2010	3893	6798	57,3%	3047	5992	50,9%
2011	3723	6443	57,8%	3001	6015	49,9%

Fuente: Medición de la reincidencia delictiva, Unidad de Estudios, SENAME, 2014

Tabla 10. Tasa de reincidencia general por sanción modelos A y B, a 12 meses de seguimiento

Reincidencia (12 meses)	Modelo A				Modelo B			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
CRC	25,9%	37,0%	47,5%	39,3%	29,9%	37,0%	47,5%	39,3%
CSC	35,4%	44,1%	44,3%	46,1%	36,5%	53,6%	46,7%	50,6%
PLA	27,7%	39,6%	41,7%	37,0%	37,1%	35,7%	35,1%	36,3%
PLE	24,6%	33,8%	32,6%	33,1%	44,8%	39,3%	30,5%	30,6%
SBC	36,3%	49,2%	49,1%	47,0%	40,3%	42,0%	39,8%	34,4%

Fuente: Medición de la reincidencia delictiva, Unidad de Estudios SENAME, 2014

Tabla 11. Tasa de reincidencia general por sanción, modelos A y B a 24 meses de seguimiento

Reincidencia (24 meses)	Modelo A				Modelo B			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
CRC	35,2%	54,5%	68,5%	57,2%	42,9%	54,5%	68,5%	57,2%
CSC	52,0%	66,0%	62,9%	65,0%	54,0%	68,5%	61,4%	67,6%
PLA	42,8%	53,9%	57,5%	53,6%	49,2%	48,6%	50,0%	50,4%
PLE	39,8%	50,3%	48,0%	51,8%	56,6%	52,1%	42,5%	43,0%
SBC	51,9%	64,1%	62,8%	63,4%	55,2%	56,9%	54,3%	49,7%

Fuente: Medición de la reincidencia delictiva, Unidad de Estudios SENAME, 2014

Tabla 12. Formas de término de adultos y adolescentes año 2010

Tipo de término	Adulto	Adolescente
<b>Sentencia definitiva condenatoria</b>	27.8	29.1
<b>Sentencia definitiva absolutoria</b>	0.8	0.9
<b>Sobreseimiento definitivo</b>	4.4	3.9
<b>Sobreseimiento temporal</b>	1.7	0.9
<b>Suspensión condicional del procedimiento</b>	22.6	22.6
<b>Acuerdo reparatorio</b>	2.7	2.5
<b>Facultad para no investigar</b>	5.4	4.8
<b><i>Subtotal salida judicial</i></b>	<b>65.4</b>	<b>64.6</b>
<b>Archivo provisional</b>	18.3	13.1
<b>Decisión de no perseverar</b>	4.4	3.6
<b>Principio de oportunidad</b>	10.7	15.3
<b>Incompetencia</b>	1.2	3.3
<b><i>Subtotal salida no judicial</i></b>	<b>34.7</b>	<b>35.4</b>

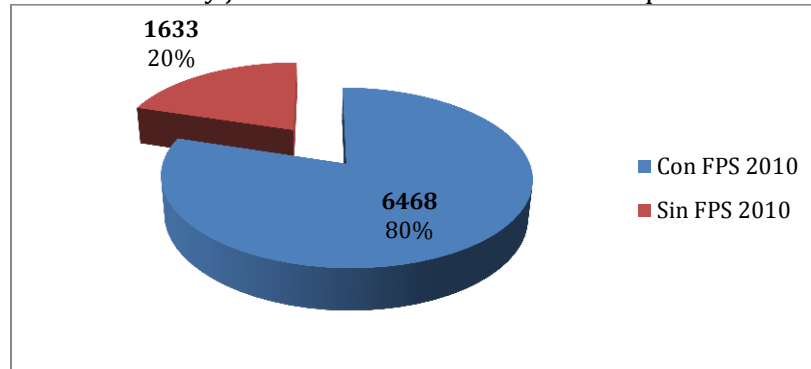
Fuente: Berríos, 2011

Tabla 13. Formas de término de adultos y adolescentes año 2011

Tipo de término	Adulto	Adolescente
Sentencia definitiva condenatoria	23,6	23,1
Sentencia definitiva absolutoria	0,8	0,7
Sobreseimiento definitivo	2,3	2,0
Sobreseimiento temporal	1,4	0,6
Suspensión condicional del procedimiento	29,3	28,2
Acuerdo reparatorio	2,8	2,5
Facultad para no investigar	4,3	4,8
<i>Subtotal salida judicial</i>	<i>64,5</i>	<i>61,9</i>
Archivo provisional	18,5	14,5
Decisión de no perseverar	4,6	3,3
Principio de oportunidad	11,3	17,0
Incompetencia	1,1	3,3
<i>Subtotal salida no judicial</i>	<i>35,5</i>	<i>38,1</i>

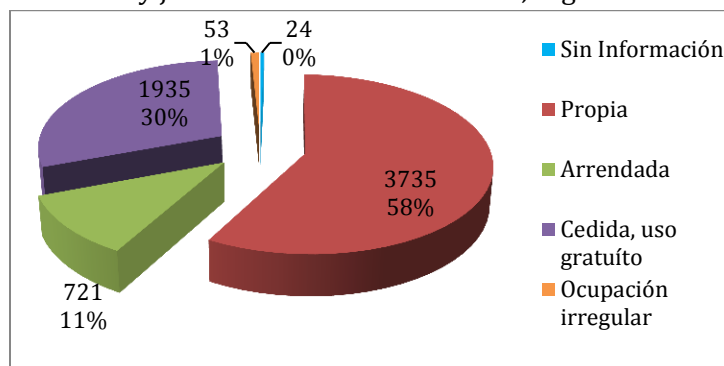
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Ministerio Público, 2011. Págs. 28 y 52.

Gráfico 6. Adolescentes y jóvenes sancionados con ficha de protección social, 2010



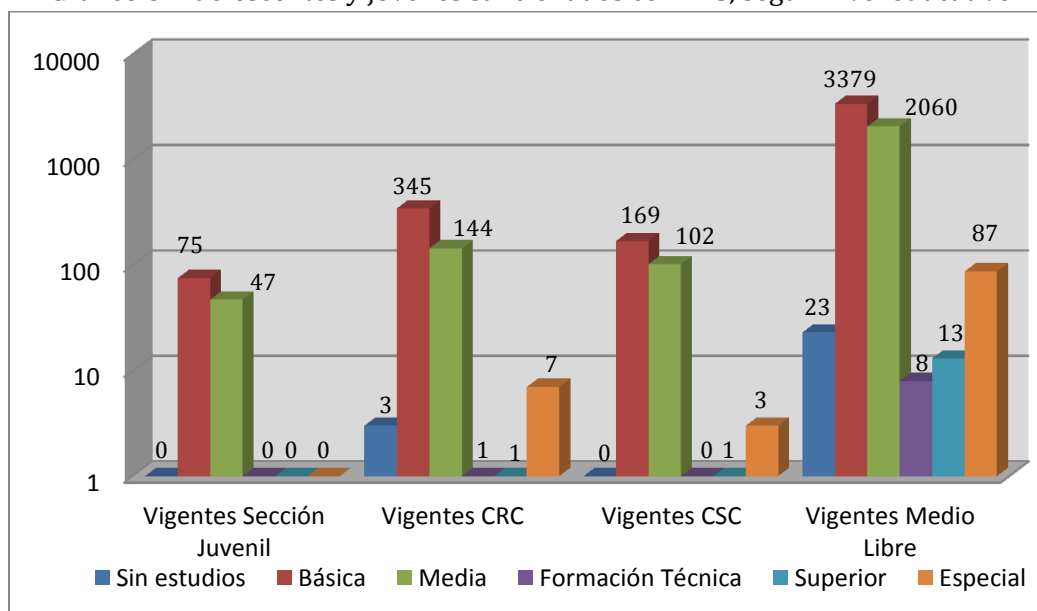
Fuente: SENAME, Departamento de Justicia Juvenil, 2011

Gráfico 7. Adolescentes y jóvenes sancionados con FPS, según situación de la vivienda.



Fuente: SENAME, Departamento de Justicia Juvenil, 2011

Gráfico 8. Adolescentes y jóvenes sancionados con FPS, según nivel educativo



Fuente: SENAME. Departamento de Justicia Juvenil, 2011

Tabla 14. Diagnóstico educacional inicial en CIP - CRC, CSC, PLA y PLE, 2009 - 2010.

Diagnóstico educacional inicial de Atendidos en CIP - CRC, CSC, PLA y PLE	Ene-dic 2009	Marzo 2010
No incorporados educación*	6.979	3.618
Incorporados a educación	10.234	6.141
Total atendidos	17.213	9.759

\* Se considera no ingresado a educación a aquellos cuyos registros corresponden a las siguientes situaciones: "No asiste a escuela", "deserción por decisión propia", "expulsión del sistema" y "no ha sido inscrito". Se debe acotar que, a consecuencia del terremoto de febrero de 2010, no se realizó medición de tales datos en las regiones VII y VIII, así como también se vieron afectadas las mediciones de las regiones V, VI, y RM. No contamos con datos más actualizados, por cuanto dejó de publicarse esta información.

Fuente: "Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal adolescente", SENAME, junio de 2011.

Tabla 15: Adolescentes incorporados al sistema educativo del total de adolescentes ingresados a medidas y sanciones

SUBSISTEMAS	Incorporados al sistema educativo	Total de ingresados	% incorporados respecto de ingresados
<b>Cerrado</b>	4465	6270	71,2
<b>Semicerrado</b>	718	1259	57
<b>Medio Libre</b>	4658	19075	24,4
<b>TOTAL GENERAL</b>	9.841	26.604	37

Fuente: "Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente", SENAME, junio de 2011.

Tabla 16. Tasa neta de cobertura educación básica por zona geográfica, 1990 – 2011.

Cobertura neta	Zona		Total
	Urbana	Rural	
<b>1990</b>	90,8	88,2	90,4
<b>2009</b>	93,1	93,7	93,2
<b>2011</b>	92,7	93,9	92,8

Tabla 17. Tasa neta de cobertura educación básica por tramo de edad

Tramo de edad	Tasa de cobertura neta*
<b>6 años</b>	52,3
<b>7 a 9 años</b>	98
<b>10 a 13 años</b>	98,6
<b>Total</b>	92,8

\* Tasa neta de educación básica: N° total de alumnos de 6 a 13 años que asisten a educación básica, divididos por la población de 6 a 13 años.

Fuente: P. FERNANDEZ, *Niñez y adolescencia en Chile: las cifras. Datos estadísticos y principales estudios*. Centro de Estudios de la Niñez, Corporación OPCION, 2014.

Tabla 18. Tasa neta de cobertura educación media 1990 - 2011

Año	Tasa de cobertura neta*
<b>1990</b>	60.1
<b>2000</b>	64.8
<b>2009</b>	70.7
<b>2011</b>	72.2

Tabla 19. Tasa neta de cobertura educación media por quintil de ingreso autónomo

Año	Quintiles de ingreso					Total
	I	II	III	IV	V	
<b>1990</b>	50.9	55.9	61.3	69.3	77.8	60.3
<b>2011</b>	68.1	71.4	69.8	75.5	84.1	72.2

\* Tasa neta de educación media: N° total de alumnos de 14 a 17 años que asisten a educación media, divididos por la población de 14 a 17 años.

Fuente: P. FERNANDEZ, *Niñez y adolescencia en Chile: las cifras. Datos estadísticos y principales estudios*. Centro de Estudios de la Niñez, Corporación OPCION, 2014.

Tabla 20. Adolescentes incorporados a cursos de capacitación laboral.

Subsistemas	Incorporados a capacitación laboral	Total que cumple requisitos	% de jóvenes incorporados
<b>Centros Cerrados</b>	1071	1891	56,6
<b>Centros Semicerrados</b>	257	519	49,5
<b>Medio Libre</b>	1323	7549	17,5
<b>TOTAL GENERAL</b>	2.651	9.959	26,6

Para ingresar a cursos de capacitación laboral se requiere: ser mayor de 16 años, haber aprobado el octavo año de enseñanza básica, no estar en tratamiento por consumo de drogas y tener compatibilidad horaria con la asistencia educativa.

Fuente: "Informe 4 años. Ley de Responsabilidad Penal adolescente", SENAME, junio de 2011.

Tabla 21. Actividad desarrollada por adolescentes entre 15 y 17 años según nivel de pobreza

		Pobres extremos		Pobres no extremos		No pobres		Total	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Actividad desarrollada	Estudia y trabaja	214	0,7	2.776	2	20.312	3	23.302	2,8
	Solo estudia	27.695	87,5	122700	88,2	601.253	89,4	751.648	89,2
	Solo trabaja	385	1,2	1.412	1	7.977	1,2	9.774	1,2
	No estudia ni trabaja	3.373	10,7	12.163	8,7	42.645	6,3	58.181	6,9
Total		31.667	100	139.051	100	672.187	100	842.905	100

Fuente: P. FERNANDEZ, *Niñez y adolescencia en Chile: las cifras. Datos estadísticos y principales estudios*. Centro de Estudios de la Niñez, Corporación OPCION, 2014.

Tabla 22. Mortalidad Infantil en Chile, 1898-1910

Mortalidad en Chile	
Año	Tasa (por mil )
1898	374
1900	502
1902	323
1905	363
1907	439
1910	384

Tabla 23. Mortalidad en la Casa de Huérfanos, 1876 - 1925

Mortalidad Casa de Huérfanos	
Años	Tasa (por mil)
1876 -1885	813
1886-1895	802
1896-1905	760
1906-1915	735
1916-1925	736

Fuente: R. SALINAS y M. DELGADO, "Los hijos del vicio y del pecado. La mortalidad de los niños abandonados (1750-1930)", *Revista Proposiciones* N° 19, Ediciones SUR, 1990.



Cuadro 5. Evolución de la Responsabilidad Penal en relación a la Edad en Chile

Año de ley o decreto	Irresponsabilidad absoluta	Edad de discernimiento	Atenuación de la pena
Código Penal (1875)	Menores de 10	10 -16	10 -18
Ley 4.447, de 1928.	Menores de 16	16 -20	16 -20
Ley 11.183 de 1953	Menores de 16	16 -18	16 -18

Fuente: M. CILLERO, "Evolución histórica de la consideración jurídica de la infancia adolescente en Chile", en: *Infancia en Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile*, Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, 1994

## APÉNDICE 3

### DEFINICIONES LEGALES Y PROGRAMAS

---

#### A. LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, N° 20.084

##### Determinación de las sanciones en la ley penal de adolescentes.

En el código penal chileno hay dos rangos penales; el *presidio menor*, que va de 61 días a 5 años y el *presidio mayor*, que va de 5 años y 1 día a veinte años. A su vez, hay tres grados dentro de cada rango: mínimo, medio y máximo:

Presidio Rango	/	Mínimo	Medio	Máximo
Mayor		5 años y 1 día a 10 años	10 años y 1 día a 15 años	15 años y 1 día a 20 años.
Menor		61 a 540 días	541 días a 3 años	3 años y 1 día a 5 años

La ley 20.084 establece que la duración de la pena que le corresponde a un adolescente es el rango mínimo de la pena asignada al delito en la legislación de adultos, rebajada en un grado. Sobre esa pena de adulto ya atenuada, el tribunal toma en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes del delito, su grado de desarrollo (tentativa, delito frustrado, consumado) y el tipo de participación que tuvo el adolescente en los hechos (autor, cómplice, encubridor). Mediante la aplicación de estas normas la pena resultante puede subir o bajar otra vez de grado.

Establecida la duración, el tribunal debe escoger el tipo de sanción a aplicar. El tipo de sanción que se puede aplicar depende del tramo. Existen cinco tramos. En el

tramo superior de duración (sobre 5 años y 1 día) sólo se pueda aplicar la sanción en régimen cerrado para tener, recién a los 2 años, la opción de sustituirla por una sanción en régimen semicerrado. Los tramos son los siguientes:

*Desde 5 años y 1 día a 10 años*

- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social

*Desde 3 años y 1 día a 5 años:*

- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social
- Libertad asistida especial

*Desde 541 días a tres años:*

- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social
- Libertad asistida especial
- Libertad asistida
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad

*Desde 61 a 540 días*

- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social
- Libertad asistida especial
- Libertad asistida
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad
- Reparación del daño causado

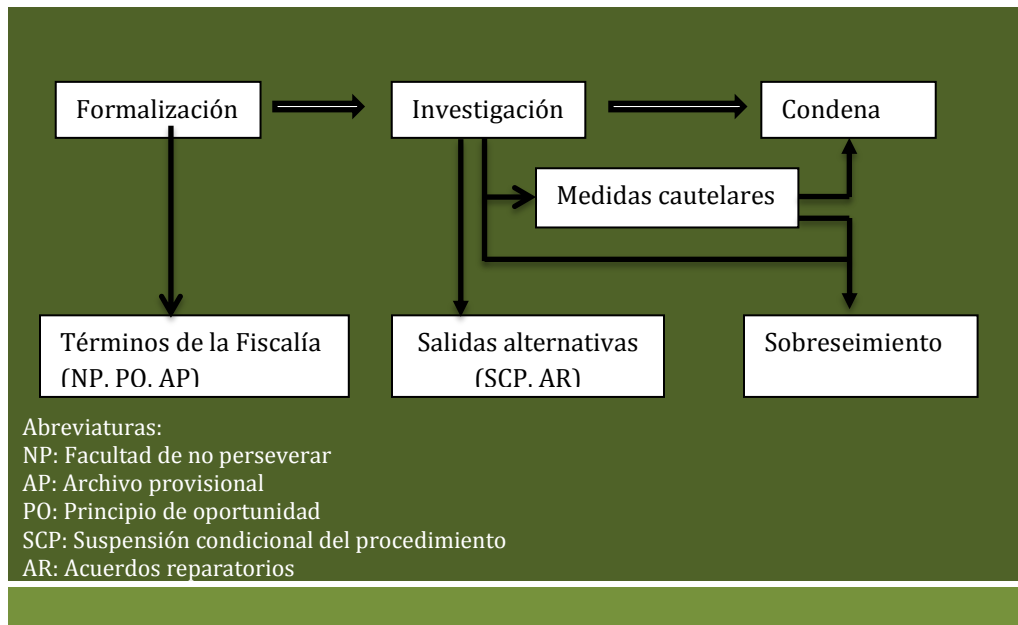
*Desde 1 a 60 días*

- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad
- Reparación del daño causado
- Multa
- Amonestación

## Proceso de la ley penal adolescente

El proceso penal adolescente sigue la forma del proceso penal de adultos:

Esquema 2. Estructura procesal de la ley 20.084



Fuente: Elaboración propia

En la línea superior del esquema, unido por flechas gruesas, el proceso principal de enjuiciamiento y condena: la “entrada” al sistema. En la línea inferior las salidas alternativas al proceso judicial y el sobreseimiento, parcial o definitivo.

La etapa de ejecución de las sanciones no está representada en el esquema 1. Hay dos formas de modificación del cumplimiento de la sanción impuesta durante la ejecución: La sustitución de la sanción original por una menos intensa o más benévola y la remisión, o sea el término anticipado de la sanción. En el caso de la sustitución, la ley exige que haya empezado a ejecutarse, pero no establece un plazo mínimo para decretarla. También puede ser decretada de manera condicional. El criterio que la ley señala como justificación de la sustitución es que “ello parezca más favorable para la integración social del infractor”. Por lo tanto, se trata de un mecanismo importante para evitar los daños y desocialización asociados a la privación de libertad.

## **B. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN**

### **Programa de Seguridad Integrada, PSI 24 Horas.**

Programa de Carabineros de Chile. Su objetivo es “contribuir a procesos de prevención, protección y control de situaciones de riesgo y/espiral delincencial en que se encuentran los menores de edad del país, a través de la disponibilidad de información válida y oportuna relativa a los niños, niñas y adolescentes ingresados a las unidades policiales de Carabineros de Chile”. *24 Horas. Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes*. Dirección de Protección Policial de la Familia, Carabineros de Chile y Subsecretaría de Carabineros, Ministerio de Defensa Nacional, 2007.

### **Programa Vida Nueva**

El programa tiene cinco componentes:

*Equipos de Evaluación de Riesgo, EER*, que aplican instrumentos evaluativos, como una adaptación del ONSET, herramienta aplicada por el *Youth Inclusion Programme* (YIP) de Reino Unido, dirigido a niños y adolescentes que presentan alto riesgo de cometer delitos o tener conductas transgresoras. Los EER son financiados y supervisados por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

*Oficinas de Protección de Derechos, OPD*, que están definidas por la ley 20.032, de subvenciones, como “instancias ambulatorias de carácter local destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes y contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de los derechos de la infancia”. Se considera de baja complejidad. La intervención de la OPD dura tres meses, pero puede extenderse hasta por un año y medio. Financia y supervisa el Servicio Nacional de Menores. El programa Vida Nueva significó ampliar plazas en las OPD para atender casos de mediana complejidad, considerando una profundización del diagnóstico y una intervención psicosocial y jurídica con el niño y su familia, o bien su derivación a escuelas o al consultorio de salud.

El SENAME define tres niveles de complejidad en la atención: *Baja complejidad*, que se refiere a la “presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños (as) y adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere (dificultad en la relación con la escuela o con los padres, situaciones asociadas a crisis en diversas etapas del desarrollo, ejercicio de trabajos esporádicos que no están asociados a inasistencia escolar o a problemáticas familiares, negligencia leve –signos de descuido, falta de participación en las actividades de los hijos/as-, familia con problemas para poner límites y normas”. *Mediana complejidad*, que se refiere a la “presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones de derechos ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños (as) y adolescentes y que se manifiestan en diversos ámbitos de la vida de estos ya sea a nivel personal, familiar y/o socio comunitario (situaciones de repitencia o deserción escolar, consumo no problemático de drogas, desconfianza en el mundo adulto, conductas transgresoras iniciales no tipificadas como delitos, ejercicio de trabajo permanente, familias con incumplimiento parcial de roles, vínculos intrafamiliares basados en la violencia sostenida, presencia de adultos con consumo de drogas no problemático y/o conductas transgresoras esporádicas, viviendo en contextos sociales de violencia, tráfico o conductas infractoras”. *Alta complejidad*, que se refiere a la “presencia de situaciones y/o conductas que provocan un grave daño a la integridad física y/o psicológica de niños (as) y adolescentes, entre las que cuentan consumo problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos emocionales o conductuales, nulos vínculos con el mundo adulto, situación de calle, peores formas de trabajo infantil, vinculación a conflictos con la justicia dentro de sus trayectorias de vida o por las que resulten inimputables ante la ley, vida en contexto de violencia y riesgo vital. Todas ellas, situaciones que pueden darse además simultáneamente en la población atendida”.

*Los Programas de Intervención Breve para la Prevención Focalizada, PIB:* cuyo objetivo general es “resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana complejidad que afectan a niños/as y adolescentes de un territorio determinado, previniendo su cronificación” y su paso a situaciones de alta complejidad. El PIB realiza tratamiento psicológico, terapia familiar, talleres

grupales para los niños y talleres de habilidades parentales. Financia y supervisa el SENAME.

*Los Programas de Intervención Integral Especializada, PIE*, cuyo objetivo general es “contribuir a la interrupción de situaciones de vulneración de derechos y prácticas transgresoras de niños/as y adolescentes en situaciones de alta complejidad provenientes preferentemente del PSI: 24 Horas”. La alta complejidad se relaciona con la edad de los niños. Por debajo de los 12 años, el programa aborda las condiciones familiares y sociales de los niños “que se traducen en vulneración de sus derechos”. Por sobre los 12 años, si bien se mantienen las condicionantes sociales, se considera que aparecen prácticas transgresoras asociadas a un mayor nivel de autonomía frente a los agentes socializadores, como la familia y la escuela. Estas prácticas se relacionan con mayores grados de simultaneidad, cronicidad e intensidad. El PIE fue creado el año 2007, en el contexto del PSI 24 horas. Financia y supervisa el SENAME.

Los PIE cuentan con el apoyo de programas complementarios: de *Tratamiento en Drogas, PDC y de Reinserción Educativa, PDE*. A los componentes anteriores, hay que sumar los Equipos de Salud Mental y una orgánica de coordinación local, llamada Mesa de Gestión de Casos, que tiene la misión de priorizar los casos de alta complejidad, de manera que sean abordados en forma integral por distintos servicios locales. Los programas complementarios fueron creados una vez puesto en marcha el programa Vida Nueva.

El programa tiene entre sus objetivos: a) la derivación e intervención oportuna de las situaciones de vulneración o transgresión detectadas; b) favorecer el desarrollo de habilidades socio conductuales en niños; c) favorecer el desarrollo de competencias parentales en las familias o adultos responsables de los niños y d) fortalecer a actores comunales como soportes preventivos frente a las situaciones de vulneración y transgresión.

*Fuente: Programa Vida Nueva 2010, Pág. 48, 52 y 56.*

## Evaluación

Una evaluación realizada el año 2012 por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda, constató que el presupuesto total del programa había crecido un 71%, llegando a 5.000 millones de pesos en 2012 (4.992.810.000), desde un monto inicial de 2.900 millones de pesos en 2010 (2.919.239.000). El aumento se debió al incremento del aporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, por la introducción del programa “Terapia Multisistémica” en 2012. Ese año, el aporte del SENAME al programa llegó al 60%, el de la SPD alcanzó un 28,9% y el del Ministerio de Salud, a un 8,8%.

En otros aspectos, la evaluación constató que la cobertura del programa era baja y exhibía una focalización que privilegiaba el nivel de alta complejidad. Los beneficiarios efectivos del programa fueron un 20.8% de la población objetivo en 2010 (1.575 niños contra 7.544 del listado 24 horas) y un 18.8% en 2011 (1.645 niños sobre un total de 8.735). Aunque en un periodo diferente (2008-2011), se aprecia que la focalización del programa es clara en torno a los PIE, quienes atendieron un 60% de los casos (1.596) del periodo, los PIB un 22% (586) y las OPD un 18% (478). En cuanto a los egresos, la situación era a la inversa. De los casos atendidos por las OPD (478), el 50,8% (243) egresó en el periodo, de los casos atendidos en PIB (586), el 46,4% (272) egresó y de los casos atendidos en PIE (1.596), logró egresar un 36.6% (584); lo que podría explicarse en parte por los mayores plazos de intervención en esta última modalidad.

En cuanto al cumplimiento de la meta, no se evaluó en sus términos (disminución de los reingresos en un 10%), sino que se midió los porcentajes de no reingreso al PSI 24 horas solo de los *egresos exitosos*. La calidad de “egreso exitoso” se alcanza si el programa cumple con al menos una condición de las siguientes: cumplimiento del plan de intervención, superación de la situación de amenaza o vulneración, familia asume su rol protector y conclusión de etapa diagnóstica y aplicación de medida. Así, la modalidad que alcanzó un mayor porcentaje de niños/as y adolescentes que egresaron exitosamente y no reingresaron a unidades policiales en un periodo de 12 meses posteriores al egreso, fue la OPD con 94% de no reingreso, seguido del PIE con un 89% y del PIB con un 81%. Estos resultados son modestos, si se les compara con cifras del mismo PSI en años anteriores. Un estudio



de los ingresos entre 2004 y 2007 mostró que los reingresos por infracciones llegaban a un 7,1% y los reingresos por vulneración a un 3,1%, en una situación sin programa Vida Nueva.

*Fuente: Evaluación programa Vida Nueva. Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), DIPRES, Ministerio de Hacienda, 2012.*

## APÉNDICE 4

### DICCIONARIO DE ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN

---

*Agilao*: Huevón.

*Al tiro, de una*: Sin demora.

*Andar pintándola o pintar el mono*: Comportarse de manera infantil. Aparentar ser choro.

*Bacán, bacana*: Rico o rica. Del “barrio alto”.

*Barrio alto*: Comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, del sector alto de la ciudad (más cerca de la cordillera) de Santiago, en donde viven los más adinerados.

*Barsa, barsúo (a)*: Farsante.

*Base, “angustia”*: Pasta base de cocaína.

*Brígida*: Pesada, peligrosa, que pone los pelos de punta, grave, seria.

*Cabro*: niño, adolescente.

*Cachar*: darse cuenta.

*Cagüinear*: Decir falsedades. Cagüin: Mentira.

*Caleta, cualquier cantidad*: Mucho

*Cana*: Cárcel

*Cargar*: Inculpar

*Cocodrilos, domésticos*: Los que roban en la misma población en la que viven.

*Carrete, carretear*: Fiesta, marcha.

*Copete*: Vino, alcohol

*Chantarse*: Cesar, detenerse.

*Charcha*: De mala calidad. Feo.

*Choro*: Ladrón avezado, que se hace respetar, que “la sabe hacer”.

*Cogotear, colgar*: Asaltar.

*Condoro*: Error, chapuza. Se originó en la suspensión por la FIFA, del arquero de la selección chilena Roberto Rojas, apodado “Cóndor Rojas” por su agilidad, luego de un partido oficial contra la selección de Brasil en el Maracanã.

*Cualquier*: Mucho.

*Cuico, cuica*: Del “barrio alto”

*Curao, curá*: Ebrio, ebria.

*De repente*: Algo que sucede.

*En la calle*: En libertad.

*Entero (a)*: Completamente.

*Funar*: Denunciar.

*Gil*: El que no es ladrón. Lo contrario de “vivo” o “choro”.

*Hacer atao*: Complicar las cosas.

*Hacer la cimarra*: Hacer novillos.

*Lanza*: Ladrón cuya especialidad es el robo por descuido o sorpresa. En el caso de la expresión “lanza internacional”, se refiere al ladrón que roba en otros países.

*La pulenta*: La verdad.

*Librar*: escapar.

*Loco*: Se originó en los ochenta, en las barricadas de la lucha contra la dictadura de Pinochet, como una cierta imagen de guerrero, a quien no le importa ni le teme a nada. También es el que se desentiende, el que “va a lo suyo”.

*Lolo*: Joven en general, sin distinción de clase. Se utilizó en los años setenta y ochenta. Su uso es raro en la actualidad.

*Lorea*: Mira. Se utiliza poco en la actualidad.

*Lucas*: Dinero. *Luca*: Billeto de mil pesos.

*Machetear*: Pedir limosna.

*Monra*: Especialidad de robo en casas. Incluye el robo en grandes tiendas.

*Mover*: Venta de drogas u objetos robados.

*Movida*: Comercio. Lugar donde pasan cosas interesantes.

*Narco*: Traficante de drogas.

*Na' que ver*: No corresponde, no calza.

*No estoy ni ahí*: Pasar de... Expresión del tenista Marcelo Ríos en los 90, sacada de contexto. Sirvió para acusar a su generación de “pasotismo”.

*No pasa na'*: No es cierto.

*Pacos*: Carabineros.

*¡Pah!*: Algo que ocurre de manera repentina, generalmente de forma violenta.

*Paquear*: Controlar, castigar.

*Pararse*: Enfrentarse.

*Pega*: Trabajo.

*Pelolais*: Pelo liso, cuica. La expresión figuraba en unas fotos de vacaciones de estudiantes de un colegio del barrio alto, que generaron polémica en las redes sociales.

*Pelusa*: Denominación en desuso. Niño pobre de la calle.

*Penca*: De mala calidad, malo (a)

*Pesca, Ratis, Tiras*: Policía de Investigaciones, policía civil.

*Piola*: Tranquilo (a), reservado (a). *Pasar piola*: pasar desapercibido (a).

*Pitearse*: Dañar, matar.

*Pito*: Cigarrillo de marihuana.

*Poner la máquina*: Poner la picana eléctrica. Tortura en general.

*Sabe a lo que va*: Tiene claro el objetivo. Un conocedor.

*Sabe hacerla*: No hace daño sin necesidad. Roba de manera limpia, evitando ser castigado con una pena mayor.

*Sabe llevarla*: Tiene el dominio, el control. Se aplica también al consumo de drogas.

*Sabe para dónde va la micro*: Está enterado (a).

*Sapear*: Delatar

*Se le agranda el corazón*: Se envalentona.

*Terrible*: Exageración. Se usa combinado con otras palabras. Por ejemplo, *terrible barsa*, *terrible brígida*.

*Ver una percha*: Ver a alguien bien vestido.

*Volado (a)*: Identidad del consumidor (a) de drogas ilegales. Estar bajo los efectos de una droga.

*Ya era*: Ya ocurrió. Sobre todo que el delito se cometió con éxito.